



Dr. MARIANO G. CALVENTO
DIPUTADO NACIONAL



PROYECTO DE CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL

PARA LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA
Y TERRITORIOS NACIONALES

PRESENTADO A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN, EN LA SESIÓN
DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1926

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUP.	
Nº DE F.	2857
UBICACIÓN	
FICHA MATERIAL	

BUENOS AIRES

4404 - Imprenta de la Cámara de Diputados

1927



ÍNDICE

	Pág.
Exposición de motivos	3
I — Necesidad de la reforma	3
II — Antecedentes e iniciativas	6
III — Unificación de fueros	8
IV — Unificación del procedimiento	13
V — Criterios de la reforma	16
VI — Jurisprudencia y competencia	19
VII — Términos judiciales	20
VIII — Domicilio	21
IX — Defensa y representación	23
X — Traslado, firma, entrega de autos, reposición de sellado	24
XI — Notificaciones	25
XII — Disposiciones relativas a los funcionarios y a las audiencias	27
XIII — Juicio ordinario. Disposiciones preliminares	28
XIV — Demanda	29
XV — Excepciones	30
XVI — Arraigo	30
XVII — Prueba en general	31
XVIII — Confesión	33
XIX — Prueba instrumental	35
XX — Prueba pericial	35
XXI — Testigos	36
XXII — Tachas	36
XXIII — Conclusión de la causa	37
XXIV — Perención de instancia	37
XXV — Recursos	38
XXVI — Procedimiento en segunda instancia	39
XXVII — Recusaciones y excusaciones	40
XXVIII — Incidentes	41
XXIX — Embargos preventivos	41
XXX — Juicio ejecutivo	42

	Pág.
XXXI — Cumplimiento de la sentencia de remate .	44
XXXII — Ejecución de sentencias .	46
XXXIII — Juicio de desalojo .	47
XXXIV — Alimentos provisorios .	47
XXXV — Mensura y deslinde .	48
XXXVI — Sucesiones	49
XXXVII — Concurso de acreedores .	51
XXXVIII — Juicio arbitral	54
XXXIX — Reglas y procedimientos nuevos .	55
XL — Oficios y exhortos	55
XLI — Costas y honorarios .	55
XLII — Citación de evicción .	56
XLIII — Juramento judicial .	56
XLIV — Presunciones	57
XLV — Terminación de los juicios .	57
XLVI — Recurso extraordinario	58
XLVII — Ejecuciones de créditos hipotecarios .	58
XLVIII — Procedimiento verbal	59
XLIX — División de cosas comunes .	60
L — Rendición de cuentas	60
LI — Declaración de incapacidad y cesación .	60
LII — Restricciones y límites del dominio	61
LIII — Fijación de plazo para cumplir obligaciones .	61
LIV — Informaciones posesorias	62
LV — Depósito y venta de mercaderías	62
LVI — Autorización para contraer matrimonio y oposición .	62
LVII — Otros procedimientos especiales	63

Proyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial

TÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS JUICIOS

I — Jurisdicción y competencia	67
II — Tiempo hábil y términos en general	69
III — Del domicilio, defensa y representación en juicio	72
IV — Traslados, firmas, entregas de autos y reposición de sellos	77
V — De las notificaciones	79
VI — Disposiciones varias relativas a los funcionarios judiciales y audiencias	84
VII — Exhortos y oficios	89

	Pág.
VIII — Costas y honorarios	90
IX — De las extracciones de fondos	95
X — Disposiciones generales	96

TITULO II

JUICIO ORDINARIO

I — Disposiciones preliminares	97
II — De la demanda	109
III — De la citación y emplazamiento	102
IV — De las excepciones	103
V — De la citación de evicción	106
VI — De la contestación	107

TITULO III

DE LA PRUEBA

I — De la prueba en general	108
II — De los medios de prueba. Confesión	113
III — Prueba instrumental	119
IV — Prueba pericial	124
V — Prueba de testigos	127
VI — Tachas	132
VII — Inspección ocular	133
VIII — Juramento judicial	133
IX — Presunciones	134
X — Conclusión de la causa para definitiva	134

TITULO IV

TERMINACION DE LOS JUICIOS

I — Desistimiento	135
II — Transacción	136
III — Perención de la instancia	136
IV — Sentencia	138

TITULO V

DE LOS RECURSOS

I.— Reposición	139
II — Apelación	140
III — Nulidad	142

TITULO VI

PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

I — Del recurso libre . . .	143
II — Del recurso en relación . . .	147

TITULO VII

— Del recurso extraordinario . . .	148
------------------------------------	-----

TITULO VIII

DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

I — De la recusación y excusación de los jueces . . .	149
II — De la recusación de los secretarios y excusación de otros funcionarios judiciales . . .	154

TITULO IX

DE LOS INCIDENTES

I — Reglas generales . . .	154
II — De las cuestiones de competencia . . .	155
III — De la acumulación de autos . . .	158
IV — De la declaración de pobreza . . .	160
V — De las tercerías en general . . .	161
VI — De las tercerías en las ejecuciones . . .	163
VII — De las medidas precautorias . . .	164

TITULO X

— De la rebeldía . . .	169
------------------------	-----

TITULO XI

DE LAS EJECUCIONES

SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

I — Disposiciones preliminares . . .	171
II — Intimación de pago y embargo . . .	173

	Pág.
III — Excepciones y sentencias de remate	178
IV — Del cumplimiento de la sentencia de remate	180

SECCION II

— Ejecución de créditos hipotecarios	186
--------------------------------------	-----

SECCION III

EJECUCION DE SENTENCIAS

I — Ejecución de sentencias dictadas por Tribunales Argentinos	187
II — Ejecución de sentencias dictadas en el extranjero	191

TITULO XII

INTERDICTOS

I — Disposiciones generales	193
II — Interdicto de retener	194
III — Interdicto de recobrar .	195
IV — Interdicto de obra nueva	195
V — Del procedimiento verbal	196

TITULO XIII

— Del juicio de desalojo	197
--------------------------	-----

TITULO XIV

— De los alimentos y litis expensas	201
-------------------------------------	-----

TITULO XV

— Juicio de mensura y deslinde	202
--------------------------------	-----

TITULO XVI

— Juicio de división de cosas comunes	205
---------------------------------------	-----

TITULO XVII

— Juicio de rendición de cuentas	207
--	-----

TITULO XVIII

— De la declaración de incapacidad y su cesación	209
--	-----

TITULO XIX

JUICIOS ESPECIALES

I — De las restricciones y límites del dominio	211
II — Fijación del plazo para el cumplimiento de obligaciones	212
III — Informaciones posesorias	213
IV — Depósito y venta de mercaderías	214
V — Autorización para contraer matrimonio y oposición	215
VI — Apertura y protocolización de testamentos	216
VII — Protocolización de testamentos ológrafos y especiales	219
VIII — Otros procedimientos especiales	220

TITULO XX

— Del juicio arbitral	221
-----------------------	-----

TITULO XXI

SUCESIONES

I — Disposiciones generales	226
II — Inventario y avalúo	230
III — Liquidación y división de la herencia	233
IV — Administración	234

TITULO XXII

— Herencia vacante	234
--------------------	-----

TITULO XXIII

CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES

I — Procedimiento preventivo	237
II — Declaración del concurso	242
III — Verificación y graduación	244
IV — Liquidación	245
V — Administración	247
VI — Terminación del concurso	248

Exposición de motivos

El proyecto que presento es la contribución de la experiencia adquirida y de las observaciones hechas en el ejercicio continuado de mi profesión durante muchos años ante los tribunales de la Capital. No hay en él novedades, que no caben en un trabajo de selección y de adaptación para actualizar la ley procesal aprovechando el material abundante que suministran la jurisprudencia, las leyes provinciales y las iniciativas de legisladores, comisiones o particulares.

Considero que se facilita la sanción de una nueva ley de procedimientos, tanto más cuanto menos se afecte la actual organización de la justicia y la estructura de la ley que rige. Con ese concepto he trabajado sobre el código en vigor, tomando como guía la reforma proyectada por los doctores Agote, Méndez y Montes de Oca, con algunas modificaciones que apunta el doctor Angel Rojas en sus estudios de derecho procesal, y modificando a mi vez unas y otras por la adopción de preceptos de los códigos provinciales, en su casi totalidad más adelantados.

I. — Necesidad de la reforma

La justicia de la Capital Federal es morosa a tal punto, que ninguna contienda entre partes puede solucionarse en sus dos instancias en menos de un año, por lo que continúan siéndole aplicables las palabras que pronunciara en 1886 el doctor Filemón Posse en esta Cámara: «En un país donde una causa dura más de un año, puede decirse que no hay

justicia», concepto que comparte el doctor Angel Rojas cuando dice: «Fallo tardío a veces no es justicia.»

Para muchos el mal tiene por causa la escasez del personal de los juzgados; para algunos, más conocedores de las intimidades del tribunal, está en la corruptela de la delegación de atribuciones, hoy tan difundida que ya a nadie sorprende ver escribientes realizando actos que corresponden a los jueces, ni se quejan — letrados, litigantes y procuradores — de tener que realizar trabajos que corresponden a los empleados de secretaría, llevarles hechos oficios y cédulas, o practicar diligencias de notificación a fin de que sus asuntos marchen.

Hay quien sostiene que el mal radica en la carencia de facultades de los jueces para dirigir el procedimiento, y quién dice que está en la excesiva intromisión que les da la ley en actos sin mayor importancia, por cuyo motivo buscan subsanarla encargando parte de la tarea a los secretarios.

Esas y otras circunstancias que podrían anotarse, influyen, sin duda, en la demora; pero la principal reside en la ley y es imputable en gran parte a su deficiencia, al exceso de trámites formulistas que determina, a las facilidades que presenta para hacer incidentes que traben la marcha del juicio y a la falta de medios adecuados para urgir el despacho, no obstante existir en el código recursos que nadie usa por convicción de su ineficacia y para evitarse molestias o perjuicios, único resultado práctico que obtiene quien se decide a recurrir a ellos.

El problema de las reformas de las leyes de procedimientos en vigencia en los tribunales ordinarios de la Capital de la República y en la justicia federal, requiere indispensablemente rápida solución ante estos hechos de todos conocidos. Es tan imperiosa y uniformemente exigida, tan imprescindible, que resulta ociosa toda consideración para destacar su importancia. Básteme decir que rige aún en los primeros un código proyectado para la provincia de Buenos Aires sobre el modelo de la ley de enjuiciamiento española de 1855, que se puso en vigencia hace más de cuarenta años con carácter provisorio, frente a la urgencia de proveer de

inmediato a la situación creada por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y que sigue aplicándose aún, no obstante haberse modificado el modelo español y la ley provincial, cuando la casi totalidad de las demás provincias lo han reemplazado por leyes más adelantadas.

Cabe afirmar, en presencia de esto, sin temor de ser rectificado, que la Capital Federal — aún con las modificaciones introducidas «como piedra de toque» por la ley número 4.128 — tiene una de las leyes procesales más antiguas y atrasadas del país, aunque no, tanto como la de la justicia federal, sancionada en 1863, tan deficiente que, para mejorarla, ha debido recurrirse a disposiciones de aquella.

Del código en vigencia para los tribunales ordinarios, decía ya el Poder Ejecutivo en el mensaje con que acompañó el proyecto redactado por los doctores Alcorta y Zeballos en 1885: «las leyes que actualmente rigen los procedimientos no sólo son deficientes, sino que no responden a las nuevas exigencias de la administración de justicia».

El doctor Juan Antonio Argerieh, fundando el despacho que luego fué la ley número 4.128, manifestaba en sesión de la Cámara de Diputados: «No es posible, sin embargo, esperar la sanción de ese código (aludía al proyecto de los doctores Alcorta y Zeballos) para corregir errores y defectos graves que hoy se sienten. En general, nuestros procedimientos, se resienten de tardíos y dañosos para los intereses de los particulares. No es llegado el momento de estudiar cuáles son los males de nuestra administración de justicia; pero, en realidad, con la organización actual del procedimiento, los intereses particulares sufren muchos perjuicios, y los magistrados se quejan de que esos daños provienen de la organización del procedimiento».

Y el Poder Ejecutivo, en su mensaje de remisión del proyecto de los doctores Méndez, Montes de Oca y Agote, en el año 1910, se expresaba así: «Sabido es que este código es el mismo, con pequeñas variantes, que regía en la provincia de Buenos Aires desde el año 1878, la cual lo ha suplantado con el últimamente sancionado, muy superior al anterior. Durante el tiempo de su aplicación en la Capital, y sobre

todo en estos últimos años por la aceleración del desenvolvimiento económico y del progreso social, hánse puesto en evidencia graves inconvenientes que los esfuerzos de la jurisprudencia no han podido salvar. El código actual multiplica las dificultades de la investigación de la verdad, haciendo los juicios largos y dispendiosos, limita con exceso las facultades de los jueces, a quienes deja casi desarmados en presencia de los litigantes de mala fe, y multiplica las nulidades por defectos procesales, agravando así los inconvenientes propios del procedimiento».

II. — Antecedentes e iniciativas

Al poner en vigencia en la Capital el código de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo designó una comisión encargada de proyectar la ley orgánica de la justicia ordinaria y la ley de enjuiciamiento para los tribunales de la misma. Esa comisión manifestó serle imposible dar cumplimiento a lo que le fué encomendado, en lo relativo al Código de Procedimientos, y en vista de ello se dictó un decreto de fecha 6 de Marzo de 1882, por el cual el Poder Ejecutivo, considerando que era deber del gobierno procurar que a la brevedad posible desapareciera la irregularidad de funcionar los tribunales de la Capital haciendo uso de leyes de procedimientos de orden provincial, justificada sólo por la falta de una ley nacional sobre la materia, designó una comisión encargada de proyectarla, fijándole el término de tres meses para que la presentara.

La comisión que, en definitiva, había quedado constituida por los doctores Amancio Alcorta y Estanislao S. Zeballos, presentó su proyecto en Junio de 1885, acompañándolo de una nota en que expresan que, de acuerdo con las indicaciones hechas por el ministro de justicia, el proyecto comprendía los procedimientos que debían observarse por los tribunales ordinarios y los del fuero federal en materia civil y comercial; y a fin de que fuera lo más completo posible, habían incluido disposiciones de que carecían las leyes de organiza-

ción y competencia, o que, perteneciendo a la legislación de fondo, afectaban directamente los procedimientos, por lo que conceptuaban indispensable su inclusión para la mejor inteligencia de las que correspondían exclusivamente a éstos.

Elevado ese proyecto al Congreso con el mensaje correspondiente, por el que se mandaba observar como ley de la Nación desde el 1º de Enero de 1886, quedó sin sancionarse.

En la sesión del 3 de Junio de 1898, el doctor Juan Antonio Argerich presentó una iniciativa de modificación a algunos artículos del código — que continuaba aún en vigencia tal como fué sancionado para la provincia de Buenos Aires — tendiente a acelerar y simplificar la tramitación de los juicios, evitar las incidencias y procedimientos inútiles, y mejorar la justicia de la Capital que calificaba de tardía, cara y peligrosa para todos los intereses sociales.

Esta iniciativa dió origen a la ley número 4.128, sancionada en 1902, única reforma de importancia introducida en un código que ya se reconocía malo en 1881.

Siendo ministro de justicia el doctor Rómulo S. Naón, trató nuevamente de dotar de una ley procesal a la Capital Federal y territorios nacionales, y con tal propósito designó para que la redactara — por decreto de 16 de Septiembre de 1909 — una comisión compuesta de los doctores Pedro Agote, Ramón Méndez, Manuel Augusto Montes de Oca y el doctor Roberto Repetto como secretario.

En los considerandos que preceden a ese decreto, se expresa que la preocupación de mejorar la legislación procesal, poniéndola en consonancia con las exigencias de los tiempos, en el sentido de una mayor simplificación de los procedimientos que asegure una administración de justicia más activa y menos onerosa, se había puesto de manifiesto repetidas veces sin haber logrado resultados definitivos.

La comisión presentó un proyecto que el Poder Ejecutivo, como ya he dicho, remitió al Congreso acompañado de un mensaje de que se dió cuenta en la Cámara de Diputados en sesión del 14 de Septiembre de 1910. Como el anterior, quedó también sin sancionarse.

Otro proyecto de modificaciones, con cierto carácter general, fué presentado por el diputado don Avelino Rolón en la sesión de 22 de Septiembre de 1915. Reproducido por el diputado don Jacinto Fernández el 30 de Septiembre de 1921, pasó a estudio de la Comisión de Legislación, donde aun se encuentra.

Independientemente de estas iniciativas de carácter general, o con cierto carácter de generalidad, hánse presentado muchos proyectos de modificaciones parciales, ya a títulos o capítulos del código, ya a determinadas disposiciones del mismo.

Una iniciativa privada que merece especial mención, la constituye el libro del doctor Angel D. Rojas, publicado con el título de «Estudios de Derecho Procesal Argentino», en el que se incluye un proyecto de código de procedimientos civiles y comerciales para los tribunales del fuero federal y del fuero común de la Capital, para los juzgados de sección y los juzgados de letras de los territorios nacionales.

Merece igual mención el proyecto de código para la provincia de Corrientes redactado por el doctor J. Honorio Silguiera, trabajo serio, lleno de notas y observaciones valiosas, en que el autor toma en consideración todo lo que hay de más importante en el país sobre la materia.

III. — Unificación de fueros

En la relación de antecedentes e iniciativas, sobre reforma del procedimiento para la Capital de la República, no es posible dejar de hacerse cargo de la situación de anomalía existente en ella por la coexistencia de tribunales nacionales con jurisdicción distinta, sujetos a leyes procesales también distintas, que, aparte de inconvenientes de otro orden, produce a cada instante la extraña situación que alguna vez se hacía notar ante la Cámara, de que asuntos idénticos en su materia jurídica, se vean sujetos a tramitaciones y términos diferentes, según sean ellos de competencia de los tribunales federales o del fuero común; y la no menos extra-

ña de que, en la Capital de la República, los extranjeros deben ser demandados ante jueces determinados, y los argentinos, en el mismo momento y por las mismas causas, deben serlo ante otros, con la circunstancia curiosa de que todos esos jueces se nombran del mismo modo y por las mismas autoridades de la Nación, y todas las leyes de procedimiento se dictan de la misma manera por el Congreso Nacional.

Se ha buscado el medio de subsanar los inconvenientes y perjuicios ocasionados por esa situación de dos maneras; por la unificación de fueros y por la unidad de procedimientos.

Lo primero, ya discutido dos veces en el Congreso, presenta mayores inconvenientes para su adopción porque se ha creído que vulnera principios constitucionales. Lo segundo en cambio, en concepto de muchos, permite llegar fácil y rápidamente a resultados prácticos.

Esta cuestión de la unificación de fueros nació, puede decirse, con la federalización de Buenos Aires y la necesidad de organizar tribunales que conocieran en los juicios pendientes ante los jueces provinciales. Dos veces ha sido discutida en el Congreso, directamente la primera, indirectamente la segunda.

Planteadas ante la Cámara de Diputados, en la sesión de 6 de Junio de 1881, por el doctor Ruiz de los Llanos, con un proyecto de ley que declaraba federales todos los tribunales de la Capital, y tomada en consideración por la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para proyectar la ley de organización judicial en ella, fué tratado por este cuerpo al ocuparse de la sanción del Senado sobre este último proyecto.

En esa oportunidad, la discusión fué como he dicho, directa y amplia. No ocurrió igual cosa cuando volvió nuevamente al debate en 1910, con motivo de un proyecto del Poder Ejecutivo, derogatorio de la ley número 1.893. Debido a la forma del despacho, sólo se discutió el punto de una manera incidental.

Los sostenedores de la división de la justicia de la Capital, en federal y ordinaria, que triunfaron con el proyecto de 1881, encaran la cuestión exclusivamente en su faz constitucional. Para ellos, los tribunales ordinarios no son en su esencia de un orden distinto a los demás de la Nación; su diferente denominación no hace desaparecer la índole de su origen, para que dejen de ser tribunales nacionales sobre los cuales el Congreso ejerce el mismo poder y tiene la misma autoridad de legislación que sobre los demás; pero deben reputarse como tribunales locales; constituyen, según la expresión del diputado Calvo, el Poder Judicial del Municipio de Buenos Aires, — en relación a los cuales el Congreso obra como legislatura local, tal como si fuera la de un Estado — que no deben confundirse con el Poder Judicial de la Nación, creado con fines políticos y como fuero de excepción, a que se refiere el artículo 94 de la Constitución.

Los impugnadores de esa doctrina, argumentan con las dificultades y entorpecimientos que la coexistencia de los dos fueros ocasiona; y contestando los argumentos de orden constitucional de sus adversarios, sostienen que el carácter federal del territorio de la Capital, federaliza necesaria e indispensablemente todos los asuntos cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales de la misma, por cuanto el territorio es el fundamento principal del fuero en materia de jurisdicción y no se explicaba la coexistencia en ella de dos fueros ejercidos por magistrados que en uno y otro se nombran para actuar en el mismo, son designados en idéntica forma, deben reunir iguales condiciones de aptitud y ejercicio de la profesión y entender en asuntos regidos por la misma ley civil, lo que quita razón de ser a la distinción de asuntos de uno u otro fuero, como a toda cuestión para surtir fuero por distinta nacionalidad o distinto domicilio de los litigantes donde no hay sino jueces nacionales.

Nada tiene que ver, dicen ellos, con el distrito de la Capital, la división de la justicia en federal y ordinaria que existe en relación a las provincias, ni encuentran en la Carta Fundamental disposición alguna que limite las facultades del Congreso para crear tribunales nacionales en los territorios

sobre los cuales legisla exclusivamente; y agregan que estas ideas han recibido ya consagración legislativa, tanto en la ley de organización de los territorios nacionales al crear jueces letrados con jurisdicción y competencia en asuntos del fuero federal y del fuero ordinario, como en la ley número 4.055, sobre creación de las cámaras federales.

Los tribunales ordinarios de la ley número 1.893, según el doctor Pinedo, que tomó parte en la discusión de 1910, son sólo un recurso hábilmente hallado, y se han establecido mediante una serie de argumentos tendientes a justificarlos: pero no existen en la Constitución.

El doctor Rodolfo Rivarola, en un trabajo titulado «La justicia de la Capital, unificación de los fueros federal y ordinario», opina que la facultad del Congreso de dictar leyes para toda la Nación o sólo para los territorios y el distrito de la Capital, no tiene más limitaciones que las que derivan de la Constitución, y no puede sostenerse, en consecuencia, que el Congreso no pueda organizar una sola justicia para aquél, si tal restricción no resulta del texto o el espíritu de la Constitución o de la naturaleza del régimen federal. Estudia luego los artículos 34, 67, inciso 14, 94, 45 y 96 de la Carta Fundamental; considera la cuestión de que el Congreso, al legislar para la Capital, lo hace como legislatura local: sostiene que la justicia federal se concibe solo «donde tiene razón de existir otra justicia territorial para la aplicación de las leyes en general»; examina la discusión habida en el Congreso en 1881 para hacer notar los errores en que han incurrido, en su opinión, los sostenedores de la división; cita la opinión del Poder Ejecutivo en un mensaje del ministro Magnasco de 5 de Mayo de 1899, para quien el pensamiento de la unificación del fuero es compatible con el sistema judicial de nuestra ley suprema, pues «lo único ineludible es la institución de una justicia federal en *territorio de las provincias* como sanción y reflejo del sistema federativo, en el que enlazan armónicamente la autonomía general y, por tanto, judicial de la Nación. La primera es una justicia *ratione loci*, la segunda es una justicia *ratione materiae*: sin la una no habría federación, sin la otra no existiría la Nación»; pero que

donde no obre la razón del territorio autónomo, donde no haya el peligro de afectar el principio federativo, donde el lugar es nacional, el amparo nacional y todo nacional, no existe la razón excluyente de lugar para la diferencia; y después de mencionar varios textos norteamericanos sienta las siguientes conclusiones: «Que no hay obstáculo alguno derivado de la Constitución, para reunir en una sola administración la justicia de la Capital, los tribunales que hoy funcionan como dos fueros distintos, uno federal y otro común». «Que la existencia de *un fuero federal* en la Capital no está conforme con las razones de una justicia federal (léase el «Federalista», N° 22) ni tiene explicación como justicia de excepción cuando se ejerce en territorio nacional, donde no existe más soberanía que la nacional.»

Se manifiesta en contra de esto el doctor Clodomiro Zavallía, profesor de derecho procesal, para quien sin la reforma de la Constitución Nacional la unificación de fueros es imposible, por lo que considera que una reforma con ese propósito sería mal inspirada, pues la justicia federal debe subsistir como tal, toda vez que no es una creación artificiosa de los constituyentes, sino que obedece a un concepto perfectamente claro y definido. («La Nación», de Marzo 3 de 1924).

A su vez el doctor Rafael Avila Castilla, juez federal de Paraná, en la «Explicación de motivos de su proyecto sobre unificación de fueros en la Capital», sostiene que si bien con arreglo al artículo 100 de la Constitución deben existir los dos fueros en las provincias, no ocurre lo mismo con respecto a los territorios federalizados, como la Capital, en donde los jueces, nombrados, removidos y pagados por la Nación, son jueces nacionales a los que pueden conferírseles las atribuciones del fuero federal, sin necesidad de instituir en ella otros tribunales especiales para ese fuero. En apoyo de su tesis, invoca la opinión de Alberdi, las manifestaciones del convencional Zapata y los artículos 17, 67, 94 y 96 de la Constitución. (Unificación de fueros, página 5).

Aunque partidario de la unificación de fueros por convencimiento de sus ventajas y compartiendo la opinión de los sostenedores de su constitucionalidad, me limito a la re-

lación precedente, por considerar que escapa a la índole de este estudio la manifestación de mis opiniones, que por lo demás, nada agregan a la autoridad de las que recuerdo. La discusión fué reabierta en el congreso de abogados celebrado últimamente, que la sancionó como una de las bases de la organización judicial a proyectarse.

IV. — Unificación del procedimiento

No hay objeción, ni medianamente atendible — dice con razón el doctor Rojas — que pueda hacerse valer contra los motivos que aconsejen uniformar el procedimiento en los tribunales de la Capital, y sobre la necesidad de no demorar el estudio y sanción del código único para ambos fueros. Ello, al par que asegure la efectividad de los derechos y contribuya a la mejor administración de justicia, por la desaparición de la situación actual evidentemente anómala, nos llevará a resultados prácticos orillando las cuestiones de orden constitucional, suscitadas alrededor de la unificación de fueros, y propenderá a facilitar la solución del problema de la unidad procesal, que es necesario afrontar y resolver en relación a los tribunales de toda la República. Es esta última la solución reclamada por la unidad de vida económica; anhelo general a cuya realización no se llega; problema que cada día se hace más indispensable ante el creciente progreso del país, el desarrollo de sus industrias, la multiplicación de las transacciones comerciales, que vinculan a sus habitantes, la facilidad de las comunicaciones y la extensión de las líneas de comunicación que transportan los productos del uno al otro extremo de la República.

Nuestros antecedentes judiciarios en cuanto al procedimiento son unitarios, según enseña Alberdi en sus «Bases»: «Unidad judiciaria en el procedimiento y en la jurisdicción y competencia, pues todas las provincias del virreinato reconocían un solo tribunal de apelación, instalado en la Capital con el nombre de real audiencia.» Las viejas leyes españolas aplicadas por los tribunales de la Colonia, están aun

vigentes por el artículo 814 del Código de Procedimientos de la Capital, en todo lo que no le sean contrarias.

A pesar de esos antecedentes, un precepto constitucional, al dejar a las provincias la facultad de legislar procedimientos, ofrece obstáculo insalvable a la solución del problema. En presencia de él, se ha recurrido a medios indirectos para obtenerla.

El doctor Ramón Cárcano, siendo gobernador de la provincia de Córdoba, propició la iniciativa de reunir una convención constituida por representantes de las provincias y de la Nación, para resolver la forma más conveniente de hacerlo. No llegó a resultado alguno, por razones que no son del caso considerar en esta reseña de iniciativas.

En esta Cámara, presentó el doctor Roberto Barrera en Agosto de 1914, un proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo para practicar ante los gobiernos de provincia, por los medios que considerase adecuados, gestiones tendientes a uniformar las leyes procesales, y dar cuenta al Congreso del resultado obtenido. En Septiembre de 1921 el diputado doctor José Antonio González presentó otro proyecto con idéntico propósito, que reprodujo en Julio de 1924. Como en la iniciativa del gobernador de Córdoba, el Poder Ejecutivo invitaría a los gobiernos de provincia a celebrar una convención que sería presidida por el ministro de justicia, con objeto de proyectar una legislación uniforme en materia de procedimientos para todo el territorio de la República, que se sometería a la aprobación del Congreso Nacional y legislaturas provinciales.

En 1922 tuvo entrada en la Legislatura de Mendoza un proyecto semejante del diputado señor Manuel G. Lugones, que fué despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados y tuvo aprobación de esta rama de la legislatura en la siguiente forma:

«Artículo 1º — El Poder Ejecutivo invitará al gobierno de la Nación y a los gobiernos de cada uno de los estados federales, a un congreso que se celebrará en el corriente año, para establecer las bases de una codificación uniforme de los procedimientos civiles, comerciales y penales en toda la Re-

pública, a fin de promover la realización de tratados inter-federales que la adopten.

Art. 2º — El Congreso se dividirá en dos secciones, una para los procedimientos civiles y comerciales y otra para los procedimientos penales, de prevención, comprobación y registro de reincidentes, patronato penal, régimen carcelario y policía judicial.

Art. 3º — Cada Estado concurrente tendrá un voto en el Congreso.

Art. 4º — El Congreso funcionará en el local de la Legislatura de Mendoza, poniéndose a disposición del mismo el personal permanente de ambas cámaras y el extraordinario que fuere necesario.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo fijará la fecha de celebración de dicho congreso y designará una comisión provisional que corra con los trabajos preliminares del mismo.

Art. 6º — Destínase para el cumplimiento de la presente ley, la suma de treinta mil pesos, que se imputará a rentas generales». («La Razón» de 15 de Septiembre de 1923).

Tal es el estado actual del problema, de fácil solución en mi concepto, puesto que todas las leyes procesales de las provincias, tienen la estructura y la mayoría de sus disposiciones semejantes.

El congreso de abogados, reunido en esta Capital, en el mes de Noviembre de 1924, para unificar los procedimientos, resolvió nombrar una comisión permanente que, con las bases aceptadas en él, redacte proyectos de códigos de procedimientos en materia civil y criminal y de leyes de organización judicial, los que serían pasados a los gobiernos de la Nación y de las provincias para la sanción respectiva.

Dicha comisión que funcionó durante el año 1925 en el local del Colegio de Abogados de esta Capital, ha llenado su misión acordando un código de cuya redacción fueron especialmente encargados algunos de sus miembros.

V. — *Criterios de la reforma*

Dos criterios se han exteriorizado en las iniciativas de reforma procesal presentados o discutidos en el congreso: el de una revisión completa del procedimiento que en cierto modo informaba el proyecto de los doctores Alcorta y Zeballos y el de las modificaciones parciales, sostenido, entre otros, por los diputados Argerich, Rolón y Robirosa. Ha sido este último el adoptado en las modificaciones introducidas hasta hoy en los procedimientos tanto federales como del fuero común.

En relación a ese criterio decía el señor Serú, informando el despacho de la ley número 4.128: «No es necesario determinar, para juzgar el criterio con que la comisión ha procedido a formular este despacho de una reforma parcial de la ley de procedimientos, que es lo que conviene más para la reforma de la legislación de un pueblo que ha adoptado sus códigos para reglar las relaciones de las personas en las diferentes manifestaciones de su actividad si la revisión de todas las disposiciones que contienen esos códigos, para reformar una obra nueva, en la que no se conserva muchas veces ni la fórmula del buen precepto abonado por la jurisprudencia, o si la reforma se debe hacer paulatina y gradualmente, a medida que la jurisprudencia vaya apuntando su necesidad y los lugares en que debe ser modificada la antigua ley.»

A su vez los doctores Agote, Mendez y Montes de Oca expresaban así el pensamiento que presidía las reformas proyectadas por ellos: «Hemos procurado mantener la estructura del código actual, y no introducir sino aquellas modificaciones impuestas por necesidades sentidas. Al adoptar este plan, hemos sido inducidos por la ventaja de aprovechar en lo posible el valioso material que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha venido acumulando durante treinta años, y por la convicción arraigada de que, si el código de 1880 reclama una reforma que le permita responder a nuestra actual actividad jurídica, ella debe reducirse a lo estrictamente indispensable para no destruir las enseñanzas del pasado y para

mantener el principio de que los cambios en la legislación deben ser graduales, a fin de que produzcan beneficios positivos a la comunidad.»

La antigüedad del código actual, que constituye uno de sus graves inconvenientes, debido a lo cual no es posible que responda a las necesidades impuestas por la evolución económica y social del país, es sin embargo en cierto modo ventajosa, por haber contribuido su aplicación de muchos años, a crear una jurisprudencia que, para aclarar preceptos, para subsanar deficiencias o para llenar vacíos, ha fijado normas que constituyen algo así como una legislación supletoria de que no es conveniente apartarse. Hay en ella un valioso material aprovechable que es necesario seleccionar e incorporar a la ley, para dar a sus preceptos la claridad y la firmeza de que carecen, o para crear nuevas disposiciones o nuevos procedimientos.

Las dos manifestaciones encierran, en mi concepto, alguna exageración en los argumentos. No es el caso de modificar todos los preceptos del código vigente, ni cabe hablar de cambios que puedan producir hondos sacudimientos. La labor a emprender para la reforma es de corrección y de adaptación, conservando la estructura de la ley, ya que la generalidad de las que rigen en las provincias tienen con ella sólo diferencias de detalle; pero es necesario una revisión prolija y completa, un examen detenido de sus disposiciones, un trabajo de adaptación de las nuevas normas consagradas por la jurisprudencia, para actualizar el procedimiento con las innovaciones necesarias, sin afectar fundamentalmente, por ahora, la tradición procesal del país, y contribuyendo en lo posible, por la incorporación de preceptos de las leyes procesales de las provincias, al interesante problema de la unidad del procedimiento.

Esto será siempre más conveniente y eficaz que una reforma parcial de preceptos, que puede perjudicar la unidad de la ley, más necesaria, sin duda, en la de forma que en la de fondo. En mi concepto pues, la revisión de la ley de procedimientos debe hacerse totalmente y conservando la estruc-

tura del código vigente, introducir reformas que tiendan principalmente:

- 1º A abreviar, simplificar y suprimir trámites.
- 2º A imponer a funcionarios y litigantes reglas y obligaciones precisas, con sanciones eficaces, rápidas y reales, que eviten los incidentes, causa principal de las demoras, de una manera mecánica en cuanto sea posible.
- 3º A suprimir procedimientos que, como el «juicio de jactancia», no se legisla en la casi totalidad de los códigos provinciales «por desusado y poco práctico», o que, como el «interdicto de adquirir», no arraiga «en la estructura del Código Civil» según la comisión redactora de la reforma para la provincia de Buenos Aires.
- 4º A incorporar normas nuevas para hacer efectivos derechos acordados por las leyes de fondo, respecto de los cuales existe valioso material en la jurisprudencia que los ha reglamentado para llenar el vacío de la ley.

Un código de procedimientos civiles determina los medios por los cuales se regulan judicialmente los derechos civiles (Alcorta y Zeballos, proyecto, artículo 1º). El que se dicte en reemplazo del actual, tiene que fijar en forma concreta, clara y sencilla, segura y rápida, las reglas para dirigir la marcha del litigio en que se declaran o hacen efectivos los derechos que establecen las leyes de fondo, sin invadir la esfera de acción de estas ni repetir innecesariamente sus prescripciones o la de leyes especiales. Sé bien que este concepto es combatido por muchos, y que en algunas leyes provinciales se hacen enumeraciones, principalmente en relación a la competencia; pero examinadas con detención tales enumeraciones, se encontrará siempre que caen dentro de las reglas generales que rigen las acciones personales o reales, o se resuelven por las circunstancias especiales que rodean el caso judicial.

Con este criterio, y refiriéndome a los puntos que, como expreso más arriba, debe abarcar la reforma de la ley que

rige en los tribunales ordinarios de la Capital de la República, haré mis observaciones en particular respecto de ella.

VI. — Jurisprudencia y competencia.

Paréceme suficiente sobre esta materia una declaración en el sentido de que la competencia se determina por las prescripciones de las leyes de fondo y especiales, puesto que la ley procesal nada nuevo puede establecer al respecto; pero para mayor claridad, no veo inconveniente en que se mantengan las reglas generales sentadas en los actuales artículos 4º y 5º sobre competencia por razón de la naturaleza de la acción que se deduzca.

Considero que con ellas hay base suficiente para resolver todos los casos, ya que algunos que se dicen especiales, como las acciones posesorias, mensura, indemnización de perjuicios causados por delitos o cuasi delitos, alimentos y *litis expensas*, cobro de impuestos, depósito de personas, protocolización de testamentos, etcétera, son en definitiva acciones personales o acciones reales, o llevan en sí mismos los elementos necesarios para determinar la competencia, sea por la necesaria intervención de reparticiones especiales, como en las mensuras, sea porque son procedimientos incidentales que han de hacerse valer ante juez de competencia predeterminada; como las cartas de pobreza, informaciones sumarias, protocolización de testamentos; o porque son consecuencia de otros juicios, como las *litis expensas* y alimentos en el divorcio, los reclamos en juicio ordinario que es permitido iniciar después del ejecutivo, sobre pensiones alimenticias acordadas u otros semejantes. Todos los demás, tales como las sucesiones (Art. 3.284, Código Civil), tutela y curatela (Arts. 400, 401 y 405), ausencia con presunción de fallecimiento (Art. 113), autorización para comparecer en juicio (Art. 1.282), división de cosas comunes (Art. 2.746), ejercicio de la patria potestad y disenso (Art. 31, 32 y 42, ley de matrimonio), nulidad de matrimonio, divorcio y separación de bienes y tenencia de hijos (Arts. 104 y 68), habilitación para ejercer el comercio

(Art. 12 Código de Comercio), rendición de cuentas (Art. 74), transporte (Art. 205), etcétera, están comprendidos en la declaración de carácter general sobre las leyes generales, o son regidos por leyes especiales, como la inconstitucionalidad de ordenanzas municipales, cobro de salarios, etcétera.

Reputo en cambio indispensable una aclaración que complementa el artículo 4º del código, sobre la oportunidad en que el demandado haya de encontrarse en el lugar del juicio, y me pronuncio por el de la notificación de la demanda, que ofrece mayores garantías de su conocimiento por el interesado, repitiendo lo que sostuve en mi libro «Notas y comentarios al Código de Procedimientos», en lo que coinciden los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca en su proyecto.

Creo igualmente necesario fijar reglas para determinar la competencia por razón de la cantidad en las demandas por sumas de dinero o sobre otra clase de bienes, a fin de evitar que la incertidumbre a su respecto pueda dar margen a incidentes.

Considero necesario, finalmente, determinar por un precepto especial la competencia en el cumplimiento de las obligaciones nacidas de la evicción la cual, por no estar previsto en el código, se rige por una jurisprudencia falta de uniformidad.

VII. — *Términos judiciales*

Declarados improrrogables y perentorios todos los términos judiciales por la ley número 4.128, resulta inútil y perjudicial el trámite de la acusación de rebeldía. Para evitar demoras e incidentes, lo reemplazo por una declaración expresa de que la pérdida del derecho se producirá fatal y mecánicamente por el solo transcurso del término.

Otra reforma conveniente relacionada con esta materia, será, sin duda, la de establecer, en cuanto sea posible, los plazos en que hayan de dictarse las resoluciones judiciales — providencias de trámite, interlocutorias o sentencias definitivas — para obligar por ese medio al magistrado a que se pronuncie sin demoras, o colocar al litigante en condiciones

de poderle exigir las responsabilidades en que incurra por el retardo. Eso evitará muchas discusiones, incidentes y pretextos de recargo de trabajo, al par que estimulará la actividad de otros.

Y reputo indispensable, con el propósito de acelerar trámites, completar lo relativo a términos judiciales con una declaración que los declare aplicables a los asesores fiscales y cualquier otro funcionario que deba intervenir en los juicios.

VIII. — Domicilio

Lo relativo al domicilio en los juicios, es objeto de serias modificaciones tendientes a hacer que desaparezca una de las causas originarias de incidentes que entorpecen la marcha de aquéllos y los demoran. Las que he considerado más indispensables, y que en gran parte son ya preceptos de leyes provinciales de procedimientos, son :

Hacer imposible la presentación, premeditada o involuntaria, de escritos sin llenar el requisito de la constitución de un domicilio, cambiando los términos del artículo 11 «y no darán audiencia a los contraventores», cuya ineficacia en tal sentido es notoria, por haber entendido, tanto las cámaras civiles como la Comercial, que no basta la omisión para que el escrito se tenga por no presentado, por una obligación precisa de constituir un domicilio en el primer escrito que se presente, con sanción expresa de que en caso de omitirlo se tendrá por constituido el de su apoderado, cuando lo tenga.

Imponer la obligación de determinar el domicilio en forma expresa, clara y precisa, con designación de calle, número, oficina y cualquier otra circunstancia que al precisarlo haga imposible cuestiones sobre validez de notificaciones practicadas en él, deducidas a base de si la cédula fué entregada en la portería, en este o aquel escritorio, y si fué por ello posible o no que llegara a conocimiento del litigante o apoderado. Como complemento de esto, prohibo, como lo ha prohibido la jurisprudencia y lo proyectan los doctores Méndez, Agote y

Montes de Oca, que se constituya domicilio en las oficinas públicas.

Prever el caso de constitución -- premeditado o involuntario -- de un domicilio en edificio o número que no exista, con sanciones que hagan imposible la demora en el trámite, por una inmediata declaración de rebeldía o por la notificación en los estrados. Y evitar los inconvenientes y gastos de exhortos reiterados cuando se litigue con personas que viven fuera de la capital, facultando al demandante para exigir la constitución de un domicilio en ella bajo apercibimiento de notificar en los estrados.

Existe en esta materia un punto que ha dado tema amplio para discutir nulidades de procedimientos; es el relativo a la duración del domicilio constituido. Los términos del artículo 12 del código en vigencia, que reputa subsistente el domicilio constituido para todos los efectos legales mientras los interesados no hayan designado otro en el expediente, se han entendido en su sentido amplio por reiteradas resoluciones judiciales, al establecer que las notificaciones diligenciadas en él eran válidas aunque no viviera ya en la casa la persona que lo constituyó, y aun cuando estuviera deshabitada. Sólo se hizo excepción del edificio demolido, considerando el tribunal que no cabía llevar la ficción hasta darle un alcance contrario a su espíritu y fines (Cámara Civil, tomo 188, página 94). Igual interpretación se le dió en relación al tiempo, y juicios hay que se han proseguido después de larga paralización, reputándose válidas las notificaciones hechas en los antiguos domicilios constituidos. Resoluciones posteriores han tomado en cuenta la circunstancia de la paralización del juicio y su duración, declarando que no puede considerarse subsistente el domicilio constituido cuando ésta excede de cierto término prudencial. («Gaceta del Foro» de Noviembre de 1917, página 11; ídem de Marzo de 1923, página 81; ídem de Noviembre de 1924, página 254).

Los casos discutidos ante los tribunales por razón de lo que apunto, son más frecuentes de lo que pudiera creerse. Buenos Aires es una ciudad de progreso rapidísimo, en la que se transforman barrios enteros en pocos meses, y es con-

veniente, para poner término a cuestiones como las que he apuntado, fijar un plazo a la duración de los efectos que el domicilio constituido surte en los juicios en los casos de paralización del trámite.

Observa el doctor Rojas una disposición que en tal sentido existe en el proyecto de los doctores Agote, Méndez y Montes de Oca, por considerar que no es fundada la excepción ni hay razón para que no se practiquen las notificaciones en el domicilio constituido, puesto que ambas partes se encuentran en situación igual respecto de él en el caso de paralización, desde que después de dos años se produce la perención de instancia.

El argumento es sólo exacto en parte, desde que pueden existir casos de paralización de expedientes en que no es posible obtener una declaración de caducidad de instancia; pero aun en los casos en que pueda producirse la perención, sería siempre conveniente asegurar la certeza del conocimiento por el litigante de la resolución que pone en movimiento el juicio, puesto que quién consiente un trámite cuando hay perención cumplida, pierde el derecho a solicitar que sea declarada.

IX. — Defensa y representación

Manteniéndose la libre defensa para el litigante que actúa personalmente, incorporo al código, como una facultad del magistrado, la de exigir intervención letrada cuando la actuación de la parte perjudique la marcha regular y ordenada del juicio, así como la absoluta prohibición para los procuradores de peticionar sin firma de letrado haciendo de ello un requisito esencial sin cuyo cumplimiento no se dará curso a sus escritos.

Como excepción a la regla general considero que debe permitirse, en casos especiales, la presentación en juicio sin poder, mediante fianza o caución, como una situación temporaria que deberá regularizarse dentro de un término breve fijado por el juez al proveer la petición. Es un temperamen-

to aceptado por la mayoría de las leyes procesales de las provincias y por el proyecto de Agote, Méndez y Montes de Oca, contra el cual se pronuncia Rojas por creer que no responde a ninguna necesidad sentida dada la facilidad y prontitud de las actuales comunicaciones.

Necesario he creído también prever la situación que se produce, por la revocación de poderes, fallecimiento o incapacidad de mandantes o mandatarios, poniendo al alcance de la contraparte el medio de hacerla cesar en breve término.

Legislo igualmente sobre la unificación de personería incorporando a la ley la jurisprudencia existente en ~~reem~~plazo de las leyes españolas que se aplican en la actualidad.

Una reforma sencilla, de mucha importancia y que dará grandes resultados en mi concepto, consiste en establecer como obligación ineludible para los procuradores la de pedir despacho dentro de un término breve posterior al vencimiento de aquel que la ley fija para pronunciarlo, convirtiéndolos por ese medio en auxiliares vigilantes de la marcha del litigio, sin que se vean expuestos a los perjuicios que, una errónea pero general manera de considerar los recursos de esa naturaleza, acarrean en la actualidad a quien se presenta a activar un despacho demorado. Creo que una imposición semejante encuadra perfectamente en las obligaciones que pueden establecerse a los procuradores, ya que se les imponen responsabilidades por su negligencia en la defensa de los derechos del mandante.

*X. Traslado, firmas, entrega de autos, reposición
de sellado*

Impone el código, como obligación ineludible para los litigantes, la de acompañar copia de toda petición de que deba darse traslado, con prohibición para el secretario de recibir sin ellas el escrito, «produciendo el efecto de no presentado y autorizando en su caso el procedimiento en rebeldía».

La frase final ha servido para falsear el propósito que es de suponer guió al legislador, dando lugar a numerosas incidencias y resoluciones interpretativas de ella, con perjuicio del trámite regular. Para evitarlo es necesario establecer la prohibición en una forma terminante que resulte eficaz y de aplicación inmediata, como lo hago.

La entrega de expedientes está limitada por el artículo 26 a tres casos: para alegar de bien probado; cuando se trate de operaciones de contabilidad muy complicadas; y para hacer la cuenta de partición, en los juicios sucesorios. Hay sin embargo, otros en que militan las mismas razones que fundamentan la disposición recordada y que deben comprenderse en ella para facilidad de la defensa de los derechos controvertidos o el desempeño de su cometido a ciertos funcionarios; tales son, entre los primeros, para expresar agravios de los fallos, y entre los segundos, para otorgar escrituras judiciales, caso ya previsto por la jurisprudencia para llenar el vacío de la ley.

La falta de sellado para la actuación en los juicios no debe ser nunca motivo de demoras de éstos. Hay que poner en mano de los jueces el medio de evitar las demoras actuales por esa causa, en una forma adecuada que permita garantizar el interés fiscal sin las trabas de intimaciones reiteradas. Quien ocurre ante la justicia contrae la obligación de hacer todo aquello que coopere a su rápido pronunciamiento y responde de su negligencia.

XI. — Notificaciones

El actual sistema de notificaciones, aceptable, y tal vez conveniente, cuando la población de Buenos Aires alcanzaba a un cuarto de millón de habitantes, cuando el radio de sus juzgados llegaba hasta el deslinde de las actuales parroquias de Flores y Belgrano, cuando el movimiento judicial era insignificante en relación al actual, no puede subsistir; constituye hoy, indiscutiblemente, una de las principales causas de la morosidad judicial.

La imposibilidad material de cumplir los preceptos legales por el secretario, determinó la práctica viciosa de las notificaciones diligenciadas por empleados subalternos que aquel funcionario daba fe de haber hecho personalmente y trajo como consecuencia multitud de cuestiones sobre nulidad de las mismas que se trató de hacer desaparecer con la reforma introducida por el artículo 2º de la ley número 4.128, indudablemente beneficiosa, pero que no ha dado los resultados que sus autores esperaban. Las notificaciones, hoy como antes, se hacen con retardo; imponen desembolsos a los litigantes, ya que, no teniendo los juzgados partidas de gastos para ese objeto, no es posible exigir que los empleados se trasladen a su costa a sitios lejanos de la Capital; traban la buena marcha de las oficinas si su personal dedica a notificar un tiempo que debía ocupar en atender al público; y ha dado nacimiento a la corruptela actual, que es peor que la que quiso subsanar la reforma: hoy son los propios interesados quienes frecuentemente se encargan de entregar las cédulas o enviarlas a su destino, asentándose en secretaría la diligencia respectiva bajo la fe de sus afirmaciones: lo haberlo hecho.

Las iniciativas de reforma presentadas a la Cámara de Diputados sobre este particular, consistieron: primero, en la creación de puestos de ujieres encargados de las notificaciones, como los que existen en las cámaras de apelaciones y Suprema Corte de Justicia; en tal sentido presentaron proyectos los diputados doctor Emilio Gouchon en 1901 y el escribano don Avelino Rolón en 1915. En 1916, los diputados doctores Alfredo Rodríguez y Leopoldo Melo, partiendo de la premisa de que toda persona que demande justicia ante los tribunales, por propia conveniencia, debe cuidar la tramitación del juicio que haya promovido o se le haya iniciado, y de que el Poder Judicial contrae la obligación de cooperar al mejor desempeño de la misión social de que están encargados sus componentes, presentaron un proyecto en que imponían la obligación de concurrir a las oficinas en días señalados, y dejaron librada a su actividad o negligencia.

cía el mantenimiento o pérdida de los derechos al determinar que a falta de concurrencia, las providencias se tenían por notificadas indefectiblemente el siguiente día hábil, salvo que se tratara de aquellas que por un precepto legal debieran notificarse por cédula.

Para el doctor Silgueira, en la exposición de motivos de su proyecto para la provincia de Corrientes, la obligación de los litigantes de concurrir a la oficina y la razón de ser de las notificaciones por nota, nace de que el estado en su esfera de protección social y de su deber de dar a cada uno lo suyo, no puede llegar hasta convertirse en gestor oficioso de los intereses privados, y de que el particular interesado en el reconocimiento de su derecho no puede pretender que la justicia llegue hasta substituirlo en el cumplimiento de sus deberes más elementales, como es el de vigilar el proceso.

Mi opinión, es más radical que las que acabo de mencionar. Ante el sinnúmero de incidentes promovidos en materia de notificaciones y de notas, he creído que debe buscarse la celeridad del trámite por una reglamentación que limite los casos de notificación por cédula y suprima la formalidad de la nota inútil — a estar a la jurisprudencia sentada por las cámaras sin discrepancia — disponiendo que una vez que se hayan hecho conocer los días de notificación, toda providencia pronunciada queda notificada de derecho y sin otra formalidad el subsiguiente día hábil.

XII. — Disposiciones relativas a los funcionarios y a las audiencias

El procedimiento en la Capital, se resiente de exceso de trámites y providencias inútiles que hacen perder el tiempo a los jueces obligados a firmarlos, aumentan el trabajo de las secretarías y son causas de demoras del juicio por la necesidad de notificar o de esperar los días de notas, es indispensable suprimir unos y otros en lo posible. He de referirme especialmente a una medida tan frecuentemente ordenada como innecesaria, Los informes o certificados previos

del actuario sobre constancias del mismo expediente en que va a proveerse, vencimiento de términos y otros semejantes.

No se justifica ni se alcanza razón atendible que haga necesario un auto especial para que el actuario repita lo que ya consta, ni conduce a nada la repetición o el informe sobre término, sencilla cuestión de cómputo. En los contados casos en que el juez pueda necesitar un informe previo para proveer un escrito debe éste producirse sin necesidad de decretos especiales.

La celebración de audiencias, juntas o juicios verbales, debe ser objeto de una reglamentación dirigida a evitar que la mala voluntad de interesados en que no tengan lugar, pueda obtener resultado. No habrá que olvidar, en relación a ellas, a los letrados y a las partes, obligadas en la actualidad a largas e inútiles esperas en los pasillos de la casa de justicia, que terminan muy frecuentemente por una manifestación a última hora de que no serán atendidos. Entre letrados y magistrados existen deberes de mutua consideración y respecto que no modifica el cargo judicial sino que, por el contrario, se hacen de más imprescindible cumplimiento para quien lo ocupa. Desgraciadamente, el concepto de la importancia propia hace que algunos olviden esto y obligar al legislador a ocuparse de una cuestión que no debiera ser objeto de disposiciones legales.

JUICIO ORDINARIO •

XIII. — Disposiciones preliminares

En el número de diligencias previas que la ley determina en esta sección, incluyo aquellas que la práctica ha indicado como necesarias para facilitar o asegurar derechos acordados por las leyes de fondo. La disposición actual, que es en tal sentido incompleta, se resiente de falta de sanciones y normas para hacerlas efectivas.

Observa el doctor Rojas el proyecto de los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca, sobre este particular, en cuan-

to prevee las diligencias previas solamente en relación al juicio ordinario, sosteniendo, de acuerdo con la opinión de Reus, que deben legislarse como disposiciones comunes a todos los juicios. Es esta, en mi concepto, cuestión de método sin gran importancia, desde que la generalidad de las diligencias previas se refieren a casos que necesariamente han de tramitarse en juicio ordinario, o a procedimientos reglamentados especialmente, en los que se hallan comprendidos, o pueden, sin ningún inconveniente, ser aplicados por analogía en caso necesario.

Observé ya en mis «Notas y Comentarios», con la opinión de algunos autores nacionales y comentadores de la ley de enjuiciamiento española (números 122 a 125), la conveniencia de reemplazar la declaración jurada del inciso 1º, artículo 67 por la absolución de posiciones, por no ser la primera, diligencia que autorice al código, y es la oportunidad de insistir en esa observación.

XIV. — Demanda

Para evitar excepciones, considero conveniente ampliar los requisitos que según el artículo 71 deben llenarse en el escrito de demanda con la declaración de la nacionalidad del actor. Algunos códigos exigen igual manifestación respecto del demandado; pero no asigno a ello mayor importancia, porque quien conoce la nacionalidad de su adversario para manifestarla al juez, tiene ya el elemento indispensable para ocurrir al que deba conocer en el litigio por razón de ella; y quién no la conozca y vea trabada su acción por tal formalidad, la salvará por una declaración de ignorancia o por una manifestación en que le atribuya una cualquiera, con lo cual nada se habrá adelantado en el sentido y al objeto que el precepto legal va encaminado.

En la exposición del derecho, no considero indispensable ni la cita concreta de la ley, ni la designación de la acción por su nombre técnico. Esto, que es ya doctrina consagrada por reiteradas declaraciones judiciales, lo convierto en un precepto legal terminante que evite discusiones.

La presentación de los documentos en que el litigante funda su derecho, requiere reglas más precisas que las actuales. La discusión leal y franca ante la justicia, sin habilidades y sin sorpresa, debe ser un ideal perseguido por la ley procesal, para ello es necesario que cada parte pueda conocer desde la iniciación, por la agregación de los documentos — originales o copias — los elementos de prueba preconstituída que se invocan. Lo es igualmente para el mejor esclarecimiento de los hechos, y a fin de que el magistrado tenga desde el primer momento un amplio conocimiento de la causa, que le permita resolver cualquier cuestión que con ellos se relacione.

XV. — Excepciones

Creo conveniente limitar más aún el número de excepciones previas, permitiendo sólo como dilatorias aquellas que por su naturaleza impidan la entrada a juicio sin ser resueltas. Los defectos de una demanda, por ejemplo, no deben dar motivo a una excepción de esa naturaleza, basta facultar al juez para exigir su cumplimiento, de oficio o a petición de parte, lo mismo que para requerir manifestaciones que conceptúe necesarias para determinar la competencia. Con ello la rapidez del trámite ganará muchísimo.

XVI. — Arraigo

La opinión se halla dividida entre los que propician la supresión del arraigo y los que quieren hacer de él una obligación general en todo juicio declarativo, «destinada a corregir a los pleitistas temerarios», según las palabras con que el doctor Ferrarotti fundaba un proyecto ante la Cámara de Diputados (Diario de Sesiones de 1919, tomo III, página 208).

No creo conveniente adoptar ninguna de estas resoluciones extremas; bastaría a mi juicio modificar lo existente. En tal sentido, es evidente, desde luego, que la obligación de

arraigar impuesta a todo el que no tenga domicilio en la Capital, en los términos generales en que lo hace el código, no puede subsistir. La razón de ser del arraigo no existe en relación a los que habitan el territorio de la República ni se explica con respecto a ellos su inclusión en una ley para la Capital Federal, porque importa establecer diferencias contrarias al precepto constitucional. La administración de justicia de las provincias, organizada como hoy lo está permite hacer efectivos sin dificultades los fallos pronunciados en aquella. Un congreso constituido con representantes de las provincias, aunque obre como legislatura local, no puede ni debe aceptar nada que importe lo contrario. Opino, en razón de esto, que sólo debe permitirse la exigencia de arraigar — como prescribe la ley de procedimientos federales — contra el extranjero no domiciliado en la República que demande a naturales o a extranjeros nacionalizados o domiciliados en ella, y que es necesario reaccionar contra la doctrina contraria que sustentan tanto los proyectos de reformas redactados hasta ahora como los códigos provinciales, al establecerla para el no domiciliado en la Capital o en la provincia.

Pero sea cual fuere la amplitud que se de al arraigo en el sentido antes expresado, será siempre necesario a su respecto una reglamentación que en gran parte ha sido ya dada por la jurisprudencia, para declarar facultativo del juez, tanto en lo relativo a la caución, permitiendo cualquiera de las establecidas en las leyes, como la fijación de un término en que deba prestarla — bajo pena de producirse la caducidad de la instancia en un plazo breve, que no haya que esperar, como ahora, que se cumpla el señalado por la ley número 4.550 — lo mismo que para determinar con claridad los casos que por estar suficientemente garantido el actor, el arraigo es improcedente.

XVII. — Prueba en general

La estación más interesante del juicio, aquella en que se libra el verdadero debate judicial, es la de prueba, dice Rojas en sus «Estudios de Derecho Procesal Argentino». La

reforma procesal en esta parte debe tender a simplificar el trámite y acelerar su producción, a fin de evitar los incidentes que, interrumpiendo ésta, duplican o triplican frecuentemente el término fijado por la ley.

Los doctores Montes de Oca, Méndez y Agote proyectan sobre este particular una innovación que es combatida por Rojas, por considerar que no producirá en la práctica los resultados que se buscan, en orden a la celeridad y acierto para dictar sentencias y terminar los juicios.

Opino también que el sistema no dará resultado, porque la innovación fundamental de las prácticas actuales que por él se hace, no toma en cuenta la organización de la justicia de la Capital. Considero que está más de acuerdo con ella, y será de más eficacia práctica, el procedimiento que obligue a ofrecer toda la prueba antes de señalarse el término para producirla, completado por la prohibición de discutir la procedencia o improcedencia de las medidas ofrecidas — con lo que se suprimirán las reiteradas suspensiones del término y el continuo viajar del expediente a la Cámara — y la determinación de un término probatorio que sea lo suficientemente amplio para justificar su cierre al vencimiento con las diligencias producidas, sin perjuicio de que se incorporen al expediente y se tomen en consideración las que se agreguen antes de pronunciarse el fallo. Con este sistema, ante el temor de quedar sin algunos elementos de prueba ofrecidos — que ya no podrá excusarse con imposibilidades más o menos ciertas en su producción — las partes serán más activas y vigilantes.

Tanto el proyecto de Agote, Méndez y Montes de Oca como el de Rojas, y la mayoría de los códigos provinciales, hacen obligatoria la prueba de las leyes de países extranjeros y de las provincias. No creo deba incluirse en el código para la Capital una disposición en tal sentido. En relación a las leyes extranjeras existe ya el artículo 13 del Código Civil que la hace innecesaria, y con referencia a las leyes provinciales están los preceptos de la Carta Fundamental, que hace inconstitucional la exigencia.

La obligación de probar los decretos u ordenanzas o de las provincias, tampoco necesita ser materia de una disposición especial de la ley procesal, por razones que nacen de su propia naturaleza, de las prescripciones del Código Civil y de los preceptos constitucionales a que aludo en el párrafo anterior.

La asistencia obligatoria e inexcusable del juez a toda diligencia de prueba que se practique en el asiento del juzgado, hará desaparecer la corruptela perniciosa de la delegación, en virtud de la cual, o se acepta que actos importantes de la prueba se produzcan ante un escribiente o el litigante que reclama como indispensable la intervención del juez en ellos, tiene que resignarse a que no se produzcan en mucho tiempo. Impresiona mal — decía el autor de un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados — que un juez que no ha asistido a la audiencia y que ni siquiera sabe que se ha realizado, aparezca al día siguiente faltando a la verdad al firmar un acta en que no ha tenido intervención, y luego resuelva por lo que bien o mal se haya asentado en esa acta, sin recibir la impresión personal que es lo indispensable para hacerlo con acierto. (Diario de Sesiones de 1917, tomo III, página 387).

Es, por lo demás, una reforma que la moderna doctrina en materia procesal hace indispensable y que prepara el terreno para la implantación del procedimiento oral que ella reclama.

XVIII. — *Confesión*

La prueba de confesión ha perdido su eficacia y con ello la importancia que las leyes le atribuían. Todo el que haya actuado en los tribunales sabe bien cuánta verdad encierra la afirmación que acabo de hacer. Obligado el ponente a redactar sus interrogaciones en forma asertiva que permita responder si su afirmación es o no cierta, salvo rarísimas excepciones, las posiciones sirven sólo para que se confirmen por uno y otro de los litigantes las manifestaciones de los escritos con que quedó trabada la *litis*, sin resultado práctico para la prueba.

Se ha buscado salvar esta dificultad por una modificación de la forma de las posiciones que haga posible pedir toda clase de aclaraciones sobre los hechos que comprenden, hasta en sus detalles; pero obsta, para imponer sanciones que la hagan eficaz, el precepto constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, no obstante algunas declaraciones judiciales.

En presencia de esto, propician ya algunos la supresión de este medio probatorio y otros lo dejan solo como facultad del juez, incluída entre las diligencias con que puede, procediendo de oficio, buscar la verdad que ha de servir de base a su pronunciamiento.

Participo de la opinión general sobre las dificultades de obtener confesión judicial por este medio, limitado como está por la exigencia sobre la manera de formular las preguntas; pero me doy cuenta también de los inconvenientes y discusiones que provocaría su supresión en el Código de la Capital, estando, como está, autorizada la medida en todos los de la República, y es por ello que, en ésta como en otras materias, consideró la comisión redactora del proyecto para la Capital, conveniente mantener «la estructura del código actual y no introducir sinó aquellas reformas impuestas por necesidades sentidas.»

Las reformas que proyecto sobre este medió probatorio son:

- a) Obligación para el ponente de presentar el pliego con el pedido de fijación de audiencia;
- b) Obligación para el juez de imponerse del pliego antes de realizarse la audiencia, para evitar que, como suele ocurrir, se presente a formular las posiciones sin suficiente conocimiento de ellas y tenga dificultades para resolver las cuestiones que se susciten sobre pertinencia de las interrogaciones o negativas a contestarlas;
- c) Limitar el derecho a poner posiciones a una sola vez;

-
- d) Dar mayor intervención a los letrados de las partes, permitiéndoles observar la pertinencia de las posiciones en una forma que no interrumpa el acto ni produzca confusión en él, ni sirva para advertir al absolvente que eluda la respuesta, y que al mismo tiempo dé las garantías que hoy faltan y que suele aprovechar el ponente para conseguir ventajas por sorpresa;
- e) Suprimir el juramento;
- f) Reemplazar por informes escritos las posiciones de los jefes de la administración, el ministerio público o los representantes en los juicios en que sea parte la Nación, alguna repartición autónoma de la misma o la municipalidad;
- g) Finalmente — puesto que la prueba de posiciones ha de ser lealmente producida y destinada a averiguar la verdad — en casos especiales, se permite al absolvente responder previa consulta de antecedentes o constancias de libros de comercio.

XIX. — Prueba instrumental

Las disposiciones actuales sobre esta materia solo son objeto de algunas ampliaciones con respecto a la compulsa y cotejo de instrumentos públicos, a la presentación de telegramas como medio probatorio y obligación de exhibir documentos por aquellos que los tengan en su poder y no sean parte en el juicio.

XX. — Prueba pericial

Para evitar que ese desvirtúe la actuación de los peritos como auxiliares de la justicia, convirtiéndolos en defensores de las partes, como ocurre ahora en la generalidad de los casos, reputo conveniente incorporar al código la exigencia de que haya acuerdo de las partes sobre cada uno de los que se pro-

pongan y que a falta de él, quede el juez facultado para designar uno solo.

Suprimo en mi proyecto el juramento exigido al aceptar el cargo porque la misión del perito de informar con arreglo a principios científicos y las facultades de apreciación del valor de su dictamen que se acuerdan al juez, hacen completamente innecesaria y sin objeto la formalidad.

XXI. — Testigos

Ante la imposibilidad de prescindir de este medio de prueba, el más general y al propio tiempo el que ofrece menos seguridades de exactitud, es indispensable rodear de mayores garantías su producción, poniendo a las partes en mejores condiciones para contrarrestarla por la obligación de presentar el interrogatorio al ofrecer la prueba testimonial y ponerlo en conocimiento del adversario.

Abreviará mucho la duración de los juicios y hará más fácil la producción de la prueba la limitación del número de los testigos que es permitido presentar, la ampliación del número de aquellos que están eximidos de comparecer ante el juez y pueden declarar por oficio, y la obligación para las partes de presentarlos en la audiencia, dejando la citación para casos especiales como lo proyecto.

Establezco reglas precisas para los casos en que es permitido ampararse en el secreto profesional, a fin que desaparezca la incertidumbre que existe al respecto y que es a menudo causa de incidentes.

XXII. — Tachas

Una enumeración de las tachas relativas es redundante. Si el valor de la prueba testimonial ha de apreciarse con el concepto de la sana crítica, ellas sólo pueden constituir un antecedente que el juez deberá siempre tomar en consideración; y basta, en consecuencia, enunciar una regla general en tal sentido.

XXIII. — *Conclusión de la causa*

En el sistema actual, la agregación de la prueba no se produce sin pedido de parte. Esta circunstancia, y la facilidad de interrumpir el término para presentar un alegato que, según los propios términos de la ley, no es indispensable, ocasionan demoras en la terminación del juicio que procuro evitar imponiendo al actuario la obligación de agregar las probanzas producidas al vencimiento del término; contar desde esa agregación el plazo para alegar; y disponer que vencido continúe el juicio con o sin ellos.

Siguiendo la tendencia moderna favorable a la oralidad del juicio, abogan muchos, entre ellos los autores del proyecto para la Capital, por los alegatos verbales. No obstante ser esta materia a tratar en otra parte, diré de paso que comparto las dudas del doctor Rojas sobre la eficacia de tales alegatos, y que, como él, considero preferible el sistema que tenemos mientras una nueva organización de la justicia o una ampliación de lo existente no cambie las condiciones de funcionamiento.

XXIV. — *Perención de instancia*

Se discute si la perención de instancia debe producirse por el mero transcurso del término fijado por la ley o tiene que ser solicitada por el interesado en su declaración. Para mí uno de los conceptos básicos de la reforma procesal debe ser: que quién promueve un juicio o quien es llevado a juicio, contrae, por ese solo hecho, la obligación de atenderlo, seguirlo y terminarlo; contribuyendo en su esfera de acción a que la justicia se administre rápida y eficientemente, por eso establezco que las notificaciones deben hacerse por ministerio de la ley en los días designados y sin otra formalidad, por eso mismo prescribo que los términos fenece por su solo transcurso y que los apercibimientos deben ser expresos y hacerse efectivos mecánicamente. Por idénticas razones determino en mi proyecto la perención de instancia se produce

por el transcurso del término, como está ya establecido en el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, no obstante las razones de carácter doctrinario que se invocan para sostener lo contrario.

Es esta una reforma necesaria en materia de perención, como lo son la de reducir los términos en que haya de cumplirse, determinar con claridad qué actos las producen y el momento en que comienza a correr el plazo.

En la aplicación de la ley número 4.550, se han puesto de manifiesto dos criterios diferentes, respecto de si en el término de la perención debe computarse el tiempo en que los expedientes permanezcan en poder de los magistrados, para resolver después que una providencia de autos ha cerrado toda discusión.

Soy de opinión que si la ley pone en manos de los litigantes recursos para urgir el despacho que, por estar en ella, deben reputarse efectivos y no letra muerta, cuando no se usa de ellos, se es tan negligente como cuando se deja paralizado el juicio en otro estado del procedimiento y militan las mismas razones que se han tenido en vista para permitir la perención en este último caso. Era necesario incorporar al código un precepto terminante en tal sentido, hasta para incitar a los magistrados a que cumplan sus deberes y a los litigantes a que ejerciten los recursos y es en mi proyecto un imperativo, dada la forma en que sustituyo la queja por retardada justicia.

XXV. — Recursos

El de revocatoria lo establezco para las providencias dictadas sin substanciación previa, único caso en que tiene razón de ser y objeto práctico, para obtener la modificación sin demoras perjudiciales.

Permito fundar el de apelación en primera instancia o en segunda, o limitarse a la mera interposición por escrito o en el acto de la notificación, porque ello ninguna altera-

ción introduce en el procedimiento, y en cambio la facultad de fndarlo favorece en muchos casos al apelante.

El recurso de queja por denegación o retardo de justicia, es objeto de una modificación radical, para que deje de ser lo que es, una garantía nominal para los litigantes de rarísimo uso y de resultados por lo común contraproducentes que no sirve sino para originar rozamientos desagradables al litigante, según las palabras de Silgueira.

En mi proyecto es reemplazado, a mi juicio con evidente ventaja, por las siguientes obligaciones impuestas en distintos preceptos: tener a disposición del público, en las secretarías de los juzgados y de las cámaras, libros en que se haga constar la fecha del llamamiento de autos, la del sorteo, el orden en que se estudiarán las causas y la fecha de entrega y de devolución de los expedientes por cada magistrado, provocando así la actitud individual por el control y para que cada cual cargue con su negligencia.

Obligación, para los mandatarios judiciales y representantes legales, de pedir pronto despacho al vencimiento de los términos bajo penas severas.

Determinación para los casos de demoras, de multas que se harán efectivas sobre el sueldo, por la cámara de quien el magistrado moroso dependa.

Obligación para los secretarios de los juzgados o tribunales de comunicar los pedidos de pronto despacho, inmediatamente de presentados, al presidente de la cámara respectiva y al representante del Consejo Nacional de Educación que actúe en el juzgado, y a dejar de ello constancia en el expediente bajo las mismas penas.

XXVI. — Procedimiento en segunda instancia

Hay que simplificar más los trámites de este procedimiento en obsequio a la celeridad. En la mayoría de los casos, la discusión está ya completa cuando el expediente llega a la cámara, y los escritos que a ella se presentan son simples glosas de los de primera instancia.

Un punto que he creído preciso considerar especialmente, es el de los acuerdos, para dejar al tribunal en libertad de establecer y discutir tan sólo las cuestiones de hecho y de derecho que considere necesarias, atendiendo a las circunstancias especiales del caso, y para que, cuando los fundamentos aducidos por el inferior sean suficientes, puedan dictar resoluciones confirmatorias «por sus fundamentos». Las largas exposiciones de los señores camaristas, en esos casos, carecen de objeto práctico.

XXVII. — *Recusaciones y excusaciones*

Soy partidario de que se mantenga la recusación sin causa. Ella, dice la comisión redactora del código para la provincia de Tucumán, contribuye a asegurar la imparcialidad de los jueces, previene situaciones especiales, a veces íntimas, y favorece a la justicia, que necesita infundir confianza en sus miembros para merecer respeto.

Indudablemente, para la ley, todos los jueces son igualmente buenos, como argumentan los sostenedores de la supresión; pero los jueces son hombres que tienen pasiones; intereses, virtudes y defectos, y la recusación sin causa es en muchos casos la única defensa contra la parcialidad o animadversión, cuando no es posible invocar la causal que encuadre en el precepto legal no obstante existir la situación que la fundamenta.

Lo que corresponde ante esto, no es privar del recurso sino reglamentarlo, de manera que no pueda servir de pretexto para demorar los juicios.

En la recusación con causa comprendo a los letrados y procuradores de las partes, ya que la amistad íntima, la enemistad y demás causales previstas por la ley, colocan al magistrado en idéntica situación que la que se ha tenido en cuenta para establecer las causales en relación a los directamente interesados en el juicio.

XXVIII. — Incidentes

La facilidad de promover incidentes es uno de los graves defectos de la ley que debe corregirse como lo hago estableciendo disposiciones precisas en reemplazo de las existentes, demasiado generales y un tanto vagas.

Son ellas necesarias especialmente para determinar una tramitación breve y evitar que, salvo casos especiales por su relación con lo principal, puedan suspender la tramitación del juicio.

En este título deben agruparse, en mi concepto, todas las cuestiones que por su aplicación a toda clase de juicio o procedimientos tienen el carácter de incidentales, tales como las cuestiones de competencia, las tercerías, la declaratoria de pobreza y otras de igual carácter que están ya legisladas en la ley de forma o son legisladas en mi proyecto para completarla.

XXIX. — Embargos preventivos

A la denominación actual, demasiado restringida, escapan diversas medidas de seguridad que la ley acuerda al acreedor para garantir sus derechos. Considero por ello conveniente sustituirla por la de «Medidas precautorias».

Amplió las disposiciones de este título con los elementos jurisprudenciales acumulados en la aplicación de la ley, y comprendo entre las deudas que pueden ser objeto de las medidas de seguridad las deudas en que deben ser satisfechas en especie.

Para hacer efectivas las medidas que el título prevé, suprimo la formalidad de la previa intimación de pago, que desvirtúa su carácter y el propósito que con ellas se busca, para evitar la posibilidad de que sean burladas. Con ello no se perjudica al deudor, puesto que está en su mano evitar los inconvenientes que pueda producirle por una sustitución de la garantía.

En la Cámara se han presentado diversos proyectos relacionados con las inhibiciones, ya para establecer formalidades para su anotación que eviten molestias y perjuicios por razón de identidad de nombres; ya para limitar la duración de sus efectos; ya para suprimirlas como medidas precautorias considerándolas una restricción a la libertad individual, un ataque al derecho de propiedad y una medida que, por todo ello, y por contraria a los preceptos del Código Civil, no debe figurar en el de Procedimientos. (Proyectos de Avellaneda, Riú y Ferreyra. Diario de Sesiones de 1921, tomo I, página 493 y proyecto de Jiménez Beltrán, Diario de Sesiones de 1918, tomo I, página 491).

Esos proyectos y su despacho, la modificación de los artículos 475 y 476 del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires y las numerosas informaciones tramitadas ante los tribunales con objeto de demostrar la libertad de disponer de sus bienes por personas del mismo nombre y apellido que el inhibido, demuestran y justifican la necesidad imprescindible de la reforma, con el doble propósito de individualizar la persona que afecta y limitar el término, de acuerdo con la regla sobre prescripción de las acciones personales.

XXX. — *Juicio ejecutivo*

El procedimiento ejecutivo es en mi proyecto objeto de serias reformas destinadas a llenar los vacíos notados en la aplicación del código, ampliar la esfera de lo existente, para satisfacer necesidades y exigencias apremiantes y hacerlo más breve y menos oneroso.

La ley actual sólo autoriza las ejecuciones por sumas de dinero líquidas y exigibles, con exclusión de toda otra obligación, aunque se halle establecida en título que traiga aparejada ejecución; las deudas de títulos cotizables, de dar cosas ciertas o cantidades de cosas escapen así, sin razón, al procedimiento.

Mi proyecto llena ese vacío, lo mismo que el relativo a las ejecuciones por cobro de saldos de cuentas corrientes y

manera de preparar la acción ejecutiva para hacerlos efectivos, incorporando las normas sentadas por la jurisprudencia.

El doctor Silgueira, con el título de «Juicio ejecutivo en las obligaciones de hacer o de no hacer» establece en su proyecto de código para la provincia de Corrientes un procedimiento, que en mi concepto no encuadra en el juicio ejecutivo. En las obligaciones de esa naturaleza, aun cuando el documento constitutivo sea de los que traen aparejada ejecución por su forma, se hace necesaria en la generalidad de los casos, una discusión sobre la obligación misma, su validez, su exigibilidad, su cumplimiento o incumplimiento u otras circunstancias, discusión de fondo que escapa al procedimiento compulsivo, que requiere una resolución previa para que se ordene el cumplimiento y quede en condiciones de ser exigida, resolución que puede dar lugar al procedimiento forzado o resolverse en una indemnización de daños y perjuicios, según el caso. Por todo esto soy de opinión que conviene más mantener como más lógico para esa clase de obligaciones el procedimiento de ejecución de sentencia con que actualmente se hacen exigibles.

Con el propósito de abreviar la duración de las ejecuciones y suprimir inconvenientes que a diario se presentan, determino reglas para notificar a los deudores que se domicilian fuera de la Capital y conseguir que intervengan en el procedimiento sin necesidad de exhortos reiterados que sólo sirven para producir demoras y gastos.

Los casos de ampliación de la ejecución, circunscriptos por el artículo 484 a los nuevos plazos de la obligación que la motiva, vencidos durante la tramitación, los extiendo a las ejecuciones de documentos provenientes de obligaciones con vencimientos sucesivos, cuando éstos se producen antes de la sentencia de remate, e implanto para los vencimientos posteriores una tramitación que facilita el cobro sin necesidad de buscar declaraciones redundantes sobre la pertinencia, ya pronunciada, de la ejecución y sin perder de vista la garantía de los derechos y defensa del deudor.

En la enumeración de las excepciones, de acuerdo con la jurisprudencia sentada, separo la de inhabilidad del título de la falsedad del mismo; reemplazo los incisos 6º a 11 del artículo 488 por una declaración general que comprende a todos, pero solamente con referencia a la extinción total de la deuda; fijo el concepto de la compensación de acuerdo con la naturaleza del procedimiento y aclaro el relativo a la nulidad limitándolo a las violaciones substanciales.

Modifico también las reglas de la producción de la prueba por otras que armonizan más con la naturaleza sumaria del procedimiento ejecutivo, a fin de evitar lo que hoy es frecuente, que una ejecución se convierta en un juicio ordinario y dé aún nacimiento a otro de esta última especie.

El cumplimiento de la sentencia de remate es precedido del de la liquidación de intereses conformándolo así a lo que en realidad ocurre siempre y como medio de sentar bases fijas para la liquidación.

Preveo respecto de ésta, casos diversos, según sea lo embargado, dinero efectivo, títulos cotizables, frutos, sueldos o pensiones, muebles o alhajas. Suprimo el gasto inútil de tasación para la venta de bienes raíces. Hago obligatoria la agregación de los títulos de propiedad antes de que se realice el remate y la expresión en los anuncios de estar agregados o de que no existen, con prevención de que después de realizada la subasta no se admitirán observaciones por su insuficiencia o falta. De esta manera desaparecerán las frecuentes y largas discusiones sobre títulos, siempre perjudiciales para la terminación de los reclamos. Prohibo toda observación a la venta sin el previo depósito del precio. Y determino la fecha en que se han de pedir las regulaciones de honorarios en una forma que, creo, concilia los derechos de los interesados en éstos con los de los interesados en el juicio.

XXXI. — Cumplimiento de la sentencia de remate

La rápida terminación de una ejecución interesa por igual al acreedor que persigue en ella el cobro y al deudor contra quien siguen corriendo intereses y acumulándose gastos; in-

teresa también en cierto estado al adquirente de los bienes, y puede interesar en muchos casos a los terceros embargantes del saldo que quedare disponible.

El procedimiento actual para el cumplimiento de la sentencia de remate es caro y pesado por recargo de formalidades que pueden suprimirse sin peligro y con beneficio para todos. Hoy, por ejemplo, en caso de ser lo embargado títulos cotizables en la Bolsa de Comercio, se procede a su venta por corredor, cuando teniendo un precio de cotización nada impide que se entreguen al acreedor por ese precio. Hoy, si lo embargado son frutos, de acuerdo con el código debe realizarse su venta por martillero público, cuando la conveniencia está en hacerla por medio de un consignatario, en la forma que es de práctica en negocios de esa especie, más rápida y menos costosa; y no debe olvidarse que es en el medio que ellos actúan, donde están los que puedan interesarse en la adquisición. Hoy, para la venta de inmuebles, es indispensable la intervención de dos peritos, que fijen su valor por medio de una tasación inútil que encarece el proceso y retarda la liquidación, como decía con razón el diputado Robirosa fundando un proyecto en que abogaba por su supresión, (Diario de Sesiones de 1904, tomo I página 397; Véase proyecto de Le Breton, Diario de Sesiones de 1914, tomo III, página 945), que puede reemplazarse con ventaja por la avaluación establecida para el pago de la contribución directa o un porcentaje de ella, avaluación que, por su origen y destino, tiene a su favor la presunción de seriedad y justicia necesaria para servir de base al remate, que es en definitiva el que fija precio.

Otras modificaciones que producirá indiscutibles beneficios es, en mi concepto, la de obligar a que los títulos de propiedad de los inmuebles a venderse judicialmente se agreguen en todos los casos antes de la subasta — en testimonio original o en copia ordenada en la ejecución a falta de aquél — de manera que el interesado en su adquisición pueda conocer por ellos y los informes de las oficinas de propiedad e hipotecas, que también se exigen como previos al

remate, la bondad o deficiencia de los títulos y las condiciones del dominio; y lo es igualmente la de que se anuncie la venta con prevención de que al adquirente no se le admitirá reclamaciones posteriores sobre deficiencias. Con ello se hará posible el cumplimiento del precepto legal según el cual en las ventas judiciales no es necesaria la escritura pública, precepto que no se cumple en la actualidad invocando razones nacidas de la falta de seguridad para los compradores, que las reglas enunciadas y otras que las complementen harán desaparecer.

Las observaciones al remate judicial quedan por este medio reducidas al cumplimiento de las formalidades con que se ha efectuado, las cuales, como medida de indudable conveniencia para los acreedores ejecutantes, no deberán permitirse sin haber efectuado el depósito del precio.

Introduzo también otra modificación que, como las anteriores, abreviará la liquidación, se refiere a las regulaciones de honorarios de los que por una u otra causa intervienen en la ejecución. Hay razones de indudable conveniencia en que no se realicen hasta el momento de la liquidación general; la de que evitan las apelaciones que paralizan el trámite, y de que en esa oportunidad tiene el juez todos los elementos necesarios para poder efectuar una justa apreciación de acuerdo con la labor realizada y el monto real del asunto, muchas veces inferior al de la obligación ejecutada.

XXXII. — Ejecución de sentencias

Hace falta un procedimiento que permita hacer efectivos los pronunciamientos judiciales en más breve tiempo y con menos gasto, que facilite el desapoderamiento y la ejecución forzada en las obligaciones de hacer o haga posible la fijación de valores y perjuicios en forma sumaria. Los amplios trámites del juicio ordinario que preceden a este estado del procedimiento, permiten acumular elementos de juicio para esa determinación de valores por informes periciales, o establecer bases para la estimación pericial, sin necesidad de recurrir a nuevas diligencias largas y dispendiosas.

XXXIII. — Juicio de desalojo

Legislado para reglar las relaciones entre propietarios y locatarios o entre estos y los subinquilinos, como lo está, el juicio de desalojo del código en vigencia no responde a las necesidades actuales. La mayoría de las leyes provinciales lo extienden a los poseedores, sublocatarios o los que tienen la cosa por un título que confiera el uso, goce o disfrute un predio, en sus relaciones con locatarios, colonos, parcelarios, comodatarios, administradores, gestores, guardadores y en general contra todo tenedor precario o intruso que tenga obligación exigible de restituir la cosa.

Es este un procedimiento que, además de lo expuesto, necesita ser retocado para adoptarlo a los preceptos de las leyes 11.156 y 11.157 y completar sus disposiciones con lo resuelto por los tribunales a su respecto para permitir, como lo proyecto, la notificación anticipada que haga correr los términos y evitar que la entrega de la cosa pueda ser demorada con discusiones sobre mejoras, labores, etcétera, que son extrañas a este procedimiento.

XXXIV. — Alimentos provisorios

No existe uniformidad en las leyes provinciales ni sobre la tramitación ni sobre la intervención concedida al demandado en este procedimiento. Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Santiago del Estero, lo tramitan en juicio declarativo de menor cuantía; Tucumán en juicio verbal en que ambas partes pueden producir pruebas; Entre Ríos habla de citación del demandado, al cual permite también producir pruebas; San Juan da intervención al demandado desde el primer momento; Rojas en su proyecto, no habla de notificar al demandado; pero implícitamente parece determinarlo así, puesto que en el término probatorio que acuerda, lo faculta para producir la que convenga a su derecho; Silgueira, por el contrario, le da intervención desde que el procedimiento se inicia

Para mí, una vez que el Código Civil (artículo 375) dispone que el procedimiento para los alimentos debe ser sumario y habla solo de la obligación de probar en relación al pariente que los solicite; dado el objeto y naturaleza de la obligación de dar alimentos, en que no son necesarias pruebas perfectas sino las necesarias para decretar la prestación provisoria; y siendo que por mandato expreso de la ley de fondo, el que los solicita está obligado a justificar su derecho en forma, no tiene objeto la intervención del demandado, si no es para asegurarle el derecho a ser oído por apelación sobre lo resuelto en cuanto a su monto. Por lo demás, los reclamos sobre alimentos provisorios, más que juicios, son como dice Machado, «procedimientos». El juez se pronuncia en ellos *llanamente e sin alargamiento non guardando la forma del juicio que deve ser guardado en los otros pleytos* (L. 7, título 19, página 4°).

XXXV. — *Mensura y deslinde*

La ley vigente legisla dos juicios distintos, con el nombre de «Mensura» el uno y de «Deslinde y amojonamiento» el otro. Este último, como observaba en mis comentarios al código, no tiene aplicación en la Capital Federal, y es sin duda por eso que el proyecto de los doctores Méndez, Montes de Oca y Agote se ocupa, en una disposición única, de la acción de deslinde que autoriza al Código Civil.

En un trabajo presentado por el doctor Vera Vallejo a la Conferencia Nacional de Abogados, aboga por la reglamentación independiente de las acciones de mensura, deslinde y amojonamiento, que en ciertos casos pueden acumularse, concretando observaciones sobre la necesidad de la mensura como operación complementaria de los títulos de dominio, para sostener la mensura judicialmente aprobada como un requisito de la perfección del título de propiedad y afirmar que si bien el Código Civil no ha dedicado un capítulo especial a la acción de mensura, como lo ha hecho con el deslinde, dicha acción es aceptada por el derecho argentino. («Revista del Colegio de Abogados» de Julio de 1925, página 25).

El doctor Silgueira, en su proyecto, establece un juicio denominado mensura, destinado a ubicar un título de propiedad midiendo y determinando el área del terreno comprendido dentro de sus linderos y otro de deslinde para el ejercicio de la acción que acuerda el Código Civil.

La reforma para la provincia de Entre Ríos, legisla sobre la acción de deslinde con el alcance de un acto que tiende a hacer cesar el condominio existente en los límites confundidos mediante un juicio en que cada parte es a la vez actora y demandada; y acuerda a la mensura el carácter de gestión voluntaria destinada a conocer los límites de un predio para el ejercicio de derechos reales, por lo cual no da intervención en ella a los linderos.

El código de San Luis incluye el deslinde entre los juicios especiales; el doctor Rojas sigue en su proyecto al código de Santa Fe, que es también seguido por varias otras leyes provinciales; en cambio Buenos Aires mantiene lo existente en la ley de la Capital Federal, con pequeñas modificaciones.

Se observa por algunos que tanto la acción de deslinde como el procedimiento de mensura son inútiles en un código para la Capital, por que, como han dicho resoluciones judiciales, la primera no puede tener lugar en ella y el segundo carece de objeto; pero una vez que el código ha de regir también en los territorios nacionales es imposible dejar de legislar sobre ambos.

XXXVI. -- Sucesiones

Consecuente con lo manifestado al principio de estos fundamentos, considero que deben desaparecer de la ley procesal las disposiciones del Código Civil que han sido innecesariamente incluidas en este título. Con esa supresión, conservando todo aquello que la práctica ha demostrado que es conveniente y llenando algunas omisiones salvadas ya por la jurisprudencia, propongo la reglamentación para el trámite de las sucesiones, materia legislada hoy de una manera confusa, especialmente en lo que se refiere a los *ab intestatos*.

Una de las reformas con respecto a estos es la supresión de los edictos que la práctica, sancionada por abundante jurisprudencia, establece en términos tan amplios como categóricos para todos los casos en que no hay testamento.

Contra esa práctica, en mi opinión, infundada, errónea, contraria al Código Civil que no contiene tal exigencia y a los propios términos del inciso 2º del artículo 685 del de procedimientos, formulé cuestión expresa ante la Cámara Civil, en un escrito que publicó la «Revista del Notariado» correspondiente al año 1903, página 369.

Los edictos tienen objeto cuando se trata de sucesiones con herederos desconocidos o con herederos de un grado de parentesco lejano; en los demás casos, que son los generales, de sucesiones iniciadas por la esposa, hijos o parientes cercanos del causante, dilatan el procedimiento obligando a un gasto que encarece a la justicia sin objeto, puesto que la declaratoria de herederos a favor de los que se hayan presentado se pronuncia a base de documentación que justifica el carácter hereditario y «en cuanto ha lugar», dejando así abierto el camino a toda inclusión o reclamo.

Coincidiendo con este modo de pensar, el doctor Silguera los ha suprimido en su proyecto, por no encontrar fundamentos capaces de determinar un procedimiento distinto del de las testamentarias y haberse convencido de que no dan resultado práctico, según manifiesta.

Otro de los inconvenientes de la ley actual, es la excesiva intervención que se acuerda al representante del Consejo Nacional de Educación, convertido en un heredero y en ciertos casos con mayores facultades que un heredero. Considero que esa intervención amplia es perjudicial para la buena marcha y celeridad del juicio sucesorio, sin que beneficie a la repartición, y por ello la reduzco a lo necesario para asegurar el control de los valores y la percepción del impuesto.

A fin de evitar abusos que produzcan trastornos y recargo de gastos, reglamento la intervención de los acreedores, distinguiendo entre lo que corresponde a los de la herencia y a los del heredero; con el mismo propósito reconozco, en disposiciones expresas, el derecho de la mayoría en las designa-

ciones y administradores y peritos en los casos que sean indispensables; autorizo la supresión de inventarios en los que son inútiles, procuro evitar trabas a los que tengan reclamos que formular contra la sucesión obligando a los herederos a actuar bajo una sola representación; y hago, por último, una prolija revisión del «juicio *ab intestato* y herencia vacante», legislando separadamente sobre este último, ya que las disposiciones relativas al primero, como dicen Manresa y Reus, solo constituyen una especie preliminar del de testamentaria.

XXXVII. — *Concurso de acreedores*

Es unánime la crítica a la actual legislación sobre concursos de civiles; son demasiado caros y de liquidación demasiado lenta; pero no es ese su defecto mayor ni lo que hace su reforma imprescindible, sino el perjuicio que crean al acreedor y de reflejo a las facilidades necesarias para el desarrollo de las operaciones de crédito, especialmente en las industrias madres del país.

Se ha desvirtuado en la práctica lo que se estableció con propósito de proteger al deudor contra sus acreedores, hasta convertirlo en un medio para que aquel pueda burlarlos; y la ley número 11.077, ha venido a agravar esa situación.

El proceso general del deudor hasta llegar al tribunal es de todos conocido. Restringido o agotado el crédito particular y bancario, gravados los inmuebles con derechos reales que acuerdan privilegios, garantidos especialmente los acreedores a quienes se quiere favorecer, de quienes se espera ayuda o se temen procedimientos compulsivos que precipiten la caída, se llega a la presentación judicial, generalmente, con una manifestación de bienes que nada representa para los acreedores quirografarios. Esto explica porque esos acreedores se preocupan tan poco de la suerte de sus créditos que muchas veces ni se presentan a gestionarlos.

Entregado así el concurso por entero a la actividad del síndico, el deudor busca la forma de continuar sus actividades sin ser molestado y espera tranquilo los tres años necesarios

para enterrar el pasado a poca costa, tan a poca costa en ciertos casos, que basta la entrega del insignificante porcentaje embargable de un sueldo para cancelar fuertes deudas.

En el estado actual de nuestros procedimientos, el concurso civil no tiene otras soluciones que la liquidación por venta de bienes y distribución del producido entre los acreedores, o la adjudicación de bienes que autoriza el artículo 765, «en cualquier estado del juicio», con la unanimidad de votos que puede convertir el medio de solución en imposible o extorsivo.

Se ha tratado de hacer desaparecer esta distinción entre deudores civiles y comerciales, ya suprimida en las legislaciones modernas más adelantadas, sin haberse conseguido hasta la fecha otra cosa que provocar la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia, la posibilidad o imposibilidad de restablecer el procedimiento preventivo de quitas o esperas ante las disposiciones del Código Civil o el precepto del artículo 67, inciso 11 de la Constitución.

Los antecedentes nacionales recordados por Parry en su obra «El Concurso Civil de Acreedores», nos muestran cómo el procedimiento de quitas y esperas fué suprimido en el código, por entender la Comisión de Legislación, según el miembro informante doctor Bermejo, que incluirlo importaba consignar disposiciones que correspondían a la ley de fondo e ir contra el Código Civil, opinión que comparten los autores del proyecto para la Capital doctores Montes de Oca, Méndez y Agote, cuando expresan que «la comisión lamenta no haberle sido posible, por la naturaleza de la ley procesal, hacer extensivos los beneficios del concordato y adjudicación de bienes acordados a los fallidos por la ley mercantil.»

Contra esto se pronuncia el doctor Filemón Posse en su crítica al Código de Procedimientos, calificando de incongruente la diferencia.

El doctor Rodolfo Moreno (hijo), fundando un proyecto presentado a la Cámara de Diputados (Diario de Sesiones de 1916, tomó II, página 1.921) opina que la bancarrota se encuentra fuera de los códigos, pero reconoce que la práctica ha consagrado otra cosa, pues no obstante determinar aquello

la competencia federal para los concursos, tanto comerciales como civiles, los tribunales de la Capital y de provincias reciben y substancian las quiebras como asuntos regidos por la ley mercantil, las provincias han legislado sobre concursos civiles en las leyes procesales y lo ha hecho el Congreso mismo como legislatura local.

El doctor Leopoldo Melo propuso el año 1914, el establecimiento del procedimiento preventivo en los concursos civiles por incorporación de las disposiciones de la ley de quiebras (Diario de Sesiones de 1914, tomo III, página 371) y decía con tal oportunidad que si se preguntaba cual es el motivo de la diferencia entre el concurso civil y el comercial, que impiden en el primero los convenios entre el acreedor y los deudores a base de las mayorías establecidas para el concordato, no se encontraría respuesta satisfactoria.

Sin entrar a la discusión, considero, a base de las opiniones expuestas y muchas otras que podrían invocarse, que no hay un inconveniente fundamental que impida la adopción de los procedimientos preventivos a base de mayorías, sin requerir unanimidad, ni veo razón de esa misma índole que justifique que los acreedores puedan convenir la adjudicación o renunciar a sus créditos parcial o totalmente en cualquier oportunidad del concurso, una vez iniciado, y no puedan hacerlo antes de que se inicie. No es posible malograr una iniciativa benéfica por cuestiones de forma.

En presencia de esto, de la indiscutible necesidad y de la evidente conveniencia de adoptar para el concurso civil las soluciones preventivas de la quiebra, opino que debe la reforma incorporar las prescripciones que el Código de Comercio consagra sobre el particular, con modificaciones que tiendan a corregir defectos y hacer desaparecer inconvenientes que la práctica ha puesto de manifiesto.

En los procedimientos preventivos como en la tramitación del concurso, si a él se llega, debe prevalecer la opinión de la mayoría de los acreedores, pero no con la intervención e influencia decisiva y casi sin control que tiene actualmente en el concurso comercial. Es necesario buscar la manera de evitar en los primeros, ya que no es posible hacerlo en los se-

gundos sin reformar la ley de quiebras, la intervención de los tramitadores de concordatos y adjudicaciones que, como es notorio, actúan en el fuero comercial, tolerados por firmas comerciales fuertes y hasta por algunas de las más importantes instituciones de crédito. Para ello deben darse al juez mayores atribuciones y a los acreedores interesados más directa intervención en el control de las liquidaciones. En lo demás, la reforma se dirige a simplificar el trámite con la designación de una audiencia única de verificación y graduación, a suprimir reiteradas publicaciones de edictos, a dar mayores garantías de una liquidación conveniente, disponiendo que el cómputo de votos se haga por el monto de los créditos y a evitar la formación de núcleos de acreedores o representantes que puedan resultar beneficiados por comisiones que no corresponden a quienes desempeñan un cargo para garantizar sus propios intereses. Para todo ello, es preciso que los jueces se encuentren en condiciones de salir del papel pasivo que tienen hoy.

XXXVIII. — *Juicio arbitral*

En la legislación procesal del país no existe uniformidad sobre el arbitraje. En algunos códigos el nombramiento de árbitros debe recaer precisamente en abogados que resuelvan conforme a derecho; en otros se establece el arbitraje de hecho como regla general, pero se permite a las partes constituirlos en árbitros de derecho; en un tercer grupo se legisla separadamente para árbitros y para arbitradores; el proyecto de código para la Capital suprime los árbitros de derecho, lo mismo hacen el código de Tucumán y Silgueira en su proyecto para la provincia de Corrientes.

Yo no soy partidario del arbitraje de derecho, ni le veo ventajas. Debe ser norma del legislador que para resolver en derecho están los jueces y bastan los jueces, porque lo contrario envuelve una duda sobre la eficacia o rapidez de la justicia o sobre la ciencia e imparcialidad de los magistrados. Y los jueces deben resolver siempre como tales nunca convertidos en árbitros como admiten algunos.

Este concepto, y el de que un Código de Procedimientos al ocuparse del juicio arbitral tiene que limitarse a asegurar su realización, garantir los derechos comprometidos y dar eficacia a las resoluciones que se pronuncien, en los casos de arbitraje de hecho previstos por las leyes o convenios por las partes, es el que informa mis modificaciones a lo existente.

XXXIX. — Reglas y procedimientos nuevos

El precepto categórico del artículo 66 de la ley actual hace indispensable el juicio ordinario para cuestiones que, ni por su importancia, ni por su objeto, es posible substanciar con sus largas y pesadas formalidades, lo mismo que para otras que tienen ya marcadas tramitaciones más sencillas en las leyes de fondo. Para que la reforma sea completa y llene su objeto, es, pues, indispensable crear reglas procesales complementarias o tramitaciones nuevas, como lo han hecho todos los códigos provinciales posteriores al de la Capital Federal.

En la misma forma breve de las observaciones precedentes, voy a indicar las que he creído conveniente introducir, para hacer del código de la Capital un cuerpo de normas que respondan a las necesidades y al ambiente actual.

XL. — Oficios y exhortos

La tramitación de estos es muchas veces complicada debido a la falta de reglas que la determinen. Se rigen en la actualidad por las prácticas que cada secretaría erce conveniente establecer, sencillas unas, llenas de requisitos formalistas otras. Ante esto, no puede ser diseutible la necesidad de normas uniformes que den facilidades y garantías.

XLI. — Costas y honorarios

En la abundante jurisprudencia que al respecto han sentado los tribunales, hay material valioso para una reglamentación práctica aplicable a las regulaciones y cobro de

los honorarios profesionales, según provengan de relaciones que determinen relaciones directas entre estos y sus clientes o de condenaciones en costas.

Es especialmente sobre estas últimas que se cuestiona más. La razón de ser de tales cuestiones emana de dos causas: la incertidumbre que existe sobre el concepto de las regulaciones — indemnización o pena — y el efecto de ellas en las relaciones entre aquellos a nombre de quienes acosumbra a hacerse y el cliente en beneficio del cual se hace.

En los juicios de sucesión, se producen con frecuencia incidencias y aún nulidades con motivo de la calificación de los honorarios por su carácter de comunes o particulares. Y con frecuencia también estos juicios sufren entorpecimientos en el trámite con motivo de las sucesivas regulaciones, con sus correspondientes recursos deducidos por los que en carácter de letrados, inventariadores y peritos intervienen en la liquidación. He creído evitar todo esto por un procedimiento sencillo de bases generales para las regulaciones, la oportunidad de hacerlas, la acción para el cobro y las personas contra quienes deben dirigirse los reclamos de pago.

XLII. — Citación de evicción

En el título que corresponde a la demanda en juicio ordinario faltaba un capítulo destinado a reglamentar este derecho que acuerda el Código Civil, a fin de que antes de entrar a juicio quedara determinada la persona con quien se había de litigar.

Es materia ya legislada en los códigos provinciales, sobre la cual el proyecto de los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca incluyen dos artículos, 131 y 132, que adopta Rojas en un capítulo especial con muy pequeñas modificaciones.

XLIII. — Juramento judicial

No creo en la eficacia del juramento, ni como formalidad de orden procesal, ni como prueba. He abogado por su supresión, en el primer carácter, en mis comentarios al código

de la Capital. Podría, en presencia de esto, parecer contradictoria la inclusión que de él hago entre las medidas probatorias, se explica, sin embargo, ante los preceptos del Código Civil; enumerado por éste entre los medios de probar los contratos, la ley adjetiva no puede prescindir de reglamentar la forma de producirlo.

Acepto el juramento para decidir el pleito, no para establecer hechos personales sujetos a prueba como lo hacen los códigos de Buenos Aires en su artículo 228, La Rioja artículo 321 y San Luis artículo 331, porque eso puede obtenerse por medio de la confesión judicial.

Tampoco corresponde en mi concepto legislarlo como medida probatoria, cuando es diferido por el juez para estimación de la responsabilidad civil o de la obligación de rendir cuentas, como lo hacen los códigos de Córdoba artículo 341, San Juan artículo 325, Santiago del Estero artículo 339; y menos aún cuando es diferido en la sentencia, como dispone el código de Santa Fe en los artículos 335 y 336.

XLIV. — Presunciones

Respecto de las presunciones, incluidas también por el Código Civil entre los medios de probar los contratos, no contiene la ley procesal disposición alguna que determine en procedencia y eficacia probatoria, por lo que he ercido conveniente sentar una regla general, al menos, como lo hacen los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca en su proyecto, en vez de dejarla librada al criterio personal del magistrado, que procede actualmente aplicando principios sentados por tratadistas o reglas de los viejos códigos españoles.

XLV. — Terminación de los juicios

El código vigente reglamenta sólo la sentencia como medio de terminar los juicios. La ley número 4.550, ha agregado la perención de instancia. Faltan disposiciones sobre desistimiento y transacción, que son indispensables para po-

ner término a discusiones o prácticas viciosas, que solo conducen a crear dificultades o hacer perder tiempo.

Me refiero en cuanto a lo primero, al alcance que corresponde atribuir al desistimiento, punto varias veces discutido; y en cuanto a lo segundo, a la supresión de trámites inútiles.

El desistimiento debe ser de la acción o de la excepción, lo contrario importaría romper la igualdad entre los litigantes en perjuicio del demandado; y debe serlo, aunque medie conformidad de partes, porque los juicios que se inician deben terminarse; los jueces no pueden ni deben permitir convenios por los cuales se retiren para iniciarlos nuevamente. Desistir es renunciar lisa y llanamente a ejercitar el derecho que se cree tener, o reconocer en la misma forma el de su adversario, creando una situación perfectamente definida equivalente a una sentencia absolutoria para el demandado («Gaceta del Foro» de Mayo 4 de 1917, pág. 28 y de Mayo 28 de 1918, pág. 172). La exigencia de la L. 9, título 22, página 3ª, no debe subsistir.

Las trasacciones se someten aun al trámite inútil de la ratificación de firmas en muchas secretarías, no obstante haberse pronunciado numerosas y categóricas resoluciones sobre lo innecesario de él, es en consecuencia conveniente una prescripción que termine con esa práctica viciosa.

XLVI. — Recurso extraordinario

Introducido este recurso por la ley número 4.055, una exigencia de método y claridad obliga a consignar en el código reglas sobre su procedencia, forma de interponerlo y efectos que surte su concesión o denegación, aprovechando para ello la jurisprudencia establecida.

XLVII. — Ejecuciones de créditos hipotecarios

El Código de Procedimientos de la Capital mantiene aun la tramitación del juicio ejecutivo para hacer efectivos los créditos garantidos con hipoteca cuando todas las provincias han creado un procedimiento especial.

Para llenar el vacío y actualizarlo se presentaron dos proyectos a la Cámara: el del doctor Juan Antonio Argerich en Julio de 1907 (Diario de Sesiones tomo I, página 403) y el del doctor Ernesto H. Celesia en Mayo de 1913 (tomo I, página 65) ambos sin sanción.

El interés privado, supliendo la omisión ha creado un procedimiento especial por renuncia de trámites o inclusión de reglas a que debe estar sometido el reclamo judicial. En las resoluciones judiciales producidas con motivo de esos reclamos existe un material valioso para proyectar una tramitación práctica y de eficaz garantía para los derechos de acreedores y deudores. Con ellos y las prescripciones de algunas leyes provinciales he redactado mi reforma, la que solo contiene una novedad; la de declarar irrenunciabiles los trámites de este procedimiento para asegurar su uniformidad frente a las exigencias del interés del acreedor en la práctica existente.

XLVIII. — Procedimiento verbal

La ley vigente prescribe para muchos casos la substanciación en juicio verbal, sin establecer las reglas a que haya de sujetarse. Librado así al criterio de cada juez, o mejor aún de cada secretario, existe a su respecto una verdadera anarquía, si es que puede decirse que hay procedimiento verbal, pues en la generalidad de los casos lo que así se denomina es un procedimiento escrito, en que las partes llevan redactadas largas exposiciones que a veces ni siquiera se copian en el acta en que se deja constancia de lo ocurrido en la audiencia sino que se agregan al expediente.

Sin entrar a la discusión que se hace sobre la conveniencia o inconveniencia de la oralidad del juicio en lo civil, y reconociendo que la tendencia moderna en materia procesal es en un todo favorable a ella, considero que sin una reforma substancial en la organización de los tribunales de la Capital no debe establecerse con la amplitud que piden sus partidarios, y que dará mejores resultados prácticos su adopción en una forma limitada que, sin chocar abiertamen-

te con las prácticas actuales, prepare el terreno para la reforma que necesariamente tiene que venir. Dentro de estas ideas acepto el procedimiento verbal como el más conveniente en los juicios o procedimientos sumarios y establezco reglas que hagan de él lo que debe ser y no lo que son hoy los juicios verbales.

XLIX. — División de cosas comunes

El procedimiento ordinario en cuestiones sobre división de condominio debe quedar para la discusión de fondo sobre el derecho de propiedad de los condóminos; cuando estos piden la división presentando títulos que acreditan el dominio es aquel inconveniente, debe procederse en la forma sencilla y breve que he tomado de las leyes procesales de las provincias y de los proyectos de Rojas y Silgueira.

L. — Rendición de cuentas

Igualmente inconveniente es el procedimiento ordinario para estas cuestiones cuando el derecho surge claro de documento, desempeño de cargo o como efecto necesario de la obligación de rendirlas.

LI. — Declaración de incapacidad y cesación

Por faltar un procedimiento especial, estas declaraciones tramitan actualmente con arreglo a normas determinadas por la jurisprudencia en la aplicación de los preceptos del Código Civil.

Los juicios de insania son los más frecuentes, pero no el objeto exclusivo del procedimiento, hay que contemplar también los casos que, sin tener por causal la demencia, inhabilitan para la administración de bienes y hacen necesaria una declaración de incapacidad.

Por regla general los actuales juicios de insania resultan demasiado caros por la intervención obligatoria de facultativos designados de oficio, causa a veces de favoritismos de que se han dado casos muy comentados en desmedro de la justicia. Tiene el Estado un cuerpo de médicos forenses, que puede ser ampliado, a quienes corresponde informar en estos casos como obligación inherente al cargo, ya que en juicios de esta naturaleza la intervención del médico no es la general de los peritos, sino, más bien la de un funcionario y con fines de orden público.

Por el mismo procedimiento sumario deben substanciarse los pedidos de rehabilitación o cese de la incapacidad declarada judicialmente, sometidos hoy a largos y complicados trámites en que no es raro ver acumulados una serie de informes médicos contradictorios que dificultan la acción del magistrado llamado a resolver.

LII. — Restricciones y límites del dominio

Es este otro vacío que ha debido llenar la jurisprudencia, en presencia de casos frecuentes sobre medianería o muros divisorios que requerían resoluciones rápidas para evitar los perjuicios de la paralización de obras de edificación. Los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca han incorporado a su proyecto esas resoluciones, pero no prevén los casos de constitución de servidumbres, no tan frecuentes en la Capital, pero que debe la ley procesal tener en cuenta.

LIII. — Fijación de plazo para cumplir obligaciones

En varios códigos provinciales se incluye el procedimiento para fijar plazo a las obligaciones que no lo tienen entre las medidas para preparar la vía ejecutiva.

La diversidad de casos que pueden presentarse, y la posibilidad de que, por sus peculiaridades, pueda desvirtuarse aquel procedimiento con discusiones de fondo o pueda restringirse el derecho del obligado impidiéndole hacer valer

razones serias de oposición, me inclinan a la adopción de reglas especiales, en una tramitación breve aplicable tanto a las obligaciones de dar como a las de hacer.

LIV. — Informaciones posesorias

La tramitación que se imprime a las informaciones para formar título de propiedad, sencilla y sin mayores exigencias al principio, ha ido haciéndose más complicada cada día con el propósito de evitar perjuicios a los particulares interesados y de cortar abusos de que frecuentemente se hacía víctima al fisco o a los municipios, obligándolos, por falta de una intervención oportuna, a reclamar en vía ordinaria la reivindicación de tierras sustraídas a su dominio.

En la actualidad las informaciones se tramitan en forma tal que sin ser juicios ordinarios tienen todos los inconvenientes de la morosidad de este procedimiento. El procedimiento que proyecto, aprovechando en mucha parte la jurisprudencia sentada a su respecto, ofrece seguridades y es breve.

LV. — Depósito y venta de mercaderías

Los autores del proyecto de código para la Capital incluyen entre los procedimientos especiales el relativo a depósito y venta de mercaderías, como medidas de carácter urgente que autorizan las leyes generales, que en muchos casos pueden ser base de reclamos que afectan valiosos intereses o fuente productora de perjuicios de importancia por su omisión. Es materia que no puede escapar a la reglamentación del procedimiento y sobre la cual legislan las leyes provinciales.

LVI. — Autorización para contraer matrimonio y oposición

Las gestiones judiciales para contraer matrimonio, iniciadas por menores que carecen de representantes legales o motivadas por imposibilidad de prestar el consentimiento ne-

cesario, se tramitan en vía sumarísima por informaciones que no son tales en realidad, dada la forma en que se producen. Los que tienen su origen en una negativa de consentimiento llevan implícitas un juicio de disenso que no está reglamentado. Proyecto para ambos un procedimiento uniforme en juicio verbal único, establecido ya en muchos códigos de las provincias.

LVII. — Otros procedimientos especiales

En la imposibilidad de proveer todos los casos que hagan necesaria una tramitación breve y sumario para asegurar por la rapidez de la resolución el derecho comprometido, sienta como regla general el juicio verbal. Así se hará desaparecer la anarquía existente sobre algunos procedimientos, entre los que pueden citarse, por vía de ejemplo, el de los accidentes de trabajo, que se substancian ya por los trámites de las excepciones («Gaceta del Foro», año 1916, tomo VI, página 158; ítem año 1924, tomo I, página 170) ya por un procedimiento que se asemeja al de los interdictos, en el que se contesta la demanda y ofrece la prueba en una audiencia designada al efecto, señalándose otra para alegar, ya corriendo traslado de la demanda por seis días abriendo el juicio a prueba por cuarenta, con apelación libre de la sentencia, ya prohibiendo, ya aceptando el término extraordinario para la prueba.

— — — — —

El proyecto que someto a la consideración de la Honorable Cámara, como puede verse por la exposición que antecede, mantiene íntegramente muchas de las disposiciones de la ley procesal vigente, modifica parcialmente algunas, amplía procedimientos existentes y reglamenta nuevos, respondiendo a las necesidades actuales. Considero que su sanción es fácil por cuanto no introduce modificaciones fundamentales ni cambios violentos que resultarían poco prácticos.

Redactado con propósito de estudio, antes de recibir el honor de la incorporación a este cuerpo, he creído que debía presentarlo como proyecto para provocar una reforma que no es posible demorar más. Ese propósito explica las notas y observaciones que van al pie de muchos artículos para indicar su origen o alcance.

M. G. Calvento.

PROYECTO
DE
CODIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL Y COMERCIAL

PROYECTO DE CODIGO
DE
PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL

TITULO I

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS JUICIOS

CAPÍTULO I

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Artículo 1º — Toda gestión judicial debe interponerse ante juez competente en turno (1), y siempre que de la exposición de los hechos resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá éste inhibirse de oficio mandando que el interesado ocurra ante quien corresponda.

Art. 2º — Para determinar la competencia, sin perjuicio de lo que establecen las leyes de fondo y especiales (2), se atenderá a las reglas siguientes:

1º Respecto de las acciones reales sobre inmuebles, o sobre muebles que tengan una situación permanente o se conserven sin intención de transportarlos, lo será el juez del lugar de la situación de los bienes.

Si fuesen varios, el del lugar en que esté situado cualquiera de ellos, con tal que allí tenga su domicilio el demandado. Y no concurriendo ambas circunstancias lo será el de la situación de la

(1) La exigencia de ocurrir al juez *en turno* se ha establecido por las cámaras de apelaciones y está en los códigos de Buenos Aires, artículo 3º; Entre Ríos, artículo 3º; San Luis, artículo 1º.

(2) La salvedad es consecuencia de lo dicho al ocuparme de las reformas necesarias, en la primera parte de este trabajo.

cosa de mayor valor, según la última avaluación para la contribución directa.

- 2º Cuando se ejerciten acciones sobre bienes muebles, fuera de los casos del inciso 1º, el del lugar en que hallen o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
- 3º Cuando se ejerciten acciones personales, el del domicilio especial elegido por las partes o el lugar en que debe cumplirse la obligación por el deudor, y a falta de ambos, a elección del demandante, el domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente, al notificarle la demanda (3).

El que no tuviera domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

Si fuesen varios los obligados y tuviesen distintos domicilios podrá entablarse la demanda en la Capital si alguno tuviera en ella su domicilio, debiendo los demás conformarse con esta elección (4).

- 4º En materia de garantía, el juez competente será aquel a quien se encuentre sometido el deudor o la obligación principal, sin que pueda modificar la regla la naturaleza del derecho que constituye la garantía (5).
- 5º En las demandas por sumas de dinero se estará al monto de lo que se reclame, no computados los

(3) La jurisprudencia ha sido contradictoria como puede verse en mis comentarios, número 15.

Proyecto, artículo 3º, inciso 3º; Córdoba, artículo 6º, inciso 3º; Santiago del Estero, artículo 6º, inciso 3º; ley de enjuiciamiento española, artículo 62, inciso 1º.

(4) Proyecto, artículo 3º, inciso 3º, menos la obligación final que tomo del código de Buenos Aires, artículo 5º.

(5) Jurisprudencia citada en mis comentarios número 17, nota 4.

intereses, cualquiera que haya sido el importe de la obligación original (6).

6º En las demandas sobre otra clase de bienes se estará al valor actual, justipreciado *prima facie* por el juez (7).

Art. 3º — El juez competente para conocer en una demanda lo es también para conocer:

1º En los incidentes, juicios sucesorios y conexos.

2º En la reconvencción, si fuera competente por razón de la materia.

3º De las obligaciones procedentes de la evicción.

4º De las obligaciones nacidas con motivo del juicio (8).

CAPÍTULO II

TIEMPO HABIL Y TERMINOS EN GENERAL

Art. 4º — Las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año menos los exceptuados por ley o decreto del Poder Ejecutivo.

Se consideran horas hábiles las que median desde la salida a la puesta del sol.

Art. 5º — El juez puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiera justa causa que lo exija, considerándose tal el riesgo de quedar ilusoria una providencia judicial, o de frustrarse por la demora alguna diligencia importante al de-

(6) El proyecto, artículo 3º, inciso 10, contrario en cuanto al cómputo de intereses a los códigos de Buenos Aires, artículos 9º y 10; Entre Ríos, artículo 4º; Tucumán, artículo 2º, inciso 9º; San Luis, artículo 16. Conceptúo que con el agregado se evitan dificultades e incidentes.

(7) Proyecto, artículo 3º, inciso 11.

(8) Proyecto, artículo 3º, inciso 12; Entre Ríos, artículo 4º, inciso 12; Rojas, artículo 8º; Córdoba, artículo 11; Santa Fe, artículo 12; San Juan, artículo 11; La Rioja, artículo 39; Tucumán, artículo 2º, inciso 12; Santiago del Estero, artículo 11.

recho de las partes. La resolución que se pronunciare a este respecto será inapelable (9).

Art. 6º — Son perentorios e improrrogables todos los términos señalados en esta ley (10). Empezarán a correr desde la media noche del día del emplazamiento, citación o notificación, si fuesen comunes desde la última notificación, y no se contarán en ellos los días inhábiles. Fenecen por su solo transcurso perdiéndose el derecho de que se ha dejado de usar, sin necesidad de pedido de parte ni declaración judicial. El actuario deberá poner nota de ello el mismo día del vencimiento y pasar los autos al despacho (11).

Queda prohibida la presentación de escritos con cargo fuera de las horas de despacho.

Art. 7º — Para toda diligencia a practicarse fuera de la Capital ampliará el juez el término que esta ley señale (12), teniendo en cuenta la distancia y facilidad de comunicaciones, sin intervención ni reclamo de las partes.

Art. 8º — Las resoluciones y sentencias judiciales deberán pronunciarse dentro de los términos señalados por esta ley, y las que no lo tuvieran, dentro de diez días desde que el asunto quede en estado (13), sin que sea necesaria la pro-

(9) El artículo, como el 5º del proyecto del doctor Rojas, declara el auto inapelable en todos los casos. Igual cosa determinan los códigos de La Rioja, artículo 56; Mendoza, artículo 10; San Luis, artículo 73.

Dan recurso contra el auto que niega la habilitación: Santa Fe, artículo 51; Córdoba, artículo 52; San Juan, artículo 41; Tucumán, artículo 20; Santiago del Estero, artículo 51; Alcorta y Zeballos, artículo 592.

(10) Ley número 4.128, artículo 3º; San Juan, artículo 65; Silgueira, artículos 30 y 31; Alcorta y Zeballos, artículo 699.

(11) San Juan, artículo 65. Contienen disposiciones semejantes, pero con respecto a los términos improrrogables: Córdoba, artículo 80; Buenos Aires, artículo 53; Santa Fe, artículo 74; Entre Ríos, artículo 40; Santiago del Estero, artículo 78.

(12) Buenos Aires, artículo 52; Entre Ríos, artículo 39; San Luis, artículo 75.

(13) Proyecto, artículo 36; Entre Ríos, artículo 42; Santiago del Estero, artículo 143; San Luis, artículo 77; Buenos Aires, artículo 55, *toda resolución interlocutoria*, lo mismo Santa Fe, artículo 148; Córdoba, artículo 146; Mendoza, artículo 87 (20 días); Rojas, artículo 100 (15 días).

videncia de autos fuera de los casos expresamente determinados.

Las providencias de trámite se dictarán dentro de cuarenta y ocho horas (14), bajo pena de multa de veinte a cincuenta pesos, en las mismas condiciones anteriores.

La demora en el despacho hará pasible al juez de una multa de veinte pesos por cada infracción, que se hará efectiva, sin más trámite sobre su sueldo por la Cámara de quien dependa, con la simple interposición del reclamo establecido en el artículo 27.

Los secretarios de juzgado o tribunales de apelación están obligados a comunicar inmediatamente todo pedido de pronto despacho al presidente de la cámara y al representante del Consejo Nacional de Educación que actúe en el juzgado y a dejar de ello constancia en el expediente, bajo las mismas penas que se establecen para los representantes judiciales o legales.

Art. 9º — Todo traslado o vista se dictará con calidad de autos. Los traslados que no tengan término especialmente fijado deberán evacuarse en plazo de cinco días, a menos de tratarse de juicios especiales en los cuales el término será de tres días (15). Este último término rige para todas las vistas.

Art. 10. — Los términos serán siempre comunes para las partes, salvo que fuera decretado por su orden o así estuviera establecido por la ley (16).

Art. 11. — Los litigantes pueden, de común acuerdo,

(14) Proyecto, artículo 36; Entre Ríos, artículo 42; Santa Fe, artículo 148; dicen el día en que el expediente fuera puesto al despacho. Rojas, artículo 100; Córdoba, artículo 146, id.; Mendoza, artículo 87, el día siguiente del pedido; Tucumán, artículo 27, dentro de dos días; Santiago del Estero, artículo 143, en el día; Silgueira, artículo 73, al día siguiente de hecho el pedido.

(15) Entre Ríos, artículo 44; Buenos Aires, artículo 57; Tucumán, artículo 28; Rojas, artículo 67; San Juan, artículo 84; La Rioja, artículo 93; Santiago del Estero, artículo 97.

(16) Silgueira, artículo 54. En contra, Rojas, artículo 65; San Juan, artículo 63.

suspender los términos; pero deben determinar el tiempo de la suspensión (17).

Art. 12. — Todo lo relativo a términos rige para los asesores y fiscales y demás funcionarios que intervengan en los juicios.

CAPÍTULO III

DEL DOMICILIO, DEFENSA Y REPRESENTACION EN JUICIO

Art. 13. — Toda persona que se presente en juicio debe constituir en el primer escrito, en forma clara y precisa, un domicilio legal dentro del radio de treinta cuadras del asiento del juzgado, sin lo cual no será oído (18).

Art. 14. — El domicilio una vez constituido se reputará subsistente mientras el interesado no designe otro, salvo caso de que el expediente hubiera quedado sin tramitarse por más de dos años (19).

Art. 15. — No podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados que litiguen en calidad de tales (20).

Art. 16. — Cuando hubiere error en el domicilio constituido, por no existir el número, edificio y oficina designada,

(17) San Juan, artículo 66; Santa Fe, artículo 75; Córdoba, artículo 81; Santiago del Estero, artículo 79, lo establece para los términos fatales, determinando el juez el tiempo.

Silgueira, artículo 38, lo permite por una sola vez y con plazo máximo de treinta días.

Creo que mediando convenio de partes no hay razón para establecer limitaciones.

(18) La Rioja, artículo 9º; Santa Fe, artículo 23; Santiago del Estero, artículo 23; Córdoba, artículo 25; Rojas, artículo 10; San Juan, artículo 15; Mendoza, artículo 11, agrega: y no darán curso al escrito mientras no se cumpla.

Silgueira, artículo 17, para el caso de omisión, y mientras no se constituya domicilio, le asigna como tal la secretaría, donde se fijaran las cédulas. Considero más práctico y eficaz la terminante prohibición de darle audiencia.

(19) Proyecto, artículo 10. En contra, Rojas, artículo 12 y nota 5.

(20) Proyecto, artículo 12; Buenos Aires, artículo 39; Entre Ríos, artículo 25; Rojas, artículo 13; San Luis, artículo 49.

las notificaciones se harán en los estrados y serán a cargo del constituyente todas las costas que se origin a consecuencia del error (21).

Art. 17. — El actor podrá pedir que se intime a la persona con quién litigue, para que fije un domicilio dentro del radio, si no lo tuviera, en un término que establecerá el juzgado (22), bajo apercibimiento de ser notificado en los estrados (23).

Art. 18. — Cuando un litigante se presente por medio de apoderado podrá designar domicilio especial en la escritura de poder o en el escrito de presentación del apoderado. En caso de no hacerlo, el domicilio especial fijado por éste servirá para las notificaciones con todos los efectos de la ley, mientras no se constituya uno nuevo (24).

Art. 19. — La persona que litigue por un derecho propio o en virtud de una investidura que venga de la ley, puede o no valerse de la dirección de letrado para defenderse y ejercitar en juicio sus acciones; pero el juez o tribunal podrá exigirles de oficio la intervención de letrado si presentasen escritos impertinentes que traben la marcha regular del juicio (25). De la resolución no se da recurso (26).

Tiene igualmente todo litigante el derecho de comparecer personalmente ante cualesquiera jueces o tribunales, o hacerse representar por procurador de la matrícula.

Art. 20. — Los procuradores no podrán actuar sin firma de letrado ni ejercer ningún acto de defensa que corresponda

(21) Buenos Aires, artículo 40; Entre Ríos, artículo 26 y San Luis, artículo 50, prevén el caso de no existir el domicilio designado «o no pertenecer a quien lo constituyó sin autorización».

Considero que esto último, que deja sometido al litigante perjudicado a la voluntad del dueño de la casa o escritorio, no es conveniente. Tampoco salva las dificultades la condenación en costas como única sanción y encuentro más práctica la solución que da Silgueira en el apartado final del artículo 17, que yo simplifiqué más sustituyendo la cédula por la notificación en los estrados.

(22) Rojas, artículo 11; Mendoza, artículo 12; San Luis, artículo 51.

(23) Mendoza, artículo 12, contiene la disposición bajo apercibimiento de rebeldía.

(24) Mendoza, artículo 15; Silgueira, artículo 18, 2º y 4º apartado.

(25) Proyecto, artículo 6º; Entre Ríos, artículo 22; Tucumán, artículo 15; San Juan, artículo 18; La Rioja, artículo 3º.

(26) Aleorta y Zeballos, artículo 265.

a éstos. Sólo les será permitido presentar con su sola firma aquellos escritos que tengan por objeto personarse en juicio, activar el procedimiento, o deducir recursos de apelación y nulidad (27).

Art. 21. — Todo escrito que se presente con violación de lo dispuesto en el artículo 20, será devuelto por el juez o tribunal, sin darle curso, sin más trámite ni recurso (28).

Art. 22. — La persona que se presente en juicio por un derecho que le compete ejercer en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.

Art. 23. — Los apoderados o procuradores acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan a nombre de sus mandantes, con la competente escritura de poder.

En caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite en el mismo juzgado o tribunal, les bastará hacer referencia a él (29).

Art. 24. — Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrán concurrir por sus parientes ausentes del país, sin necesidad de acompañar poder con su primer escrito, prestando caución de *rato y grato*, con obligación de presentar poderes en término de cuarenta y cinco días, vencidos los cuales quedará sin efecto la presentación sin más trámite (30).

Art. 25. — En casos urgentes o al sólo objeto de interrumpir una prescripción, podrá admitirse la presentación

(27) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 7º; Buenos Aires, artículo 47; Santa Fe, artículo 18; Tucumán, artículo 6º, inciso 4º; San Juan, artículo 19; La Rioja, artículo 4º, inciso 1º y artículo 8º; Alcorta y Zeballos, artículo 263, inciso 1º; San Luis, artículo 59. En contra, Rojas, artículo 14 y nota 6.

(28) Alcorta y Zeballos, artículo 267.

(29) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 14; Entre Ríos, artículo 30; Tucumán, artículo 6º, inciso 1º.

(30) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 15; Entre Ríos, artículo 29; Santa Fe, artículo 28; Córdoba, artículo 28; Tucumán, artículo 14; La Rioja, artículo 13.

Ley orgánica de Catamarca, artículo 117; permite la comparencia dando fianza.

En contra, Rojas, artículo 17 y nota 7; Santiago del Estero, artículo 27.

Silgueira, artículo 9º, la excluye.

de un escrito sin los documentos que acrediten la personería, cuando no pudieran ser presentados en el acto, dando fianza *apud acta* de que se exhibirán en el término que deberá designar el juez o tribunal al admitir el escrito. No presentados en dicho término quedará sin efecto el pedido (31).

Art. 26. — Desde el momento en que el poder se presenta al juez y éste admite la personería, el procurador asume todas las responsabilidades que las leyes imponen al mandatario y sus actos obligan al mandante como si personalmente los practicara, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo poderdante o que tengan por objeto su citación personal.

Art. 27. — Los procuradores y los que actúen como representantes legales están obligados a seguir el juicio mientras no hayan cesado en el cargo. Con ellos se entenderán todas las diligencias; y tendrán durante la tramitación, además de las obligaciones que impone la ley número 10.996, la de pedir despacho a los jueces o tribunales, dentro de los cinco días de vencido el término en que han debido pronunciarse, bajo pena de multa de cincuenta pesos moneda nacional la primera omisión, suspensión en el ejercicio de su profesión o cargo por un mes a la segunda y cancelación de la matrícula o pérdida del cargo la tercera.

Art. 28. — El poder conferido para un juicio, cualesquiera que sean sus términos, comprenda la facultad de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de éste y sus incidentes, excepto aquellos para los cuales requiere la ley facultad especial o han sido reservados expresamente en el poder.

Art. 29. -- La representación de los procuradores termina por las causas establecidas en el Código Civil, con las siguientes salvedades:

1º La revocación del mandato judicial debe ser expresa. El mandante al hacerla deberá constituir

(31) Entre Ríos, artículo 28; Santa Fe, artículo 28; Córdoba, artículo 28; La Rioja, artículo 12; Santiago del Estero, artículo 26; San Luis, artículo 54.

nuevo apoderado o comparecer personalmente. No haciéndolo así, podrá la otra parte pedir que el juicio se continúe en rebeldía (32).

2º En caso de muerte o incapacidad sobreviviente de un litigante que actúe por sí o por mandatario, se suspenderá el juicio y su estado se pondrá en conocimiento de sus herederos o representantes legales, designando un término para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de continuarse en rebeldía (33).

3º Si durante el juicio falleciera el mandatario o se inhabilitara para el cumplimiento del mandato, el juez, a petición de parte, fijará al mandante un término para que comparezca, bajo el mismo apercibimiento (34).

Art. 30. — Cuando fuesen varios los actores o demandados y no tuvieran intereses encontrados, el juez de oficio les intimará que en el término que les fije, unifiquen la representación en uno de ellos, bajo apercibimiento de designarlo de oficio al vencimiento, sin recurso alguno.

El mismo procedimiento se observará cuando los litigantes estuvieran agrupados en distintos intereses, con relación a cada grupo, si fueren más de dos los que los constituyen (35).

(32) Proyecto, artículo 20; Rojas, artículo 20; Buenos Aires, artículo 45; Entre Ríos, artículo 33; Santa Fe, artículo 32; Córdoba, artículo 33; Tucumán, artículo 13; San Juan, artículo 26; Mendoza, artículo 22; La Rioja, artículo 16.

(33) Proyecto, artículo 21; Rojas, artículo 22; Entre Ríos, artículo 33; Santa Fe, artículo 35; Córdoba, artículo 35; San Luis, artículo 57, 4º apartado; Tucumán, artículo 11; San Juan, artículo 28; Mendoza, artículo 24; La Rioja, artículo 18; Alcorta y Zeballos, 271.

Santiago del Estero, artículo 34, dispone que el juicio continúe con el apoderado hasta que se presente cualquiera de los herederos.

(34) Proyecto, artículo 22; Rojas, artículo 23; Santa Fe, artículo 35; Tucumán, artículo 11, San Juan, artículo 28; Mendoza, artículo 25; Santiago del Estero, artículo 33; San Luis, artículo 57, 5º apartado.

(35) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 23; Buenos Aires, artículo 46; Entre Ríos, artículo 34; Tucumán, artículo 4º; Santiago del Estero, artículo 58.

La unificación deberá en todos los casos efectuarse antes de proceder como indica el artículo...

CAPITULO IV

TRASLADOS, FIRMAS, ENTREGAS DE AUTOS Y REPOSICION DE SELLOS

Art. 31. — De toda petición o escrito de que deba darse traslado, así como de los documentos con que se instruya, deberá el que los presenta acompañar en papel simple tantas copias cuantas sean las personas con quienes litigue.

El actuario hará constar en el cargo la presentación de copias, las que quedarán en secretaría a disposición de los interesados desde que se provea el escrito. Es obligación de éstos retirarlas, sin que puedan invocar la falta de entrega como causal de suspensión del término.

Si no se presentaran las copias con el escrito el actuario no lo recibirá. En caso de haberlo recibido deberá devolverse sin darle curso.

Cuando no se presentaran las copias dentro de 24 horas, en los casos en que la providencia de traslado no estuviera prescripta en las disposiciones de esta ley, el actuario las hará sacar a costa del interesado, poniendo nota de ello a los efectos expresados en el párrafo anterior (36).

Art. 32. — Cuando un escrito o diligencia sea subscripto a ruego del interesado, el escribano secretario deberá certificar que el firmante, cuyo nombre expresará, ha sido autorizado para ello en su presencia.

Art. 33. — Los expedientes no se entregarán a los litigantes; cuando éstos quieran examinarlos podrán hacerlo en la secretaría.

(36) Con lo que se evitan demoras del procedimiento actual fijado por la jurisprudencia. Ver mis comentarios, número 56.

San Juan, artículos 70 y 71; Entre Ríos, artículo 79; Tucumán, artículo 49.

Los jueces permitirán, sin embargo, que sean sacados de la oficina bajo la responsabilidad de los abogados o peritos, mediante recibo, en los siguientes casos:

Para alegar de bien probado, expresar y contestar agravios (37).

Cuando se trate de operaciones de contabilidad complicadas, quedando la calificación al arbitrio del juez.

Para otorgar escrituras judiciales (38).

Siempre que por las circunstancias del caso y mediando petición por escrito, el juez lo considere necesario.

En todos los casos en que no hubiera término para evacuar la diligencia que motiva el retiro de los autos el juez lo fijará.

De la calificación a que se refiere el artículo como del término fijado, no se da recurso alguno.

Vencido el término por el cual ha sido entregado un expediente sin que se devuelva, el juez, de oficio, mandará se saque por apremio personal (39).

Art. 34. — El secretario que, fuera de los casos enumerados, permitiera sacar los expedientes de la oficina, incurrirá en una multa de veinte pesos por la primera vez, cincuenta por la segunda y perderá el empleo en caso de reincidencia (40).

Art. 35. — Todo auto que ordene reposición del sellado deberá ser cumplido dentro del tercero día. Transcurrido ese término se aplicará como multa el décuplo contra el litigante que deba hacerlo, librándose sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo.

Lo que concierne a la reposición del sellado no impedirá la continuación del trámite del juicio, salvo el caso en que

(37) Entre Ríos, artículo 80; San Juan, artículo 82; Silguera, artículo 58, inciso 3°; San Luis, artículo 118, inciso 1°.

Córdoba, artículo 98; Santa Fe, artículo 100 y La Rioja, artículo 92, disponen la entrega para todos los traslados.

(38) Jurisprudencia. Tucumán, artículo 40, inciso 4°; Buenos Aires, artículo 74, inciso 6°; San Luis, artículo 118, inciso 6°.

(39) Entre Ríos, artículo 80; San Juan, artículo 86; Santa Fe, artículo 108; Córdoba, artículo 107; Tucumán, artículo 40; La Rioja, artículo 101; San Luis, artículo 120.

(40) Entre Ríos, artículo 81; San Juan, artículo 87.

deducido un recurso el recurrente no lo hiciera, en el cual con la imposición de la multa se le declarará desistido de aquél.

El auto que orden reposición de sellado deberá notificarse por cédula.

CAPÍTULO V

DE LAS NOTIFICACIONES

Art. 36. — Las notificaciones de las providencias judiciales a los litigantes, se consideran hechas por ministerio de la ley de acuerdo con el artículo 45. Se harán por cédula o personalmente con diligencia extendida en el expediente en los casos expresamente determinados, o en los estrados por simple constancia de ello puesta en el expediente por el actuario (41).

Las notificaciones de las providencias dictadas por los jueces, que deban hacerse por cédulas serán diligenciadas por el secretario o por el empleado que el juez designe en cada caso.

Art. 37. — Serán notificados por cédulas en los respectivos domicilios:

- 1º La providencia del emplazamiento de la demanda.
- 2º La citación para reconocimiento de firma o manifestación solicitada para preparar la vía ejecutiva y en general todo auto que contenga un apercibimiento.
- 3º El auto que reciba la causa a prueba o declare la cuestión de puro derecho.
- 4º La citación de remate en el procedimiento ejecutivo y la citación para venta de bienes en la ejecución de sentencia.

(41) Proyecto, artículos 38, 40 y 44; Entre Ríos, artículo 55.

- 5º La providencia que ordene absolución de posiciones, cuando el litigante se hace representar por procurador.
- 6º La sentencia definitiva en el juicio ordinario, la de trance y remate y la de venta de bienes.
- 7º La citación de personas extrañas al juicio.
- 8º La primera providencia que recaiga en un juicio que haya estado paralizado seis meses o más.
- 9º Las demás resoluciones que expresamente determine la ley (42).

Art. 38. — Las notificaciones en estos casos, se harán dentro de cuarenta y ocho horas de dictados los autos o providencias, o antes si el juez lo ordenara o estuviera así dispuesto por la ley (43).

Art. 39. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las providencias que tengan por objeto garantizar el resultado del juicio, ordenando embargos, interdicciones o cualquier otra medida análoga, no serán notificadas a la persona contra quien fuesen dictadas, sino después de haberse llevado a efecto la diligencia (44).

Art. 40. — Siempre que la notificación hubiera de hacerse en el domicilio del litigante, el actuario o el empleado designado por el juez, llevará por duplicado una cédula en que esté transcrita la resolución que va a notificar o la parte dispositiva, si se tratare de sentencia definitiva; y después de leerla íntegramente al interesado le entregará una de las copias, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo con expresión del día, hora y lugar en que se hubiere practicado la diligencia.

(42) Proyecto de los doctores Melo y Rodríguez. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, tomo II, página 980, año 1916.

(43) Entre Ríos, artículo 45; Aleorta y Zeballos, artículo 605; Rojas, artículo 48 y Silgueira, artículo 33, fijan el término de 24 horas. Dado el trabajo de los juzgados de la Capital considero que debe establecer uno mayor.

(44) Jurisprudencia. Rojas, artículo 63; Mendoza, artículo 36; Santiago del Estero, artículo 60; La Rioja, artículo 66; Santa Fe, artículo 59; Córdoba, artículo 61; Entre Ríos, artículo 54; Aleorta y Zeballos, artículo 617.

Art. 41. — La notificación será firmada por el actuario y el interesado. Si éste no supiere o no pudiese firmar lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiere firmar, lo harán dos testigos requeridos, no pudiendo servirse para ello el actuario o encargado de hacerla de otros empleados de la oficina ni de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 42. — Cuando el actuario o encargado de la notificación no encuentre a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquier persona de la casa o a un vecino que quiera entregarla al interesado, prefiriendo el más inmediato, y le advertirá la obligación de hacer esa entrega en el día. Si el vecino requerido se negase a recibir la cédula será ésta fijada en la puerta del domicilio del litigante, procediendo en todos los casos en la forma determinada en los artículos anteriores.

Art. 43. — Las notificaciones que se hagan en los autos se extenderán en el expediente y serán firmadas por el actuario y por el notificado o por un testigo a su ruego si éste no pudiese hacerlo, o por dos si se negara.

Art. 44. — Las notificaciones de las providencias judiciales, de cualquier naturaleza que sean — salvo las que menciona el artículo 37 — serán hechas en la secretaría del juzgado o tribunal. A ese efecto, en la primera providencia que diete, el juez designará dos días de la semana que no sean consecutivos, en los que todo litigante estará obligado a concurrir a secretaría.

Cada secretario estará obligado a llevar un libro, que colocará en lugar visible, en el que las partes podrán poner sus firmas, con indicación de fecha. Este libro, que servirá para justificar la comparencia a secretaría, será cerrado con nota subscripta por el secretario cada uno de los días designados (45).

(45) Entre Ríos, artículo 46; Buenos Aires, artículo 59; Tucumán, artículo 34; Proyecto, artículo 40; Rojas, artículo 45; Córdoba, artículo 55; Santa Fe, artículo 54; Santiago del Estero, artículo 54; San Luis, artículo 85, disponen que se cierre diariamente.

Art. 45. — Toda providencia se considerará notificada desde el primero de los días designados subsiguiente a aquel en que fué dictada; y si el designado fuese feriado, desde el día hábil que le siga inmediatamente (46).

Art. 46. — En las cámaras de apelaciones las notificaciones serán diligenciadas por los ujieres en la misma forma y con las responsabilidades que se establecen para los encargados de hacerlas en primera instancia.

Art. 47. — Toda notificación que se hiciere sin llenar las formalidades prescriptas será nula y quien la practicase, además de responder por los perjuicios que cause, incurrirá en una multa de veinte pesos moneda nacional la primera vez, cincuenta la segunda y pérdida del empleo en caso de reincidencia.

Sin embargo, siempre que resulte de autos haber tenido la parte noticia de la providencia, la notificación surtirá sus efectos legales, sin que por ello quede relevado el empleado de las responsabilidades establecidas.

Hacen presumir el conocimiento la notificación de resoluciones de fecha posterior no observadas.

El juez deberá comunicar la imposición de la multa a quien corresponda, para que sea descontada del sueldo.

Art. 48. — El secretario o empleado encargado de notificar, que incurriese en morosidad en las notificaciones, sufrirá una multa de veinte pesos moneda nacional, que el juez deberá comunicar, a fin de que le sea descontada de su sueldo.

Art. 49. — Las disposiciones que preceden serán aplicables a las citaciones y emplazamientos, con las modificaciones que se expresarán en los artículos siguientes.

(46) Es consecuencia de lo establecido en el artículo 44, y salvo la obligación de poner nota, está de acuerdo con la jurisprudencia.

Rojas, artículo 46; Entre Ríos, artículo 48; Buenos Aires, artículo 61; Tucumán, artículo 32; Aleorta y Zeballos, artículo 598; San Luis, artículo 86.

Art. 50. — Las citaciones y emplazamientos se notificarán en el domicilio denunciado, entregándose al citado las copias del traslado si fuere habido y haciendo constar esa circunstancia en la cédula.

Si no se le encontrara se le dejará aviso por escrito, firmado por el encargado de notificar, para que lo espere al día siguiente, con designación de la hora en que volverá y el objeto de la citación o emplazamiento, poniéndose en la cédula constancia de ello y firmando el mismo funcionario y la persona de la casa a quien entregue el aviso o un testigo si éste no quisiere, no pudiese hacerlo o no supiese firmar.

Si al día siguiente tampoco se le encontrare se procederá a diligenciar la notificación como corresponde.

Art. 51. — Cuando la persona que ha de ser emplazada no se encuentre en el lugar en que se le demanda, se hará por medio de exhorto a la autoridad judicial que corresponda.

Art. 52. — La citación o emplazamiento de personas inciertas o cuyo domicilio se declare ignorar, se hará por edictos publicados por quince días en el Boletín Judicial.

Esta diligencia se acreditará en el expediente con el primero y último ejemplar que contenga la citación.

Art. 53. — Si el domicilio denunciado fuera falso; si por una causa cualquiera el denunciante conociere o estuviese obligado a conocer el domicilio o resultara falsa la manifestación de ignorancia en el caso del artículo anterior, se anulará lo actuado con costas a cargo del que denunció o hizo la manifestación.

Art. 54. — Ninguna notificación podrá demorarse por falta de papel sellado; cuando el litigante no hubiera entregado el necesario, deberá el actuario usar papel común, con cargo de reposición (47).

(47) Silgueira, artículo 24, lo establece así para todas las actuaciones.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES VARIAS RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y AUDIENCIAS

Art. 55. — Los jueces sólo pueden proceder de oficio cuando la ley los autorice (48).

Podrán, para mejor proveer, después de cerrado el término probatorio:

- 1º Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes.
- 2º Exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y que no resulten probados o cualesquiera explicaciones que juzguen conducentes.
- 3º Ordenar nueva comparencia de los testigos para carearlos o para que amplíen o expliquen sus declaraciones (49).
- 4º Ordenar (50) cualquier reconocimiento, avalúo u otra diligencia pericial que reputen necesaria.
- 5º Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito, hallándose en estado (51).

Las diligencias expresadas no suspenden el término para dictar sentencia (52).

El auto que ordene diligencias para mejor proveer es inapelable (53).

(48) Alcorta y Zeballos, artículo 54; Silgueira, artículo 67; San Luis, artículo 30.

(49) Silgueira, artículo 77.

(50) Mis comentarios, número 104.

(51) San Luis, artículo 33, inciso 4º.

(52) Rojas, artículo 97; Mendoza, artículo 74.

En contra, Córdoba, artículo 148.

(53) Jurisprudencia. Buenos Aires, artículo 19. Proyecto, artículo 60; Entre Ríos, artículo 7º.

Art. 56. — Las apelaciones de las providencias judiciales podrán concederse en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, o solo devolutivo, y también libremente o en relación. Procederán en ambos efectos en todos los casos en que no esté expresamente prevenido que se admita en uno solo; y en relación siempre que no esté estatuido que se otorgue libremente.

Las apelaciones que no tengan por esta ley un plazo especial deben interponerse dentro de cinco días de notificada la resolución de que se recurre.

Art. 57. — En la tramitación de los juicios no será necesario decreto del juez o tribunal para imprimir curso al procedimiento (54) y bastará al efecto nota del secretario, en los siguientes casos:

- 1º Devolución de oficios diligenciados y cualquier antecedente que se hubiera solicitado para su agregación a los autos.
- 2º En los juicios voluntarios cuando se requiera oír a los ministerios públicos.
- 3º Para hacer saber a las partes una liquidación ordenada y la agregación a los autos de inventarios, tasaciones, divisiones o cualquiera otra diligencias judicial.
- 4º Para agregar los escritos con que se evacúen traslados o vistas por las partes a fin de continuar el trámite en los casos en que deban expedirse también en ellos los ministerios públicos (55).

Art. 58. — En los casos en que para dictar resolución, el juez requiera un informe previo o certificado sea del actuario u otro secretario de su juzgado lo ordenará verbalmente y se expedirá por escrito en el expediente. Si

(54) Proyecto, artículo 52; Entre Ríos, artículo 13.

(55) Buenos Aires, artículo 28; Entre Ríos, artículo 14.

fuera pedido por alguna de las partes, el actuario lo expedirá a continuación del cargo (56).

Art. 59. — Los jueces superiores e inferiores verán y despacharán por sí mismos los autos (57).

Procurarán, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones que los litigantes pongan término a sus diferencias por avenimientos amigables, para lo cual, sin perjuicio de la facultad de hacerlos comparecer a su presencia en cualquier estado del juicio, deberán convocarlos a juicios de conciliación dentro de cinco días después de contestada toda demanda ordinaria, pudiendo sugerir en la audiencia las bases de un arreglo, sin que ello importe prejuzgamiento.

Tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios, pudiendo imponer al efecto correcciones disciplinarias a los litigantes, abogados, procuradores y funcionarios que intervengan en aquéllos, por excesos de lenguaje, por faltas contra su dignidad en los escritos o audiencias, o contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia.

Serán correcciones disciplinarias: el apercibimiento o prevención; la multa hasta doscientos pesos moneda nacional, o la detención hasta diez días en caso de no ser satisfecha; la suspensión en el ejercicio de la profesión o desempeño de la función pública, hasta un mes.

Sin perjuicio de la corrección, los jueces podrán hacer testar toda frase o palabra concebida en términos indecorosos u ofensivos, o devolver los escritos que las contengan. Del auto que lo ordena no se da recurso (58).

Si el interesado reclamara dentro de tres días se resolverá sin más trámite, con apelación para ante la cámara, si fuera en primera instancia, siempre que el recurso hubiera sido interpuesto en subsidio al reclamar.

(56) Proyecto, artículo 54; Buenos Aires, artículo 28; Entre Ríos, artículo 13.

(57) Buenos Aires, artículo 29; San Luis, artículo 29.

(58) Entre Ríos, artículo 6°.

Art. 60. — No es permitido a los jueces negarse a administrar justicia, ni retardarla, ni separarse del orden que la ley establece. Toda transgresión a ese respecto los constituye responsables hacia los individuos.

Las resoluciones deben dictarse por el juez o tribunal y ser congruente con lo pedido por las partes, accediendo a ello o denegándolo, total o parcialmente (59).

Deben siempre resolver según la ley, interpretada según su ciencia y conciencia, con relación al caso a decidir.

Sus sentencias o resoluciones definitivas que decidan un artículo deberán ser fundadas con arreglo a las disposiciones precedentes, bajo pena de nulidad; pero bastará referirse a los fundamentos aducidos por las partes cuando se tratara de resoluciones interlocutorias (60).

Art. 61. — El ministerio fiscal será parte legítima en las cuestiones de competencia, en las causas sobre estado civil, en los juicios de insania, en los de venia o autorización promovidos por mujeres casadas, en los *ab intestato*s hasta la declaratoria de herederos, en los testamentarios hasta la aprobación del testamento y en todos los demás casos que las leyes determinan.

La nulidad producida por falta de intervención de los ministerios públicos en los autos en que ésta sea exigida, quedará subsanada en cualquier estado del juicio anterior a la sentencia, dándoles intervención, siempre que sus representantes nada tuvieran que oponer a los procedimientos observados o no tuvieran nuevas defensas que hacer valer (61).

Art. 62. — Las audiencias judiciales serán siempre públicas si por razones de orden moral no se dispusiese lo contrario, lo que será resuelto por el juez sin recurso alguno (62).

(59) Entre Ríos, artículo 9°.

(60) Proyecto, artículo 62; Buenos Aires, artículo 11; Entre Ríos, artículo 11.

(61) Buenos Aires, artículo 33; Entre Ríos, artículos 15 y 16; San Luis, artículo 41.

(62) San Juan, artículo 88; Córdoba, artículo 115; Rojas, nota 89; San Luis, artículo 34, 2° apartado.

Deberán empezar a la hora designada, sin que los citados a ellas estén obligados a esperar más de media hora (63).

Se celebrarán ante los jueces (64).

Art. 63. — Las convocatorias a junta o juicio verbal se harán bajo apercibimiento de celebrarse con las partes que concurran, y tenerse por realizadas si no concurriese ninguna (65), apercibimiento que se hará efectivo siempre que todos los interesados, de acuerdo y en un solo escrito, no solicitaran nueva audiencia (66).

Art. 64. — Los juicios se verán y decidirán en el orden en que hayan sido puestos en estado. Sólo se dará preferencia a los negocios urgentes y que por derecho deban tenerla, a los de carácter sumario, los que interesen a menores o incapaces y a los incidentes que paralicen la tramitación de la causa principal (67).

Art. 65. — En las secretarías de los juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones, se llevará un libro (68), que podrá ser examinado por el público, en el que deberá hacerse constar: la fecha del llamamiento de autos para sentencia; la del sorteo de las causas; el orden en que serán estudiadas por los miembros del tribunal; la fecha en que les entregan los expedientes a ese objeto y aquella en que fueran devueltos (69).

(63) Proyecto, artículo 47; Entre Ríos, artículo 20; Rojas, artículo 89; San Luis, artículo 37.

(64) Proyecto, artículo 49; Buenos Aires, artículo 31; Córdoba, artículo 48; La Rioja, artículo 23; San Juan, artículo 37; San Luis, artículo 37; Entre Ríos, artículo 18, prescribe que las juntas y juicios verbales, salvo disposición especial o en los casos en que el juez disponga que tengan lugar en su presencia, se celebrarán ante el secretario de la causa.

(65) Santa Fe, artículo 122; La Rioja, artículo 143; San Juan, artículo 89.

(66) Proyecto, artículo 50; Entre Ríos, artículo 19; Buenos Aires, artículo 32; Rojas, artículo 90; San Luis, artículo 38.

(67) Rojas, artículo 93; Entre Ríos, artículo 43; Santiago del Estero, artículo 140; Córdoba, artículo 143 y Silguera, artículo 71 enumeran los casos de preferencia.

(68) Mendoza, artículo 85.

(69) Rojas, artículo 94.

CAPÍTULO VII

EXHORTOS Y OFICIOS

Art. 66. — Los exhortos y oficios que se libren en los juicios se entregarán a la parte a cuya solicitud se hubieren decretado, una vez consentido el auto que los ordena, o se remitirán por correo si no concurriese a retirarlos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En el primer caso, si lo pidiere la contraria, se fijará un término para presentarlos a quien vayan dirigidos (70).

Art. 67. — Sea cual fuere la procedencia de un exhorto u oficio, será diligenciado en papel común, con cargo de reposición (71).

Art. 68. — Los exhortos se cumplirán con audiencia del ministerio público (72).

Art. 69. — El auto por el que se negara el diligenciamiento de un exhorto es apelable en relación dentro del tercero día (73).

Art. 70. — Los exhortos deberán contener:

- 1º El nombre del juez exhortante y su jurisdicción.
- 2º El nombre de las partes interesadas.
- 3º La designación del asunto y la expresión de las circunstancias que justifiquen *prima facie* la competencia del juez exhortante.

(70) Entre Ríos, artículo 65; Santa Fe, artículo 129; Córdoba, artículo 128; La Rioja, artículo 106; San Juan, artículo 101; Alcorta y Zeballos, artículos 641 y 644.

(71) Entre Ríos, artículo 66; Santa Fe, artículo 130; Córdoba, artículo 129; La Rioja, artículo 117; San Juan, artículo 102.

(72) Entre Ríos, artículo 69; Santa Fe, artículo 134; Córdoba, artículo 133; La Rioja, artículo 119; San Juan, artículo 106; Alcorta y Zeballos, artículo 651.

(73) Entre Ríos, artículo 76; Santa Fe, artículo 144; Córdoba, artículo 142; La Rioja, artículo 130.

Alcorta y Zeballos, artículo 652, concede el recurso en todos los casos.

4º La designación precisa de la diligencia cuyo cumplimiento se solicita.

5º La firma del juez y del actuario (74).

Art. 71. — Si en el exhorto se indicara una persona encargada para gestionar el diligenciamiento, ella tendrá personería para solicitar del juez exhortado las medidas conducentes a ese objeto (75) e interponer apelación en el caso del artículo 69.

CAPÍTULO VIII

COSTAS Y HONORARIOS

Art. 72. — En materia de condenación en costas regirán las reglas siguientes:

1º La parte vencida en un juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria si ésta lo hubiere solicitado en la demanda o contestación.

El juez, sin embargo, podrá eximir, en todo o en parte, de esta responsabilidad siempre que encuentre mérito para ello, o cuando la cuestión fuera de puro derecho o la demanda se rechazara por la prescripción (76).

Podrá también declarar compensadas las costas en todo o en parte cuando los litigantes fueran respectivamente vencedores y vencidos, graduando las costas a compensarse por la importancia de los puntos controvertidos, los trabajos y gastos ocasionados por ellos (77).

(74) Entre Ríos, artículo 67; Santa Fe, artículo 131; Córdoba, artículo 130; La Rioja, artículo 121; San Juan, artículo 104; San Luis, artículo 101, con el agregado en el inciso 5º del sello del juzgado.

(75) Santa Fe, artículo 145; Entre Ríos, artículo 67 *in fine*; San Luis, artículo 111.

(76) Jurisprudencia.

(77) Proyecto, artículo 73; Santa Fe, artículo 337. Jurisprudencia citada en mis comentarios números 521 y 522.

- 2º Los representantes de los ministerios públicos podrán ser personalmente condenados en costas cuando litiguen con temeridad o con evidente desconocimiento del derecho (78).
- 3º Se impondrán las costas al vencido, en todo incidente.
- 4º El desistimiento de la acción, excepción o incidente planteado lleva implícita la obligación de satisfacer todas las costas causadas por ellos (79).
- 5º El litigante que incurra en *plus petitio* será condenado en costas (80).
- 6º Siempre que la sentencia de segunda instancia fuera confirmatoria de la de primera, se aplicarán al vencido las de ambas.
- 7º En toda condenación en costas deberá expresarse lo que corresponda abonar por honorarios al abogado, procurador, contadores u otros peritos no sujetos a arancel que hayan intervenido en la substanciación del juicio. Esas regulaciones rigen, en cuanto al monto, en las relaciones de ellos con el cliente, sin perjuicio de los convenios que puedan existir (81).
- 8º Cuando el litigante a cuyo favor se pronunciara una condenación en costas hubiera intervenido personalmente, se le fijará una suma en concepto de indemnización (82).
- 9º Las regulaciones en concepto de costas no establecen relación de derecho entre el abogado, representante o peritos del vencedor con el vencido (83).

(78) Rojas, artículo 73; Proyecto, artículo 631; Entre Ríos, artículo 87.

(79) Rojas, artículo 73; Santa Fe, artículo 380; Mendoza, artículo 75; Entre Ríos, artículo 241; Buenos Aires, artículo 247; San Luis, artículo 350; Silgueira, artículo 255.

(80) Jurisprudencia. Santa Fe, artículo 378.

(81) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 630.

(82) Proyecto, artículo 632; Buenos Aires, artículo 928; Entre Ríos, artículo 93.

(83) Jurisprudencia.

10. Las condenaciones en costas son solidarias solamente en los casos en que la solidaridad fuera impuesta por la ley (84).

11. Los honorarios regulados en concepto de costas son exigibles por el procedimiento de apremio (85).

Art. 73. — Toda persona que intervenga en los juicios representando, defendiendo o desempeñando una comisión cualquiera, tiene derecho a hacer fijar sus honorarios o comisiones, conforme a lo dispuesto en este capítulo (86).

Art. 74. — No habiendo convenio escrito, la regulación deberá solicitarse al juez o tribunal ante quien se hubieran verificado los trabajos, quedando a opción del interesado presentar o no estimación de ellos.

Del escrito en que se pida una regulación de honorarios, se dará traslado por tres días que será notificado por cédula al cliente cuando se trate de pedido del procurador y a éste en los demás casos, a fin de que formule las manifestaciones que juzgue conveniente a su derecho.

Cuando entre los interesados hubiere menores, incapacitados o ausentes, el juez resolverá sin substanciación.

Art. 75. — Las regulaciones deberán solicitarse por los interesados, cuando cesara su intervención, una vez terminada la pericia, aprobado el avalúo o concluida la comisión; pero siempre antes de llamarse autos para sentencia. Dictada esta providencia, los jueces las harán en la sentencia.

Art. 76. — En toda sentencia definitiva, sea que se condene en costas o no, los jueces deberán practicar la regulación de los trabajos de letrados, procuradores y peritos que hayan intervenido en la substanciación del juicio (87).

Art. 77. — En los juicios sucesorios, los abogados o procuradores que soliciten regulación de honorarios deberán

(84) Jurisprudencia.

(85) Jurisprudencia. San Juan, artículo 1.102.

(86) Buenos Aires, artículo 923; Entre Ríos, artículo 89.

(87) Silgueira, artículo 92; Proyecto presentado por el doctor Martín Reybel a la Cámara de Diputados en Septiembre 13 de 1917. (Diario de Sesiones, tomo V, página 95).

relacionar separadamente los trabajos que consideren de cargo común y de cargo particular del cliente. Oídos los interesados al respecto en el término del artículo 74, el juez pronunciará resolución que determine cuáles son de una y otra especie y hará en la misma la regulación de ellos separadamente.

La resolución en este caso será también apelable respecto de la calificación (88).

Art. 78. — El abogado y procurador tienen derecho a exigir su honorario del heredero que han patrocinado, sin perjuicio del que éste tenga contra la sucesión (89).

Art. 79. — Para la apreciación de honorarios se tendrá en cuenta la importancia, el estado o el resultado del asunto, los trabajos que consten en el expediente y los que se hubieran efectuado para imponerse de los hechos y preparar la defensa. No se comprenderán en la estimación los trabajos o peticiones inoficiosas o que no hubieran sido útiles a la defensa. Esta calificación corresponde a los jueces exclusivamente (90).

Art. 80. — Los rematadores que intervengan en ventas judiciales, cuando éstas no se realizaran sin culpa de ellos, tendrán derecho a exigir la regulación de honorarios por su trabajo si no fueran propuestos para el nuevo remate o si propuestos tampoco se realizara (91). En los demás casos cobrarán comisión con arreglo a las prácticas comerciales.

En caso de regulación, ésta no podrá exceder de la tercera parte de la comisión (92).

Art. 81. — La comisión de los administradores se fijará teniendo en cuenta los valores percibidos o realizados.

(88) Jurisprudencia.

(89) Jurisprudencia.

(90) Jurisprudencia. Silgueira, artículo 90.

(91) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 638.

(92) Entre Ríos, artículo 95; Buenos Aires, artículo 939, señala media comisión.

la duración y resultado de sus gestiones y no podrá ser mayor del 5 % de esos valores (93).

Art. 82. — A los depositarios se les fijará comisión teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes, riesgos del depósito y tiempo de su duración (94).

Unos y otros no podrán ejercitar el derecho a que se refiere el artículo 75, hasta aprobadas definitivamente las cuentas, terminado el depósito o cesado el cargo.

Los depositarios no podrán negarse a la entrega de los bienes en razón de adeudárseles sus honorarios (95).

Art. 83. — En los juicios sucesorios y demás juicios universales, no se pagarán honorarios ni otros gastos o comisiones hasta que se apruebe la liquidación (96).

El total de los honorarios en ellos, con exclusión del papel sellado y demás gastos, no podrá pasar del 25 % de la tasación de los bienes aprobada por el juzgado, o de su importe líquido, cuando se hubieran vendido antes de la liquidación; en los demás juicios el monto de los honorarios, no excederá del 33 % del valor de la cosa litigiosa, con exclusión del sellado y demás gastos.

Cuando las regulaciones excedieran de estos límites, se pagarán a prorrata (97).

Art. 84. — Las regulaciones practicadas por los jueces son apelables en todos los casos en que su monto exceda de doscientos pesos moneda nacional.

Elevados los autos al superior, éste resolverá dentro de cinco días sin substanciación de ningún género.

(93) Proyecto, artículo 639; Entre Ríos, artículo 97, señalan el 10 %; Buenos Aires, artículo 939 el 8 %.

(94) Buenos Aires, artículo 945. Jurisprudencia.

(95) Buenos Aires, artículo 946; Entre Ríos, artículo 98; Silgueira, artículo 101.

(96) Entre Ríos, artículo 102; Santa Fe, artículo 392.

(97) El código de Santa Fe en el artículo 392, determina que en los concursos de acreedores el honorario a cargo de la masa no podrá exceder del 35 % del valor de los bienes realizados, debiendo regularse al síndico dentro del 10 % de ese valor.

Art. 85. — Es nulo y sin ningún efecto todo convenio por el cual el abogado o procurador venga a hacerse partícipe o a tener interés directo en el resultado del pleito (98).

Art. 86. — El convenio o la regulación de honorarios, salvo el caso de condenación en costas, da acción ejecutiva contra la parte con quien se ha contratado el servicio o a cuya instancia se ha hecho (99).

Art. 87. — Toda cuestión que se promueva respecto de honorarios, se substanciará en incidente por separado. En los casos de apelación el expediente principal sólo se enviará a la cámara, a su requerimiento, y con el único objeto de tenerlo presente al resolver.

CAPÍTULO IX

DE LAS EXTRACCIONES DE FONDOS

Art. 88. — Los fondos depositados judicialmente sólo pueden ser removidos por extracciones, embargos o transferencias mediante orden del juez a cuyo nombre estén consignados o a la de su reemplazante legal (100).

Art. 89. — Las extracciones de fondos depositados fuera de la jurisdicción del juez o tribunal que la ordene, no podrá efectuarse por medio de exhortos u oficios, siendo necesaria la previa transferencia a un banco de la jurisdicción (101).

Art. 90. — Para toda extracción de fondos se librará cheque sellado y firmado por el juez con firma entera, el que será subscripto al dorso por el interesado en presencia del actuario que dará fe de ello. El banco, a la vista de este documento, hará la entrega sin más trámite (102).

(98) La prohibición, que ya existe en la ley vigente, se establece en el código de Buenos Aires, artículo 931; Rojas, artículo 76, la proyecta; Aleorta y Zeballos, artículo 929, 2º apartado.

(99) Jurisprudencia, San Juan, artículo 1.102.

(100) Buenos Aires, artículo 953; Entre Ríos, artículo 105.

(101) Buenos Aires, artículo 954; Entre Ríos, artículo 106.

(102) Buenos Aires, artículo 107; Entre Ríos, artículo 955.

Art. 91. — De todo perjuicio que resultare a los interesados o a terceros con motivo de órdenes de extracción expedidas con violación de las precedentes disposiciones, será directamente responsable el juez que la subscribiere, sin perjuicio de las acciones contra el verdadero responsable del daño (103).

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 92. — Toda contienda entre partes que no tenga señalada una tramitación especial, será ventilada en juicio ordinario.

Las disposiciones establecidas para el juicio ordinario serán aplicables a los demás, si no se prescriben para éstos reglas especiales de procedimiento (104).

Cuando entre las disposiciones de carácter general y las especiales que este código comprende, se encuentre discordancia, deben aplicarse las especiales (105).

Art. 93. — Las leyes de procedimiento son de orden público y sólo renunciabiles en los términos de los artículos 19 y 21 del Código Civil (106).

Art. 94. — Todas las multas establecidas por esta ley son a beneficio del Consejo Nacional de Educación (107).

Art. 95. — Todo apercibimiento decretado por los jueces de acuerdo con las disposiciones de esta ley, deberá ser expreso, se transcribirá en la cédula de notificación y se considerará incurso en él al litigante por el sólo vencimiento del término que corresponda, sin necesidad de pedido o declaración al respecto.

(103) Buenos Aires, artículo 957.

(104) Rojas, artículo 115; Entre Ríos, artículo 111.

(105) Entre Ríos, artículo 112.

(106) Buenos Aires, artículo 80; San Luis, artículo 133.

(107) Silgueira, artículo 109; Entre Ríos, artículo 114, las destina a un fondo especial de edificación escolar.

TÍTULO II

JUICIO ORDINARIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 96. — El juicio ordinario podrá prepararse pidiendo, el que pretenda demandar:

- 1º Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda absuelva posiciones (108) sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuyo conocimiento no puede entrarse en juicio.
- 2º La exhibición de la cosa mueble que haya de pedirse por acción real y su secuestro (109) en los casos establecidos por la ley.
- 3º La exhibición de un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, albacea o de otro modo legítimamente interesado (110).

(108) Entre Ríos, artículo 116, inciso 1º; Mendoza, artículo 99, inciso 1º; Tucumán, artículo 80, inciso 1º; San Juan, artículo 421, inciso 1º Ver mis comentarios número 123 y Rojas, página 31, nota número 9. Algunos de los códigos citados declaran aplicable lo establecido para la absolución de posiciones. A mi juicio es innecesaria mención especial; basta conceder derecho de pedir absolución de posiciones para que sean aplicables.

(109) Entre Ríos, artículo 116, inciso 2º, dice «embargo preventivo».

(110) Proyecto, artículo 97; Entre Ríos, artículo 116, inciso 3º; Rojas, artículo 109; Mendoza, artículo 99, inciso 3º; Santiago del Estero, artículo 380, inciso 3º.

Santa Fe, artículo 411, inciso 4º, dice: que se exhiba algún testamento u otro documento cualquiera, que sea necesario para entablar la demanda.

Córdoba, artículo 382, inciso 3º, comprende nuestro artículo y el del Código de Santa Fe.

San Juan, artículo 421, inciso 3º, agrega a nuestro artículo «y fuera de aquel, cuando fuera necesario presentarse en juicio».

Rojas, artículo 456, con el agregado de exhibición del contrato cuyo cumplimiento se va a demandar.

- 4º Que el enajenante o adquirente (111), en caso de evicción, exhiba los títulos u otros documentos que se refieran a la cosa transferida.
- 5º Que el socio o comunero presente los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad que tuviese en su poder (112).
- 6º Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación manifieste el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto de la acción (113).
- 7º Que se tome declaración jurada a algún testigo de muy avanzada edad o que se halle gravemente enfermo o esté próximo a ausentarse del país (114).
- 8º La designación de tutor o curador o concesión de venia al incapaz que hubiere de ser demandado y no lo tuviere (115).
- 9º Podrá también pedirse la designación de peritos que establezcan el estado, calidad o cantidad de

(111) Entre Ríos, artículo 116, inciso 4º, que acepto por que es más amplio que «el vendedor o el comprador».

(112) Córdoba, artículo 382, inciso 5º; Santa Fe, artículo 441, inciso 6º; San Juan, artículo 421, inciso 5º; Mendoza, artículo 99, inciso 5º; Santiago del Estero, artículo 380, inciso 5º.

San Luis, artículo 134, inciso 5º, con el agregado «o el que tenga en su poder los documentos de la sociedad».

(113) Proyecto, artículo 97, inciso 6º; Entre Ríos, artículo 116, inciso 6º; Córdoba, artículo 390; Santiago del Estero, artículo 388; San Juan, artículo 432.

La Rioja, artículo 471, dispone que en caso de que el intimado, con el fin de eludir la demanda se dijera mero tenedor, se le exija bajo juramento el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre tiene la cosa, la exhibición del título de su tenencia o la manifestación de que carece de él.

(114) Proyecto, artículo 98, ver mis comentarios, número 127. Rojas, artículo 100, inciso 6º; Mendoza, artículo 80, inciso 6º; Córdoba, artículo 383; Santiago del Estero, artículo 381; San Juan, artículo 424; La Rioja, artículo 457, establecen igual derecho para el que tema ser demandado.

Santa Fe, artículo 411, permite además que se practique cualquier otra diligencia probatoria cuando haya peligro de que no pueda recibirse o practicarse posteriormente.

(115) Proyecto, artículo 101; Entre Ríos, artículo 116, inciso 1º.

las cosas que hayan de ser objeto de un litigio (116).

En los casos enumerados en los incisos precedentes, el interpelado que no cumpliera la orden del juez, en el término que se le señale o que diese informaciones falsas que pudieran inducir en error, será pasible de correcciones disciplinarias y responsable de los perjuicios y costas que causare (117).

No se admitirán diligencias previas fuera de los casos enumerados (118).

Art. 97. — El juez accederá a estas pretensiones si estima justa la causa en que se funden, repeliéndolas de oficio en caso contrario.

Solo es apelable la providencia denegatoria (119).

En los casos previstos por los incisos 7º y 9º, el examen se hará con citación de la contraria cuando la urgencia del caso lo permita, y con intervención fiscal cuando no pudiera ser citada (120).

(116) Proyecto, artículo 99; Entre Ríos, artículo 118.

Tucumán, artículo 80, inciso 7º, autoriza dictamen pericial sobre hechos o cosas que por el transcurso del tiempo puedan desaparecer o alterarse.

(117) Proyecto, artículo 97; Entre Ríos, artículo 116, agrega: o destruyere, ocultase o dejare de poscer la cosa, lo que en mi concepto está comprendido en los términos generales que empleo.

Santa Fe, artículo 421, niega derecho a producir prueba contra la confesión presunta.

(118) Santa Fe, artículo 411, admite además como diligencias preparatorias: el reconocimiento de cualquier documento privado; la exhibición de cualquier documento que sea necesario para entablar la demanda; la presentación de cuentas de la administración por los tutores y curadores; la mensura del inmueble que haya de ser objeto de la demanda.

Córdoba, artículo 382, acepta lo relativo a cuentas de tutores y curadores y a la mensura.

Santiago del Estero, artículo 380; San Juan, artículo 441; La Rioja, artículo 456, incluye en el inciso a los tutores y curadores al administrador de bienes ajenos, y permite la mensura del inmueble.

(119) Proyecto, artículo 100; Buenos Aires, artículo 85; Entre Ríos, artículo 120; Rojas, artículo 111; Santa Fe, artículo 417; Córdoba, artículo 387; Santiago del Estero, artículo 384; San Juan, artículo 426; La Rioja, artículo 474; San Luis, artículo 138; Mendoza, artículo 81, concede apelación en ambos casos.

(120) Proyecto, artículo 99; Entre Ríos, artículos 117 y 112; Santa Fe, artículo 424; La Rioja, artículo 475.

Art. 98. — El pedido de diligencias previas deberá formularse en el escrito con que se inicie la demanda. No se dará curso a ésta ni se hará conocer al demandado mientras no hayan sido producidas las diligencias (121).

CAPÍTULO II

DE LA DEMANDA

Art. 99. — La demanda será deducida por escrito y contendrá:

- 1º El nombre, domicilio y nacionalidad (122), del demandante.
- 2º El nombre, domicilio del demandado.
- 3º La cosa demandada designándola con toda exactitud.
- 4º Los hechos en que se funda, explicados claramente.
- 5º El derecho, expuesto sucintamente, sin que sea necesario cita expresa de la ley o designar la acción que se entabla con su nombre técnico (123).
- 6º La petición en términos claros y positivos.

Art. 100. — El actor deberá acompañar a la demanda las escrituras y documentos en que funda su derecho. Si no los

(121) En todos los códigos de la República estas diligencias pueden solicitarse antes de entablar la demanda.

El de Santa Fe niega valor a las diligencias si no se entabla demanda dentro de veinte días. Me separo de ellos para evitar la posibilidad de que a pretexto de diligencias previas para determinada acción se busquen manifestaciones que tengan otro objeto, estableciendo la necesidad de entablar la demanda para lo cual se solicitan.

(122) Buenos Aires, artículo 86, inciso 1º; Entre Ríos, artículo 121, inciso 1º; San Luis, artículo 139, inciso 1º.

El código de Tucumán, artículo 82, inciso 1º, dice: «Nombre, domicilio del actor y demandado y demás circunstancias personales».

Silgueira, artículo 117, inciso 1º: «Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio del demandante y demandado».

(123) Jurisprudencia. Ver mis comentarios número 134. Entre Ríos, artículo 121, inciso 5º; Silgueira, artículo 117, nota 4º; Santa Fe, artículo 152, *in fine*; San Luis, artículo 139, inciso 5º.

tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar (124) en que se encuentren los originales.

Se entenderá que el actor tiene a su disposición los documentos y deberá acompañarlos con la demanda, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo público del cual pueda pedir y obtener copia fehaciente (125).

La presentación de documentos cuando sean públicos podrá hacerse en copia simple si el interesado manifiesta que carece de otra copia fehaciente; pero no producirá efecto aquella si, desconocida su eficacia por el demandado, el demandante, en el término de prueba, no llevase a los autos un testimonio del documento con los requisitos necesarios para que haga fe (126).

Después de contestada la demanda (127) sólo se admitirán al actor documentos de fecha posterior, o anteriores de que no hubiere antes tenido conocimiento.

Tampoco podrá cambiarse la acción después de contestada (128).

(124) Proyecto, artículo 104; Entre Ríos, artículo 122, párrafo 1º; San Luis, artículo 140, párrafo 1º; Rojas, artículo 118, párrafo 1º; Mendoza, artículo 105, párrafo 1º.

El código de Santiago del Estero permite la presentación posterior, abonando las costas, lo mismo Santa Fe, artículo 158; Córdoba, artículo 162; San Luis, artículo 140, párrafo 2º; La Rioja, artículo 161, párrafo 1º.

(125) Entre Ríos, artículo 122, párrafo 2º; Rojas, artículo 118, párrafo 2º; Silguera, artículo 119, párrafo 2º; Mendoza, artículo 105, párrafo 2º.

La Rioja, artículo 161, párrafo 2º, con la siguiente restricción: que existan archivos u oficinas públicas del lugar de su domicilio o del asiento del juzgado.

Ver: Reus, I, 369; Caravantes, II, 39; Maurea y Navarro, II, 521.

(126) Mendoza, artículo 106; La Rioja, artículo 162; Entre Ríos, artículo 122; Rojas, artículo 119.

(127) Proyecto, artículo 105; Entre Ríos, artículo 123; Mendoza, artículo 107; Silguera, artículo 120; Rojas, artículo 120; Buenos Aires, artículo 88, ver mis comentarios números 140 a 143.

(128) Proyecto, artículo 105; Mendoza, artículo 109; Rojas, artículo 122; Entre Ríos, artículo 123; La Rioja, artículo 160; Tucumán, artículo 87; Silguera, artículo 124, pero permite ampliar o moderar la petición.

Art. 101. — Puede el demandante acumular todas las acciones que tenga contra una misma parte, con tal:

- 1º Que no sean excluyentes.
- 2º Que correspondan a la misma jurisdicción.
- 3º Que puedan substanciarse por los mismos trámites.
- 4º Que en caso de ser varios los demandantes o demandados las acciones se funden en el mismo título (129) y no exista oposición de intereses entre los colitigantes (130).

Art. 102. — Los jueces repelerán (131) de oficio las demandas en que no se observen las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Si no resultare claramente que son de su competencia, mandará que el actor manifieste lo necesario a ese respecto.

Art. 103. — Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez conferirá traslado de ella al demandado y lo hará citar y emplazar para que comparezca a contestarla dentro de quince días, sin perjuicio de la ampliación que corresponda con arreglo a la distancia (132).

CAPÍTULO III

DE LA CITACION Y EMPLAZAMIENTO

Art. 104. — La citación y emplazamiento se hará en la forma que determinan los artículos 37 y siguientes, siendo nulo el que se efectuara contrariándolos.

(129) Proyecto, artículo 106; Rojas, artículos 121 y 124.

Entre Ríos, artículo 124 dice título o causa; San Juan, artículo 152. Santiago del Estero, artículo 155, antes de ser contestada la demanda; Silgueira, artículos 128 y 129.

(130) Ver mis comentarios, números 144 y 145.

(131) Proyecto, artículo 109.

(132) Proyecto, artículo 108; Rojas, artículo 126. Silgueira, artículo 126, disponer que se cite a las partes a un comparendo verbal dentro de los nueve primeros días.

Por los códigos de Santa Fe, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, la citación y emplazamiento y el traslado de la demanda se hacen en dos actos distintos.

Art. 105. — Si en el domicilio atribuido al demandado se informase que es inexacta la designación hecha, el notificador hará constar esa manifestación en diligencia y devolverá la cédula.

Si el demandante insistiere en sostener el domicilio atribuido al demandado, se hará en él la notificación bajo su responsabilidad.

Esta disposición regirá para todas las citaciones o emplazamientos (133).

Art. 106. — En el caso de notificación por edictos, no compareciendo el citado dentro del término del emplazamiento, se dará intervención al defensor de ausentes sin otro trámite.

Art. 107. — Si los demandados fuesen varios y se hallasen en diferentes lugares, el término del emplazamiento sólo se reputará vencido, a los efectos legales con respecto a todos, cuando venza para el que se encuentre a mayor distancia.

CAPÍTULO IV

DE LAS EXCEPCIONES

Art. 108. — Dentro de los primeros nueve días del término del emplazamiento, con más la ampliación a que hubiere lugar, podrá el demandado, al mismo tiempo y en un solo escrito, oponer como artículo de previo pronunciamiento las siguientes excepciones:

1º Incompetencia de jurisdicción.

2º Falta de personalidad en el demandante, en el demandado o en sus procuradores, por carecer de capacidad civil, por no tener el demandado el carácter o representación con que se le demanda,

(133) Jurisprudencia. Rojas, artículo 56; Mendoza, artículo 41.

o por insuficiencia o ilegalidad del poder con que actúa el procurador (134).

3º *Litis pendencia* en otro juzgado o tribunal competente, cuando concurren las circunstancias del artículo 101 (135).

4º Arraigo del juicio por las costas que pudieran devengarse, cuando el actor no esté domiciliado en la República (136), ni tenga en ella bienes raíces o casa de comercio de un valor suficiente para cubrir las costas (137).

Art. 109. — No procederá el arraigo:

1º Cuando la acción verse sobre alimentos, *litis expensas*, sueldos o salarios.

2º Cuando la demanda sea deducida como reconvencción.

3º En las acciones de recuperar o retener la posesión.

4º Cuando la parte líquida del crédito que motiva el juicio fuera bastante para responder a las costas (138).

(134) Jurisprudencia. Comprendidos en este inciso lo que los códigos de las provincias dicen en varios. Proyecto, artículo 117; Entre Ríos, artículo 127; Rojas, artículo 134; Tucumán, artículo 95; Mendoza, artículo 116; La Rioja, artículo 141; San Luis, artículo 152; Santiago del Estero, artículo 1.013; San Juan, artículo 999; Santa Fe, artículo 986.

(135) Jurisprudencia. Buenos Aires, artículo 98; Entre Ríos, artículo 127.

(136) Proyecto, artículo 117; Entre Ríos, artículo 128; Silgueira, artículo 129; tanto Rojas como Alcorta y Zeballos la establecen para el demandante extranjero. Ver mis comentarios, número 170 y siguientes.

(137) Proyecto, artículo 117; Entre Ríos, 128.

(138) Jurisprudencia. Rojas, artículo 136; Mendoza, artículo 117; Entre Ríos, artículo 128; Silgueira, artículo 129. Ver mis comentarios, número 174.

Córdoba, sobre el inciso 1º, artículo 1.026, y San Juan, artículo 1.000, exige bienes suficientes para cubrir las costas y daños y perjuicios que puedan ocasionarse con el juicio, y agrega en el inciso 3º, cuando se trate de derechos que consten en documentos fehacientes y hagan imposible la condenación en costas.

Santa Fe, artículo 1.029, igual que otras provincias agregan el caso de tener constituido apoderado que respondan por las costas, en virtud de disposiciones especiales de sus leyes.

Art. 110. — Cuando proceda la excepción de arraigo, el juez, después de oír a los interesados, resolverá, sin recurso, sobre el monto de la caución que deba otorgar el actor y señalará en el mismo auto un término que no podrá exceder de treinta días, para que se preste aquélla, bajo apercibimiento de que se tendrá por producida la caducidad de la instancia por el sólo vencimiento del término, si no se cumple (139).

La calificación y aceptación de la fianza de arraigo es atribución exclusiva del juez.

Art. 111. — Dentro del término fijado en el artículo 108 podrá el demandado pedir que el juez haga uso de la facultad que le acuerda el artículo 102 cuando la demanda no llene los requisitos del artículo 99, o que se le obligue a aclarar algún punto obscuro de la demanda.

El juez resolverá sin substanciación alguna por auto que será inapelable (140).

Art. 112. — Del escrito en que se propongan excepciones se dará traslado por seis días.

Si el juez lo estimara necesario, recibirá a prueba el artículo por diez días. Contra este auto no se dará recurso (141).

Vencido el término, se agregará la prueba producida en certificado del actuario y se llamará autos para resolver.

El juez podrá, para mejor proveer, oír a las partes en término común de tres días.

La resolución de las excepciones deberá hacerse en un solo pronunciamiento, aun cuando se hubiera opuesto la ex-

(139) Buenos Aires, artículo 103; Entre Ríos, artículo 129; Proyecto, artículo 126; Rojas, artículo 137. Ver mis comentarios, número 170 y siguientes.

Silgueira, artículo 136, señala diez días.

(140) Proyecto, artículo 118; Entre Ríos, artículo 130; Buenos Aires, artículo 99; San Luis, artículo 153; Silgueira, artículo 130.

(141) Buenos Aires, artículo 101; Entre Ríos, artículo 132; San Luis, artículo 155.

excepción de incompetencia (142). El pronunciamiento sobre las excepciones será apelable en relación.

CAPÍTULO V

DE LA CITACION DE EVICCIÓN (143)

Art. 113. — Tanto el actor como el demandado podrán solicitar la citación de evicción, el primero al entablar la demanda y el segundo dentro del término señalado para poner excepciones por el artículo 108.

La citación se hará en la forma establecida en el Título I, Capítulo V, fijándose al citado el término de quince días para que comparezca, suspendiéndose entretanto el procedimiento.

Si éste usara del derecho de llamar a otro, deberá hacerlo dentro de nueve días de la citación.

Vencidos los quince días que este artículo acuerda para comparecer al citado de evicción, se entenderá el procedimiento con él si comparece o con el demandado si no lo hace o impugnare de cualquier modo la citación. El término para oponer excepciones o contestar se contará desde el vencimiento de los quince días.

Las cuestiones que se susciten entre el citante y el citado se substanciarán en pieza separada.

Podrán actuar conjuntamente el demandado y el citado de evicción, pero deberán hacerlo bajo una sola representación.

Si el actor se opusiere a la citación el incidente se tramitará y resolverá en la forma determinada para las excepciones.

(142) Entre Ríos, artículo 133; San Luis, artículo 157.

El proyecto dispone que la prueba se haga en una sola audiencia en la que se produzca un alegato verbal.

Silgueira, artículos 132 y 133 establece un sistema mixto.

(143) Seguimos a los códigos de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, con modificaciones tendientes a obtener mayor rapidez en el trámite, tomadas de los proyectos de Rojas y Silgueira.

CAPÍTULO VI

DE LA CONTESTACION

Art. 114. — El demandado deberá contestar la demanda dentro del término del emplazamiento. Si se hubieren opuesto excepciones, dentro de seis días (144) después de terminado el artículo.

En la contestación opondrá todas las excepciones perentorias y defensas que tuviere, así como las dilatorias que no hubiera deducido, con excepción de las de arraigo e incompetencia que serán siempre previas (145), salvo el derecho que acuerda para la prescripción el artículo 3.962 del Código Civil (146).

Está obligado el demandado al contestar:

A confesar o negar categóricamente los hechos pertinentes establecidos en la demanda, lo mismo que la autenticidad de los documentos presentados.

A observar las reglas establecidas para la demanda en los artículos 99 y siguientes.

A acompañar copia de sus escritos, así como de los documentos en su caso, la que será entregada al actor (147).

El silencio o respuestas evasivas sobre los hechos o documentos podrán estimarse como un reconocimiento de la verdad (148).

(144) Proyecto, artículo 127; Entre Ríos, artículo 138; Mendoza, artículo 131; Silgueira, artículo 148.

(145) Proyecto, artículo 128.

(146) Mendoza, artículo 131; Tucumán, artículo 104; San Juan, artículo 156; Santiago del Estero, artículo 162; Córdoba, artículo 165; Santa Fe, artículo 160.

En contra Silgueira, artículo 144 y nota 2.

(147) Rojas, artículo 158.

(148) Proyecto, artículo 129; San Luis, artículo 167; Silgueira, artículo 144.

Art. 115. — En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir la reconvención cuando recurriera a ella, la que se substanciará simultáneamente y en la misma forma que la demanda.

Art. 116. — Propuesta la reconvención, se dará traslado al actor por quince días, pudiendo éste oponer excepciones, citar de evicción o reconvenir a su vez (149).

Acompañados documentos o alegada la prescripción o cosa juzgada se dará traslado por nueve días.

Art. 117. — Con los escritos mencionados en esta sección, quedará el juicio concluso para prueba si la cuestión fuera de hecho o mixta.

Si fuera de puro derecho se oirá a las partes en un término común de seis días, con lo que quedará concluso para definitiva.

Art. 118. — Los jueces, al recibir la causa a prueba en las cuestiones de hecho o al correr traslado en las de derecho, se pronunciarán expresamente sobre si la causa es o no de su competencia; y consentida esa providencia no podrá en adelante hacerse declaración de incompetencia, ni a solicitud de parte ni de oficio, salvo caso de jurisdicción privativa (150).

TÍTULO III

DE LA PRUEBA

CAPÍTULO I

DE LA PRUEBA EN GENERAL

Art. 119. — Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba.

Del auto que lo disponga, no habrá recurso alguno; pero

(149) Rojas, artículo 163.

(150) Jurisprudencia.

será apelable dentro de tercero día el auto que declare lo contrario (151).

Si las partes están conformes en que se falle la cuestión sin recibirse a prueba, el juez dispondrá que se substancie como de puro derecho, sin perjuicio de usar de la facultad que le acuerda el artículo 55 (152).

Art. 120. — Dentro del término de cinco días, contados de la última notificación del auto que mande recibir la causa a prueba, cada parte deberá solicitar todas las diligencias que haya de producir, y designar los testigos de que se valdrá.

De los escritos presentados se dará traslado respectivamente, por el término de cinco días, a fin de que indiquen las nuevas pruebas de que hayan de valerse en vista de las ofrecidas.

Dentro de los cinco días a que se refiere el párrafo primero y en el mismo escrito, podrán alegarse hechos ocurridos con posterioridad a la contestación o que recién llegaran a conocimiento de las partes, siempre que tuvieran relación con la cuestión que se ventila, ofreciendo las pruebas a producirse sobre ellos.

Después de esto no se admitirá pedido alguno de prueba (153).

(151) Proyecto, artículo 134; Entre Ríos, artículo 144; Santa Fe, artículo 167; Mendoza, artículo 141; Córdoba, artículo 172; Santiago del Estero, artículo 169; San Juan, artículo 162; San Luis, artículo 169; La Rioja, artículo 182.

(152) Proyecto, artículo 134.

(153) Proyecto, artículo 139, al final.

El código de Tucumán, en su artículo 121 estatuye que las partes deben proponer dentro de los primeros quince días del término, todos los medios probatorios de que intenten valerse.

El doctor Silgueira, en el artículo 150 de su proyecto admite solo la prueba que se ofrezca en los escritos con que se traba la *litis* o hasta los primeros cinco días del término, para completar aquella.

El doctor Zavalla en el artículo 67 de su articulado básico para realizar la unificación procesal («Revista de la Facultad de Derecho», tomo III, página 1.019) dispone que la prueba se ofrezca en el juicio de advenimiento que debe celebrarse dentro de diez días después de contestada la demanda, sin perjuicio de ofrecer durante la primera mitad del término la de «algún antecedente que crean útil a su derecho» las partes.

Art. 121.—Solicitadas las pruebas, el juez señalará el término ordinario para producirlas, y el extraordinario en su caso.

El término ordinario será común y no excederá de sesenta días si hubiera de darse dentro del territorio de la Capital, pudiendo reducirse según las circunstancias. Para las pruebas a producirse fuera de ella se solicitará término extraordinario.

El término extraordinario deberá solicitarse en el escrito en que se ofrezcan las pruebas, expresando el nombre y residencia de los testigos que han de ser examinados y los documentos que hayan de testimoniarse con indicación de los registros o archivos donde se encuentren.

Correrá conjuntamente con el ordinario y no podrá exceder de ciento veinte días (154).

La resolución que se pronuncie sobre el término extraordinario será inapelable en todos los casos (155).

Art. 122. — El auto que acuerde el término extraordinario determinará la suma que las partes que lo hayan solicitado deberán depositar o garantizar, dentro del término de tres días, para responder a los gastos que originare el coligante, de acuerdo con el artículo siguiente, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dichas pruebas (156).

Art. 123. — Cuando ambos litigantes hayan solicitado el término extraordinario, las costas serán satisfechas en la forma que las demás del pleito. Pero si se hubiese concedido a uno solo y éste no ejecutare la prueba que hubiese propuesto, abonará todas las costas y los gastos efectuados por la otra parte donde debió practicarse. Podrá ser condenado también a pagar, a favor de su coligante, una multa de cien a quinientos pesos, si el juez estimase que la petición había sido maliciosa o con propósito de dilatar el juicio (157).

(154) Proyecto, artículo 142.

Silgueira en el artículo 154 concede hasta ciento cincuenta días.

(155) Proyecto, artículo 142; Entre Ríos, artículo 150; Buenos Aires, artículo 125.

(156) Proyecto, artículo 143; Rojas, artículo 181.

(157) Es la disposición existente, combinada con la del artículo 144 del proyecto.

Art. 124. — Las diligencias de prueba quedarán notificadas dentro de las veinticuatro horas del decreto en que se ordenen.

Art. 125. — El juez asistirá inexcusablemente a toda diligencia de prueba que deba practicarse dentro del territorio de la Capital, aunque sea fuera del juzgado (158).

Art. 126. — Las diferentes actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso el juez o tribunal deberá declararlo así por medio de un auto.

Art. 127. — Toda orden o exhorto relativo a pruebas a practicarse deberá librarse dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha del decreto que lo ordene (159) y contendrá la fecha del vencimiento del término probatorio.

Art. 128. — Para toda diligencia de prueba se señalará el día en que deba tener lugar y se citará a la parte contraria con un día a lo menos de anticipación a aquélla.

Art. 129. — Toda providencia que ordene diligencias de prueba será inapelable (160).

Art. 130. — Cuando la prueba consista en constancias de otros expedientes, las partes deberán solicitar los testimonios respectivos, sin perjuicio de la facultad de los jueces para requerir la agregación de los autos originales (161).

(158) Proyecto, artículo 148; Entre Ríos, artículo 157; Santa Fe, artículo 170; Silgueira, artículo 165; Rojas, artículo 193; Córdoba, artículo 179; Santiago del Estero, artículo 176; San Juan, artículo 166; San Luis, artículo 191; La Rioja, artículo 188.

(159) Rojas, artículo 194; Entre Ríos, artículo 149; Buenos Aires, artículo 135. Adoptamos el artículo 149 del proyecto en cuanto al término.

(160) El proyecto dice *que ordene o deniegue* y permite en el segundo caso solicitarla en segunda instancia.

Santa Fe, artículo 181, declara que salvo disposición expresa, ningún auto relativo a la prueba es apelable, pero autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia dictada en virtud de un procedimiento en que se hubiera negado alguna diligencia de prueba.

La Rioja, artículo 200, contiene igual prohibición; pero permite solicitar la diligencia de prueba y permite reproducir la pretensión en segunda instancia.

(161) Proyecto, artículo 150; Entre Ríos, artículo 159; Buenos Aires, artículo 136; Rojas, artículo 200; Silgueira, artículo 169; San Luis, artículo 193.

Art. 131. — Los incidentes o articulaciones sobre la prueba no suspenden el término sino en relación a la diligencia que motiva la discusión, siempre que las pruebas sean separables (162).

Art. 132. — El juez deberá recibir todas las pruebas que se presenten; pero las partes no podrán producirlas sino sobre los hechos controvertidos en sus escritos de demanda y contestación. Los que se refieran a hechos no articulados serán irremisiblemente desechados al pronunciarse sentencia (163).

Art. 133. — Si se produjeran pruebas manifiestamente impertinentes el juez deberá así declararlo en la sentencia e imponer las costas al que las produjo, aun cuando el fallo le fuera favorable (164).

Art. 134. — Vencido el término probatorio, la causa seguirá su curso sin esperarse el resultado de las diligencias de prueba; pero si ellas viniesen antes de la sentencia, serán

(162) Buenos Aires, artículo 119; Entre Ríos, artículo 147; Silgueira, artículo 161; Tucumán, artículo 125; San Luis, artículo 173; La Rioja, artículos 201 a 203.

(163) Buenos Aires, artículo 120; Entre Ríos, artículo 145; Santa Fe, artículos 168 y 169.

Rojas, artículo 169 con la salvedad «a menos que la considere ilícita», en cuyo caso el auto que la niegue es apelable. En la nota al artículo, manifiesta este autor que un juez no se halla habilitado desde el primer momento para juzgar de la pertinencia o impertinencia de la prueba ofrecida, y considera muy conveniente la apreciación de ello en la sentencia.

Silgueira, sobre el artículo 168 de su proyecto por el que se concede apelación del auto que ordene o deniegue una diligencia de prueba, se declara no obstante partidario de nuestro artículo.

Santa Fe, artículos 167 y 168; San Luis, artículo 174; Santiago del Estero, artículos 171 y 172, y Córdoba, artículos 173 y 174, establece que el juez no negará *en ningún caso* el despacho de las diligencias probatorias que ofrezcan, y permite producir prueba sobre todos los hechos que las partes crean convenir en su derecho, «hayan o no sido alegados».

La Rioja, artículo 185 dispone lo mismo con el agregado «por impertinente que ellas fueren».

(164) Rojas, artículo 170.

tomadas en consideración al fallar, siempre que se hubieran practicado de conformidad a la ley (165).

Art. 135. — Será permitido a las partes, hasta la citación para sentencia, presentar documentos públicos referentes a hechos ocurridos con posterioridad al transcurso del término probatorio (166).

CAPÍTULO II

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

CONFESION

Art. 136. — Después de contestada la demanda y dentro del término de prueba, podrá cada parte exigir que la contraria absuelva posiciones concernientes a la cuestión que se ventila y sobre los hechos contradictorios que no constaran en el proceso de un modo fehaciente (167), las que deberán absolver bajo afirmación o promesa de decir verdad (168).

De este derecho podrá usarse una vez en cada instancia (169).

Art. 137. — Si antes de la contestación se promoviera algún artículo previo, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto del artículo, estando éste contestado.

(165) Rojas, artículo 190; Santiago del Estero, artículo 187; Mendoza, artículo 156; La Rioja, artículo 194; Córdoba, artículo 190; Tucumán, artículo 122 dispone que las diligencias de prueba, con excepción de la inspección ocular, deben practicarse en el término probatorio, bajo pena de nulidad.

(166) Tucumán, artículo 154.

(167) Buenos Aires, artículos 142 y 149; Entre Ríos, artículos 162 y 170; San Luis, artículo 206.

(168) Ver mis comentarios, número 271. El juramento no es formalidad esencial de la confesión, dice Silgueira, artículo 178, nota 2, según resolución de la Cámara de lo Comercial. Si pudo en otras épocas tener importancia, actualmente es de mero formalismo.

(169) Rojas, artículo 229; Buenos Aires, artículos 142 y 291; Entre Ríos, artículo 162; Santa Fe, artículo 197; San Luis, artículos 199 y 415; Tucumán, artículo 143.

Art. 138. — El que haya de declarar será citado con un día de intervalo por lo menos, bajo apercibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa se le darán por absueltas las posiciones teniéndolo por confeso, en la sentencia (170).

La justa causa para no comparecer al acto de las posiciones debe ser alegada antes de la hora designada (171).

Art. 139. — Las posiciones se formularán por escrito y serán presentadas en pliego cerrado, junto con el pedido, para ser abierto en la audiencia señalada (172). Versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre su conocimiento de un hecho ajeno, pertinente a la causa (173); y deberá cada una contener un solo hecho expresado en términos claros y precisos (174).

Art. 140. — El juez examinará sobre cada una de las preguntas pertinentes a la parte que haya de absolverlas, y repelerá en el acto mismo, sin más trámite ni recurso, aquellas que no reunan los requisitos exigidos (175).

Art. 141. — El interrogado responderá por sí mismo y de palabra, sin valerse de consejo ni borrador alguno de respuesta, a presencia del contrario si asistiese.

Las contestaciones serán afirmativas o negativas, pudiendo el absolvente dar las explicaciones que estimare necesarias.

En el caso de que el absolvente manifestara que no re-

(170) La Rioja, artículo 218; Santa Fe, artículo 206.

(171) Rojas, artículo 230; Jurisprudencia. Proyecto, artículo 164; Entre Ríos, artículo 167.

Buenos Aires, artículo 146, y San Luis, artículo 203 ordenan dos citaciones.

(172) Proyecto, artículo 163; Buenos Aires, artículo 150; Entre Ríos, artículo 171; San Luis, artículo 207; San Juan, artículo 180; Silgueira, artículo 176; Córdoba, artículo 199; Tucumán, artículo 130; Mendoza, artículo 196; Santiago del Estero, artículo 197.

(173) Rojas, artículo 233; Entre Ríos, artículo 171; La Rioja, artículo 225; Santa Fe, artículo 203; Mendoza, artículo 197; Santiago del Estero, artículo 198; Silgueira, artículo 176.

(174) Buenos Aires, artículo 150; Entre Ríos, artículo 171; San Luis, artículo 207; Silgueira, artículo 176; La Rioja, artículo 225; Santa Fe, artículo 203; Tucumán, artículo 131; Mendoza, artículo 197.

(175) Rojas, artículo 234; Entre Ríos, artículo 172; Silgueira, artículo 176; San Luis, artículo 208.

cuerda los hechos que motivan la interrogación, siempre que se consideren personales, podrá el juez darlo por confeso (176).

Si el absolvente fuese comerciante y se refiriese en sus respuestas a las constancias de sus libros, serán tenidas como parte de aquéllas si el que hubiere puesto las posiciones no prefiere que se dé un término prudencial al absolvente para que conteste después de haberlos consultado (177).

Art. 142. — Si el absolvente o su letrado (178) juzgaran impertinente una pregunta podrá aquél negarse a contestarla; pero el juez, a petición de parte, la dará por confesa al sentenciar, si la juzgara pertinente.

Si el absolvente se negare a contestar, fundándose en la ilegalidad de las posiciones, el juez resolverá sin más trámite ni recurso (179).

Art. 143. — Cuando fuesen varios los que hayan de absolver posiciones en un juicio, las diligencias se practicarán en un mismo día, evitando que se comuniquen los que absuelvan con los que han de absolver (180).

(176) Rojas, artículo 235; Entre Ríos, artículo 173; Silgueira, artículo 177; San Luis, artículo 209; La Rioja, artículo 227; Tucumán, artículo 133; Córdoba, artículo 207.

Santa Fe, artículo 210; San Juan, artículo 186, Santiago del Estero, artículo 206, agrega, siempre que las circunstancias hicieran inverosímil la excusa.

Algunos códigos provinciales hacen la salvedad: siempre que por el tiempo transcurrido, por la naturaleza de los hechos sobre que verse la posición o por otras circunstancias, no fuera verosímil esa contestación; pero como es obvio que el juez tendrá en cuenta todo ello para resolver, conceptúo innecesario el agregado.

(177) Buenos Aires, artículo 153; Rojas, artículo 236; Entre Ríos, artículo 174; San Luis, artículo 210; La Rioja, artículo 220.

(178) Proyecto, artículo 169; Rojas, artículo 237; Silgueira, artículo 180; San Juan, artículo 189; Córdoba, artículo 212; Santiago del Estero, artículo 211, ver mis comentarios, número 287.

(179) Rojas, artículo 238; Buenos Aires, artículo 154; Entre Ríos, artículo 175; Santiago del Estero, artículo 209; San Luis, artículo 211; Silgueira, artículo 179.

Los códigos de Córdoba, artículo 210; Santa Fe, artículo 213 y San Juan, artículo 187, disponen que en el caso, el superior puede, al conocer de la sentencia, admitir o rechazar la pregunta, según la creyera o no legal.

(180) Proyecto, artículo 170; Rojas, artículo 240; Buenos Aires, artículo 157; Entre Ríos, artículo 178; La Rioja, artículo 231; San Luis, artículo 214; Santa Fe, artículo 214; Silgueira, artículo 181; San Juan, artículo 188; Santiago del Estero, artículo 210.

Art. 144. — Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con permiso y por intermedio del juez (181). Este podrá también interrogarlas de oficio sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

Art. 145. — En caso de que el absolvente no conozca el idioma nacional, el juez nombrará un intérprete (182).

Art. 146. — Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando en cuanto sea posible el lenguaje de los que hayan declarado. Terminado el acto, el juez las hará leer, preguntando a las partes si tienen algo que agregar o rectificar.

Si agregaren o rectificaren algo se extenderá a continuación, firmando todas las partes con el juez y secretario y debiendo expresar, cuando ocurra, la circunstancia de no haber querido o podido firmar.

Si habiendo comparecido el citado rehusara responder, o lo hiciera de una manera evasiva o ambigua, el juez, a petición de parte, le intimará que conteste afirmativamente y no haciéndolo lo tendrá por confeso en la interrogación.

Art. 147. — Cuando por enfermedad u otro impedimento análogo del que deba declarar, no pudiera éste concurrir a la oficina, el juez o, en su caso, uno de los vocales de las cámaras, que sea comisionado al efecto, acompañado del secretario, se trasladará al domicilio del absolvente, donde se verificará la absolución a presencia de la otra parte o sin ella ni la de su abogado, según se resuelva de acuerdo con las circunstancias del caso. Si se resuelve que no asista la parte que pone las posiciones, se le dará vista de la confesión al sólo objeto de que, impuesto de ella, pueda pedir, dentro de

(181) Sin mediación de sus letrados o procuradores, dice la ley de enjuiciamiento española, artículo 588. Siempre, bien entendido, guardando la forma establecida para formular las posiciones, a estar a lo resuelto por la Jurisprudencia.

(182) Jurisprudencia. Entre Ríos, artículo 173; La Rioja, artículo 230; San Luis, artículo 209; Tucumán, artículo 133.

tercero día, que se repita para aclarar algún punto dudoso sobre el cual no haya sido categórica la contestación (183).

Si antes o al trasladarse a la casa de la parte averiguase el juez que ha podido concurrir, deferirá el interrogatorio para la próxima audiencia, intimándole que comparezca sin más citación. En este caso, el que haya alegado falso impedimento será condenado a pagar una multa que no exceda de quinientos pesos (184).

Art. 148. — Si el interesado estuviese fuera del lugar del juicio, las posiciones podrán ser absueltas por su apoderado, si estuviese facultado para ello, o se tomarán por el juez del lugar donde se encuentre, a elección de la parte que pone las posiciones.

Si la parte que hubiese de absolver posiciones residiese fuera de la República, deberá solicitarse término extraordinario para esta diligencia en las mismas condiciones que para las demás pruebas (185).

Art. 149. — Cuando las posiciones hubieran de absolverse fuera de la Capital, el juez deberá imponerse del pliego, y sólo librará los exhortos necesarios si las posiciones reúnen las condiciones prescriptas en el artículo 139 (186).

Art. 150. — En juicio en que sea parte la Nación, alguna repartición de la misma o la municipalidad, no estarán obligados a absolver posiciones el jefe de la administración en juicio, el ministerio público o quien la represente; pero deberán informar por escrito sobre los hechos que se les pre-

(183) Proyecto, artículo 172; Córdoba, artículo 205; Rojas, artículo 204; Mendoza, artículo 202; Buenos Aires, artículo 158; Entre Ríos, artículo 179; San Juan, artículo 194; Santiago del Estero, artículo 204.

El proyecto de Silgueira y los códigos de San Luis, artículo 215; Tucumán, artículo 138 y Santa Fe, artículo 208, niegan a la contraparte el derecho de asistir a la absolución. Considero más conveniente dejarlo librado al criterio del juez.

(184) Proyecto, artículo 173; Rojas, artículo 245.

(185) Proyecto, artículo 174; Rojas, artículo 246; La Rioja, artículo 236; Córdoba, 215; Santa Fe, 219; Santiago del Estero, artículo 214.

(186) Rojas, artículo 248; Entre Ríos, artículo 168; Mendoza, artículo 206; Silgueira, artículo 175.

gnante, debiendo al efecto tomar instrucciones en las oficinas públicas (187).

Si el absolvente fuese una persona jurídica, las posiciones serán absueltas por quien ejerza su representación (188).

Cuando se trate de sociedades, deberá expresarse cuál o cuáles de los socios hayan de absolver las posiciones (189).

La mujer casada no necesita venia del marido para absolver posiciones sobre hechos anteriores a su matrimonio o sobre los ocurridos durante él cuando sea actora o ejerza el comercio. El esposo deberá ser citado para que asista al acto si lo desea (190).

Art. 151. — La confesión judicial, aunque sea hecha ante juez incompetente (191), hace plena prueba contra el confesante, con las siguientes excepciones:

1º Cuando éste prueba que es el resultado de un error.

2º Si por ley fuera declarada insuficiente, o recayera sobre hechos cuya investigación o reconocimiento prohíbe la ley, o produjera la pérdida de derechos que el absolvente no puede renunciar o sobre los cuales no puede transigir.

3º Si fuera opuesta a las constancias de documentos fehacientes de fecha anterior, que estuviesen agregados a los autos (192).

(187) Jurisprudencia, Rojas, artículo 247; Santa Fe, artículo 201; Santiago del Estero, artículo 220; La Rioja, artículo 214; Silgueira, artículo 185.

(188) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 178; Entre Ríos, artículo 163; Silgueira, artículo 185.

(189) Proyecto, artículo 178; Buenos Aires, artículo 144; Entre Ríos, artículo 163; San Luis, artículo 201; Silgueira, artículo 185.

(190) Proyecto, artículo 179; Rojas, artículo 249; Entre Ríos, artículo 165; San Luis, artículo 202. Jurisprudencia anotada en mis comentarios, número 265.

(191) Rojas, artículo 181; Entre Ríos, artículo 185; Santa Fe, artículo 189; San Juan, artículo 203.

El proyecto le dá el valor de confesión extrajudicial; lo mismo hacen Buenos Aires, artículo 171 y Silgueira, artículo 192.

(192) Entre Ríos, artículo 181; Buenos Aires, artículo 161; Rojas, artículo 250; Silgueira, artículo 186; San Luis, artículo 219.

Córdoba, artículo 217; Mendoza, artículo 208; La Rioja, artículo 208; Santa Fe, artículo 189, legislan solo sobre el inciso 1º.

Art. 152. — La confesión judicial es indivisible; la parte que quiera aprovecharse de ella debe aceptarla en lo favorable como en lo desfavorable; pero podrá dividirse siempre que comprenda hechos separables o independientes entre sí, o cuando comprendiendo hechos conexos o que se modifiquen los unos a los otros, se produzca prueba en contrario o exista una presunción de derecho contra lo desfavorable (193).

En caso de duda la confesión debe interpretarse a favor de quien la hace (194).

Art. 153. — La confesión extrajudicial, sea verbal o escrita, será tomada en cuenta con arreglo a las disposiciones que rigen respectivamente la prueba testimonial y la instrumental (195).

CAPÍTULO III

PRUEBA INSTRUMENTAL

Art. 154. — El instrumento público presentado en copia expedida sin citación, en los casos que la ley la requiere, necesita para su eficacia la compulsa con el original, previa la citación omitida, si fuera impugnado. Pero si se tratara de copia antigua cuya matriz hubiera desaparecido se reputarán auténticos, salvo prueba en contrario (196).

(193) Rojas, artículo 254; Buenos Aires, artículo 163; Entre Ríos, artículo 183; Santa Fe, artículo 192; Córdoba, artículo 218; Mendoza, artículo 209; San Juan, artículo 201; La Rioja, artículo 210; Santiago del Estero, artículo 217; San Luis, artículo 222; Silgueira, artículo 188. Ver mis comentarios, números 308 a 310.

(194) Rojas, artículo 254; Buenos Aires, artículo 165; Entre Ríos, artículo 184; Santa Fe, artículo 193; Córdoba, artículo 219; San Juan, artículo 202; La Rioja, artículo 210; Santiago del Estero, artículo 218; San Luis, artículo 223; Silgueira, artículo 189. Ver mis comentarios, número 283.

(195) Proyecto, artículo 180. Ver mis comentarios, números 315 y 316.

(196) Rojas, artículo 203, inciso 1º; San Luis, artículos 232 y 233; Santa Fe, artículos 221 y 222; Silgueira, artículo 194; Córdoba, artículo 222; Mendoza, artículo 167, inciso 1º; Santiago del Estero, artículo 221; La Rioja, artículo 239; San Juan, artículo 206.

Art. 155. — Los litigantes podrán pedir el cotejo con el original, de cualquier copia de instrumento público presentado y que creyeran inexacta. Podrán, igualmente, cuando sólo se presente copia de parte del original, pedir que se agregue todo él o se haga la ampliación que juzgue conveniente (197). En ambos casos la diligencia será a sus expensas, sin perjuicio de lo que se disponga sobre las costas (198).

Art. 156. — La diligencia de compulsa o cotejo de la copia se hará por el actuario en la oficina en que se halle el original y a presencia de las partes si asistieran, a cuyo efecto se les notificará el día y hora en que haya de verificarse (199).

El juez podrá hacer por sí mismo el cotejo y ordenar se traiga el documento original a su despacho (200).

Art. 157. — Los litigantes o terceros en cuyo poder se encuentren documentos relativos a la cuestión, están obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se encuentren los originales.

El juez, a solicitud de parte y sin substanciación alguna, ordenará la exhibición fijando el término en que deba hacerse. La parte contra la cual se reclamen está obligada a presentarlos dentro de él o a declarar que no los posee ni ha dejado de poseerlos para evitar la exhibición (201).

(197) Santa Fe, artículos 223 y 227; Córdoba, artículos 223 y 226; San Luis, artículos 234 y 238; Silgueira, artículo 195; Tucumán, artículo 159; Santiago del Estero, artículos 222 y 225; La Rioja, artículos 241 y 244; San Juan, artículo 207.

(198) Silgueira, artículo 195; La Rioja, artículo 244.

(199) Santa Fe, artículo 244; San Juan, artículo 208; La Rioja, artículo 242; San Luis, artículo 235; Santiago del Estero, artículo 223; Córdoba, artículo 224.

Rojas, artículo 204, dispone que la compulsa se haga por el funcionario que conserve el original. Le sigue Mendoza, artículo 168.

Silgueira, artículo 196, por el secretario, por el funcionario que conserve el documento o por el que el juez designe.

(200) San Luis, artículo 236; Silgueira, artículo 192; Córdoba, artículo 224; Santiago del Estero, artículo 223; San Juan, artículo 208; La Rioja, artículo 242.

Rojas, artículo 205 y Santa Fe, artículo 225, agregan si no estuviera archivado, restricción que no tiene razón de ser en la Capital Federal.

(201) Rojas, artículos 206 y 207; Santa Fe, artículos 232 y 233; San Luis, artículo 244; La Rioja, artículos 250, 251, 253 y 254.

Cuando citado personalmente el litigante no exhibiera el documento o hiciera la declaración, o si se probase la existencia del documento en su poder, se tendrán por exactas las afirmaciones sobre su contenido, hechas por el adversario o la copia que de él hubiera presentado.

Si el intimado fuera un tercero responderá por los daños y perjuicios que causare su resistencia (202).

Art. 158. — Las copias de instrumentos públicos, que fueren expedidas durante el juicio, serán sacadas en virtud de mandamiento compulsorio y con citación de aquel a quien hayan de perjudicar (203).

Art. 159. — Todo aquel contra quien se presente en juicio, como prueba, un documento privado que se le atribuya, está obligado a declarar si es o no suya la firma; y si reputa falso el documento, a manifestar en qué consiste la falsedad, expresando los hechos y circunstancias en que se funda (204).

Los sucesores del firmante pueden limitarse a declarar que ignoran si la firma es o no de su causante.

Art. 160. — La citación para el reconocimiento de firma se hará bajo apercibimiento de que si el citado no compareciere sin justa causa se le dará por reconocido el documento (205).

Art. 161. — Si el citado negara la firma que se le atribuye o se atribuye a su causante, y en el caso de haberse tachado de falso el documento en la forma establecida en el artículo 159, deberá procederse a su comprobación, la cual podrá consistir en el cotejo o comparación de letras, sin perjuicio de los demás medios de prueba (206).

(202) Rojas, artículo 208; Santa Fe, artículo 234; San Luis, artículo 246; La Rioja, artículo 255.

(203) Santa Fe, artículo 226; Córdoba, artículo 225; La Rioja, artículo 243; Silguera, artículo 197; San Luis, artículo 237; Santiago del Estero, artículo 224; San Juan, artículo 206, inciso 1º.

(204) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 183; Buenos Aires, artículo 173; Entre Ríos, artículo 188; Tucumán, artículo 145; San Luis, artículo 249; Silguera, artículo 201.

(205) Proyecto, artículo 184; Santa Fe, artículo 240; La Rioja, artículo 260; Córdoba, artículo 237.

(206) Proyecto, artículo 185; Buenos Aires, artículo 176; Rojas, artículo 214; Santa Fe, artículo 242; Silguera, artículo 202; Córdoba, artículo 240 y 241; La Rioja, artículo 262.

Art. 162. — Pedido el cotejo, el juez convocará a las partes a que conengan en los documentos que deban servir para la comparación y nombren peritos que hayan de concurrir a la diligencia.

La citación se hará bajo apercibimiento de que el documento será reconocido si la falta de asistencia procede del impugnante o será desechado si procede de la otra parte.

Cuando se tratara de un documento argüido de falso, el actuario levantará acta en que se haga constar el estado material en que se encuentre, las enmiendas, entrerrenglonaduras, raspaduras y cualesquiera otras particularidades que en él se noten. Deberá además rubricar las fojas de aquél, pudiéndolo hacer también las partes si lo desean.

Art. 163. — Abierta la audiencia, cuando se trate de un documento argüido de falso, el juez intimará a la parte que lo hubiese presentado que manifieste si insiste o no en servirse de él. Si rehusare responder o dijese que no pretende hacerlo valer será desechado el documento como elemento de prueba.

Si declarase que quiere servirse del documento, el juez interpretará a la otra parte para que declare si persiste en sostener la falsedad. Si ésta rehusare responder o respondiese que no insiste en sostener la falsedad, el documento será admitido como auténtico.

Art. 164. — Si alguno de los interesados no concurriera o si no se pudiesen poner de acuerdo en la designación de los documentos para el cotejo, se tendrán como indubitados:

- 1º Las firmas consignadas en documentos auténticos.
- 2º Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya la que se trata de comprobar.
- 3º El impugnado en la parte que haya sido reconocido como verdadero por el impugnante.

A falta o en caso de ser insuficientes los documentos de cotejo, podrá ordenarse a la persona a quien se atribuya la letra o firma que forme un cuerpo de escritura que le dictarán los peritos o el juez. Si se negase a hacerlo, o si citado para hacerlo, bajo apercibimiento, no compareciera sin justa

causa el día designado al efecto, se tendrá por reconocido el documento denegado al sentenciar.

Art. 165. — Convenidos o designados los documentos de cotejo, el juez lo hará por sí mismo en audiencia especialmente designada a tal objeto, a la que serán citadas las partes y los peritos. Estos, sin perjuicio de presentar su dictamen por escrito, darán en la audiencia, todas las explicaciones que se les exijan.

Si el documento o los de cotejo se hallaren en protocolo o registro, el juez dispondrá que sea llevado a su despacho el día de la audiencia, citando al escribano o funcionario en cuya oficina se encuentre. Si no fuera posible llevar el documento original, podrá obtenerse copia fotográfica.

Si el documento estuviera redactado en idioma extranjero, el que lo presente deberá acompañar su traducción al idioma nacional; pero la parte contraria, cuando no se halle conforme con la traducción, podrá pedir al juez lo revise en esa misma audiencia. Los gastos de esta diligencia serán a cargo del que presentó el documento si la versión resultara defectuosa.

De todo lo que ocurra en esta audiencia se levantará acta.

Antes de resolver sobre la falsedad, el juez oír al ministerio público (207).

Art. 166. — Si de las diligencias de comprobación aparecieran indicios de falsedad se pasarán los antecedentes al juzgado del crimen.

Art. 167. — Los telegramas cuyas firmas estén autorizadas por un escribano con registro en el lugar en que fuesen despachados, serán considerados como instrumentos públicos. La fecha, salvo prueba en contrario, se establecerá por el día y hora en que hayan sido expedidos y recibidos en la oficina telegráfica (208).

(207) Rojas, artículo 226; Santa Fe, artículo 252; Córdoba, artículo 250; San Luis, artículo 261; Mendoza, artículo 186; Santiago del Estero, artículo 249; San Juan, artículo 240.

(208) Santa Fe, artículos 255 y 256; Córdoba, artículos 252 y 253; La Rioja, artículos 281 y 283; San Luis, artículos 263 y 264; Santiago del Estero, artículos 251 y 252; San Juan, artículos 232 y 233; Silgueira, artículo 208.

CAPÍTULO IV

PRUEBA PERICIAL

Art. 168. — Cuando el conocimiento o apreciación de los hechos controvertidos requiriese conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, se procederá al nombramiento de peritos a petición de parte.

La diligencia pericial será ejecutada por un perito, a no ser que las partes convengan en que sea hecha por dos (209).

En caso de discordia de los peritos, el juez nombrará un tercero (210).

Si alguna de las partes manifestara no tener interés en la pericia, la designación de perito se hará a costa del que hubiere solicitado la prueba, excepto el caso de condenación en costas, siempre que la diligencia hubiera sido útil para la solución del juicio, de lo que hará el juez mención expresa en el fallo (211).

Art. 169. — El perito o peritos serán nombrados por las partes de común acuerdo (212), en la audiencia que al efecto fijara el juzgado.

Si no compareciere ninguna de las partes o si compare-

(209) Proyecto, artículo 197; San Luis, artículo 268; La Rioja, artículo 289; Córdoba, artículo 268; Santiago del Estero, artículo 267.

Buenos Aires, artículo 186, determina dos peritos aún en el caso de nombramiento de oficio; Santa Fe, artículo 264; Mendoza artículo 250 y Tucumán, artículo 162, tres, si las partes no resuelven que sea uno solo.

Entre Ríos, artículo 200, uno o tres según lo resuelvan las partes o en su defecto el juez.

(210) Rojas, artículo 302; Buenos Aires, artículo 186.

La Rioja, artículo 291, prevé el caso de nombramiento de tercero únicamente cuando haya disconformidad de las partes para designarlo.

(211) Rojas, artículo 305, establece que en este caso el perito debe ser designado por el juez.

(212) Ver jurisprudencia en mis comentarios, número 362. Santa Fe, artículo 265; Mendoza, artículo 252; Entre Ríos, artículo 200; Córdoba, artículo 267; San Juan, artículo 251; Santiago del Estero, artículo 266; San Luis, artículo 269; La Rioja, artículo 290.

ciendo no se pusieran de acuerdo el juez hará la designación del perito único (213).

Compareciendo sólo una de ellas, el juez podrá nombrar el que aquélla le propusiere.

En la misma audiencia las partes establecerán los puntos sobre que haya de versar la pericia, los que podrán ser ampliados por el juez.

Art. 170. — Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre que ha de oirse su juicio, si la profesión o arte estuviese reglamentada; no estándolo podrán designarse personas idóneas en la materia de que se trate.

Art. 171. — El perito nombrado de oficio podrá ser recusado por las mismas causas porque pueden ser recusados los jueces, hasta tres días después de hecha la designación.

Propuesta la recusación mandará el juez que se haga saber por cédula al perito recusado para que en el término de veinticuatro horas manifieste si es o no cierta la causal.

Si reconoce como cierta la causal, se le tendrá por separado. Si fuera contradicha, el juez resolverá sumariamente y sin recurso.

Admitida la recusación se procederá a reemplazar al perito en el mismo auto.

Rechazada, las costas serán a cargo del recusante.

Art. 172. — Los peritos aceptarán el cargo bajo promesa de desempeñarlo bien y fielmente (214), dentro de tercero día desde la designación, en caso de hacerla las partes, o de la notificación si fué de oficio. Si no comparecieran a aceptar el cargo se procederá a la designación de oficio de perito único, en el primer caso, y al reemplazo en el segundo (215).

(213) Por los códigos de Santa Fe, artículos 269 y 270; Córdoba, artículos 272 y 273; Santiago del Estero, artículos 271 y 272, el nombramiento de perito de oficio se hará de una lista de tres por cada parte, que formará el juzgado.

(214) Ver mis comentarios, número 383, sobre supresión del juramento; Silgucira, artículo 212.

(215) El código de Santa Fe, artículo 272, hace obligatoria la aceptación.

Art. 173. — En todos los casos de designación de peritos, se les fijará el término en que deban expedir su dictamen (216) por escrito, bajo apercibimiento de que en caso de no expedirse dentro de él serán condenados a los gastos de la diligencia frustrada y responsables por daños y perjuicios a las partes.

Los peritos practicarán unidos las diligencias y las partes podrán asistir a ellas y hacerles las observaciones del caso, debiendo retirarse cuando pasen a deliberar; pero podrán expedirse separadamente.

La negligencia de un perito no excusa a los otros, quienes deben en tal caso practicar la diligencia y dictaminar dentro del término (217).

Art. 174. — El dictamen pericial contendrá opinión fundada del o los peritos que intervengan.

Las partes podrán enterarse de él en la secretaría y a instancia de cualquiera de ellas o de oficio, podrá el juez mandar que comparezcan los peritos a dar explicaciones en audiencia que señalará a ese objeto.

El perito que no asista a la audiencia, sin causa justificada, perderá sus honorarios.

La providencia que designe audiencia será notificada a los peritos por cédula.

Art. 175. — La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la uniformidad o disconformidad de las opiniones y los principios científicos en que se funden, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas o elementos de convicción que la causa ofrezca.

A los fines de esa apreciación, el juez, para mejor proveer, podrá pedir informes a las oficinas técnicas de la Nación cuando el dictamen exija conocimientos científicos (218).

(216) Tucumán, artículo 172.

(217) Rojas, artículo 317; Santa Fe, artículo 284; Córdoba, artículo 292; San Juan, artículo 263; Santiago del Estero, artículo 291; San Luis, artículo 213; La Rioja, artículo 314.

(218) Rojas, artículo 325; Córdoba, artículo 285; Entre Ríos, artículo 207; San Juan, artículo 272; Santiago del Estero, artículo 292; San Luis, artículo 284; La Rioja, artículo 315.

CAPÍTULO V

PRUEBA DE TESTIGOS

Art. 176. — Puede ser testigo toda persona mayor de catorce años que no se halle afectada por alguna tacha absoluta; pero no podrán ser presentados como testigos contra una de las partes, sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge aunque esté divorciado (219), salvo en juicios que versen sobre el estado de familia (220).

No hay obligación de declarar sobre el hecho confiado o conocido bajo secreto profesional, salvo consentimiento del interesado (221).

Art. 177. — La parte que pretenda producir prueba de testigo presentará una lista de ellos en la oportunidad establecida por el artículo 120, con expresión de nombre, profesión y domicilio y acompañará en sobre cerrado el interrogatorio a cuyo tenor hayan de ser examinados (222).

Podrá en esa oportunidad, o hasta tres días antes de la audiencia que se les haya designado, solicitar que se citen por el juzgado algunos o todos los testigos ofrecidos (223). Cuando no hubiere solicitado la citación, será de su cargo hacerlos

(219) Proyecto, artículo 207; Buenos Aires, artículo 193; Entre Ríos, artículo 209; Rojas, artículo 217; Córdoba, artículo 324; La Rioja, artículo 354.

Mendoza, artículo 224; San Juan, artículo 284; Santiago del Estero, artículo 322, extienden la prohibición a los hermanos o afines de segundo grado, al tutor y sus pupilos.

(220) Entre Ríos, artículo 209; Silgueira, artículo 266.

(221) Entre Ríos, artículo 209; Silgueira, artículo 227; Santa Fe, artículo 315; Córdoba, artículo 323; Mendoza, artículo 225; San Luis, artículo 310; San Juan, artículo 283; Santiago del Estero, artículo 321, prohíben presentar como testigos a los que se encuentren en ese caso. Yo sigo la jurisprudencia establecida en la Capital.

(222) Entre Ríos, artículo 211; Mendoza, artículo 217.

La Rioja, artículo 236 y Córdoba, artículo 295, disponen que el interrogatorio se presente abierto.

Tucumán, artículo 185, deja las preguntas al criterio del juez, pero permite presentar otras en pliego cerrado.

(223) Proyecto, artículo 210; Rojas, artículo 266; Entre Ríos, artículo 213.

comparecer, sin que puedan dictarse contra ellos medidas conminatorias ni imponérseles penas por inasistencia (224).

La parte que ha presentado testigos puede renunciar al examen de ellos, pero la contraria tendrá derecho a exigir que el examen se verifique (225).

Art. 178. — En los juicios ordinarios, no podrá presentar cada parte más de quince testigos. En los demás juicios hasta cinco (226).

Art. 179. — Cuando la prueba testimonial fuese admisible, el juez la mandará recibir, señalando, con cinco días al menos de anticipación, la audiencia en que ha de tener lugar el examen de los testigos, y ordenará la citación de éstos, en su caso, con un día de intervalo por lo menos, por cédula en papel común, en que se transcribirá los apartados siguientes de este artículo.

Si no comparecieren, el juez de oficio los condenará a pagar una multa de veinte pesos moneda nacional y ordenará la citación para otra audiencia.

Si citados nuevamente no comparecieren incurrirán en el décuplo de la multa y el juez deberá mandarlos traer por la fuerza pública y ordenará que permanezcan detenidos hasta que presten declaración, que les será tomada el mismo día en que fuesen habidos, habilitando horas en caso necesario (227).

Art. 180. — No se impondrán las penas del artículo anterior si el testigo alegare, antes de la audiencia, justo impedimento para comparecer o si, en caso de no hacerlo, justificara más tarde haber estado legítimamente impedido.

Art. 181. — Cuando los testigos obligados a comparecer sean artesanos o jornaleros, el juez, si lo solicitaran, fijará antes de tomarles declaración la indemnización que les corresponda, teniendo en cuenta el tiempo a emplearse en cada

(224) Proyecto, artículo 211; Entre Ríos, artículo 217.

(225) San Luis, artículo 318.

(226) El número de testigos varía en los distintos códigos provinciales. Aceptan quince para el juicio ordinario. Proyecto, artículo 207; Buenos Aires, artículo 193; Rojas, artículo 263; San Luis, artículo 287.

(227) Buenos Aires, artículo 201.

caso. Dicha indemnización se pagará dentro de cuarenta y ocho horas, y se ejecutará por vía de apremio.

Contra el auto que acuerda la indemnización no se da recurso (228).

Art. 182. — Exceptúanse de la obligación de comparecer a prestar declaración: el presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los miembros del Congreso, los ministros de la Suprema Corte, los vocales de las cámaras de apelaciones, los jueces, los prelados, los miembros del Cabillo Eclesiástico, los oficiales superiores del ejército y de la armada y los jefes de reparticiones de la administración, todos los cuales prestarán sus declaraciones por medio de informes escritos.

También serán interrogados por medio de oficios los gerentes de bancos, de ferrocarriles y otras empresas o establecimientos análogos, cuando se trate de actos u operaciones referentes a los establecimientos que dirigen (229).

Art. 183. — El día señalado y dentro de media hora de la indicada en la cédula, a más tardar, los testigos serán llamados a prestar declaración a tenor del interrogatorio presentado.

Antes de declarar se le exigirá afirmación de decir verdad. Luego, aunque la parte no lo pida, será interrogado:

Por su nombre, edad, nacionalidad, profesión y domicilio, relación, parentesco, dependencia y negocios con los liti-

(228) Buenos Aires, artículo 220; Entre Ríos, artículo 215; San Luis, artículo 317.

Los códigos de La Rioja, artículo 358; Mendoza, artículo 242; Tucumán, artículo 211; San Juan, artículo 307; Santiago del Estero, artículo 326 y el proyecto para la Capital, conceden el derecho a pedir indemnización a todos los testigos.

Esto, en mi concepto, puede constituir un obstáculo a la producción de la prueba testimonial si la indemnización ha de ser proporcionada a la utilidad que puede haber dejado de obtener el testigo en el tiempo exigido por la declaración. Atendiendo a ello, entre una solución por la que se estableciera una suma fija para todos, lo que no resultaría equitativo, y la de conceder el derecho a pedir la indemnización a los que por su situación aparecen *prima facie* más perjudicados por sus medios de vida, opto por ésta.

(229) Proyecto, artículo 223; Tucumán, artículo 209.

gantes, como asimismo si tienen interés directo o indirecto en el pleito (230).

El juez lo examinará en seguida sobre los puntos que comprenda el interrogatorio, los que agregara el que lo presentó, y sobre las preguntas que por su intermedio podrá formular la otra parte, con claridad y en forma no sugerente.

Podrá también pedir a los testigos las explicaciones que juzgue necesarias sobre los hechos objeto de la prueba.

Los testigos que no hablasen el idioma nacional serán examinados con intervención de un intérprete designado en la forma que prevé el artículo 145.

Art. 184. -- En el examen de testigos se observará lo dispuesto en los artículos 140 y 146.

Los testigos estarán en lugar donde no puedan oír las declaraciones y serán examinados separada y sucesivamente por el orden en que estuvieren en la lista, salvo el caso en que el juez, por causas especiales, resolviera alterarlo.

Después que presten declaración permanecerán en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiera otra cosa por motivos atendibles.

Darán siempre razón de su dicho. Si no lo hicieran, el juez la exigirá, procurando dejar bien esclarecida la ciencia y sinceridad del testimonio.

Los testigos cuyas declaraciones parezcan contradictorias podrán ser careados entre sí.

Cuando las declaraciones ofrecieran indicios de falso testimonio o soborno, el juez decretará la prisión de los presuntos culpables y los remitirá a la disposición del juez del crimen, con testimonio de la parte de la prueba referente a esos indicios.

Art. 185. — Los jueces, según el prudente arbitrio, fijarán el número de testigos que deben comparecer a cada audiencia.

(230) Proyecto, artículo 215; Rojas, artículo 266.

Cuando no sea posible el examen de todos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación, expresándose así en el acta que se extienda.

Si la inspección de algún sitio contribuye a la claridad del testimonio, podrá hacerse en él el examen de los testigos.

Art. 186. — Si alguno de los presentes al acto de las declaraciones interrumpiese al testigo, será condenado a una multa que no exceda de cincuenta pesos. En caso de reincidencia incurrirá en doble multa y podrá, además, ser expulsado de la audiencia.

Art. 187. — Cuando alguno de los testigos se halla imposibilitado de comparecer, será examinado en la casa donde se encuentre, en la forma prescripta en el artículo 147.

Art. 188. — Si los testigos debieran declarar en su domicilio, por oficio, o cuando residen fuera de la Capital, antes de que se constituya el juzgado o se libre el oficio o exhorto, se abrirá el interrogatorio a cuyo tenor serán examinados y se dará vista de él a la contraparte para que, en el término de veinticuatro horas, presente un pliego de repreguntas, si le conviene, el que será enviado juntamente con el interrogatorio (231).

Los litigantes pueden hacerse representar en el lugar de las declaraciones. El nombre del representante se hará constar en el exhorto.

Art. 189. — En los asuntos que haya urgencia podrán abreviarse los términos señalados en el artículo 179.

Art. 190. — Las declaraciones en que no se hubieran observado las disposiciones de esta ley no tendrán valor alguno.

Art. 191. — Los jueces y tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos.

(231) Jurisprudencia.

El código de Tucumán, artículo 186, permite presentar las repreguntas en pliego cerrado, que abrirá el juez para examinar y volver a cerrar para enviarlo con el exhorto.

CAPÍTULO VI

TACHAS

Art. 192. — Cada parte puede tachar los testigos presentados por la contraria (232).

Son causales de tacha:

- 1º La enajenación mental.
- 2º La ebriedad consuetudinaria.
- 3º La falta de industria o profesión honesta conocida.
- 4º La calificación de quebrado fraudulento.
- 5º Haber sido el testigo condenado por delito de falsedad, contra la propiedad o cualquier otro que merezca pena de presidio o reclusión (233).

Constituyen tachas relativas todas las circunstancias que puedan inclinar al testigo a deponer en favor de la parte que lo presenta o en contra de la otra, y aquellas que hagan presumir que no es digno de fe o que no puede conocer los hechos sobre los cuales está llamado a declarar (234).

Art. 193. — Las tachas absolutas serán alegadas hasta cinco días después de evacuado el traslado del artículo 120, ofreciendo la prueba de que se valdrá el oponente, la que deberá producirse en el término señalado para lo principal.

Del escrito en que se oponga la tacha se dará traslado al que presenta los testigos, con término de tres días, para que en él ofrezca la prueba si persiste en valerse de aquéllos.

Si la tacha se opusiera contra testigos que hubieran de examinarse fuera de la Capital y se ofreciese probarla en el lugar de la declaración, podrán insertarse en los exhortos los interrogatorios correspondientes.

De lo relativo a las tachas se tomará cuaderno por separado (235).

(232) Ver mis comentarios, número 457.

El código de Córdoba permite a cada parte tachar sus testigos.

(233) Proyecto, artículo 226.

(234) Proyecto, artículo 228; Entre Ríos, artículo 232. Ver mis comentarios, números 471 y 472.

(235) Buenos Aires, artículo 224.

Art. 194. — Las declaraciones de testigos cuya tacha absoluta hubiera sido probada no tendrán valor alguno.

La importancia de las tachas relativas será apreciada por el juez en la sentencia con arreglo a lo prescripto en el artículo 191 (236).

CAPÍTULO VII

INSPECCION OCULAR

Art. 195. — Cuando fuera necesaria (237) la inspección ocular de algún sitio se decretará, a instancia de las partes o de oficio, designando el día y hora en que deberá tener lugar, en la providencia que la decreta.

Las partes o sus apoderados serán especialmente citados, con anticipación de un día por lo menos. Podrán asistir con sus letrados y hacer al juez las observaciones que crean oportunas.

El juez podrá ordenar que concurran a la diligencia los testigos o peritos cuyas explicaciones crea necesarias (238).

De lo que ocurra se levantará acta.

!

CAPÍTULO VIII

JURAMENTO JUDICIAL

Art. 196. — Cada parte podrá, mientras no esté notificada la providencia de autos para sentencia, deferir al juramento de la contraria la decisión del pleito. De este procedi-

(236) Rojas, artículo 298; Buenos Aires, artículo 225; Entre Ríos, artículo 234; Tucumán, artículos 220 y 221; San Luis, artículos 235 y 237.

(237) Empleo los términos «cuando fuera necesaria» al proyectar sobre la inspección ocular, porque, librada exclusivamente su procedencia al eritorio judicial, como lo está en el código vigente, no es un medio de prueba. Ver mis comentarios, número 498.

(238) Rojas, artículo 329; Tucumán, artículo 177; Entre Ríos, artículo 236.

miento sólo podrá usarse respecto de las cuestiones que pueden ser objeto de transacción y siempre que los litigantes tengan capacidad para transigir.

El juramento debe, en todos los casos, ser prestado personalmente por el litigante en presencia del juez, a cuyo efecto se le citará por cédula entregándole copia del escrito en que se solicita la diligencia, con tres días de intervalo a la audiencia en que haya de prestarse.

Si compareciera y prestare el juramento que le es deferido, el juez decidirá la cuestión teniendo como cierto lo jurado.

Si no concurriese sin causa justificada o si se negase a prestar el juramento, se tendrá como cierto lo afirmado por la parte que lo definió (239).

CAPÍTULO IX

PRESUNCIONES

Art. 197. — Las presunciones judiciales harán prueba cuando sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que proceda la prueba de testigos (240).

CAPÍTULO X

CONCLUSION DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA

Art. 198. — Cuando no hubiera mérito para recibir la causa a prueba quedará concluida para la definitiva con la contestación de la demanda o la reconvencción, a menos que la cuestión fuese de puro derecho, en cuyo caso deberá procederse con arreglo a lo prevenido en el artículo 117.

(239) Proyecto, artículos 234 y 235; Rojas, artículos 259 y 260.

(240) Mendoza, artículo 214; Entre Ríos, artículo 237.

Art. 199. — Si se hubieran producido pruebas, dentro del segundo día de vencido el término probatorio el secretario hará la agregación de ellas con certificado que exprese la producida por cada una de las partes (241).

El juez, sin más trámite, hará saber la agregación y ordenará que se pongan los autos a estudio de los interesados en secretaría para que presenten sus alegatos en término de doce días comunes, dentro de los cuales les será entregado el expediente por seis días a cada uno.

Cuando intervenga el asesor de menores o el agente fiscal se les correrá vista por seis días, después de agregados los alegatos de las partes (242).

Art. 200. — Agregados los alegatos, o vencido el término para presentarlos, el secretario pondrá el expediente al despacho, y el juez, acto continuo, llamará autos para sentencia.

Con esta diligencia quedará cerrada toda discusión y no podrá presentarse escrito ni prueba alguna, salvo los que el juez creyera convenientes para mejor proveer y lo dispuesto por el Código Civil sobre la prescripción (243).

TITULO IV

TERMINACION DE LOS JUICIOS

CAPÍTULO I

DESISTIMIENTO

Art. 201. — En cualquier estado de un juicio ya trabado, anterior a la sentencia definitiva, podrán las partes desistir de sus acciones, excepciones o recursos.

Todo desistimiento se entenderá que es de la acción o de la excepción y deberá decretarse sin más trámite.

(241) Entre Ríos, artículo 238; Buenos Aires, artículo 240; Tucumán, artículo 226; Mendoza, artículo 273; San Luis, artículo 343.

(242) Entre Ríos, artículo 239; Tucumán, artículo 227.

(243) Rojas, artículo 335; Mendoza, artículo 279.

CAPÍTULO II

TRANSACCION

Art. 202. — Cuando las partes se avinieran a una transacción, surtirá efecto, sin necesidad de ratificación ni otra diligencia, desde que fuere presentada, salvo el caso de intervenir en el juicio el ministerio de menores, en el cual será necesario su dictamen y el pronunciamiento del juez sobre la transacción (244).

CAPÍTULO III

PERENCION DE LA INSTANCIA

Art. 203. — Se tendrán por abandonadas las instancias si no se insta el curso dentro de los plazos siguientes:

- 1º Dentro de un año si el juicio se encuentra en primera o única instancia.
- 2º Dentro de seis meses cuando estuviera en segunda o tercera instancia en virtud de recurso.
- 3º En los términos fijados por las leyes generales para prescribir las acciones si fuesen menores que los establecidos en los incisos precedentes.

El término para la caducidad de la instancia empezará a contarse desde la última diligencia judicial (245), en petición que tuviere por objeto iniciar o seguir el juicio (246), y se interrumpirá por cualquier gestión del interesado, constatada en autos, que tienda a activar el procedimiento (247).

(244) Suprimo el trámite innecesario de la ratificación, exigido actualmente, ajustándome a las disposiciones del Código Civil declaro innecesaria la aprobación judicial tratándose de litigantes mayores de edad.

(245) Rojas, artículo 604.

(246) Buenos Aires, artículo 397.

(247) Rojas, artículo 604.

Se computará a los efectos de la perención de la instancia el término durante el cual los autos se han encontrado pendientes de resolución judicial, sin que los interesados hayan usado de los recursos de ley para obtenerla (248).

Art. 204. — Es obligación del secretario ante quien tramiten los autos, dar cuenta al juez luego que transcurran los términos señalados por el artículo 203 (249).

El juez, previa vista fiscal, tendrá por abandonada la instancia.

Los litigantes podrán también pedir la declaratoria de caducidad por vía de acción o de excepción antes de consentir ningún trámite del procedimiento.

En el caso del primer apartado podrá solicitarse la revocación del auto, fundándose, únicamente, en haber error en el cómputo del tiempo (250).

Cuando es alegada por una de las partes, el juez oír a la contraria y al agente fiscal con término de tres días y procederá a resolver.

Art. 205. — La perención de la instancia se producirá contra el Estado, los menores y cualquiera otra persona, tenga o no la libre administración de los bienes, salvo los recursos contra los administradores o representantes.

Art. 206. — La perención en primera o única instancia anula los procedimientos, pero no extingue la acción, que podrá ejercitarse en nueva demanda.

En las demás instancias la perención dará fuerza de cosa juzgada a la sentencia recurrida.

Art. 207. — No obstante la perención de la instancia, las partes podrán usar en el nuevo juicio que promovieren, los instrumentos públicos o privados, la confesión, las declaraciones de testigos y demás pruebas producidas, sin que ellas tengan el efecto de interrumpir la prescripción.

(248) Rojas, artículo 611 y su nota. Santa Fe, artículo 1.106; Silguera, artículo 260.

(249) Buenos Aires, artículo 253; Entre Ríos, artículo 400; Santa Fe, artículo 356.

(250) Buenos Aires, artículo 255.

Art. 208. — Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a la ejecución de sentencias.

Art. 209. — Notificada la sentencia de primera instancia, el incidente de caducidad deberá promoverse ante el tribunal de apelación, rigiendo las disposiciones relativas a la perención en segunda instancia.

Art. 210. — Las costas causadas en el juicio objeto de la perención serán a cargo de la parte declarada en deserción (251).

CAPÍTULO IV

SENTENCIA

Art. 211. — La sentencia expresará la fecha de su pronunciamiento, los nombres de las partes y el objeto del pleito. Contendrá una relación sucinta de la causa y la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas en juicio, sin atenerse a la calificación de los litigantes (252), condenando o absolviendo de la demanda en todo o en parte.

Si se hubieren opuesto varias excepciones o defensas, bastará el pronunciamiento sobre una sola cuando ella determine el rechazo total de la demanda (253).

Las sentencias que no se ajusten a las prescripciones de este artículo serán nulas (254) y los jueces que las hayan dictado incurrirán en una multa, que no podrá exceder de cien pesos moneda nacional, que se hará efectiva una vez que exista ejecutoria (255).

Art. 212. — Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida, o establecerá las bases sobre que haya

(251) La Rioja, artículo 412.

(252) Jurisprudencia. Santa Fe, artículo 353; San Juan, artículo 336.

(253) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 239; Rojas, artículo 103; Silgueira, artículo 266; Santiago del Estero, artículo 347.

(254) Ver Jurisprudencia en mis comentarios, números 510 y 514.

(255) Buenos Aires, artículo 261; San Luis, artículo 366.

de hacerse la liquidación, o deferirá la determinación de su monto al juramento del actor, señalando un límite. Si las partes no hubiesen hecho la estimación pertinente la liquidación se practicará al ejecutarla (256).

La sentencia podrá también deferir al juramento del actor, señalando un límite, la fijación del importe del crédito reclamado, cuando su existencia esté comprobada y no resulte justificado el monto (257).

Art. 213. — La sentencia definitiva será dictada dentro de sesenta días contados desde que quedó ejecutoriada la providencia de autos.

Art. 214. — Con la notificación de la sentencia concluye la jurisdicción del juez respecto al pleito, y no podrá hacer en ella variación o modificación alguna.

Podrá, sin embargo, a petición de parte, formulada dentro de veinticuatro horas, corregir cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión; suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Podrá igualmente resolver sobre medidas precautoria (258).

TITULO V

DE LOS RECURSOS

CAPÍTULO I

REPOSICION

Art. 215. — El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias interlocutorias dictadas sin subs-

(256) Proyecto, artículo 240; Santiago del Estero, artículo 353.

(257) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 241.

(258) Quedan comprendidas en esta palabra toda medida de seguridad que emerja del fallo, según lo ha declarado la Cámara de lo Comercial en el tomo 66, página 179.

tanciación previa (259), a efecto de que el mismo juez que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

Deberá interponerse por escrito dentro de tercero día (260), o verbalmente y en el mismo acto cuando se trate de resoluciones dictadas en las audiencias, y se resolverá por el juez en término de tres días, previo traslado a la otra parte en el primer caso, y en la misma audiencia en el segundo (261).

La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado por el de apelación en subsidio y la providencia reclamada reuniera las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que la interlocutoria sea apelable (262).

Los jueces pueden revocar de oficio las providencias que dicten, mientras no hayan quedado consentidas (263).

CAPÍTULO II

APELACION

Art. 216. — El recurso de apelación sólo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que decidan algún artículo o causen gravamen irreparable.

(259) Proyecto, artículo 243; Entre Ríos, artículo 247; Buenos Aires, artículo 266; San Luis, artículo 377; Rojas, artículo 336; Tucumán, artículo 783; Santa Fe, artículo 1.205; Córdoba, artículo 1.237; La Rioja, artículo 1.548; San Juan, artículo 343; Santiago del Estero, artículo 1.243.

(260) Buenos Aires, artículo 267; Entre Ríos, artículo 248; Tucumán, artículo 784.

(261) Proyecto, artículo 244.

Rojas, artículo 244, declara facultativo del juzgado pronunciarse en ese acto.

(262) El código de Buenos Aires, artículo 268, suprime la apelación en subsidio y la concede del auto que resuelve la revocatoria, lo siguen San Luis, artículo 379 y Silgueira, artículo 274.

Mendoza, artículo 282, declara inapelable el auto.

(263) Proyecto, artículo 246; Tucumán, artículo 786.

Rojas, artículo 342, nota 1, declara que no acepta este inciso por las razones que dan Caravantes y de la Colina. Lo incluyo para evitar los incidentes que se han producido por no existir en el código vigente en términos expresos.

Buenos Aires, artículo 269 y San Luis, artículo 380 permiten la revocatoria de oficio mientras la providencia no haya sido notificada, lo que a mi juicio no es necesario establecer.

El término para apelar será de cinco días para las primeras y de tres en los demás casos, salvo disposición en contrario.

La apelación de sentencia definitiva, salvo casos especiales previstos, se otorgará libremente y en ambos efectos, a no ser que el interesado solicitara que se le conceda sólo en relación. La de providencias y autos se concederá en relación y también en ambos efectos, si la ley no dispone que se otorgue en uno solo.

Cuando se conceda la apelación en ambos efectos, por la misma providencia se mandará remitir los autos originales al tribunal de apelación. Si fuese sólo concedida con efecto devolutivo, se sacará testimonio en papel común de lo que el apelante indicare, con las adiciones que el colitigante hiciere y el juez estimare necesaria y ese testimonio se remitirá al superior. Pero si la resolución recurrida estuviese ejecutada o no hubiera que practicar diligencia alguna para su cumplimiento, se remitirán los autos originales.

En todos los casos la remisión se hará dentro de las 24 horas de la última notificación. Cuando hubiere de tomarse compulsa, el juez señalará el término que para ello creyese necesario.

Art. 217. — La apelación podrá interponerse por escrito, o ante el actuario, en el acto de la notificación.

El recurrente podrá limitarse a la mera interposición del recurso, o expresar en él los fundamentos de la apelación, cuando lo haga por escrito. En este caso no podrá presentar ante la cámara escrito de agravios o memorial.

Art. 218. — Si el juez denegara la apelación, la parte que se considere agraviada podrá ocurrir directamente en queja al superior dentro de tercero día, pidiendo que se le otorgue la apelación denegada y se ordene la remisión de los autos. Al interponerse este recurso, deberá acompañarse copia simple de la providencia recurrida, autorizada por el secretario, y de los recaudos necesarios; pero en caso de no dársele la copia, el apelante cumple con presentarse al superior inter-

poniendo la queja en tiempo y dando cuenta de la falta del actuario, que será penado con veinte pesos de multa (264).

Para resolver sobre la procedencia del recurso, el superior pedirá informe al juez, quien deberá expedirlo dentro de 24 horas, y podrá, si considera insuficiente el informe, disponer que se le remitan los autos (265).

La tramitación del juicio no se suspende mientras el superior no conceda la apelación, lo que deberá hacer saber al inferior dentro de 24 horas de resuelto.

Art. 219. — Si alguna de las partes tuviera reclamo que formular sobre la forma o efectos en que se haya concedido el recurso, deberá manifestarlo dentro de 24 horas, por escrito que se agregará al expediente.

Art. 220. — Trancurridos los términos expresados sin interponerse apelación, quedan consentidas las sentencias o resoluciones sin necesidad de declaración alguna.

CAPÍTULO III

NULIDAD

Art. 221. — El recurso de nulidad procede cuando en el procedimiento se hayan omitido las formas substanciales del juicio, o incurrido en algún defecto o vicio de los que por expresa disposición de derecho anule las actuaciones (266).

No se declarará nulo por vía de recurso un procedimiento sino cuando el vicio haya podido influir realmente en contra de la defensa, restringiendo la audiencia o la prueba (267).

Art. 222. — Ningún defecto u omisión de la sentencia podrá dar lugar al recurso de nulidad. De ello debe reclamarse por apelación. El superior, al pronunciarse sobre el fondo del litigio, podrá imponer al juez una multa que no exceda

(264) Entre Ríos, artículo 258; Santa Fe, artículo 1.234; Córdoba, artículo 1.261.

(265) Jurisprudencia. San Luis, artículos 398 y 399.

(266) Buenos Aires, artículo 281; Tucumán, artículo 799.

(267) Entre Ríos, artículo 267; Santa Fe, artículo 1.246; Córdoba, artículo 1.271; Tucumán, artículo 804; San Juan, artículo 363; Santiago del Estero, artículo 1.273.

de doscientos pesos cuando los defectos o las omisiones sean graves (268).

Art. 223. — Sólo podrá deducirse recurso de nulidad contra los autos, providencias o sentencias de que pueda interponerse apelación. Se interpondrá siempre con éste en la misma forma y término. El superior conocerá de ambos al mismo tiempo y por los mismos trámites (269).

Art. 224. — La nulidad por defectos de procedimientos quedará subsanada si no se reclama la reparación de los vicios en la instancia en que se cometieron (270).

Art. 225. — Si el recurso de nulidad fuera procedente se declarará nulo todo lo obrado desde la actuación que dió motivo a ella y se pasarán los autos a otro juez para que conozca en el juicio.

Las costas en el caso serán a cargo del juez, a quien podrá además el superior aplicar una multa que no exceda de doscientos pesos, si el vicio de procedimiento es imputable a culpa o negligencia del juzgado (271).

Art. 226. — Las personas de cuya audiencia o intervención se haya prescindido en el juicio podrán ratificar los procedimientos aún después de pronunciada la sentencia (272).

TÍTULO VI

PROCEDIMIENTO EN 2ª INSTANCIA

CAPÍTULO I

DEL RECURSO LIBRE

Art. 227. — En el día en que los autos lleguen a la cámara se ordenará sean puestos en la secretaría, para que

(268) Proyecto, artículo 258; Entre Ríos, artículo 263; Tucumán artículo 800.

(269) Buenos Aires, artículo 282; Rojas, artículos 352 y 353; Santa Fe, artículo 1.241; Córdoba, artículo 1.266; Tucumán, artículo 801.

(270) Buenos Aires, artículo 283.

(271) Proyecto, artículo 255.

(272) Proyecto, art. 257; Rojas, artículo 359; Tucumán, artículo 806

el apelante exprese agravios dentro de nueve días. En la misma providencia se designarán los días de la semana en que las partes deben comparecer a la oficina del ujier a ser notificados.

Del escrito de expresión de agravios se dará traslado por igual término.

Art. 228. — Si el apelante no expresara agravios en término, se declarará desierto el recurso ordenándose la devolución de los autos.

Si el apelado no contestara el traslado, el secretario pondrá nota de ello al vencimiento y el juicio seguirá su curso.

Con los escritos indicados quedará concluida la instancia y se llamará autos para sentencia.

Art. 229. — Si se hubiera concedido libremente una apelación que sólo procedía en relación, el tribunal, de oficio, lo declarará antes de poner los autos para expresar agravios y dará al recurso el trámite que corresponde (273).

Art. 230. — Con los escritos del artículo 227, podrán las partes presentar documentos de fecha posterior al tiempo en que pudieron producirse en primera instancia o los que hubieran sido indebidamente rechazados por el inferior.

De los que cada litigante presente se dará traslado con término de tres días.

Podrán también en dichos escritos:

1º Exigirse confesión judicial sobre hechos que no hayan sido objeto de igual prueba anteriormente, rigiendo sobre ello lo establecido en el capítulo II del título III.

2º Solicitar la apertura del juicio a prueba — determinando los hechos que se intente probar y la clase de prueba que haya de producirse (274) — en los siguientes casos:

(273) Rojas, artículo 388; San Luis, artículo 420.

(274) Tucumán, artículo 185; San Juan, artículo, 381; Santiago del Estero, artículo 1.287.

- a) Cuando se alegue algún hecho nuevo que tenga influencia en la decisión del juicio, posterior al pedido de pruebas en primera instancia;
- b) Para producir prueba ofrecida ante el inferior que por motivos no imputables al solicitante no se hubiera diligenciado (275);
- c) Cuando el rebelde se hubiera presentado al juicio después de vencido el término señalado para producir prueba en primera instancia, si hubiera incurrido en rebeldía sin culpa suya (276).

Art. 231. — Cuando la prueba se ofreciera por el apelado, se dará traslado del pedido al apelante para que en término de cinco días proponga la de su parte.

El término de prueba en estos casos será de veinte días y regirá en su producción lo dispuesto en el título III.

En todos los actos de prueba ante el tribunal llevará la palabra el presidente; pero los demás vocales podrán hacer, con su venia, preguntas que estimen convenientes.

Art. 232. — Para las diligencias de prueba que hubieren de practicarse fuera del tribunal, si éste no considerase necesario asistir en cuerpo, podrá concurrir al efecto uno de sus miembros.

Art. 233. — Los litigantes o sus letrados podrá informar *in voce*, cuando se hubiera producido prueba en la instancia, o presentar sobre ella un alegato dentro de tres días desde la notificación de la providencia de autos.

Art. 234. — Los miembros del tribunal se instruirán separadamente de los expedientes, en el término que a cada uno señale el presidente dentro del fijado por esta ley para pronunciar el fallo.

(275) Proyecto, artículo 264, inciso 2º; Entre Ríos, artículo 274, inciso 2º; Silgueira, artículo 296, inciso 2º b).

(276) Rojas, artículo 264, inciso 4º; Entre Ríos, artículo 274, inciso 4º.

Estudiados los autos, se fijará por el presidente el día en que habrá de celebrarse el acuerdo, el que se verificará en presencia de todos los vocales que conozcan en el juicio, estableciéndose previamente las cuestiones que el tribunal juzgue necesarias para la mejor solución del asunto (277).

Las cuestiones se votarán en el orden establecido por el turno determinado en la insaculación.

El voto será fundado; pero cuando todos los vocales se hallen conformes con la sentencia recurrida y los motivos del pronunciamiento, podrá ser confirmada por sus fundamentos, prescindiendo de la formalidad del acuerdo (278).

Las resoluciones de la cámara serán pronunciadas por mayoría absoluta de votos.

Concluido el acuerdo será extendido en el expediente, seguido de la sentencia, subscripto por los miembros del tribunal que la han pronunciado, y autorizado por el secretario.

Art. 235. — Las cámaras de apelaciones dictarán sentencia dentro de sesenta días desde el llamamiento de autos.

No podrán fallar sobre ningún capítulo que no se hubiera propuesto a resolución del inferior, salvo sobre intereses, daños y perjuicios, prestaciones accesorias, excepciones posteriores a la sentencia de primera instancia y prescripción (279).

A instancia de parte, formulada dentro de cuarenta y ocho horas de la notificación, el tribunal podrá aclarar los términos del fallo o suplir omisiones, de conformidad con el artículo 214.

Art. 236. — Las providencias interlocutorias que se dicten en el curso de la instancia de apelación, podrán ser objeto del recurso de reposición, que se tramitará en la forma establecida por el artículo 215.

(277) Proyecto, artículo 268; Entre Ríos, artículo 278; Rojas, artículo 380.

(278) Proyecto, artículo 270; Entre Ríos, artículo 279; Rojas, artículo 385 y su nota; Silguera, artículo 303.

(279) Proyecto, artículo 274; Entre Ríos, artículo 281; San Luis, artículo 433.

Art. 237. — Siendo la sentencia de segunda instancia confirmatoria de la de primera en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante, salvo el caso de confirmación por motivos distintos de aquélla o en virtud de nuevas probanzas producidas en la instancia, en cuyos casos regirá la regla establecida en el artículo 72, inciso 1º (280).

Art. 238. — Cuando se revoque el fallo rechazando la excepción o defensa aceptada por el inferior, en el caso en que éste, de acuerdo con el artículo 211, no hubiera considerado las demás, la cámara dictará sentencia pronunciándose sobre ellas (281).

CAPÍTULO II

DEL RECURSO EN RELACION

Art. 239. — Cuando el recurso se conceda en relación, inmediatamente de recibido el expediente, el tribunal deberá pronunciarse sobre los reclamos a que se refiere el artículo 219, y llamar autos para resolver.

Art. 240. — Las partes, dentro de tercero día de notificada la providencia de autos, podrán presentar un memorial relativo al recurso.

Podrán, igualmente, dentro de dicho término, pedir que se mande cumplir la resolución apelada cuando se hubiera admitido en ambos efectos una apelación procedente sólo al efecto suspensivo y existiera el reclamo previsto en el artículo 219 (282).

Art. 241. — El recurso en relación deberá resolverse en término de veinte días, sin que sea necesario para hacerlo proceder en forma del acuerdo (283).

(280) Proyecto, artículo 274; Entre Ríos, artículo 281; San Luis, artículo 433.

(281) Rojas, artículo 387; Silguera, artículo 306.

(282) Rojas, artículo 390; San Luis, artículo 422; Mendoza, artículo 333; San Juan, artículo 401.

(283) Entre Ríos, artículo 285.

TITULO VII

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

Art. 242. — Contra las sentencias de las cámaras de apelaciones (284) se acuerda recurso extraordinario para ante la Suprema Corte en los casos determinados por la ley número 48.

Art. 243. — Para la procedencia del recurso es indispensable:

1º Que se haya invocado en primera instancia, en forma precisa, una cláusula de la Constitución Nacional que tenga relación directa e inmediata con la cuestión resuelta por el tribunal de cuya sentencia se apela (285).

2º Que el fallo de la causa dependa de la interpretación que se dé a la cláusula controvertida (286).

Art. 244. — El término para interponer el recurso será cinco días, y no se suspende por pedido de aclaratoria formulado ante el tribunal que dictó el fallo (287).

Deberá deducirse expresando cuáles son las disposiciones desconocidas o violadas (288).

Art. 245. — Cuando la sentencia de la cámara fuese confirmatoria de la de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución no obstante el recurso, dando fianza, que será calificada por la cámara, de responder de lo que percibiera si el fallo fuera revocado por la Suprema Corte.

Art. 246. — Si el recurso fuera denegado por la cámara sentenciadora el litigante podrá recurrir a la Suprema Corte directamente.

(284) Fallo de la Suprema Corte Nacional, de Abril 5 de 1913.

(285) Fallos de la Suprema Corte Nacional, de Abril 30 de 1912 y Septiembre 12 de 1916.

(286) Fallos de la Suprema Corte Nacional, de Agosto 9 de 1917, Junio 11 y Septiembre 2 de 1911 y Diciembre 6 de 1913.

(287) Fallo de la Suprema Corte Nacional, de Abril 28 de 1917.

(288) Fallo de la Suprema Corte Nacional, de Junio 1º de 1912.

TÍTULO VIII

DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

CAPÍTULO I

DE LA RECUSACION Y EXCUSACION DE LOS JUECES

Art. 247. — Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin causa (289) en el primer escrito que presenten los litigantes (290). De este derecho sólo podrá usarse una vez en cada caso.

También puede recusarse sin causa un miembro de la Cámara de Apelaciones dentro de las veinticuatro horas del llamamiento de autos.

Art. 248. — Fuera del caso previsto en el artículo anterior, los jueces, tanto superiores como inferiores, sólo pueden ser recusados con causa legal.

Son causas legales de recusación:

- 1º El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y del segundo de afinidad (291), con alguno de los litigantes, sus letrados o procuradores (292).

(289) La recusación sin causa es punto muy discutido, respecto del cual no existe uniformidad en los códigos provinciales. Sobre el particular véase Silgueira, artículo 370, nota 1, en la que apunta sus inconvenientes y la nota de la comisión redactora del código de Tucumán en que la defiende.

(290) Proyecto, artículo 66; Rojas, artículo 502; Tucumán, artículo 853.

(291) Entre Ríos, artículo 318; Buenos Aires, artículo 397; Santa Fe, artículo 1.057; Córdoba, artículo 1.085; San Juan, artículo 1.075; La Rioja, artículo 1.052; Santiago del Estero, artículo 1.074.

(292) Proyecto, artículo 68. Ver mis comentarios, número 671; Rojas, artículo 505; Silgueira, artículo 370; Santa Fe, artículo 1.059; Córdoba, artículo 1.087; San Juan, artículo 1.075; La Rioja, artículo 1.052, consideran como una sola persona, a los efectos de la recusación, al litigante y su letrado.

El de Santa Fe, artículo 1.078 agrega, siempre que su intervención no sea incidental, al referirse a éstos.

Los de Buenos Aires, artículo 397; Tucumán, artículo 855 y Mendoza, artículo 611, comprenden solo a los letrados.

- 2º Tener el juez, sus consanguíneos o afines, en los mismos grados del inciso anterior (293), interés en el pleito.
- 3º Tener los mismos sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, sus letrados o procuradores (294), excepto si la sociedad fuese anónima.
- 4º Tener pleito pendiente con el litigante que recuse.
- 5º Ser acreedores, deudores o fiadores de alguna de las partes.
- 6º Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales ordinarios (295), o acusado por éste ante los mismos.
- 7º Ser o haber sido denunciado o acusado en juicio político por el recusante, siempre que la comisión hubiera aconsejado hacer lugar a la formación de la causa (296).
- 8º Haber sido defensor de alguno de los litigantes, o emitido opinión o dictamen, o dado recomendación acerca del pleito, antes o después de comenzado.
- 9º Haber recibido, antes del pleito, beneficio de importancia de alguna de las partes, sus abogados o procuradores (297) o, después de iniciado, presentes o dádivas aunque sean de poco valor.
10. Tener con alguno de los litigantes, sus abogados o procuradores (298), amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato.

(293) Entre Ríos, artículo 318, inciso 2º.

(294) Ver mis comentarios, número 674; Silgueira, artículo 370, inciso 4º.

(295) Proyecto, artículo 68, inciso 7º, ley número 5.106.

(296) Proyecto, artículo 68, inciso 7º; Entre Ríos, artículo 318, inciso 6º, ley número 5.107.

(297) Ver mis comentarios, número 687; Silgueira, artículo 310, inciso 10.

(298) Ver mis comentarios, número 687; Silgueira, artículo 310, inciso 9º; San Juan, artículo 1.075, inciso 9º.

11. Tener contra los mismos (299) enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.

No serán causales de recusación los insultos o injurias de hecho, verbales o escritas, contra el juez que estuviere interviniendo en el juicio (300).

12. Tener el juez de segunda instancia parentesco dentro de los grados expresados anteriormente con el que dictó la sentencia en primera (301).

Art. 249. — Después que un juez haya empezado a conocer en asunto en que no está impedido, no podrán patrocinar en él los abogados y procuradores cuya intervención pueda producir la separación de aquél por alguna de las causas enumeradas en el artículo anterior (302).

Art. 250. — La recusación con causa deberá ser deducida por cualquiera de las partes al presentar su primer escrito, salvo que la causa sea sobreviniente o cuando conocida recién por ella, la dedujere dentro de tercero día de saberla, en cuyo caso podrá hacerlo hasta la citación para sentencia.

En las cámaras de apelaciones la recusación deberá deducirse, tratándose de recurso libre, en los escritos a que se refieren los artículos 227 y 228 y siendo en relación dentro de tres días de llegados los autos.

Art. 251. — La recusación se deducirá ante el juez o tribunal a que pertenezca el miembro recusado.

En el escrito en que se deduzca se expresarán claramente las causas de recusación, se nombrarán los testigos que hayan de declarar en su caso — que no podrán ser más de cinco —

(299) Tucumán, artículo 855, inciso 11 y Buenos Aires, artículo 397, inciso 11, comprende solo a los letrados.

Silgueira, artículo 370, inciso 9°.

(300) Proyecto, artículo 68, inciso 12; Entre Ríos, artículo 318, inciso 10; Rojas, artículo 505, inciso 11; Silgueira, artículo 370, inciso 9°; Santa Fe, artículo 1.058.

(301) Santa Fe, artículo 1.057, inciso 13, Mendoza, artículo 611; Rojas, artículo 505, inciso 15; Silgueira, artículo 370; inciso 13; La Rioja, artículo 1.252, inciso 14.

(302) Tucumán, artículo 866.

con expresión de su residencia, y se acompañarán o mencionarán con exactitud los documentos de que el recusante intente valerse.

Si en dicho escrito no se alegase determinadamente alguna de las causas del artículo 248 o si la recusación se presentara fuera de la oportunidad establecida, será desechada de plano.

Art. 252. — Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si fuera de un juez de primera instancia deberá éste manifestar categóricamente, al pie del escrito o dentro de veinticuatro horas, si son o no ciertos los hechos alegados y formando incidente con dicho escrito e informe, enviarlo a la Cámara de Apelaciones para su resolución. Si se recusa uno de los miembros de la cámara se le comunicará para que haga igual declaración.

Cuando el magistrado recusado reconociera los hechos, se le dará por separado de la causa sin más ulterioridad. Si los negara, con lo que exponga se procederá a substanciar el incidente.

Art. 253. — La recusación en ningún caso suspenderá la tramitación del juicio ni los términos.

Deducida contra un juez, éste pasará el expediente al que siga en turno para que continúe el trámite sobre lo principal.

Deducida contra uno de los miembros de las cámaras de apelaciones se integrará el tribunal inmediatamente, corriendo por cuerda separada el incidente de recusación.

Art. 254. — Toda la prueba en los incidentes de recusación deberá producirse en término de diez días, y la resolución del artículo en los cinco siguientes, sin recurso.

Cuando la recusación fuese aceptada continuará conociendo en el juicio el juez a quien pasó o el vocal que integró el tribunal.

Art. 255. — Desestimada una recusación con causa, su autor, además de las costas, deberá abonar una multa de cien pesos si fuera calificada de maliciosa en la resolución denegatoria.

Art. 256. — No son recusables los jueces :

- 1º En las diligencias preparatorias de los juicios.
- 2º En las que tengan por objeto asegurar el resultado de los mismos.
- 3º En la ejecución de diligencias cometidas, salvo que fuesen probatorias.
- 4º En las diligencias para la ejecución de las sentencias, a menos que fuesen las causas posteriores a ella (303).

Art. 257. — Todo magistrado que se halle comprendido por alguna de las causas enumeradas en el artículo 248, deberá excusarse de entender en el juicio, manifestando la causa .

Si el magistrado que se excusa fuese un juez de primera instancia, pasará los autos al que le siga en turno. Si fuera un miembro de la cámara se procederá a su reemplazo inmediato.

Art. 258. — Si el juez que sigue en turno entendiese que la excusación es improcedente, formará incidente que será pasado sin más trámite al superior para su resolución.

Art. 259. — La resolución que acepta una recusación o excusación determina de intervención del reemplazante con carácter definitivo, aunque con posterioridad desaparezcan las causas que originaron la recusación o excusación.

Art. 260. — El juez o miembro de las cámaras de apelaciones a quien se pruebe que estaba impedido de conocer en el asunto y a sabiendas diete en él resolución que no sea de mero trámite, será penado con una multa de quinientos pesos moneda nacional. La tolerancia de la providencia de mero trámite no será admisible después de contestada la demanda si proveyese en los autos sin excusarse.

(303) San Luis, artículo 603; Santa Fe, artículo 1.042; Entre Ríos, artículo 321; Córdoba, artículo 1.093; Tucumán, artículo 865; San Juan, artículo 1.082; La Rioja, artículo 1.254; Santiago del Estero, artículo 1.083.

CAPÍTULO II

DE LA RECUSACION DE LOS SECRETARIOS Y EXCUSACION DE OTROS FUNCIONARIOS JUDICIALES

Art. 261. — Los secretarios de los juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones, serán recusables y deberán excusarse, en el tiempo y forma, y por las causas previstas en el capítulo anterior.

Deducida la recusación, el funcionario recusado manifestará en el día por escrito si son o no ciertos los hechos invocados. En caso de negarlos, el juez o tribunal los averiguará sumariamente y dictará resolución, sin recurso.

Art. 262. — En el caso previsto por el artículo 257, los secretarios serán castigados con suspensión por quince días la primera vez y pérdida del empleo en la segunda.

Art. 263. — No son recusables los asesores, fiscales y demás empleados de los tribunales; pero deberán excusarse en interés del fisco (304), manifestando cualquier impedimento en que se encontrasen; y el juez o tribunal podrá darlos por separados, designando a los que deban reemplazarlos.

TÍTULO IX

DE LOS INCIDENTES

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Art. 264. — Los incidentes que por exigir un pronunciamiento previo (305) impidan la prosecución de la demanda

(304) Córdoba, artículo 1.104; Tucumán, artículo 868; La Rioja, artículo 1.285; Santiago del Estero, artículo 1.094.

(305) Rojas, artículo 483.

principal, se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto en suspenso el curso de aquélla.

Los que no obsten a esa prosecución, se substanciarán en pieza separada sin suspender el curso de la demanda y se formarán con los insertos que ambas partes señalen dentro del término de tres días de deducidos o contestados, respectivamente, y los que el juez crea necesario (306).

Transcurridos los tres días mencionados sin que las partes hagan indicación, se formarán sólo con los que determine el juez.

Art. 265. — Los incidentes que no tengan por esta ley una tramitación especial (307) se substanciarán por los trámites establecidos para los juicios verbales.

Art. 266. — Todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente, deberán ser promovidos a la vez.

Art. 267. — Para los incidentes promovidos por quien no es parte en el juicio, pero que desempeña en él una función, como el abogado, procurador, perito u otro, se formará pieza separada; pero cuando en ellos se dedujera apelación podrá el superior requerir el envío de los autos principales por un término que no excederá de cinco días (308).

CAPÍTULO II

DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

Art. 268. — Las cuestiones de competencia deben promoverse antes de estar trabado el pleito por demanda y contestación, pudiendo hacerlo por declinatoria o por inhibitoria (309).

(306) Ver San Luis, artículo 614.

(307) Rojas, artículo 485.

(308) Silgueira, artículo 359.

(309) Santa Fe, artículo 908, todas las cuestiones de competencia deben promoverse por declinatoria.

La declinatoria se propondrá ante el juez que haya empezado a conocer, pidiéndole que declare que el asunto no es de su competencia, y se tramitará por el procedimiento establecido para las excepciones dilatorias.

La inhibitoria se intentará ante el juez que la parte crea competente, pidiéndole que se dirija al que estime no serlo para que se inhiba y remita los autos.

Art. 269. — Cuando los jueces ejerzan una misma clase de jurisdicción se empleará exclusivamente el primer medio.

Cuando ejerzan diferente clase de jurisdicción podrá usarse cualquiera de los dos, salvo que la cuestión de competencia provenga de la declaración de quiebras o de concurso civil en que no podrá usarse la inhibitoria (310).

El litigante que hubiera optado por uno de ellos, no podrá abandonarlo y recurrir al otro.

Tampoco podrá emplearlas simultánea (311) o sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel a que haya dado preferencia.

Art. 270. — Entablada la inhibitoria, el juez, previa vista fiscal, mandará librar el oficio inhibitorio o declarará no haber lugar.

La providencia que la denegare será apelable en relación.

Al oficio inhibitorio se acompañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el agente fiscal, del auto que hubiere recaído y demás piezas que el juez estimare necesario para fundar su competencia.

Art. 271. — El juez requerido dará traslado a las partes interesadas y oír al agente fiscal (312).

Si accediere a la inhibición podrá apelarse en relación y consentida o ejecutoriada la resolución remitirá los autos al juez que considere competente.

(310) Proyecto, artículo 86.

(311) Entre Ríos, artículo 347; Rojas, artículo 448; Mendoza, artículo 593; Córdoba, artículo 997; Silgueira, artículo 361; San Juan, artículo 981; La Rioja, artículo 1.159; Santiago del Estero, artículo 986.

(312) Entre Ríos, artículo 350; Córdoba, artículo 1.006; La Rioja, artículo 1.165; San Juan, artículo 986; Santiago del Estero, artículo 995.

Si no accediere a la reclamación oficiará al juez requirente, manifestando los fundamentos en que apoya su competencia y requiriéndole para que, dando por formulada la contienda de competencia, remita los antecedentes al superior a quien corresponda conocer.

Durante la contienda, uno y otro juez suspenderán los procedimientos sobre lo principal; pero el juez requerido de inhibición podrá practicar, a instancia de parte, cualquier actuación que, a su juicio, sea absolutamente necesaria y de cuya dilación pudiera resultar perjuicios irreparables (313).

Art. 272. — Pasados los antecedentes, el superior oír al fiscal, y en seguida llamará autos, sin más substanciación pronunciará sentencia, mandando los antecedentes al juez que sea declarado competente y avisando al otro por oficio (314).

Art. 273. — No obstante lo dispuesto en el artículo 268, si, procediendo de oficio en asunto en que esto pueda tener lugar, dos jueces que ejerzan una misma clase de jurisdicción pretendieren ser competentes, cualquiera de ellos puede reclamar el conocimiento del asunto, debiendo proceder en la forma establecida por los artículos precedentes.

Art. 274. — En caso de ocurrir conflicto negativo, por declararse dos jueces incompetentes para conocer de un asunto, se observará el mismo procedimiento que en las contiendas positivas.

Art. 275. — Cualquier cuestión de competencia que se suscite entre los jueces de la Capital será resuelta, si fueren de la misma jurisdicción, por la Cámara de Apelaciones respectiva; si fueren de distinta jurisdicción, por la cámara de que depende el juez que primero hubiere conocido.

Cuando la contienda se trabé entre jueces de la Capital y jueces federales o de provincia, será tribunal competente para resolverla la Suprema Corte de Justicia Nacional (315).

(313) Entre Ríos, artículo 351; Rojas, artículo 497; Mendoza, artículo 604; Córdoba, artículo 1.019; Silguera, artículo 366; La Rioja, artículo 1.180; San Juan, artículo 997; Santiago del Estero, artículo 1.008.

(314) Entre Ríos, artículo 352.

(315) Proyecto, artículo 92; Rojas artículos 499 y 500.

CAPÍTULO III

DE LA ACUMULACION DE AUTOS

Art. 276. — Procederá la acumulación de autos a solicitud de parte (316) antes de la citación para sentencia, en causas que se encuentren en primera instancia, pertenezcan a la misma jurisdicción y deban substanciarse por los mismos trámites:

- 1º Cuando la sentencia que haya de dictarse en una produzca en otra la excepción de cosa juzgada.
- 2º Cuando en virtud de idéntica causa jurídica una persona sea demandada separadamente por varios o demande a varios (317).
- 3º Cuando el actor entable por separado contra una misma persona dos o más acciones que haya podido acumular (318).

Los juicios ejecutivos serán acumulados aunque se haya dictado sentencia de remate, mientras el ejecutante no se encuentre pago (319).

Art. 277. — Presentada la solicitud de acumulación, se correrá traslado por tres días a las demás partes y la resolverá el juez dentro de seis.

La tramitación de los juicios quedará en suspenso desde que ésta se pida — sin perjuicio de las medidas de carácter

(316) Silguera, artículo 385, la declara también procedente de oficio si los juicios se encuentran en el mismo juzgado.

(317) Entre Ríos, artículos 356 y 358; Rojas, artículos 537 y 538; Córdoba, artículos 1.053 y 1.054; Mendoza, artículos 665 y 666; Santa Fe, artículo 1.078; Tucumán, artículos 244 y 246; La Rioja, artículos 1.322, 1.323, 1.325 y 1.327; San Juan, artículos 1.028 y 1.029; Santiago del Estero, artículos 1.042 y 1.043.

(318) Entre Ríos, artículo 358; San Juan, artículo 1.029; Córdoba, artículo 1.054; Tucumán, artículo 246; Santiago del Estero, artículo 1.043.

(319) Entre Ríos, artículo 357; San Luis, artículo 1.333; Silguera, artículo 385, nota 3; Tucumán, artículo 245; La Rioja, artículos 1.328 y 1.329; con excepción de los hipotecarios.

urgente — lo que se hará saber al juez que conozca en los otros asuntos.

La resolución que conceda o deniegue la acumulación será apelable en relación (320).

Art. 278. — Si los pleitos se siguieran en juzgados diferentes, la acumulación se solicitará ante el juez que entienda en el más antiguo (321), quien, ejecutoriada la sentencia que decreta la acumulación, dirigirá oficio al que conozca en los autos mandados acumular, reclamándoselos.

En la substanciación del incidente regirá lo dispuesto para las cuestiones de competencia (322).

Art. 279. — La acumulación se hará sobre el expediente más antiguo (323).

Siempre que se decreta, el curso del juicio que estuviere más adelantado en la tramitación se suspenderá hasta que todos los demás lleguen a ponerse en el mismo estado.

Los autos acumulados se seguirán en un solo juicio y serán terminados por una misma sentencia; pero si ello trajera entorpecimiento en la tramitación, podrá el juez tramitar cada uno por separado y resolverlos en una misma sentencia (324).

Contra la resolución que lo disponga no se dará recurso.

(320) Entre Ríos, artículo 360; Rojas, artículos 540 y 543; Silgueira, artículos 388 y 389; San Luis, artículo 1.336, concede recurso en un sólo efecto contra el auto denegatorio; Córdoba, artículo 1.058 y Santiago del Estero, artículo 1.047, no conceden apelación contra el auto que declara procedente la acumulación.

(321) Los códigos de Córdoba, artículo 1.056; Santa Fe, artículo 1.080; Tucumán, artículo 247; La Rioja, artículo 1.330 y Santiago del Estero, artículo 1.045, disponen que debe solicitarse ante el juez cuya jurisdicción deba cesar; los demás, ante el juez que debe conocer en los expedientes.

(322) Entre Ríos, artículo 359; Rojas, artículos 545 y 547; Mendoza, artículo 675; Tucumán, artículos 248 y 249; San Juan, artículo 1.036.

(323) Rojas, artículo 359; San Juan, artículo 1.330; Mendoza, artículo 667; San Luis, artículo 1.334; Santiago del Estero, artículo 1.044.

(324) Entre Ríos, artículos 362 y 363; San Luis, artículos 1.348 y 1.347; Silgueira, artículo 389; Córdoba, artículo 1.059; Santa Fe, artículo 1.083; Tucumán, artículos 250 y 251; La Rioja, artículos 1.334 y 1.335; San Juan, artículos 1.037 y 1.039; Santiago del Estero, artículo 1.048.

CAPÍTULO IV

DE LA DECLARACION DE POBREZA

Art. 280. — La declaratoria de pobreza debe solicitarse por el titular del derecho a ejercitarse en juicio (325), ante el juez que conozca o deba conocer de aquel en que haya de servir y será substanciada con el agente fiscal y con la parte contraria (326).

En la presentación se ofrecerán las pruebas e incluirá, en su caso, la nómina de los testigos que hayan de declarar — los que no podrán ser menos de tres — el interrogatorio a tenor del cual serán examinados, el nombre y domicilio de la persona con quien se haya de litigar y el objeto del pleito.

Los extremos a justificar serán: la pobreza y la imposibilidad de obtener recursos, siendo entendido que no obstará a la declaratoria la circunstancia de tener apenas cómo procurarse la subsistencia.

Art. 281. — Presentada la solicitud, se correrá traslado a la otra parte con término de tres días, vencidos los cuales el juez designará una audiencia para recibir las pruebas ofrecidas dentro de los ocho días subsiguientes.

La oposición al pedido de declaratoria de pobreza deberá fundarse en la no concurrencia de los extremos mencionados en el inciso final del artículo 280, y será deducida con indicación de la prueba a rendirse, nómina de testigos — que no podrán ser más de cinco — y presentación del interrogatorio a cuyo tenor hayan de declarar.

Toda la prueba será producida en la audiencia a que se refiere la primera parte de este artículo.

(325) Ver mis comentarios, número 1.101; Córdoba, artículo 1.114; Santa Fe, artículo 1.072; Tucumán, artículo 597; Silgueira, artículo 410; San Juan, artículo 1.070; La Rioja, artículo 1.290; Santiago del Estero, artículo 1.103.

(326) Rojas, artículo 592 y nota; Entre Ríos, artículo 378; San Luis, artículo 866; Santa Fe, artículo 1.063.

Art. 282. — La solicitud de declaratoria de pobreza no suspende la substanciación de la causa. El solicitante será considerado como pobre desde que inicie el incidente, cualquiera que sea la estación en que se declare tal (327).

Art. 283. — La declaratoria de pobreza sólo surtirá efecto mientras permanezca el interesado sin mejorar de fortuna y podrá, en consecuencia, ser impugnada siempre que se acredite que el declarado pobre ha adquirido con posterioridad bienes de fortuna (328).

Art. 284. — El declarado pobre será defendido por el defensor de pobres (329). Podrá, sin embargo, si lo desea, hacerse patrocinar por abogado de la matrícula (330), el que sólo tendrá derecho a honorarios en caso de que aquél venciera en el juicio y recibiera bienes o en el de condenación en costas al contrario.

En el primer caso, las costas causadas en la defensa se abonarán hasta la concurrencia de la tercera parte del valor del litigio (331).

CAPÍTULO V

DE LAS TERCERIAS EN GENERAL

Art. 285. — El tercer opositor podrá ser admitido en una causa cuando alegue un interés cierto y positivo, susceptible de una acción en juicio (332).

(327) Rojas, artículo 600; Entre Ríos, artículo 387; Córdoba, artículo 1.117; Mendoza, artículo 947; Santa Fe, artículo, 1.076; Silgueira, artículo 410; San Juan, artículo 1.072; La Rioja, artículo 1.297.

(328) Rojas, artículo 596; Entre Ríos, artículo 382; San Luis, artículo 873; Córdoba, artículo 1.112; Mendoza, artículo 943; Santa Fe, artículo 1.070; San Juan, artículo 1.067; La Rioja, artículo 1.295; Santiago del Estero, artículo 1.101.

(329) Entre Ríos, artículos 383 y 385; Rojas, artículo 597; Córdoba, artículo 1.113; Santiago del Estero, artículo 1.102; Silgueira, artículo 411.

(330) La Rioja, artículo 1.288, inciso 2°.

(331) Rojas, artículo 597; Entre Ríos, artículo 385; San Luis, artículo 877; Córdoba, artículo 1.115; Santa Fe, artículo 1.074; Tucumán, artículo 595; San Juan, artículo 1.068; Santiago del Estero, artículo 1.105.

(332) Rojas, artículo 550; Mendoza, artículo 650.

Art. 286. — Cuando la tercería deducida fuese coadyuvante del derecho de alguna de las partes, se tramitará unida a la acción o excepción a que coadyuvare, tomando el procedimiento en el estado en que se encuentre, sin suspenderse el curso de la causa (333).

La sentencia dictada después de la intervención del tercero lo obliga como al principal, cualquiera que fuera el estado en que hubiera comparecido (334).

Art. 287. — Cuando la tercería fuese excluyente y la causa pendiera en primera instancia, se suspenderá el procedimiento en lo principal, y tramitada aquélla con el demandante y demandado en pieza separada hasta quedar ambos juicios en el mismo estado, continuarán los dos el mismo trámite hasta resolverse en una sola sentencia (335).

Si la causa pendiera en segunda instancia, la tercería se tramitará en la misma forma que en el caso anterior, sin suspenderse el curso de lo principal (336).

Art. 288. — En los casos en que proceda la suspensión del juicio en lo principal, las partes podrán pedir la continuación de aquél y el juez ordenarla (337), si dieren fianza.

(333) Rojas, artículo 551; San Luis, artículo 808; Santa Fe, artículo 992; Córdoba, artículo 1.039; Tucumán, artículo 770; Mendoza, artículo 651; Santiago del Estero, artículo 1.028; San Juan, artículo 1.013.

(334) Rojas, artículo 553; Santa Fe, artículo 995; San Luis, artículo 811; Tucumán, artículo 775; Mendoza, artículo 653; Santiago del Estero, artículo 1.032; San Juan, artículo 1.017.

(335) Rojas, artículo 554; Córdoba, artículo 1.040; San Luis, artículo 809; Santa Fe, artículo 993; Tucumán, artículo 772; Santiago del Estero, artículo 1.029; San Juan, artículo 1.014.

(336) Rojas, artículo 555.

Permiten al tercerista renunciar la 1ª instancia los siguientes códigos: San Luis, artículo 810; Santa Fe, artículo 904; Córdoba, artículo 104; Tucumán, artículo 773; Santiago del Estero, artículo 1.030; San Juan, artículo 1.015.

(337) El código de San Luis, artículo 813, permite la continuación cuando aparezca manifiestamente que el tercero procede sin derecho y solo por entorpecer el juicio. Esto, en cierto modo obliga al juez a pronunciarse sobre el fondo, cosa que no podrá hacer sin prejuzgar, por lo que encuentro más conveniente la disposición que proyecto.

CAPÍTULO VI

DE LAS TERCERIAS EN LAS EJECUCIONES

Art. 289. — Las tercerías que se deduzcan en las ejecuciones deben fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercerista tenga a ser pagado con preferencia al ejecutante.

En ambos casos se substanciarán en juicio ordinario, con el ejecutante y ejecutado.

Art. 290. — Con la tercería de dominio deberá presentarse el título en que se funde, original o en copia, sin cuyo requisito no se le dará curso (338).

Su interposición no suspenderá la ejecución, pero sí los procedimientos para hacer efectiva la sentencia que en ella se pronuncie, los que no podrán continuar hasta que haya ejecutoria sobre aquélla.

Art. 291. — Si la tercería fuese de mejor derecho, seguirá la ejecución hasta realizarse los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta la resolución de aquélla, salvo caso de prestarse fianza suficiente a las resultas de la tercería (339).

Art. 292. — La deducción de cualquier tercería será motivo suficiente para que se amplíe y mejore el embargo si el ejecutante lo solicitara.

Art. 293. — Si el ejecutado hubiese sido declarado rebelde, no se le hará nuevo emplazamiento para la tercería (340).

(338) Rojas, artículo 557; San Luis, artículo 815; Mendoza, artículo 659.

(339) Rojas, artículo 560; Proyecto, artículo 397; Santa Fe, artículo 999, dispone la suspensión del pago aunque se solicite bajo la responsabilidad de los acreedores o con fianza.

(340) Rojas, artículo 561; Entre Ríos, artículo 389; Córdoba, artículo 1.046; San Juan, artículo 1.020; Santiago del Estero, artículo 1.035; Mendoza, artículo 661.

Art. 294. — El opositor coadyuvante tiene derecho a intervenir en el avalúo y venta de los bienes sobre que recae la tercería (341).

Art. 295. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, toda persona está autorizada a requerir, en calidad de tercero perjudicado por un embargo, el levantamiento liso y llano del mismo, acreditando con su presentación ser poseedor actual en conformidad a un título de propiedad, que deberá exhibir, según la naturaleza de los bienes.

Esta gestión será tramitada con audiencia del embargante y resuelta sin otro trámite y sin recurso, cuando la resolución fuese desfavorable al tercero, quien podrá deducir la correspondiente tercería (342).

Art. 296. — Cuando se probara la connivencia del tereerista y el ejecutado, se decretará el arresto de ambos, remitiéndose los antecedentes a la justicia del crimen que corresponda.

CAPÍTULO VII

DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Art. 297. — Para asegurar las resultas de los juicios podrá solicitarse, si hubiera urgencia, antes de entablada la demanda o en cualquier estado de aquél:

1º El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda.

2º El nombramiento de uno o más interventores

(341) Rojas, artículo 562; Entre Ríos, 391; Córdoba, artículo 1.048; Santa Fe, artículo 1.000; San Juan, artículo 1.023; La Rioja, artículo 1.199; Santiago del Estero, artículo 1.038; Mendoza, artículo 662.

(342) Rojas, artículo 565; Buenos Aires, artículo 581; Proyecto, artículo 400; Entre Ríos, artículo 394; San Luis, artículo 812; Silguera, artículo 416.

- (343) para vigilar los bienes en litigio u operaciones relativas a ellos e informar al juzgado.
- 3º La designación de un administrador provisorio (344).
- 4º El embargo de bienes determinados.
- 5º La inhibición general.
- 6º La anotación de la *litis* (345).

Art. 298. — Las medidas precautorias a que se refiere el artículo anterior, se decretarán siempre sin citación de la parte contra quien se solicitan, con excepción del caso del inciso 3º, en que deberá oírse a aquel contra quien se pide por un traslado con término de tres días, después del cual resolverá el juez sin más substanciación.

El auto que conceda una medida precautoria será apelable dentro de tres días, al sólo efecto devolutivo.

Del que la deniegue podrá apelarse en relación dentro del mismo término.

Art. 299. — Podrá pedir embargo preventivo el acreedor que se halle en alguna de las condiciones siguientes:

- 1º Que la existencia del crédito esté acreditada con instrumento público o documento simple atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos testigos.

En los casos de documentos subscriptos por apoderado, el reconocimiento podrá indistintamente solicitarse del mandante o mandatario como si se tratara de firma propia; pero deberá previamente agregarse testimonio de la escritura de mandato (346).

- 2º Que, fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique en la misma forma que el

(343) Entre Ríos, artículo 370; San Luis, artículo 685; Córdoba, artículo 1.070.

(344) Jurisprudencia. San Luis, artículo 687; Córdoba, artículo 1.070; Silgueira, artículo 392, inciso 3º.

(345) Rojas, artículo 566; Mendoza, artículo 789; Silgueira, artículo 390.

(346) Jurisprudencia.

inciso anterior, la existencia del contrato y su cumplimiento por el actor, o si éste ofreciera cumplirlo o su obligación fuese a plazo.

3º Que la deuda esté justificada por los libros de comercio llevados en forma por el actor o resultase de boleto de corredor conforme con sus libros y en los casos en que éstos puedan servir de prueba.

4º Que estando la deuda sujeta a condición, suspensión o pendiente de plazo, el actor justifique sumariamente que su deudor trata de enajenar, ocultar, transportar sus bienes, o siempre que justifique del mismo modo, que por cualquier causa ha disminuído notablemente la responsabilidad de su deudor, después de contraída la obligación.

Art. 300. — Las informaciones se admitirán sin más trámite y podrán producirse firmando los testigos el escrito en que se soliciten y ratificándose en sus firmas ante el actuario, quien dejará constancia de las circunstancias personales de los testigos en la diligencia de ratificación (347).

En el caso del inciso 3º el acreedor acompañará compulsas de sus libros practicada por un contador de la matrícula, la que será ratificada ante el actuario (348).

Podrán prescindirse de estas formalidades cuando el embargante manifieste existir urgencia, y preste caución real bastante a juicio del juez (349).

Art. 301. — Podrán igualmente solicitar embargo preventivo:

1º El propietario y locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato escrito del arrendamiento, sobre las cosas afectadas al privilegio que les reconoce el Código Civil, acompa-

(347) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 307.

(348) Jurisprudencia. Silgueira, artículo 393; Tucumán, artículo 284.

(349) Silgueira, artículo 394.

ñando el título de propiedad o certificado del mismo expedido por oficina pública (350) o el contrato de locación, o exigiendo al locatario haga las manifestaciones necesarias en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro horas.

- 2º Las personas a quienes las leyes generales reconocen privilegio sobre ciertos muebles o inmuebles, sobre éstos, siempre que el crédito se justificare en la forma que previene el artículo anterior.
- 3º El reivindicante sobre la cosa mueble o inmueble objeto de su demanda, o el que demande por petición de herencia sobre los bienes que componen ésta, siempre que se presenten documentos que hagan verosímil la acción deducida (351).
- 4º Cualquiera de los litigantes, durante un juicio ordinario, siempre que por confesión expresa o ficta resulten probados hechos que hagan presumir verosíilmente el derecho alegado.
- 5º Siempre que el que lo solicite hubiere obtenido una sentencia favorable.

El embargo en este caso se decretará por la cantidad líquida que exprese la condenación o por la que el juez determine atendiendo a las circunstancias del caso, cuando no se hubiese expresado (352).

Art. 302. — Procede el embargo preventivo tanto por deudas de dinero como en especie. En el segundo caso, el actor, al solicitarlo, fijará el monto, bajo su responsabilidad y sin perjuicio de que el juez modere la suma para efectos del embargo, calculándola con arreglo al precio medio que tenga la especie en el mercado (353).

(350) Proyecto, artículo 301.

(351) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 302; Buenos Aires, artículo 456; Tucumán, artículo 294; San Luis, artículo 668.

(352) Jurisprudencia. Proyecto, artículo 304; Buenos Aires, artículo 457; Silgueira, artículo 395; Tucumán, artículo 296; San Luis, artículo 669.

(353) San Luis, artículo 672; ley de enjuiciamiento española, artículo 1.436 y 1.438; Aleorta y Zeballos, artículo 833.

Art. 303. — El embargo preventivo en los casos enumerados, con excepción del artículo 301, inciso 4º, se decretará bajo la responsabilidad del solicitante, quien deberá dar caución por todas las costas, daños y perjuicios que pudiera causar en caso de haberlo pedido sin derecho.

Art. 304. — Si el juez accediera al embargo, se trabará éste, sin necesidad de intimación previa de pago (354), en la forma prevista por los artículos 319 y siguientes, y se hará saber al embargado dentro de los tres días de la traba.

Art. 305. — En todos los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre cosas afectadas a un privilegio por las leyes generales, podrá el embargado pedir que se deje sin efecto depositando a la orden del juez una cantidad suficiente u ofreciendo garantías bastantes que calificará el juez por sí solo y sin recurso (355).

Art. 306. — Si el dueño de los bienes embargados lo exigiera, la demanda deberá deducirse dentro de ocho días y no haciéndolo se alzará el embargo; pero en todos los casos, tratándose de deudas exigibles, si en término de veinte días no se demandara, quedará de hecho levantada cualquier medida precautoria previa y deberá ordenarse la cancelación de las anotaciones que de él hubieran podido hacerse.

Las costas y daños y perjuicios serán a cargo del que la solicitó (356).

Art. 307. — Cuando habiendo lugar a embargo preventivo éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes al deudor, podrá solicitarse contra él la inhibición de vender y gravar sus bienes, la que deberá dejarse sin efecto tan luego como presentase a embargo bienes o diere garantías bastantes.

El que solicite la inhibición deberá expresar el nombre y apellido de la persona que trata de inhibir, su profesión, do-

(354) Proyecto, artículo 304, ver mis comentarios, número 786.

(355) Entre Ríos, artículo 373, exige fianza real.

(356) Rojas, artículo 589; Entre Ríos, artículo 374; Santa Fe, artículo 1.019; Silgueira, artículo 403; Tucumán, artículo 806; San Juan, artículo 1.055; Santiago del Estero, artículo 1.066; Córdoba, artículo 1.076; San Luis, artículo 692.

micilio y demás condiciones que conozca y puedan servir para individualizar la persona de éste.

La inhibición se extingue a los diez años de anotada (357).

Art. 308. — Los jueces deberán abstenerse de decretar embargos en asuntos que no sean de su competencia; pero, si lo hicieran, el embargo será válido siempre que haya sido dictado con arreglo a las disposiciones de este título, y sin que esto importe prórroga de su jurisdicción para entender en el juicio que deba iniciarse.

TITULO X

DE LA REBELDIA (1)

Art. 309. — Cuando un litigante, que es citado con arreglo a la ley, no compareciere dentro del término respectivo o cuando abandone el juicio después de haber comparecido, será declarado rebelde, si la otra parte lo pidiere (358).

Esta providencia se notificará por cédula, y, no siendo posible, por edictos, que se publicarán durante cinco días en el «Boletín Judicial».

Las providencias sucesivas serán notificadas por nota.

Art. 310. — La declaración de rebeldía no alterará el

(357) Buenos Aires, artículo 473; Entre Ríos, artículo 377; San Luis, artículo 697, la hace caducar al año de anotada.

(1) Como hice presente en mis comentarios al Código de Procedimientos de la Capital, número 750, considero más acertado que el actual, el título «de la rebeldía» empleado por el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, al que siguen los de Mendoza y San Luis y el proyecto del doctor Silguera, pues en realidad no se trata de un juicio sino de un procedimiento especial en el juicio ordinario.

(358) Ver mis comentarios, número 751.

trámite regular del juicio y la sentencia se dictará siempre según el mérito de los autos (359).

Art. 311. — Cuando el rebelde haya sido citado por edictos, la sentencia se le hará saber en la misma forma y por el mismo término (360). En este caso, la sentencia dictada en primera instancia se tendrá por apelada si el recurso fuera procedente (361).

Art. 312. — Desde el momento en que un litigante haya sido declarado rebelde, puede decretarse, si la otra parte lo pidiere, el embargo preventivo de sus bienes, en cuanto sea necesario para estimar asegurado lo que es objeto del juicio.

El embargo continuará hasta el fin del juicio, a no ser que el interesado justifique haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.

La solicitud sobre alzamiento de embargo se substanciará en pieza separada, en la forma prescripta para los incidentes, sin suspender la prosecución de la demanda principal.

La resolución que se dicte será inapelable (362).

Art. 313. — Si el litigante rebelde compareciere durante la substanciación del juicio, será admitido como parte, debiendo tomar el procedimiento en el estado en que se encuentre.

Art. 314. — Sea que se condene o absuelva al rebelde, serán de su cargo las costas causadas por su rebeldía (363).

(359) Rojas, artículo 445 y nota; Entre Ríos, artículo 444; Santa Fe, artículos 463 y 467; Silgueira, artículo 318; Córdoba, artículo 445; Mendoza, artículo 506; La Rioja, artículo 527.

(360) Entre Ríos, artículo 405.

(361) Córdoba, artículo 457; San Luis, artículo 651; Santiago del Estero, artículo 452; San Juan, artículo 487.

(362) Rojas, artículo 449; Santa Fe, artículo 472; La Rioja, artículo 531.

(363) Proyecto, artículo 296; Buenos Aires, artículo 451; Entre Ríos, artículo 409; San Luis, artículo 650.

TÍTULO XI

DE LAS EJECUCIONES

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 315. — Se procederá ejecutivamente siempre que se demande una cantidad líquida y exigible de dinero, valores o cosas de las que se cuentan, pesan o miden (364), en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

Son títulos que traen aparejada ejecución :

- 1º Los instrumentos públicos.
- 2º Los documentos privados reconocidos por el deudor.
- 3º La confesión de deuda líquida y exigible hecha ante el juez competente (365).
- 4º Las cuentas aprobadas o reconocidas en juicio.
- 5º Los créditos por arrendamientos.
- 6º Los demás títulos a que las leyes acuerdan fuerza ejecutiva.

Cuando el título resultase una obligación en parte líquida y en otra ilíquida, se procederá ejecutivamente por la primera.

Art. 316. — La ejecución de título que por sí solo no la traigan aparejada deberá prepararse previamente:

(364) Santa Fe, artículo 749; Silguera, artículo 417, inciso 3º.

(365) Córdoba, artículo 820; La Rioja, artículo 978; Santiago del Estero, artículo 816; San Juan, artículo 737 y Entre Ríos, artículo 444, establecen que la confesión hecha en juicio declarativo absolviendo posiciones o de otra manera, no constituye título ejecutivo.

Si se tratara de documentos privados, citando al demandado para que en una audiencia — que deberá señalarse dentro de los tres días siguientes — comparezca a reconocer la firma.

Para los documentos subscriptos por poder se procederá como establece el artículo 299, inciso 1º.

Cuando no hubiere contrato escrito de locación, intimando al locatario que en término de tres días manifieste categóricamente si lo es o ha sido en la época a que el crédito reclamado se refiere (366) y exhiba el último recibo.

La citación se hará bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia o silencio se tendrá por reconocida la firma o se estará a lo que manifieste el acreedor en cuanto al carácter de locatario y monto de la deuda.

Si el documento o el carácter de locatario fuese expresamente desconocido, quedará cerrado el procedimiento ejecutivo (367).

Art. 317. — Procede la ejecución por saldo de cuenta corriente bancaria de término vencido acompañando conforme subscripto por el cliente, del saldo del último trimestre o período de vigencia del contrato, o en su defecto el detalle del movimiento de la cuenta desde su origen o desde la última fecha en que el deudor expresó conformidad (368).

En el primer caso, se procederá al reconocimiento de la firma en la forma establecida por el artículo 316.

En el segundo, se dará traslado al deudor por cinco días y si en ellos no formulara observación quedará reconocido el saldo como líquido (369).

Art. 318. — Cuando se trate de un acreedor cuyo paradero se ignore, se le citará por edictos durante cinco días

(366) Jurisprudencia.

(367) Algunos códigos provinciales incluyen los documentos sin fecha de vencimiento preparada la acción por un procedimiento previo para fijarla. Véanse los de Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y San Juan. He creído que es más conveniente establecer separadamente un procedimiento especial para esa fijación.

(368) Proyecto, artículo 373; Rojas, artículo 729.

(369) Jurisprudencia. Cámara Comercial, tomo 9, página 339, serie 4º.

para el reconvencimiento de firma, bajo el apercibimiento establecido en el artículo anterior y de que se entenderán con el defensor de ausentes (370) todos los actos posteriores del procedimiento.

Si el deudor estuviera domiciliado fuera de la Capital deberá incluirse en el exhorto para su citación el apercibimiento de que en el término que el juez le fije, constituya domicilio en ella y que de no hacerlo se entenderá el procedimiento con el defensor de ausentes, siendo a su cargo las costas de la intervención de éste (371).

CAPÍTULO II

INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO

Art. 319. — El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce el reclamo y si hallare que es de los comprendidos en el artículo 315, librará mandamiento de embargo el que será entregado al oficial de justicia dentro de veinticuatro horas, con noticia al ejecutante y dejando constancia de la fecha de entrega.

Con él se requerirá al deudor por el oficial de justicia, a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas (372), y no verificando el pago en el acto se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir la cantidad demandada, más la que, en todos los casos, deberá presupuestar el juez para responder a los intereses y costas en el auto que ordene el mandamiento.

El embargo se practicará aun cuando el deudor no se halle presente, lo que se hará constar en la diligencia. En este caso se le hará saber el embargo dentro de los tres días siguientes al de la traba.

(370) Entre Ríos, artículo 446; Rojas, artículo 625; Proyecto, artículo 318; Silguera, artículo 420.

(371) De lo contrario esa intervención importaría un beneficio pecuniario para el deudor que desobedece un mandato judicial.

(372) Santa Fe, artículos 817 y 820; Córdoba, artículo 834; Tucumán, artículo 327; San Juan, artículo 752; Santiago del Estero, artículo 830; La Rioja, artículo 990.

Sólo en caso de consignar el embargo el importe del crédito que se le reclama podrán suspender la diligencia el funcionario encargado de la traba, siendo responsable de toda omisión.

Art. 320. — Si la deuda fuese de dar cantidades de cosas se mandarán embargar éstas, si existieran en poder del deudor. Si no existieran, se hará la computación en dinero por el ejecutante con arreglo al precio pactado en la obligación y en su defecto por el precio medio que tuviese la especie en plaza, certificado por informe de la Bolsa o por dos comerciantes, que firmarán el escrito y deberán ratificarse ante el actuario (373).

Art. 321. — Cuando la deuda fuera de dar cantidades de cosas, el acreedor o su representante deberá concurrir al embargo a fin de recibir las cosas debidas si el deudor se allana al pago.

Art. 322. — En el mandamiento de embargo se incluirá siempre la autorización para usar de la fuerza pública y allanar domicilio si fuera necesario para su diligenciamiento.

Art. 323. — El embargo de bienes se hará en el orden siguiente, que debe entenderse establecido en beneficio del acreedor (374):

- 1º Dinero efectivo o títulos cotizables en la Bolsa.
- 2º Alhajas, piedras o metales preciosos.
- 3º Bienes muebles o semovientes.
- 4º Bienes raíces.
- 5º Créditos o acciones.
- 6º Sueldos, salarios o pensiones (375).

Este orden podrá ser alterado cuando los muebles constituyan un establecimiento comercial o industrial o fueran los del uso de la casa habitación del deudor, si éste presentara a embargo otros bienes, de entre los enumerados, que estén libres o que, aun cuando estuvieran gravados, bastaran ma-

(373) Santa Fe, artículo 810.

(374) Rojas, artículo 639; Entre Ríos, artículo 454.

(375) Ley número 9.511.

nifiestamente a cubrir el importe establecido en el mandamiento.

Contra el auto denegatorio de la substitución procede apelación con efecto devolutivo (376).

Art. 324. — Los bienes muebles que constituyen el ajuar de una casa de familia no son embargables sino por el locador o vendedor (377); pero no se trabará nunca embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza, ni en los demás bienes exceptuados por las leyes (378).

Quedan también exceptuados de embargo los sepuleros, salvo que el crédito provenga de su compra o de gastos para su construcción o reparación (379).

Ningunos otros bienes se consideran exceptuados.

Del auto que declare si un bien es o no embargable podrá apelarse con efecto devolutivo.

Art. 325. — Si el mandamiento de ejecución no designase bienes para el embargo, éste se hará efectivo sobre los que ofrezca el deudor estando conforme el ejecutante; y si no, los que éste señale si estuviese en posesión de ellos el deudor, salvo lo dispuesto en el artículo 323.

Si hubiese bienes dados en prenda, hipoteca o anticresis (380), se procederá contra ellos antes que contra ningunos otros.

Art. 326. — Cuando se solicite embargo sobre bienes inmuebles, deberá designarse con precisión y claridad la ubicación de ellos. Decretado el embargo, se comunicará en el día, por oficio, al registro de embargos e inhibiciones, para su anotación en el libro respectivo.

(376) Rojas, artículo 640.

(377) Buenos Aires, artículo 494; Entre Ríos, artículo 459; Rojas, artículo 642; San Luis, artículo 716.

(378) Mendoza, artículo 711.

(379) Proyecto, artículo 326; Rojas, artículo 642; Entre Ríos, artículo 459; San Luis, artículo 716.

(380) Rojas, artículo 645; Mendoza, artículo 709.

Si los bienes embargados fuesen muebles serán siempre depositados a la orden judicial. Si estuviesen en poder de terceros se les notificará el embargo en el día, quedando desde entonces constituido en depositario. Cuando se embargaran muebles de la casa habitación del deudor o de su establecimiento comercial o industrial, podrá el mismo ser constituido en depositario.

Los muebles o semovientes embargados no podrán trasladarse de un lugar a otro sin autorización del juez (381).

Cuando se embargue dinero, título o acciones se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a la orden del juzgado (382).

El embargo sobre créditos, sueldos, salarios o pensiones se trará notificando al deudor o empleador para que retenga la parte que corresponda, quedando constituido en depositario. Si los créditos comprenden rentas o frutos de inmuebles o se tratara de sementeras podrá designarse un administrador judicial para asegurar su percepción, si el juez lo considerase necesario atendiendo las circunstancias especiales que mediaren.

Cuando el embargo haya de trabarse sobre bienes muebles de líneas férreas, telefónicas, telegráficas, empresas de alumbrado u otras análogas que interesan al servicio público o que pertenezcan a establecimientos industriales, fábricas o cualquiera otra instalación que los necesite para su funcionamiento, se hará en forma de no impedir ese funcionamiento, y en caso de venta se realizará comprendiendo todos los bienes que la constituyan, a no ser que se trate de cosas que puedan separarse sin perjuicio de la explotación (383).

Art. 327. — El depositario de objetos embargados a la orden judicial estará obligado a presentarlos dentro de veinticuatro horas de cualquier intimación judicial, sin que pueda

(381) Proyecto, artículo 331.

(382) Proyecto, artículo 338.

(383) Proyecto, artículo 333; Rojas, artículo 641; Entre Ríos, artículo 458; Buenos Aires, artículo 493; Silguera, artículo 432; San Luis, artículo 715; Córdoba, artículo 846; Santiago del Estero, artículo 842.

alegar derechos de retención (384). Si no lo hiciera, el juez deberá pasar los antecedentes a la justicia criminal para la iniciación del proceso que corresponde según el Código Penal.

Art. 328. — Aunque pague el deudor en el acto de la intimación por el oficial de justicia serán a su cargo las costas.

Art. 329. — Si durante un juicio ejecutivo y antes de pronunciar sentencia venciera algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se proceda, o algún nuevo documento, en obligaciones para cuyo pago se hubieran convenido por cuotas o en períodos determinados, siempre que así se hubieran denunciado en el escrito de iniciación, puede, si lo pidiere el acreedor, ampliarse la ejecución por su importe, sin necesidad de retroceder, considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido.

Los plazos o cuotas que vencieran después de la sentencia de remate, mientras se ejecute ésta, serán objeto de demandas especiales que se substanciarán ante el mismo juez, intimando al deudor que exhiba recibo de pago dentro de tercero día, bajo apercibimiento de considerarse ampliada la sentencia a los nuevos plazos o cuotas (385).

Art. 330. — Cuando el embargo recaiga sobre cosas que se deterioren rápidamente o cuya conservación sea difícil o dispendiosa, el juez podrá ordenar su venta inmediata.

Del auto que la disponga no se dará recurso (386).

Art. 331. — El acreedor puede pedir ampliación o mejora del embargo en cualquier estado del juicio, demostrando que hay motivo racional para dudar de la suficiencia de los bienes embargados; y siempre que se hubiera deducido una tercería excluyente.

(384) Proyecto, artículo 332; Santa Fe, artículo 831.

(385) Córdoba, artículo 852; Santa Fe, artículo 840; Santiago del Estero, artículo 848; La Rioja, artículo 1.007.

(386) Proyecto, artículo 336; Rojas, artículo 650; Tucumán, artículo 346; Silgueira, artículo 433.

CAPÍTULO III

EXCEPCIONES Y SENTENCIA DE REMATE

Art. 332. — Efectuado el requerimiento al deudor (387), se le citará de remate, bajo apercibimiento de que si dentro de tres días no se opone deduciendo excepción legítima se pronunciará sentencia de remate, mandando llevar la ejecución adelante.

Si se opusiera, deberá determinar con precisión las excepciones que tuviese y no se le admitirán sino las que en esa oportunidad alegue.

Art. 333. — Las únicas excepciones admisibles son:

- 1º Incompetencia de jurisdicción.
- 2º Falta de personalidad legal en el ejecutante, en el ejecutado o en sus procuradores.
- 3º La *litis pendencia* en el momento de iniciarse la ejecución.
- 4º La falsedad del título con que se ejecuta.
- 5º La inhabilidad del mismo.
- 6º La prescripción, modificación o extinción total de la deuda (388) por alguno de los medios establecidos en el Código Civil.

La compensación sólo cabe con crédito líquido que traiga aparejada ejecución.

- 7º La nulidad de la ejecución por haberse violado las formas substanciales del procedimiento que afectan las garantías de la defensa (389).

Art. 334. — El excepcionante deberá acompañar al escrito en que oponga excepciones los documentos públicos o privados que las comprueban, y será ésta la única prueba

(387) Jurisprudencia. Rojas, artículo 655; Santa Fe, artículo 844.

(388) La extinción parcial es circunstancia que debe tenerse en cuenta al practicarse la liquidación. Ver mis comentarios, número 871.

(389) De acuerdo con la jurisprudencia que ha establecido que las omisiones en las actuaciones para preparar la vía ejecutiva no pueden fundar la excepción. Ver mis comentarios, número 875.

admisible en el procedimiento ejecutivo, salvo que se alegasen excepciones de procedimiento, prescripción o falsedad (390).

Tratándose de una de éstas que haya de justificarse por otros elementos, el excepcionante deberá ofrecer toda la prueba con el mismo escrito y acompañar en pliego cerrado las posiciones e interrogatorios para los testigos.

Si las excepciones fuesen admisibles, se dará traslado por tres días al ejecutante, quien, al contestarlas, deberá proceder como indica el inciso anterior.

Si se declarase que las excepciones opuestas no son admisibles, podrá apelarse en relación.

Art. 335. — Evacuado el traslado o vencido el término sin que se haya hecho, el juez procederá a recibir las excepciones a prueba por diez días, cuando ella sea necesaria, o a resolver con la prueba agregada en su caso.

Art. 336. — En el procedimiento ejecutivo no se acordará término extraordinario para la prueba.

Sólo podrán presentarse cinco testigos por cada parte (391).

Las notificaciones, durante el término de prueba, se harán en el día.

Vencido el término de prueba, si el juez lo cree conveniente, podrá oír a las partes por un traslado con término de seis días comunes.

Art. 337. — La sentencia de remate se pronunciará dentro de ocho días desde la expiración del término para el traslado de que habla el artículo anterior, o desde el llamamiento de autos. Sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante o no hacer lugar a ésta.

La sentencia de remate será apelable en relación, cuando se hayan opuesto excepciones e intentado probarlas.

Cualquiera que sea la sentencia, quedará a los litigantes a salvo el juicio ordinario.

Art. 338. — En caso de ser condenatoria la sentencia, podrá el ejecutante proceder a su cumplimiento por los trá-

(390) Proyecto, artículo 343; Entre Ríos, artículo 470.

(391) Jurisprudencia. Cámara Civil 2ª, Junio 18 de 1915.

mites del capítulo siguiente, si diera fianza de responder de lo que perciba en caso de ser revocada.

Otorgada la fianza, se remitirá el expediente a la cámara, dejando testimonio de lo que fuese necesario para proseguir la ejecución.

La fianza, que deberá presentarse dentro de los seis días siguientes a la concesión del recurso, será extensiva al resultado del juicio ordinario, a que hace referencia el artículo 341, si el interesado lo pidiera. En caso contrario, quedará cancelada de derecho con la confirmación de la sentencia de remate.

Art. 339. — Dentro del procedimiento ejecutivo, sólo son apelables para el ejecutado los autos que se declaren tales (392).

Art. 340. — Todas las costas, con excepción de las que correspondan a pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas, son a cargo del vencido, salvo el caso de ser aceptada la excepción de prescripción, en que no regirá el precepto (393).

Art. 341. — El ejecutado podrá poner término al procedimiento ejecutivo, en cualquier estado que se encuentre, consignando la suma demandada, intereses, moratorias y costas, y exigir del acreedor, para poder retirarla, que preste fianza a los efectos del juicio ordinario que deducirá.

La fianza quedará cancelada de derecho si no entablase su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se dé la fianza (394).

CAPÍTULO IV

DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE

Art. 342. — Consentida la sentencia de remate, confirmada por el superior, o dada la fianza en el caso del artículo 341, el ejecutante presentará la liquidación de intereses.

(392) Ver mis comentarios, número 902.

(393) Ver mis comentarios, número 908.

(394) Rojas, artículo 677; Mendoza, artículos 746 y 747.

De la liquidación se dará vista al deudor, con término de tres días, en los cuales deberá manifestar su conformidad o disconformidad, no pudiendo esta última fundarse sino en error de cálculo o sobre el tipo de interés.

El juez resolverá, sin otro trámite, sobre la aprobación o modificación, estableciendo en el segundo caso el importe que corresponde.

En el mismo auto, y sin trámite alguno, fijará el monto de las costas.

La resolución será apelable al efecto devolutivo.

Art. 343. — Si lo embargado fuera dinero, se hará pago inmediato al acreedor del capital y de los intereses, sin perjuicio de la fijación definitiva de las costas.

Si fueran títulos cotizables, podrá el acreedor solicitar que le sean entregados al precio del día (395). En caso de no hacerlo, o en defecto de precio de cotización, se procederá a la venta inmediata por un corredor de bolsa que designará el juzgado.

Si fuesen frutos, la venta se hará en remate por consignatario (396).

Si fueran sueldos o pensiones, se intimará el depósito en el Banco de la Nación Argentina, si ya no estuvieran en él.

Art. 344. — La venta de bienes raíces, muebles o alhajas, se hará en remate público, por el martillero que designen las partes de acuerdo, o el que nombre el juez a falta de él.

Al objeto indicado, propuesto el martillero por el acreedor en el escrito en que solicita la venta, se mandará que el ejecutado haga la manifestación de conformidad dentro de cuarenta y ocho horas. Transcurridas, el juez resolverá sin recurso.

La venta de bienes raíces deberá realizarse con base del 80 % de la valuación para la contribución territorial (397),

(395) Rojas, artículo 1.038.

(396) Córdoba, artículos 878 y 879.

(397) Proyecto, artículo 348; Buenos Aires, artículo 525; San Luis, artículo 743; Tucumán, artículo 367; Silgueira, artículo 449; Entre Ríos, artículo 479; San Juan, artículo 795.

en el lugar de su situación, a menos que, por resolución especial, el juez designe uno distinto (398).

La venta de muebles o alhajas se hará sin necesidad de tasación, en el lugar designado en los anuncios, en donde se expondrán al examen público durante la publicación de aquéllos (399).

Sin perjuicio de otros medios de publicidad que autorice el juez, deberán publicarse avisos en el «Boletín Oficial» y otro diario que designará el juzgado, por un término no mayor de veinte días para los inmuebles y de ocho para los muebles. No será necesario designar el nombre del ejecutado (400).

Art. 345. — Si de la valuación administrativa resultase que el bien raíz no alcanza a cubrir el crédito reclamado, el actor u otro acreedor privilegiado, que estuviese en segundo término, podrá pedir que se amplíe el embargo (401).

Art. 346. — Antes de decretar la venta de bienes raíces, el juez ordenará al ejecutado que presente los títulos de propiedad dentro del tercero día, bajo apercibimiento de que no haciéndolo se sacará, a su costa, copia de ellos de los registros públicos (402).

Recabará igualmente informe del registro de hipotecas, embargos e inhibiciones sobre los gravámenes que reconozca (403).

(398) Rojas, artículo 690; Buenos Aires, artículo 323; San Luis, artículo 747; Silguera, artículo 450.

(399) Buenos Aires, artículo 518; Rojas, artículo 683; Santa Fe, artículo 875; Mendoza, artículo 750; Silguera, artículo 448; San Luis, artículo 742; Tucumán, artículo 366; Córdoba, artículo 880; Entre Ríos, artículo 478; La Rioja, artículo 1.040; Santiago del Estero, artículo 876; San Juan, artículo 795.

(400) Rojas, artículo 683; Santa Fe, artículo 884.

(401) Proyecto, artículo 353; Buenos Aires, artículo 528; Entre Ríos, artículo 487; San Luis, artículo 752; La Rioja, artículo 1.070.

(402) Proyecto, artículo 349; Rojas, artículos 685 y 689; San Luis, artículo 743; Tucumán, artículo 368; Córdoba, artículo 888; La Rioja, artículo 1.043; Santiago del Estero, artículo 884 y 886; Silguera, artículo 449.

(403) Buenos Aires, artículo 520; Entre Ríos, artículo 480; Santa Fe, artículos 878 y 879; San Luis, artículo 744; Tucumán, artículo 368; Córdoba, artículo 884; La Rioja, artículo 1.043; Santiago del Estero, artículo 880; San Juan, artículo 802.

En caso de haber acreedores hipotecarios, la venta se hará con citación de ellos (404).

Art. 347. — Los anuncios de remate expresarán:

- 1º El juzgado y secretaría por donde se ordena; el día, hora y local en que tendrá lugar; la base de venta; la ubicación y extensión de la propiedad; el monto y naturaleza de los gravámenes que reconozca.
- 2º La manifestación de que los títulos de propiedad están agregados, o que no existen o que se ignora el registro dónde se encuentran (405).
- 3º La prevención de que los interesados deberán examinar los títulos antes del remate y que no se les admitirá después de él reclamación alguna por su insuficiencia o falta (406).

Art. 348. — En los remates de inmuebles, el juzgado autorizará a los martilleros, a su solicitud, a requerir el auxilio de la fuerza pública y allanamiento, a fin de colocar carteles anunciadores de la subasta, no obstante cualquier oposición de los dueños u ocupantes (407).

Art. 349. — No habiendo postores, quedará al arbitrio del ejecutante pedir o un nuevo remate, previa reducción de la tasación en un 25 %, o que se le adjudiquen los bienes por la base del remate no realizado.

El ejecutado podrá dejar sin efecto la dación en pago,

(404) Rojas, artículo 686; Buenos Aires, artículo 521; Santa Fe, artículo 880; Mendoza, ley número 434, artículo 30; Silgueira, artículo 449; San Luis, artículo 745; Tucumán, artículo 369; Córdoba, artículo 885; Entre Ríos, artículo 481; La Rioja, artículo 1.044; Santiago del Estero, artículo 881; San Juan, artículo 804.

(405) Proyecto, artículo 351; Rojas, artículo 691; Entre Ríos, artículo 484; Buenos Aires, artículo 524; Santa Fe, artículo 888; Silgueira, artículo 450; San Luis, artículo 798; Tucumán, artículo 371; La Rioja, artículo 1.053.

(406) Proyecto, artículo 351; Entre Ríos, artículo 484; Santa Fe, artículo 888; Silgueira artículo 450; Córdoba, artículo 896; Santiago del Estero, artículo 892.

(407) Jurisprudencia. El código de Entre Ríos lo establece para las ejecuciones hipotecarias, artículo 509.

abonando la deuda con intereses y costas antes de firmarse la escritura (408).

Si en el segundo remate tampoco hubiese postores se ordenará la venta sin base.

Art. 350. — El martillero dará cuenta de la realización del remate dentro de los cinco días siguientes a ésta, acompañando boleto de venta firmado por el comprador y boleto de depósito en el Banco de la Nación Argentina de la suma que haya percibido a cuenta de precio.

Las partes deberán manifestar conformidad o disconformidad con la venta, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de aprobarse si no se oponen (409).

La oposición se substanciará como incidente.

Art. 351. — Si por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio, si la hubiere, de los intereses acrecidos y las costas causadas con ese motivo, al cobro de todo lo cual será compelido ejecutivamente a petición de parte.

Art. 352. — Si el remate se desaprobaba por culpa del martillero, éste perderá su derecho a reclamar los gastos y comisión, siendo además responsable de las costas que haya motivado el incidente (410).

Art. 353. — En la venta de bienes raíces, al aprobar el remate, se ordenará el depósito del precio dentro de tercero día, hecho lo cual se mandará dar posesión al comprador y se intimará al ejecutado otorgue la correspondiente escritura en término de diez días, bajo apercibimiento de que será

(408) Rojas, artículo 687; Santa Fe, artículo 892; Mendoza, artículo 767; La Rioja, artículo 1.058.

(409) Proyecto, artículo 354; Rojas, artículo 703; Buenos Aires, artículo 529; San Luis, artículo 753.

(410) Proyecto, artículo 357; Rojas, artículo 701; Entre Ríos, artículo 492.

subscripta por el juez si no lo hace. A este fin, podrá decretar el levantamiento de las inhibiciones registradas contra el ejecutado, dejando gravado el precio a su responsabilidad (411).

El comprador no podrá hacer ninguna reclamación relativa al remate sin depositar previamente el precio (412).

Art. 354. — Los fondos depositados por el comprador podrán ser retirados por el ejecutante desde que se haya dado a aquél la posesión, comprobando que el inmueble no reconoce gravámenes ni embargos preferentes; pero deberá dejar la suma prudencial que determine el juez para responder a los gastos de escrituración (413).

Art. 355. — Si el ejecutado lo pidiere, el acreedor deberá prestar fianza a las resultas del juicio ordinario que pueda promoverse. A esta fianza le es aplicable lo dispuesto en el artículo 341.

Art. 356. — Sin estar reintegrado completamente el ejecutante no podrán aplicarse las sumas realizadas a otros objetos, a menos que sean para las costas de la ejecución o para otro acreedor que haya sido declarado preferente por ejecutoria.

Art. 357. — Los honorarios de los que hubieren intervenido en el juicio no podrán ser gestionados hasta la liquidación general del crédito, salvo el caso de abandono de la ejecución por un término no menor de tres meses (414).

Art. 358. — No mediando privilegio ni concurso, los embargos tienen preferencia para el cobro en el orden de su traba (415).

(411) Jurisprudencia. Tucumán, artículo 376; Entre Ríos, artículo 493.

(412) Rojas, artículo 705; Santa Fe, artículo 902.

(413) Jurisprudencia. Entre Ríos, artículo 495.

(414) Buenos Aires, artículo 537; Entre Ríos, artículo 449; San Luis, artículo 761; Córdoba, artículo 913; Silguera, artículo 458.

(415) Jurisprudencia. Silguera, artículo 457; San Luis, artículo 763; Tucumán, 387; Entre Ríos, artículo 800.

SECCIÓN II

EJECUCION DE CREDITOS HIPOTECARIOS

Art. 359. — El acreedor hipotecario, una vez vencido el plazo de la obligación, podrá pedir, presentando la escritura respectiva, el remate del bien gravado, por el rematador que proponga, con base de la deuda, los intereses adeudados en la fecha de su presentación y los gastos que provisoriamente estimará el juez (416).

Art. 360. — Solicitada la ejecución, se pedirán informes sobre los gravámenes que reconozca el inmueble y la existencia de terceros adquirentes (417).

Art. 361. — Recibido el informe, el juez citará al deudor, bajo apercibimiento de que si no paga u opone excepción legítima dentro de tres días se procederá a rematar el inmueble hipotecado (418).

Las únicas excepciones admisibles son:

- 1º Incompetencia de jurisdicción.
- 2º Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus procuradores.
- 3º Caducidad de la inscripción hipotecaria.
- 4º Prescripción, quita, espera, remisión y pago.

La prueba de estas excepciones deberá resultar del título o consistir únicamente, en instrumentos públicos o privados, o en actuaciones judiciales que se acompañarán con el escrito de excepciones, o indicarán con toda precisión y claridad, tratándose de las últimas (419).

No presentándose así, no será admitido el escrito de excepciones.

Art. 362. — Cuando la prueba ofrecida consistiera en actuaciones judiciales, el juez solicitará los informes que

(416) Entre Ríos, artículo 504 y 506; Silgueira, artículo 467.

(417) Rojas, artículo 723; Santa Fe, artículo 916.

(418) Rojas, artículos 724 y 725.

(419) Jurisprudencia. Rojas, artículo 726; Santa Fe, artículo 916.

considerase necesarios, que deberán dársele en término de tres días por el funcionario requerido, y procederá a resolver con ellos.

El auto que dictare será apelable en relación.

Art. 363. — Vencido el término para oponer excepciones y notificados todos los acreedores hipotecarios, y tercer adquirente en su caso, se ordenará la venta (420).

Art. 364. — En todo cuanto no esté modificado por las disposiciones anteriores, regirán las disposiciones de la sección anterior.

Art. 365. — El procedimiento establecido para las ejecuciones hipotecarias es irrenunciable.

SECCIÓN III

EJECUCION DE SENTENCIAS

CAPÍTULO I

EJECUCION DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES ARGENTINOS

Art. 366. — Consentida o ejecutoriada la sentencia, sea de los tribunales ordinarios o arbitrales, y vencido, en su caso, el plazo señalado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla a instancia de parte interesada, bajo las reglas que se expresan en este capítulo.

Art. 367. — Si la sentencia contuviese condena al pago de cantidad líquida, se procederá al embargo de bienes en la forma establecida para el juicio ejecutivo.

Se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida, siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación, aun cuando éste no estuviera expresado numéricamente.

Art. 368. — Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y otro ilíquida, podrá proce-

(420) Rojas, artículo 726; Jurisprudencia. Santa Fe, 916.

derse a hacer efectiva la primera sin esperar que se liquide la segunda.

Art. 369. — Hecho el embargo, se citará al deudor para venta de bienes, bajo apercibimiento de que si dentro de tercero día no opusiere y probare excepción legítima se procederá a realizar aquélla.

Las únicas excepciones admisibles son:

1º Falsedad de la ejecutoria.

2º Prescripción de la misma.

3º Pago, quita, espera o remisión.

La prueba de las excepciones mencionadas en los dos últimos incisos sólo podrá hacerse por instrumentos públicos o privados que se acompañarán al deducirla (421).

Art. 370. — Vencidos los tres días, si no se hubiere deducido oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno. Si se hubiera deducido oposición, el juez, en vista de la prueba presentada, mandará continuar la ejecución, o hará lugar a las excepciones ordenando que se levante el embargo.

De la resolución habrá los mismos recursos y en la misma forma que para la sentencia de remate en el procedimiento ejecutivo.

Art. 371. — Consentida o ejecutoriada la resolución que manda continuar la ejecución se procederá en todo según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate.

Art. 372. — Si la sentencia condenase al pago de cantidad ilíquida procedente de frutos, se intimará al deudor que dentro de un término que señale el juez, presente la liquidación con arreglo a las bases que en la misma sentencia se hubiesen fijado, bajo apercibimiento de que no haciéndolo estará y pasará por la que presente la otra parte en todo lo que no pruebe ser inexacto.

Art. 373. — Presentada la liquidación, el juez dará vista al acreedor por seis días.

(421) Rojas, artículo 461; Tucumán, artículo 400 y Entre Ríos, artículo 418, agregan o por confesión solicitada al deducirla.

Estando éste conforme con ella se procederá a hacer efectiva la suma que resulte en la forma determinada para cuando se trata de cantidad líquida.

No habiendo conformidad, el juez recibirá la oposición a prueba por un término no mayor de veinte días, vencido el cual mandará agregar las pruebas producidas y dictará resolución dentro de diez días.

Esta resolución será apelable en relación y le serán aplicables las disposiciones de los artículos 338 y 341, inciso 2º.

Art. 374. — Presentada la liquidación por el acreedor en el caso que prevé la segunda parte del artículo 367, se procederá como dispone el artículo anterior.

Art. 375. — Si la sentencia condenase al pago de una cantidad líquida procedente de perjuicios al acreedor, presentará relación de ellos al pedir su cumplimiento, observándose luego el procedimiento establecido en los artículos 342 y siguientes.

Art. 376. — En los casos en que la sentencia contuviese condena de hacer alguna cosa, si el condenado no cumplierse con lo que se le ordene para la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el juez le señale, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios de la inejecución, a elección del acreedor (422).

Para hacer efectivo el resarcimiento de perjuicios se procederá como determina el artículo anterior.

Art. 377. — En las condenaciones a no hacer alguna cosa, si el obligado la quebrantase, quedará a opción del acreedor pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, a costa del deudor, si fuera posible, o que le indemnice los daños y perjuicios conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

(422) Los códigos de Buenos Aires, artículo 566; Entre Ríos, artículo 428 y San Luis, artículo 790, declaran aplicable el procedimiento a la obligación de hacer escritura pública en los casos de los artículos 1.185 y 1.187 del Código Civil. Ver sobre esto mis comentarios, número 996 y jurisprudencia establecida últimamente por los tribunales de la Capital.

Art. 378. — Cuando la condena sea de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado; y en caso de que esto no pudiese verificarse, se le obligará a entregar el precio, previa avaluación por perito que designará el juez de oficio, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Si la condena fuera de entregar una cantidad determinada de frutos en especie, si el deudor no los entregase en el plazo que se fije se reducirán a dinero en la forma establecida en el artículo 320, y se procederá a hacer efectiva la suma que resulte (423).

En caso de controversia sobre el estado, calidad o cantidad de las cosas que deban entregarse en cumplimiento de una sentencia, el juez resolverá sumariamente la diferencia, con los informes o pericias que decreta para mejor proveer (424).

Art. 379. — Siempre que las liquidaciones o cuentas a que haya de procederse sean muy complicadas o de difícil justificación, o requieran conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos con carácter de amigables componedores.

Art. 380. — Las sentencias ejecutoriadas dictadas por tribunales que ejerzan jurisdicción fuera de la Capital, podrán ser ejecutadas en ésta, siempre que no invadan jurisdicción del juez ante quien se solicite la ejecución — sobre la cual se oirá al agente fiscal — si se presentan en condiciones legales de autenticidad (425).

(423) Prevén el caso, aunque con procedimientos distintos: Entre Ríos, artículo 424; Córdoba, artículo 971; Tucumán, artículos 406 y 407; Santiago del Estero, artículo 960; San Juan, artículo 856; Silgueira, artículo 366.

(424) Proyecto, artículo 388.

(425) Rojas, artículo 476, leyes números 44 y 5.133; Santa Fe, artículo 932; Entre Ríos, artículo 436 y siguientes; Córdoba, artículos 951 y 952; Mendoza, artículos 495 y 496; Tucumán, artículos 417 y siguientes; Santiago del Estero, artículos 940 y 941; Silgueira, artículo 342; San Juan, artículos 867 y siguientes; La Rioja, artículos 1.106 y siguientes.

Art. 381. — En los casos no previstos en los artículos anteriores, se estará a las reglas establecidas en esta sección en cuanto les sean aplicables (426).

Art. 382. — Las reglas establecidas en esta sección, se aplican al procedimiento de apremio en cuanto no estuviera previsto por las leyes que lo hayan determinado.

CAPÍTULO II

EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO

Art. 383. — Las sentencias pronunciadas en el extranjero tendrán la fuerza que establezcan los tratados respectivos.

En defecto de tratados, tendrán fuerza si reúnen las circunstancias siguientes:

- 1º Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.
- 2º Que no haya sido dictada en rebeldía de la parte condenada, siempre que ésta haya tenido domicilio en la República al iniciarse el juicio (427).
- 3º Que la obligación que haya dado lugar a la ejecutoria, sea válida según nuestras leyes.
- 4º Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la Nación en que se haya dictado para ser considerada como tal y los que las leyes argentinas requieren para que hagan fe en la República.

(426) Quedan comprendidos en la disposición los casos de constitución de servidumbres que proveen los códigos de Entre Ríos, artículos 432 y 433; La Rioja, artículo 1.004; Santiago del Estero, artículo 968; Córdoba, artículo 979; San Luis, título XXXVII; Tucumán, artículo 413, así como otros semejantes que puedan ocurrir.

(427) Jurisprudencia comercial, tomo 5, página 510.

La ejecución se concederá si en la Nación que la hubiere dictado se da cumplimiento a las sentencias de los tribunales argentinos. En los casos en que para hacerlo se exigieran otras condiciones para dar cumplimiento a éstas, se exigirán también en la Capital (428).

Art. 384. — La ejecución de las sentencias dictadas en naciones extranjeras, se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda. Este, previa la traducción de la ejecutoria, si no estuviera redactada en idioma patrio, y después de oír a la parte contra quien se dirige y al agente fiscal, declarará si debe o no dársele cumplimiento.

Art. 385. — En caso de oposición formulada por la parte contra quien se dirige la ejecución o por el agente fiscal, por falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 383 (429), el juez, oído el ejecutante en término de tres días, recibirá la oposición a prueba por veinte días.

La prueba deberá ofrecerse en los escritos de oposición y de su contestación y regirá para ello lo dispuesto en los artículos 369 y 370.

Art. 386. — De la resolución que se diete podrá apelarse en relación para ante la cámara respectiva.

Art. 387. — Consentida o ejecutoriada la resolución que deniegue el cumplimiento de la ejecutoria, ésta se devolverá al que la haya presentado.

En el caso de que la resolución fuese otorgando el cumplimiento de la ejecutoria, se procederá en la forma establecida en esta ley para la ejecución de las sentencias.

(428) Mendoza, artículos 500 y 501; Santa Fe, artículo 949; San Juan, artículo 872; Santiago del Estero, artículo 974; La Rioja, artículo 1.113; Córdoba, artículo 985; Silgueira, artículo 344.

(429) Ver mis comentarios, número 1.010 y siguientes; Santiago del Estero, artículo 979; La Rioja, artículo 1.114; Santa Fe, artículo 949; Córdoba, artículo 987, disponen para el caso la substanciación por las reglas del juicio de menor cuantía.

TITULO XII

INTERDICTOS (a)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 388. — El escrito con que se inicie un interdicto deberá expresar con toda claridad y precisión los actos exteriores en que cónsiste la perturbación y la persona que los ejecutó.

Con él deberá presentarse toda la prueba que haga el derecho del actor, designar los testigos que han de examinarse, que no podrán ser más de cinco, y acompañar el interrogatorio correspondiente (430).

Art. 389. — Los juicios de interdicto se substanciarán en juicio verbal a que deberá convocarse en término de seis días, notificado con intervalo de cuatro por lo menos, entregando al demandado al citarlo copia de la presentación del actor y documentos que la instruyan.

Si el demandante no compareciera a la audiencia se le tendrá por desistido.

Art. 390. — En el juicio verbal de que habla el artículo anterior, deberá el demandado oponer todas las excepciones y defensas que tuviera, sin que le sea permitido promover

(a) El código vigente y el proyecto de los doctores Agote, Méndez y Montes de Oca, legislan el interdicto de adquirir contra el cual, como hago notar en mis comentarios número 1.019, se pronuncian la comisión que redactó el código para la provincia de Entre Ríos y Rojas en sus «Estudios de Derecho Procesal Argentinos».

De los códigos provinciales, lo reglamentan: Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero.

No lo legislan: Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y el proyecto de Silgueira.

El código de Tucumán habla de los interdictos establecidos en el Código Civil.

(430) Entre Ríos, artículo 543.

artículo previo (431); y presentará en él toda la prueba en la forma del artículo 388.

Art. 391. — Sólo se admitirán pruebas que se refieran a los extremos exigidos en los artículos 393 y 394.

Si fuese dudoso el último estado de la posesión y no constare tampoco cuál sea la más antigua, podrán producirse pruebas sobre el derecho o el mejor derecho a poseer (432).

Art. 392. — La sentencia, que deberá pronunciarse dentro de los cinco días siguientes al juicio verbal, deberá tomar en cuenta todas las defensas y excepciones opuestas (433) y se limitará a amparar en la posesión, o declarar quien tenga mejor derecho a poseer, o declarar que no ha lugar al interdicto.

Se entenderá siempre sin perjuicio de las acciones petitorias.

Será apelable en relación dentro de tercero día.

El superior deberá pronunciarse dentro de los quince días siguientes al llamamiento de autos.

Las costas serán siempre a cargo del vencido.

CAPÍTULO II

INTERDICTO DE RETENER

Art. 393. — Para que proceda el interdicto de retener se requiere:

- 1º Que el que lo intenta se halle en actual posesión del inmueble.
- 2º Que su posesión no sea viciosa respecto del adversario (434).

(431) Entre Ríos, artículo 545.

(432) Entre Ríos, artículos 546 y 547; San Luis, artículo 834; Silgueira, artículo 478; Santiago del Estero, artículo 802; Córdoba, artículo 806.

(433) Rojas, artículo 734.

(434) Proyecto, artículo 411; Entre Ríos, artículo 542; Rojas, artículo 738; Santiago del Estero, artículo 800; La Rioja, artículo 970; Mendoza, artículo 919; Córdoba, artículo 804; Santa Fe, artículo 788; San Luis, artículo 833.

- 3º Que el demandante haya sido turbado en su posesión por actos materiales ejercidos con intención de poseer (435).
- 4º Que se deduzca dentro del término legal (436).

CAPÍTULO III

INTERDICTO DE RECOBRAR

Art. 394. — Para que proceda el interdicto de recobrar se requiere: .

- 1º Que el actor o su causante hayan estado en posesión del inmueble.
- 2º Que haya sido despojado de esa posesión, violenta o elandestinamente.
- 3º Que se deduzca dentro del término legal (437).

Art. 395. — Procede asimismo el interdicto contra el que teniendo la posesión a nombre de un tercero, pretende cambiarla a nombre propio o de otro, y en los demás casos en que las leyes autorizan la acción de despojo (438).

CAPÍTULO IV

INTERDICTO DE OBRA NUEVA

Art. 396. — Presentada demanda para la suspensión de una obra nueva o para la destrucción de una existente, el juez ordenará, sin audiencia de parte y sin recurso alguno, que se suspenda el trabajo y se haga constar en diligencia el

(435) Entre Ríos, artículo 542; Proyecto, artículo 411; Rojas, artículo 738.

(436) Las mismas citas del número anterior.

(437) Entre Ríos, artículo 542; Proyecto, artículo 411; Rojas, artículo 738.

(438) Entre Ríos, artículo 552; Rojas, artículo 744.

estado de la obra; y substanciará el interdicto en la forma establecida en el capítulo I (439).

Art. 397. — La sentencia deberá ordenar la suspensión de la obra, la destrucción de lo que se hubiese hecho o de la parte que produzca el menoscabo (440).

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO VERBAL

Art. 398. — Siempre que por este código se prescribiera el juicio verbal o el procedimiento verbal, éste deberá sujetarse a las siguientes reglas:

- 1º La notificación o citación a las partes deberá hacerse acompañando copia del escrito de iniciación y documentos que instruyan la demanda o advirtiendo que están a disposición de ellas en secretaría, en los casos de citación por edictos.
- 2º Toda notificación o emplazamiento a juicio verbal lleva implícita el aperebimiento de celebrarse con la parte que concurra.
- 3º Los jueces tratarán de terminar la substanciación en una sola audiencia y no siendo posible deberán continuarla en las subsiguientes hasta concluirirla.
- 4º Sólo se dejará constancia breve y concreta de las argumentaciones de las partes en sus exposiciones.
- 5º En ningún caso de juicio verbal deberá mediar un período mayor de diez días entre la presentación y la audiencia.
- 6º Las resoluciones, no habiendo término especial señalado deberán pronunciarse dentro de tres días.

(439) Rojas, artículo 748; Proyecto, artículo 420; La Rioja, artículo 973; Santiago del Estero, artículo 811; San Juan, artículo 703; Mendoza, artículo 928; Córdoba, artículo 815; Santa Fe, artículo 793; San Luis, artículo 849.

(440) Proyecto, artículo 558.

- 7º El señalamiento hecho para la comparencia no podrá alterarse sino por justa causa alegada y probada antes de la audiencia o por conformidad de partes.
- 8º Los testigos en este procedimiento no podrán exceder de cinco por cada parte.
- 9º No podrán deducirse en él cuestiones de resolución previa.

TITULO XIII

DEL JUICIO DE DESALOJO

Art. 399. — Son parte legítima para promover el juicio de desalojo:

- 1º Los propietarios, poseedores a título de dueño, usufructuarios o por otro título que confiera el uso, goce o disfrute de un predio, contra los locatarios, colonos parcelarios, comodatarios, administradores, gestores, guardadores, y, en general contra todo tenedor precario o intruso cuya obligación de restituir sea exigible.
- 2º Los locatarios contra los sublocatarios o colonos parcelarios (441).

Art. 400. — Tanto el actor como en demandado deberán manifestar si en el inmueble que es objeto de la demanda de desalojo existen o no subinquilinos. En el primer supuesto, el juez de oficio dará a éstos conocimiento de la demanda entablada al locatario principal, al mismo tiempo en que

(441) Proyecto, artículo 442; Rojas, artículo 844; Buenos Aires, artículo 602; Entre Ríos, artículo 525; San Luis, artículo 850; Silgueira, artículo 485; el código de Santa Fe, artículo 746, inciso 3º, agrega a los que hubieran obtenido una sentencia ejecutoriada que mande entregar o restituir una finca, contra el condenado que continúa ocupándola. Yo entiendo que es caso de proceder por cumplimiento de sentencia no por desalojo y que está por otra parte comprendido en el final del inciso primero de este artículo.

notifica a éste, sin que ello importe tenerlo por parte en el juicio (442).

Art. 401. — Si la demanda se fundara en falta de pago de arrendamientos y en el juicio por cobro de éstos se hubiese negado la calidad de locatario, tal circunstancia no será obstáculo para el desalojo si el actor pudiese probar, en la oportunidad del artículo 403, que el demandado se encuentra comprendido en alguno de los casos de la disposición anterior (443).

Art. 402. — Interpuesta la demanda, se designará audiencia (444), dentro de un término que no podrá exceder de diez días, en la que las partes deberán hacer valer todas sus defensas, de cualquier carácter que fueran.

El demandado será citado en el fundo objeto de la acción si en él existe casa habitada, siempre que no hubiera domicilio determinado en el contrato (445), entregándole copia de la demanda y documentos con que se instruye (446).

La citación se hará bajo apercibimiento de que, si no compareciere, se dictará sentencia de acuerdo con los hechos expuestos por el actor, dentro de 24 horas.

Si el demandante no asistiera, la audiencia se realizará sin su intervención. De lo expuesto se levantará acta, haciendo constar solamente las pruebas ofrecidas y las conclusiones de las partes (447).

Art. 403. — En la audiencia expresarán las partes todas las pruebas de que hayan de valerse y éstas se producirán

(442) Ley número 11.156, el código de Tucumán la ha incorporado a sus disposiciones, artículo 494, como proyecto yo.

(443) Proyecto, artículo 423; Buenos Aires, artículo 603; Entre Ríos, artículo 529; Rojas, artículo 854; San Luis, artículo 851; Silguera, artículo 488.

(444) Rojas, artículo 845, suprime las audiencias verbales por las razones que da en la nota número 1. El código de Santa Fe permite preparar la acción por diligencias previas, artículos 749 y 750.

(445) Proyecto, artículo 424; Buenos Aires, artículo 605; Santa Fe, artículo 751; San Luis, artículo 852; Mendoza, artículo 496; Silguera, artículo 486.

(446) Mendoza, artículo 892.

(447) Entre Ríos, artículo 531; Buenos Aires, artículo 605; San Luis, artículo 853.

en otra audiencia, que se designará al efecto dentro de los cinco días siguientes. No podrán presentarse más de cinco testigos por cada parte (448). El juez, dentro de tercero día de celebrada la audiencia resolverá, en una sola sentencia, todas las cuestiones que se hubieran planteado (449).

Art. 404. — Si en el comparendo exhibiese el demandado contrato que fuese tachado de falso, se recibirá la causa a prueba como en el juicio ordinario; pero el término no excederá de veinte días. Probada la falsedad, el juez, al sentenciar, pondrá la persona del vencido a disposición del juez de crimen, con remisión de los antecedentes (450).

Art. 405. — Acordado el desalojo, regirán los plazos concedidos por el Código Civil o por los respectivos contratos, contados desde el emplazamiento y vencidos se ordenará el lanzamiento por la fuerza pública. Este lanzamiento se ordenará dentro de diez días si hubiese vencido el plazo desde el emplazamiento (451) y sin conceder plazo tratándose de intrusos (452).

Art. 406. — La sentencia en el juicio de desalojo no prejuzga sobre el dominio o preferente derecho posesorio que puedan alegar los interesados o terceras personas (453).

En el caso de existir subinquilinos, deberá hacerse saber a éstos por cédula. El término para el desalojamiento comenzará a correr para ellos desde la notificación (454).

Las costas, en todos los casos, se aplicarán al vencido (455).

(448) Mendoza, artículo 893.

(449) Proyecto, artículo 425; Entre Ríos, artículo 532.

(450) Buenos Aires, artículo 611; Entre Ríos, artículo 533; Proyecto, artículo 430; Rojas, artículo 851; San Luis, artículo 857.

(451) Proyecto, artículo 426; Entre Ríos, artículo 535; Silgueira, artículo 491.

(452) San Luis, artículo 855.

(453) Proyecto, artículo 434; Jurisprudencia, tomo 187, página 79; Santiago del Estero, artículo 765; San Luis, artículo 862; Silgueira, artículo 493.

(454) Ley número 11.156, Tucumán 494.

(455) Ver mis comentarios, número 1.090; Córdoba, artículo 773; Mendoza, artículo 894; Santiago del Estero, artículo 769.

La sentencia es la única resolución apelable en el juicio de desalojo; se concederá el recurso en relación y sólo en el caso del artículo 404.

Art. 407. — Cuando se solicitara el desalojo por falta de pago de dos o más períodos consecutivos de alquiler el lanzamiento se decretará dentro de diez días, salvo cláusula expresa en el contrato sobre plazo en que haya de producirse.

Art. 408. — En las demandas de desalojo por ejecución de obras destinadas a aumentar su capacidad locativa (456), el actor deberá presentar con su demanda la prueba de haber solicitado el permiso municipal para la ejecución de las obras, sin cuyo requisito no se le dará trámite.

Art. 409. — Si al efectuarse el lanzamiento alegase el demandado que él o algún miembro de su familia se encuentra enfermo, se ordenará su examen por médico de los tribunales, y si éste declarase posible la traslación sin grave riesgo para la salud, se procederá a cumplir la diligencia (457).

Art. 410. — No será inconveniente para el lanzamiento la reclamación del vencido sobre mejoras o labores. En este caso se hará constar en el acta la naturaleza, extensión, estado e importancia de ellas, para que el interesado pueda justificar su derecho en otro juicio, sin perjuicio de las fianzas y medidas de seguridad que sean procedentes.

Si ese juicio no se iniciara dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la fianza por el actor, quedará ésta cancelada (458).

Art. 411. — Los mandantes o depositantes podrán usar de los trámites establecidos en este título contra sus man-

(456) Ley número 11.156, inciso 4°.

(457) Proyecto, artículo 431.

(458) Proyecto, artículo 433; Buenos Aires, artículo 613; Entre Ríos, artículo 538; Jurisprudencia, tomo 107, página 212; Rojas, artículo 857; Silgueira, artículo 492; San Luis, artículo 861; Córdoba, artículo 761; Tucumán, artículo 506; Santiago del Estero, artículo 757; San Juan, artículo 714.

datarios o depositarios, en los casos en que sea exigible la restitución de la cosa objeto del mandato o depósito (459).

Art. 412. — Cuando se trate de locación sin término, el locador puede solicitar se haga saber al locatario que comienza a correr el término correspondiente para la restitución de la cosa, conforme al Código Civil. El pedido se despachará sin más trámite.

Hecha la notificación, si el locatario no reclamase en el plazo de cinco días se procederá al lanzamiento vencido que sea el término respectivo.

Si reclamase, se observará el procedimiento establecido en este título; pero el término correrá desde la notificación de que habla el primer apartado (460).

TÍTULO XIV

DE LOS ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS

Art. 413. — Todos los que por la ley tengan derecho a alimentos podrán presentarse al juez justificando, con sujeción a lo dispuesto en el Código Civil (461), el título en cuya virtud lo pidan.

Justificarán además, aproximadamente por lo menos, el caudal del que deba darlos.

La prueba de esto último podrá hacerse por documentos, posiciones o testigos, sin citación ni otra solemnidad, en audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la presentación.

Art. 414. — Si el juez admitiera la demanda, señalará la cantidad que crea equitativa y la mandará abonar siempre por mensualidades anticipadas.

(459) Proyecto, artículo 436; Buenos Aires, artículo 616; San Luis, artículo 863.

(460) Proyecto, artículo 439; Silguera, artículo 494.

(461) Buenos Aires, artículo 626, inciso 1°.

Art. 415. — Si la pretensión fuese denegada procederá apelación en ambos efectos y, concedida, remitirá el expediente al superior, con citación solo del que la haya promovido.

Si se acuerdan los alimentos sólo se admitirá el recurso con efecto devolutivo e, interpuesto, se sacará testimonio de la sentencia que se reservará en el juzgado para su ejecución remitiéndose los autos al tribunal dentro de cuarenta y ocho horas con notificación de ambas partes. No se admitirá al demandado discusión alguna sobre el derecho a reclamar los alimentos (462).

La cámara deberá pronunciarse sobre las sentencias dictadas en los juicios de alimentos, dentro de ocho días contados de la notificación de la providencia de autos.

Art. 416. — La sentencia sobre alimentos no causa estado y podrá pedirse que cese en sus efectos o se modifique en el monto cuando haya variado la situación del alimentado o del obligado a darlos (463).

Art. 417. — Las disposiciones de este título se aplicarán en los juicios de divorcio, tramitándose en incidente separado (464).

Art. 418. — Las *litis expensas* se substanciarán por los mismos trámites.

TITULO XV

JUICIO DE MENSURA Y DESLINDE

Art. 419. — La acción de deslinde por confusión de límites que autoriza el Código Civil — título VIII, capítulo IV, libro III — deberá iniciarse acompañando el título de propiedad e indicando el nombre y domicilio de él o los propietarios de los fundos vecinos cuyos límites se encuentran confundidos, si se conocen.

El juez convocará a un juicio verbal, dentro de diez

(462) Buenos Aires, artículo 629, ver mis comentarios, número 1.123.

(463) Rojas, artículo 884.

(464) Entre Ríos, artículo 581.

días, al actor y los linderos denunciados, a objeto de designar un perito. En caso de no ponerse de acuerdo en ello, cada uno deberá proponer el suyo, siendo de su cuenta el honorario que le corresponda.

Si hubiese algún terreno de propiedad fiscal o municipal contiguo, se citará también al agente fiscal, o al presidente de la municipalidad del distrito donde deba practicarse la mensura.

La notificación se hará entregando copia de la demanda y documentos que la instruyan.

Art. 420. — El que promueva el juicio de mensura deberá presentar los títulos auténticos que acrediten su dominio, y expresar los linderos actuales del terreno en todos sus rumbos.

No presentando títulos en forma, el juez repelerá de oficio la solicitud.

Art. 421. — Deducida la pretensión con los requisitos necesarios, el juez mandará practicar la operación de mensura por el perito que el interesado proponga, debiendo dicho perito citar para ella a todos los propietarios de los terrenos colindantes.

Art. 422. — La citación se hará por medio de una circular en la que el perito expresará la situación del terreno que se va a mensurar, la persona que solicite la operación, el juez que conoce del asunto y la oficina de actuación; la que le será devuelta para constancia, con la firma de los linderos citados.

Si alguno de los linderos se negase a firmarla, el perito lo hará constar en ella ante dos testigos, que firmarán con él.

A falta del dueño del terreno o en caso de ausencia del dueño (465), esta citación se hará a los mayordomos, capataces, arrendatarios u otros ocupantes cualesquiera, si estuviesen autorizados por aquél al efecto.

Art. 423. — En dos diarios que el juez designará y con una anticipación cuando menos de cinco días, se publicarán

además edictos con las mismas enunciaciones, por el término de tres días, haciendo saber la diligencia que se va a practicar a todos los que puedan tener interés en ella.

Art. 424. — En el día señalado, se procederá a la operación, con asistencia de los dueños de los terrenos colindantes que se presentaren, o de sus apoderados, quienes podrán ir acompañados con perito de su elección.

Art. 425. — Los concurrentes a la diligencia exhibirán en ella los títulos de sus propiedades, siempre que fuere necesario, y podrán hacer las reclamaciones que crean procedentes.

Si no exhibieren sus títulos, sin causa justificada, serán de su cargo las costas del juicio que llegaren a promover contra la mensura, cualquiera que fuese el resultado.

El agrimensor estará obligado a poner su firma al margen de los títulos que le fueren presentados.

Art. 426. — Si hubiera conformidad en la diligencia, se extenderá acta firmada por todos los concurrentes.

El perito extenderá además la diligencia de la operación que haya practicado, y levantará un plano figurativo de la misma, con arreglo a las instrucciones a que debe sujetarse.

Art. 427. — El acta y la diligencia con el plano serán presentados por el agrimensor a la Dirección de Geodesia, antes de vencido un año desde la fecha en que recibió el expediente, y ésta los pasará al juez respectivo, informando a continuación acerca de su mérito facultativo, dentro del término de treinta días.

La falta de cumplimiento por el perito en el término que queda señalado, anulará su operación facultativa y lo hará responsable de los perjuicios causados, salvo el caso de fuerza mayor debidamente probado.

Art. 428. — Con todo a la vista, y no resultando inconveniente, el juez pronunciará su auto aprobatorio y mandará archivar el expediente, dando los testimonios que se pidieren (466).

Art. 429. — Si por alguno de los colindantes se dedujera oposición al tiempo de practicarse la diligencia, ésta se llevará a efecto, sin embargo, expresando en el acta las razones alegadas por los opositores y agregando las protestas escritas que presentaren. El perito deberá además consignar en la diligencia de mensura los fundamentos de su proceder.

Art. 430. — La operación no afectará en nada los derechos que los opositores puedan tener, tanto a la posesión, como a la propiedad del terreno.

Art. 431. — Terminada la diligencia se pasará todo al juez letrado, conforme a lo prescripto en el artículo 427.

Art. 432. — El juez en seguida procederá a oír a los interesados, y a substanciar y decidir, por los trámites del juicio ordinario correspondiente, las pretensiones que deduzcan. Y siempre que sea conducente por la naturaleza de las cuestiones suscitadas, oírá antes de fallar a la Dirección de Geodesia, fijando los puntos sobre que debe recaer el informe.

TITULO XVI

JUICIO DE DIVISION DE COSAS COMUNES

Art. 433. — En el juicio de división de bienes comunes por otro título que el de herencia, sólo tienen personería los poseedores de la cosa común en virtud de un título que justifique la calidad de condominio en relación a la misma y aquellos a quienes se reconozca, sin contradicción, la calidad de comuneros (467).

Aquellos a quienes sin ser poseedores se niegue la calidad de comuneros, gestionarán su derecho en pieza separada, sin suspenderse el juicio. Esta calidad no podrá ser negada en

(467) Entre Ríos, artículo 797; Silgueira, artículo 534; Córdoba, artículo 618.

el juicio al poseedor, sin perjuicio de la reivindicación a que hubiese lugar (468).

Art. 434. — Entablada la demanda, el juez emplazará a los interesados, entregándoles copia de aquella, para que comparezcan en el día que designe, dentro de los diez siguientes, a convenir la división y su forma (469).

Si todos los interesados estuviesen conformes en que se haga la partición, procederán a nombrar partidario, de común acuerdo, en caso de disconformidad designará el juez el propuesto por la mayoría.

Art. 435. — Si hubiese oposición sobre la calidad de poseedor de alguno de los interesados, se substanciará previamente el artículo por el trámite de los incidentes (470).

Art. 436. — Verificado el nombramiento y aceptado el cargo el perito procederá a hacer la división con arreglo al título que haya creado la comunidad, dentro del término que el juez le señale (471).

Art. 437. — Si en el desempeño de su cargo le ocurriese al perito alguna duda, consultará sobre ella al juez y éste la resolverá con audiencia de las partes.

Si fuese necesaria la tasación de los bienes, se procederá a ella en la forma prescripta en el juicio de sucesión.

Si no pudiese hacerse la división de los bienes en especie, se procederá a su venta en remate público, pudiendo los interesados convenir que se haga en otra forma, aunque hubiese

(468) Rojas, artículos 829 a 831; Entre Ríos, artículos 798 y 799; Silguera, artículo 535; San Luis, artículos 1.058 a 1.060; Mendoza, artículos 852 a 854; Córdoba, artículos 619 y 620; Santiago del Estero, artículos 624 a 627; San Juan, artículos 645 a 647; Santiago del Estero, artículos 613 a 615; La Rioja, artículos 706 y 707.

(469) Rojas, artículos 832 y 833; Entre Ríos, artículos 801 y 802; San Luis, artículos 1.061 y 1.062; Mendoza, artículos 855 y 856; Tucumán, artículo 521; Córdoba, artículos 621 a 623; Santa Fe, artículos 628 y 629; San Juan, artículos 648 a 650; Santiago del Estero, artículos 616 a 618.

(470) Rojas, artículo 834; Entre Ríos, artículo 802; San Luis, artículo 1.063; Mendoza, artículo 857; Tucumán, artículo 522; Córdoba, artículo 624; Santa Fe, artículo 630; San Juan, artículo 651; Santiago del Estero, artículo 619; La Rioja, artículo 712.

(471) Rojas, artículo 835; San Luis, artículo 1.064; Mendoza, artículo 858; Tucumán, artículo 523; Córdoba, artículo 625; La Rioja, artículo 713.

incapaces o ausentes, si el juez prestase su consentimiento (472).

Art. 438. — Hecha la división, se pondrá de manifiesto en la oficina por un término de cinco o diez días para que sea examinada por los interesados.

Transecurrido el término sin que hayan hecho observaciones el juez la aprobará sin lugar a recurso alguno.

Si hubiese oposición, se procederá como se prescribe para el caso de disconformidad en la partición de herencias.

Aprobada la división se entregará a cada comunero lo que le corresponde, haciéndose en los títulos de propiedad la debida anotación, si se tratase de bienes inmuebles (473).

Art. 439. — Si se presentase una división de bienes hecha extrajudicialmente y se pidiese su aprobación, el juez, previas las citaciones necesarias, la pondrá de manifiesto por un término de cinco o diez días, y la aprobará cuando todos los interesados estén presentes y conformes con ella, procediéndose en cualquier otro caso a la división, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título (474).

TITULO XVII

JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS

Art. 440. — El juicio de cuentas tendrá lugar:

1º Cuando se promueva en virtud de algún documento del cual aparezca la obligación de rendirlas.

(472) Rojas, artículos 836 a 838; Entre Ríos, artículos 803 a 805; Silguera, artículos 537 y 540; San Luis, artículos 1.065 y 1.066; Mendoza, artículos 859 a 861; Tucumán, artículo 524; Córdoba, artículos 626 y 627; Santa Fe, artículos 631 a 633; San Juan, artículos 652 a 654; Santiago del Estero, artículos 620 a 622; La Rioja, artículos 715 y 716.

(473) Rojas, artículos 839 a 842; Entre Ríos, artículos 806 a 808; San Luis, artículos 1.067 a 1.070; Mendoza, artículo 862 a 865; Córdoba, artículos 628 a 631; Santa Fe, artículos 634 a 637; San Juan, artículos 655 a 658; Santiago del Estero, artículos 623 a 626.

(474) Rojas, artículo 843; Entre Ríos, artículo 809; Silguera, artículos 538, 539 y 541; San Luis, artículo 1.071; Mendoza, artículo 866; Córdoba, artículo 632; Santa Fe, artículo 638; San Juan, artículo 659; Santiago del Estero, artículo 627; La Rioja, artículo 731.

2º Siempre que se haya desempeñado un cargo o ejecutado un hecho al que las leyes impongan como efecto necesario la obligación de rendir cuentas (475).

Art. 441. — El juicio de cuentas podrá prepararse solicitando confesión sobre el hecho que dé origen a ellas o reconocimiento de documento privado en el cual conste la obligación de rendirlas (476).

Art. 442. — Presentada la demanda con documento bastante o confesado el hecho que origina la obligación de rendir cuentas, el juez ordenará, sin recurso alguno, que se rindan por el obligado cuentas documentadas (477) dentro de un término que en ningún caso excederá de diez días, bajo apercibimiento de que si no lo hace dentro del término fijado se aprobarán las que en su rebeldía presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que son inexactas (478).

Art. 443. — Si el demandado negase la obligación de rendir cuentas, el actor podrá formalizar la demanda ordinaria que corresponda (479).

(475) Rojas, artículo 870; Entre Ríos, artículo 562; Tucumán, artículo 509; San Juan, artículo 886; Mendoza, artículo 902; La Rioja, artículo 943.

(476) Rojas, artículo 871; Entre Ríos, artículo 563; Silgueira, artículo 501; Tucumán, artículo 510; San Luis, artículo 825; Santa Fe, artículo 768.

El proyecto de Agote, Méndez y Montes de Oca, artículo 446, lo mismo los códigos de Córdoba, artículo 779; Mendoza, artículo 903 y La Rioja, artículo 944, hablan solo de absolución de posiciones.

(477) Recientemente se ha discutido en los tribunales si la persona que presenta una rendición de cuentas está obligada a acompañar a ella la documentación o debe hacerlo solo de las partidas impugnadas. Atendiendo a esto — no obstante ser para mí evidente que sin comprobantes de las partidas no hay cuentas ni es posible resolver sobre la exactitud — incluyo en el artículo la exigencia, establecida por Silgueira en su proyecto, artículo 500.

El código de San Luis, artículo 823, dispone que todo el que administre intereses ajenos, debe rendir cuentas «con los justificativos correspondientes».

(478) Rojas, artículo 872; Entre Ríos, artículo 564; Silgueira, artículo 501; Tucumán, artículo 511; San Luis, artículo 826; San Juan, artículo 887; Mendoza, artículo 904; Santa Fe, artículo 769; La Rioja, artículo 945.

(479) Rojas, artículo 873; Entre Ríos, artículo 565; Tucumán, artículo 512; Córdoba, artículo 781; San Luis, artículo 827; San Juan, artículo 887.

Art. 444. — Si el requerido rindiase las cuentas, se pasarán en vista al actor por diez días, y si no las impugnara el juez las aprobará sin más trámite y sin recurso.

Si el actor las observase, se abrirá el juicio a prueba por un término que no podrá exceder de veinte días.

El mismo procedimiento se seguirá cuando el actor presentase las cuentas en rebeldía del demandado (480).

Art. 445. — El actor podrá entablar ejecución por el saldo que la cuenta arroje a su favor, sin que por eso se entienda que está totalmente aprobada (481).

TÍTULO XVIII

DE LA DECLARACION DE INCAPACIDAD Y SU CESACION (a)

Art. 446. — Las personas que promuevan juicio sobre declaración de incapacidad, deberán exponer los hechos en que se funde la demanda, los medios de prueba en que se apoye, y acompañarán un certificado médico sobre el estado mental del pretendido incapaz.

Cuando éste se asistiese en un hospicio público o particular, el certificado deberá emanar de uno de los médicos del establecimiento.

Los jueces no darán curso a las demandas que no reúnan estos requisitos (482).

(480) Rojas, artículo 875 a 878; Entre Ríos, artículos 565 a 569; Silgueira, artículo 502; Tucumán, artículos 513 a 516; San Luis, artículos 830 y 831; San Juan, artículos 889 y 891; Mendoza, artículo 906; Santa Fe, artículos 772 y 773; La Rioja, artículos 950 y 951.

(481) Rojas, artículo 878; Silgueira, artículo 502; Entre Ríos, artículo 570; Tucumán, artículo 517; Córdoba, artículo 786; San Luis, artículo 832; San Juan, artículo 890; Mendoza, artículo 907; Santa Fe, artículo 775; La Rioja, artículo 953.

(a) En los códigos de Santa Fe, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán, se establece un procedimiento especial, distinto del que adoptamos siguiendo a Rojas. Los dos últimos mencionados comienzan ese procedimiento por una información sumaria.

(482) Rojas, artículo 1.103; Entre Ríos, artículos 601 y 602; Buenos Aires, artículos 784 a 786; San Luis, artículos 1.116 a 1.118.

Art. 447. — Interpuesta la demanda, y previa vista al ministerio de menores, el juez nombrará al denunciado como incapaz un curador provisorio que lo represente y defienda en el juicio hasta que se pronuncie la sentencia definitiva.

En el mismo auto se designarán uno o dos médicos de los tribunales, para que informen acerca del estado mental del denunciado, fijándoles un plazo para el cumplimiento de la diligencia.

El denunciado como incapaz es parte en el juicio (483).

Art. 448. — El plazo fijado a los facultativos para que den su dictamen, se considera como término de prueba para que las partes produzcan la que les corresponde.

Si el denunciado solicita la práctica de diligencias probatorias respecto de su estado, el juez hará lugar a ellas, si las encuentra conducentes (484).

El juez examinará personalmente al denunciado.

Art. 449. — Presentado el informe de los facultativos se agregará a los autos, los cuales se pondrán en seguida en la oficina por seis días comunes para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba rendida. Vencido ese término se citará para sentencia, que deberá pronunciarse dentro de diez días (485).

(483) Proyecto, artículo 441; Entre Ríos, artículo 603 y 606; Silgueira, artículos 506 y 507; Buenos Aires, artículos 787 y 788; Santa Fe, artículo 1.138; Mendoza, artículo 1.115; San Luis, artículo 1.119; Córdoba, artículo 1.177.

Rojas, artículos 1.103 y 1.107; Tucumán, artículo 445 y San Juan, artículo 1.138, prescriben que el número de los facultativos no podrá ser menos de tres. Silgueira dispone el nombramiento de un tercero en caso de disconformidad. Pero reglamentada la prueba pericial como meramente ilustrativa del criterio judicial (artículo 175) considero suficiente el informe de dos, tanto más cuanto que se concede la facultad de producir prueba.

(484) Entre Ríos, artículo 607; Buenos Aires, artículos 792 y 795; San Luis, artículos 1.124 y 1.127; Silgueira, artículo 509; Rojas, artículos 1.108 y 1.109.

El código de Entre Ríos y lo mismo Silgueira, en su proyecto para Corrientes, ordenan que el juez examine al presunto incapaz si alguna de las partes lo pidiere o aquél lo considere oportuno. Reputo mayor garantía la del examen obligatorio que está, por lo demás, de acuerdo con las reglas de la prueba pericial.

(485) Entre Ríos, artículo 612; Tucumán, artículo 549; Rojas, artículo 1.110.

Art. 450. — En la sentencia que declare la incapacidad, se proveerá de curador definitivo al incapaz.

Las costas serán a cargo del actor si se rechazase la demanda. En caso contrario, las abonará el insano (486).

Art. 451. — Contra la sentencia que se dicte procederá apelación que se acordará libremente (487).

Art. 452. — La demanda de levantamiento de la interdicción se substanciará por los mismos trámites que quedan establecidos en el presente título para su declaración y no se le dará curso si no se presenta con certificado médico que acredite la cesación de la incapacidad (488).

Art. 453. — Las disposiciones de este título regirán para la interdicción del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito y de su cesación (489).

TÍTULO XIX

JUICIOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

DE LAS RESTRICCIONES Y LÍMITES DEL DOMINIO

Art. 454. — Todas las cuestiones que se suscitaren entre vecinos por razón de restricciones y límites al dominio, u obras conexas con medianerías, serán resueltas por el juez en lo civil, oyendo a las partes en un juicio verbal, al que

(486) Entre Ríos, artículo 615; Buenos Aires, artículo 805; Silgueira, artículo 80; Rojas, artículos 1.112 y 1.113.

(487) Rojas, artículo 1.114.

Algunos códigos disponen que cuando la sentencia declare la incapacidad debe ser elevada en consulta; otros, como los de Buenos Aires y San Luis, obligan al agente fiscal a apelar, porque, según el informe de la comisión, «privar a un individuo de su capacidad civil, es quizá el acto más grave que atañe a los jueces» y debe en consecuencia rodearse de las mayores garantías.

(488) Proyecto, artículo 445; Entre Ríos, artículo 617; Buenos Aires, artículo 806; San Luis, artículo 1.138; Silgueira, artículo 512; Rojas, artículo 1.115 y 1.116; Tucumán, artículo 450.

(489) Entre Ríos, artículo 618.

convocará con intervalo de seis días y en el que las partes deberán exponer todas sus razones y producir todas las pruebas.

El juez podrá autorizar la iniciación o prosecución de las obras mientras dure el procedimiento, exigiendo las garantías que repunte suficientes, cuando por circunstancias especiales lo considere necesario (490). Deberá resolver en una sentencia todas las cuestiones.

Art. 455. — Igual procedimiento se seguirá cuando se reclame la constitución o reconocimiento de una servidumbre real.

Art. 456. — La resolución, en uno y otro caso, será apelable en relación y al sólo efecto devolutivo cuando fuera favorable a la iniciación o prosecución de las obras.

Art. 457. — Si se tratase de servidumbres prediales establecidas por la ley, cuyo ejercicio fuese urgente, el juez las autorizará inmediatamente y con carácter provisorio, a solicitud del actor y previa fianza que éste prestará por la suma en que aquél prudencialmente estime los perjuicios y el costo de reposición de las cosas a su estado anterior, en caso de ser desestimada la acción (491).

CAPÍTULO II

FIJACION DEL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Art. 458. — En las obligaciones de dar en que el día de la entrega no estuviera determinado por el acto constitutivo, o en aquellas en que se autorizara al deudor para satisfacerla cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo, demandada la designación del tiempo en que deba efectuarse, el juez emplazará al deudor, con copia de la demanda, para una

(490) Proyecto, artículo 497; Santa Fe, artículo 1.185.

(491) Rojas, artículo 890; Silgueira, artículo 543; Santa Fe, artículo 1.186; San Luis, artículo 1.325.

audiencia única, con intervalo no mayor de diez días, en la que contestará y deberán las partes producir toda la prueba que tuvieren y alegar verbalmente sobre ellas, si se conceptúa necesario.

El juez resolverá, sin otro trámite, salvo las medidas que creyere necesarias para mejor proveer, dentro del término de diez días.

De la resolución podrá apelarse en relación.

CAPÍTULO III

INFORMACIONES POSESORIAS

Art. 459. — El que pretenda producir información para justificar la posesión de un inmueble durante el tiempo necesario para adquirir la propiedad, deberá presentarse al juez, ofreciendo la prueba que se propone producir a tal efecto, y expresando la extensión y linderos del inmueble, la fecha en que comenzó a poseer, el carácter, origen y demás circunstancias relativas a la posesión.

Acompañará también un plano del inmueble y los documentos que tenga en su poder relacionados con la posesión que se atribuya (492).

Art. 460. — Presentada la solicitud, se pedirá a las oficinas del Registro de la Propiedad, Contribución Territorial y Obras de Salubridad, y a la Intendencia Municipal, que remitan los antecedentes sobre inscripción del inmueble y pago de los respectivos impuestos, con indicación de las personas que figuren o hayan figurado como dueños o contribuyentes (493).

Art. 461. — Si de los informes resultase que durante todo o parte del tiempo que invoca el actor, la propiedad del inmueble ha estado inscrita a nombre de terceros o que éstos

(492) Proyecto, artículo 502; Entre Ríos, artículo 632; Rojas, artículo 1.161; Tucumán, artículo 587.

(493) Proyecto, artículo 503; Entre Ríos, artículo 633; Rojas, artículo 1.162; Tucumán, artículo 588.

han abonado impuestos, se les citará en la forma establecida para la notificación de la demanda en juicio ordinario, a fin de que comparezcan a deducir dentro del término de quince días la oposición a que se creyeren con derecho.

En caso de ser necesaria la citación por edictos, se efectuará conjuntamente con la que se ordena en el artículo siguiente (494).

Art. 462. — Cualquiera que sea el resultado de los informes, se correrá traslado de la solicitud a la Intendencia Municipal por el término de quince días, y se publicarán edictos en el «Boletín Judicial» por igual término, haciendo saber la iniciación del juicio (495).

Art. 463. — Vencido dicho plazo, se agregarán las oposiciones y el juez ordenará se reciba la información y las pruebas que hayan ofrecido los opositores en sus respectivos escritos, a cuyo efecto señalará un término que no podrá exceder de veinte días (496).

Art. 464. — La sentencia se dictará dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término de prueba y será apelable en relación por el actor y opositores (497).

CAPÍTULO IV

DEPOSITO Y VENTA DE MERCADERIAS

Art. 465. — En los casos en que las leyes generales autoricen el depósito judicial de cosas muebles por cuenta de un tercero, el juez lo ordenará bajo inventario y en persona de responsabilidad, con citación del tercero si estuviese en la Capital.

El inventario será hecho por un perito nombrado por el juez y expresará la calidad y estado de los objetos deposita-

(494) Proyecto, artículo 504; Silgueira, artículo 518; Tucumán, artículo 590.

(495) Proyecto, artículo 505; Tucumán, artículo 591.

(496) Proyecto, artículo 506.

(497) Proyecto, artículo 507.

dos. Si el solicitante o el tercero no estuviesen conformes, el juez hará la declaración correspondiente, sin recurso alguno.

Siempre que quien deba entregar o recibir mercaderías quiera hacer constar el estado en que se encuentran, se procederá en la forma prevenida en este artículo (498).

Art. 466. — Cuando haya de venderse parte de los bienes para atender a los gastos de depósito, o cuando sea conveniente la venta de la totalidad, se efectuará en remate público, en la forma prevenida para el juicio ejecutivo (499).

Art. 467. — En los casos en que las leyes generales acuerden al comprador facultad de adquirir mercaderías por cuenta del vendedor, la autorización se concederá con citación de éste, a quien se le permitirá alegar las defensas que tuviere en el término de tres días. Si no compareciere o nada alegare quedará firme la autorización. Si se opusiere, se resolverá sumariamente y sin recurso dentro de los diez días. La resolución en este juicio no causa instancia.

En la misma forma se procederá en aquellos casos en que la ley autoriza a hacer ejecutar por un tercero el hecho, servicio u obra contratados (500).

CAPÍTULO V

AUTORIZACION PARA CONTRAER MATRIMONIO Y OPOSICION

Art. 468. — La autorización para contraer matrimonio se acordará en juicio verbal, privado y meramente informativo, en una audiencia única que se celebrará dentro de tercero día con asistencia de la persona que deba prestar su

(498) Proyecto, artículos 508 y 510; Buenos Aires, artículos 871, 872 y 875; Córdoba, artículos 1.229 y siguientes; Santiago del Estero, artículos 1.235 y siguientes; Tucumán, artículos 600 y siguientes; San Juan, artículos 1.180 y siguientes; Mendoza, artículos 1.171 y siguientes; Rojas, artículo 1.169; Santa Fe, artículos 1.197 y siguientes; San Luis, artículos 1.262 y siguientes; Silgueira, artículos 642 y siguientes.

(499) Proyecto, artículo 509; Buenos Aires, artículo 874; Rojas, artículo 1.170; San Luis, artículo 1.165; Silgueira, artículo 643.

(500) Proyecto, artículo 511; Buenos Aires, artículo 876.

consentimiento y el asesor de menores, en la que se recibirá la prueba pertinente (501).

Art. 469. — La licencia judicial para el matrimonio de los menores o incapaces sin padres, tutores o curadores, lo mismo que la oposición al matrimonio, será substanciada en la misma forma (502), con el asesor de menores.

Art. 470. — El auto que recayere, será apelable dentro de tres días. El superior resolverá dentro de seis días, sin audiencia ni alegato alguno (503).

CAPÍTULO VI

APERTURA Y PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTOS (a)

Art. 471. — Todo el que tenga interés legítimo en un testamento cerrado puede presentarlo para su protocolización, comprobando el fallecimiento del testador (504).

Art. 472. — Presentado para su apertura un testamento cerrado, el juez dispondrá que, a presencia suya y del interesado, se extienda por el actuario diligencia en que exprese el estado de la cubierta y sus sellos.

Esta diligencia será subscripta por el juez y por el que haga la presentación, y autorizada por el secretario.

(501) Buenos Aires, artículos 826 y 827; Entre Ríos, artículo 887; Silgueira, artículo 623; Mendoza, artículos 1.096 y 1.097; Córdoba, artículos 1.154 y 1.155; Santiago del Estero, artículo 1.147 y 1.148; La Rioja, artículos 1.377 y 1.378; San Juan, artículos 1.115 y 1.116.

Sin forma de proceso y meramente informativo, dice el código de Tucumán en el artículo 583.

(502) Buenos Aires, artículo 828; Entre Ríos, artículo 888; Silgueira, artículo 623; Mendoza, artículo 1.101; Córdoba, artículo 1.156; Santiago del Estero, artículo 1.149; La Rioja, artículo 1.379; San Juan, artículo 1.117.

(503) Buenos Aires, artículo 829; Silgueira, artículo 624; Córdoba, artículo 1.157.

Santiago del Estero, artículo 1.150; La Rioja, artículo 1.380; San Juan, artículo 1.118, disponen que el superior solicite al juez un informe verbal acerca de las razones que haya tenido para resolver.

(a) En esta materia sigo el proyecto de los doctores Méndez, Agote y Montes de Oca, con pequeñas variantes.

(504) Silgueira, artículo 628; Santa Fe, artículo 1.160.

Si el testamento no se hallare en poder de quien solicita la apertura, pedirá que lo exhiba el que lo tenga, manifestando quién sea. A presencia de éste se extenderá en tal caso la diligencia prescripta.

Extendida la diligencia, dispondrá el juez que se cite, para el día y hora que determine, a la persona en cuyo poder se hallaba el testamento y testigos que firmaron la cubierta, a fin de hacer ante ellos la apertura del pliego.

Se citará igualmente a los presuntos herederos *ab intestato* que se hallen en la Capital. Si hubiera entre éstos menores incapaces, al asesor de menores y a sus representantes legales, y no conociéndose herederos *ab intestato*, el agente fiscal (505).

Art. 473. — Reunidas las personas que menciona el artículo anterior el día designado, el juez hará que reconozcan las firmas, expresando bajo juramento si son de puño y letra.

Expresarán también si vieron poner todas las firmas; si tienen por auténticas las de los que hayan fallecido o estén ausentes; si encuentran el pliego en el mismo estado en que se hallaba cuando firmaron la cubierta; si es el mismo que el testador entregó diciendo que era su última voluntad; si aquél se encontraba en el uso perfecto de su razón y si la entrega y las firmas de la cubierta se verificaron estando todos reunidos en un solo acto.

Si no pueden comparecer todos los testigos, por muerte o ausencia fuera de la Capital, bastará el reconocimiento de la mayor parte de ellos y del escribano.

Si por iguales causas no pudiesen comparecer, el escribano y el mayor número de los testigos o todos ellos, el juez lo hará constar así y admitirá la prueba por cotejo de letra (506).

Art. 474. — Hecho todo lo que queda prevenido, el juez rubricará el principio y fin de cada página y se lecrá por el actuario el testamento que contenga.

(505) Proyecto, artículos 512 a 515.

(506) Proyecto, artículos 515 a 518.

Verificada la lectura, se mandará protocolizar el testamento en un registro que indiquen los interesados y se archivará el expediente dando a éstos los testimonios que pidiesen.

La protocolización se hará otorgando el juez escritura relacionada, con transcripción de la carátula, del contenido del pliego, del acta de apertura y del auto definitivo.

Art. 475. — En este procedimiento no se admitirá ninguna discusión sobre validez del testamento, capacidad del testador o cualquier otra causa que haga a él.

Si por parte interesada se dedujera reclamación, se substanciará en juicio ordinario (507).

Art. 476. — El auto que deniegue la apertura y protocolización será apelable en relación, debiendo la cámara resolver dentro de cinco días sin trámite alguno. Esta disposición regirá para la protocolización del testamento ológrafo (508).

(507) Proyecto, artículos 518 a 520; Entre Ríos, artículo 906; Buenos Aires, artículo 847; Tucumán, artículo 628.

El penúltimo apartado ha sido introducido por mí para evitar que se desvirtúe el procedimiento con discusiones que no tienen razón de ser en él. La protocolización queda así como medida de forma exclusivamente.

(508) Silgueira, artículo 631; Santa Fe, artículo 1.169; San Luis, artículo 1.235; Mendoza, artículos 1.145 y 1.153; Córdoba, artículos 1.203, 1.206 y 1.213; San Juan, artículos 1.164 y 1.168; Rojas, artículo 1.137; Santiago del Estero, artículos 1.197, 1.200 y 1.207; La Rioja, artículos 1.491 y 1.499, conceden apelación del auto, sea que acuerde o que deniegue la protocolización, y disponen que no hace cosa juzgada sobre la validez o nulidad del testamento.

Entre Ríos, artículo 906; Proyecto, artículo 520; Buenos Aires, artículo 847 y Tucumán, artículo 628, sin duda por establecer que toda reclamación de parte interesada se substanciará en juicio ordinario, no hablan de recurso.

El último de los códigos citados concede apelación libremente del auto que se pronuncie dando o no por testamento el contenido del pliego — artículo 629. — La prescripción es, a mi juicio, inútil ante lo dispuesto en el artículo 629, desde que será en ese juicio ordinario que ha de hacerse la declaración.

Yo sólo doy recurso del auto que deniegue la apertura, porque en los términos de los incisos finales del artículo precedente sólo hay gravamen en ese caso.

CAPÍTULO VII

PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTOS OLOGRAFOS Y ESPECIALES

Art. 477. — El testamento ológrafo deberá presentarse tal cual se halle al juez a quien corresponda el conocimiento del juicio sucesorio.

Art. 478. — Presentado el testamento, se designará día y hora para el examen de los testigos que reconozcan la letra y firma del testador.

Si el testamento estuviese cerrado, será abierto por el juez en presencia del actuario y de los presuntos herederos *ab intestato* que comparecieren, a cuyo efecto serán citados previamente, si residieren en la Capital.

Si los testigos reconocieren la identidad de la letra y firma, rubricará el juez el principio y el fin de cada una de sus páginas.

Art. 479. — Practicadas esas diligencias, el juez las mandará protocolizar en el registro que designe la parte, ordenando al mismo tiempo que se den a los interesados los testimonios que pidieren.

Art. 480. — Todo testamento que no sea cerrado u ológrafo, hecho fuera de los registros públicos, en forma autorizada por la ley, será protocolizado por orden del juez del último domicilio del testador, previa vista al agente fiscal. El auto denegatorio será apelable en relación (509).

(509) Proyecto, artículo 525; Córdoba, artículo 1.214; Santa Fe artículo 1.180; San Luis, artículo 1.243; La Rioja, artículo 1.502; Santiago del Estero, artículo 1.208; Silguera, artículo 633; Mendoza, artículo 1.156; Buenos Aires, artículo 852; Rojas, artículo 1.149; San Juan artículo 1.171.

CAPÍTULO VIII

OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Art. 481. — La autorización para comparecer en juicio, para enajenar bienes de menores, para transar pleitos pendientes o iniciarlos, y cualquiera otra autorización judicial que como aquéllas hicieran necesarias las leyes de fondo para ejecutar ciertos actos, se acordará previa substanciación en juicio verbal y en audiencia única, que deberá celebrarse con los que concurran, al que deberá citarse a la persona que deba prestarla y al asesor de menores.

El auto que recaiga será apelable en relación. El superior resolverá dentro de seis días sin más trámite (510).

Art. 482. — La ausencia con presunción de fallecimiento y la posesión provisoria y definitiva de los bienes del ausente, se substanciará con arreglo al procedimiento establecido por el Código Civil.

El auto que recaiga será apelable en relación (511).

Art. 483. — El nombramiento de tutores y curadores, la confirmación de las designaciones hechas por los padres o la remoción de los nombrados, se substanciará de acuerdo con el artículo 481 (512).

Art. 484. — Cuando por cualquier circunstancia alguna persona tuviere necesidad de producir una información sumaria para constatar un hecho o asegurar un derecho, los

(510) Buenos Aires, artículos 830 a 835; Santa Fe, artículo 1.120; San Juan, artículo 1.119 como otros códigos provinciales, establece la consulta al superior.

(511) Córdoba, artículos 1.193 y 1.194; Santiago del Estero, artículo 1.187; Silgueira, artículo 513.

(512) Santa Fe, artículos 1.127 y 1.130; Santiago del Estero, artículo 1.161; Córdoba, artículo 1.166; San Juan, artículo 1.128 y otros códigos provinciales establecen que en caso de que alguien pretendiera derecho a ser nombrado o formulara oposición o pidiera remoción, se substanciará en juicio de menor cuantía.

Silgueira, artículo 621 por los de las excepciones dilatorias.

jueces la admitirán con citación de la persona a quien pueda perjudicar, si fuese posible determinarla, y del agente fiscal.

El auto aprobatorio se pronunciará previo dictamen de este último, sin perjuicio de tercero, y será apelable en relación por el que solicita la información (513).

Las informaciones a que el artículo se refiere sólo tendrán valor para el objeto a que se producen.

Art. 485. — Los juicios de expropiación por causa de utilidad pública se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley respectiva.

Art. 486. — En los juicios sobre indemnización por accidentes del trabajo registrá el procedimiento en juicio verbal que se establece en el capítulo V de este título.

Art. 487. — El mismo procedimiento del juicio verbal registrá para toda otra gestión que por su naturaleza no deba tramitarse en juicio ordinario y no tenga procedimiento especial determinado en este código.

TITULO XX

DEL JUICIO ARBITRAL

Art. 488. — Toda contestación entre partes, antes o después de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de éste, puede someterse a la decisión de jueces árbitros.

Los árbitros tendrán siempre el carácter de arbitra- dores amigables componedores (514).

(513) Córdoba, artículos 1.224 y siguientes; Santiago del Estero, artículos 1.231, 1.233 y 1.234; Tucumán, artículos 578 y siguientes; Mendoza, artículos 1.168 y siguientes; Santa Fe, artículos 1.194 y 1.195.

(514) Proyecto, artículo 472; Silgueira, artículo 605 y nota 4; Tucumán, artículo 428.

En los códigos provinciales no hay uniformidad respecto del carácter del arbitraje. Unos, como los de Buenos Aires y Entre Ríos, sólo legislan el arbitraje de derecho. Algunos, como los de San Luis y La Rioja, aceptan el arbitraje y la amigable composición. Otros, como los de Santa Fe, Córdoba, San Juan, lo mismo que Rojas, aceptan como regla la amigable composición pero permiten a las partes someter sus cuestiones a arbitraje de derecho.

Art. 489. — Las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción según el Código Civil y las que por cualquier causa requieran la intervención fiscal, no podrán someterse a arbitraje (515).

Art. 490. — El compromiso ha de formalizarse en escritura pública. Si hubiese juicio pendiente, en acta extendida ante el juez y el secretario. Será nulo en cualquier otra forma en que se contraiga.

Art. 491. — El compromiso ha de contener precisamente:

- 1º Los nombres de los otorgantes.
- 2º Los nombres de los árbitros.
- 3º La cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral con expresión de sus circunstancias.
- 4º La estipulación de una multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir con los actos indispensables para la realización del compromiso.
- 5º La fecha del otorgamiento.

Pero todo defecto del compromiso quedará subsanado si las partes lo ponen en ejecución ante los árbitros sin atacarlo antes de que dicten sentencia.

Art. 492. — Podrá, además, estipularse en el compromiso:

- 1º El plazo en que los árbitros han de proceder hasta dictar el laudo.
A falta de tal estipulación, deberán hacerlo dentro de noventa días contados desde la última aceptación del cargo.
- 2º El lugar en que han de conocer y fallar, entendiéndose que si no lo designan será aquel en que ha sido otorgado el compromiso.
- 3º La forma en que hayan de proceder.

(515) Proyecto, artículo 473; Rojas, artículo 752; Santa Fe, artículo 484; Córdoba, artículo 469; San Juan, artículo 500; Santiago del Estero, artículo 464.

En su defecto, los árbitros deberán fijarlo en la primera reunión que celebren, pudiendo limitarse a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones oportunas y a dictar sentencia según su saber y entender.

Art. 493. — Los árbitros serán nombrados por las partes en número impar que no excederá de tres. El tercero, en su caso, puede designarse por ellos mismos o por los árbitros si los facultan para hacerlo. No poniéndose de acuerdo aquéllos ni éstos, la designación se hará por el juez en turno.

El tercero en todos los casos deberá designarse antes de que los árbitros comiencen a actuar e intervendrá en toda la substanciación del juicio y en su fallo, formando tribunal (516).

Art. 494. — Otorgado el compromiso, se presentará a los árbitros para su aceptación.

De la aceptación o de la negativa se extenderá a continuación diligencia, que firmarán los árbitros y el secretario o escribano.

Si alguno de los árbitros no aceptare, se procederá a reemplazarlo con sujeción a lo dispuesto para el nombramiento.

No aceptando el segundo árbitro nombrado por la misma parte, lo designará el juez si la contraria lo solicita.

En la misma forma se procederá en caso de renuncia (517).

Art. 495. — La aceptación de los árbitros da derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su encargo, bajo pena de responder por los daños y perjuicios.

(516) Entre Ríos, artículo 647; Rojas, artículos 760 y 774; Proyecto, artículo 483; Silguera, artículo 606; Tucumán, artículo 437; Mendoza, artículo 817; Santa Fe, artículo 492; Córdoba, artículo 477; San Juan, artículo 507.

(517) Proyecto, artículo 481; Entre Ríos, artículo 654; Silguera, artículo 607; Rojas, artículo 754, inciso 4º, con quien están de acuerdo algunas leyes provinciales, hacen cesar el compromiso en sus efectos. Otras resuelven que la falta de aceptación de un árbitro deja sin efecto el nombramiento de los demás.

Art. 496. — Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido después del nombramiento o que se ignorasen al tiempo de hacerlo.

Son causas legales de recusación:

- 1º Tener interés directo o indirecto en el asunto.
- 2º Tener parentesco con alguna de las partes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- 3º Tener enemistad manifiesta por actos determinados.

En los casos en que el nombramiento sea hecho por el juez, la recusación podrá deducirse también por causas anteriores, dentro de seis días después de la notificación, y será regida por lo dispuesto respecto de los jueces (518).

Art. 497. — La recusación debe deducirse ante los mismos árbitros; conocerá de ella, en la forma establecida en el título VIII, el juez a quien competiera el conocimiento del asunto, si no hubiere celebrado compromiso.

Art. 498. — El compromiso cesa en sus efectos:

- 1º Por la voluntad unánime de los que lo contrajeron.
- 2º Por el transcurso del término señalado en él o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses, si por su culpa hubiesen transcurrido inútilmente dichos términos, o del pago de la multa de que habla el inciso 4º del artículo 491, si la culpa fuese de alguna de las partes.

Art. 499. — En el juicio arbitral no podrá deducirse ninguna excepción en forma de artículo previo (519).

Art. 500. — Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todos los puntos sometidos a su decisión dentro de los plazos del artículo 492, con las prórrogas que las partes hubieran convenido.

(518) Proyecto, artículo 483; Entre Ríos, artículo 656.

(519) Entre Ríos, artículo 662; Mendoza, artículo 832; Santa Fe, artículo 508; San Juan, artículo 525.

El voto de la mayoría hará sentencia. Esa mayoría podrá formarse por adhesión del tercero al voto de alguno de los árbitros o estableciendo una solución que dirima la discordia entre ambos (520).

Art. 501. — Contra el laudo arbitral procede sólo el recurso de nulidad fundado en haber laudado fuera de término o sobre puntos no comprometidos, que deberá deducirse en el término del artículo 216.

Conocerá de él el juez en turno a quien corresponda la cuestión por su naturaleza (521).

Art. 502. — Se decretará la ejecución de la sentencia arbitral inmediatamente después de pronunciada y aunque haya sido interpuesto recurso de nulidad, si el que lo pidiere presta fianza bastante a satisfacción del juez, para responder de lo que hubiera recibido y de las costas en el caso de que la nulidad se declarase (522).

Art. 503. — Si el arbitraje fuera forzoso, el juez convocará a las partes a juicio verbal para otorgar el compromiso y decidirá todas las cuestiones que en la audiencia se planteen sobre nombramiento y recusación de los árbitros, determinación de los puntos que deben ser objeto del laudo y demás elementos que deba contener el acta.

La resolución será apelable en relación.

Si alguna de las partes no concurriera a la audiencia, para otorgar el compromiso y nombrar los árbitros, lo hará el juez en su rebeldía (523).

(520) Proyecto, artículo 489; Silgueira, artículo 609 y nota 4; Tucumán, artículo 453, dice el voto del tercero, sea o no conforme con alguno de los otros hará sentencia.

(521) Silgueira, artículo 610 y Tucumán, artículo 457, conceden recurso de nulidad; y por las razones que da en la nota 2 establece que la nulidad debe ser parcial en los casos que prevé.

Los recursos contra el laudo dependen de la forma de arbitraje aceptado. Entre los códigos que aceptan la amigable composición, Silgueira, en el artículo 610 y Tucumán, artículo 457, conceden recurso de nulidad en vez de acción. Acepto este porque abrevia los términos evitando la incertidumbre de un juicio de nulidad generalmente largo.

(522) Entre Ríos, artículo 682; Silgueira, artículo 612.

(523) Proyecto, artículo 493; Rojas, artículo 759; Silgueira, artículo 614; Tucumán, artículo 459; Mendoza, artículos 820 y 821; San Juan, artículos 511 y 512.

TITULO XXI

SUCESIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 504. — Son parte legítima para promover el juicio sucesorio el albacea, los herederos, los acreedores y todos los que tengan en ella algún derecho declarado por las leyes.

Los acreedores sólo podrán iniciarlo después de treinta días (524) de ocurrido el fallecimiento del causante, si sus créditos constan en escritura pública o documento privado, abonando la firma (525).

Caducará ese derecho si los herederos diesen fianza bastante a responder de los créditos o si estuviesen éstos asegurados con hipoteca u otra garantía real (526).

Cesará la intervención de los acreedores tan pronto como comparezca al juicio el albacea o algún heredero.

Art. 505. — El que promueva el juicio de testamentaria debe justificar el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, o su muerte presunta en los casos previstos por la ley, presentar su testamento o determinar su existencia para que sea agregado.

En caso de tratarse de testamentos ológrafos, cerrados o especiales, se llenarán previamente las diligencias establecidas para su protocolización.

(524) Proyecto, artículo 574; Entre Ríos, artículo 715; Rojas, artículo 915; Silgueira, artículo 544, señala el término de veinte días; Buenos Aires, artículo 640 y San Luis, artículo 903, cuatro meses; Tucumán, artículo 652, dos meses.

(525) Entre Ríos, artículo 715; Rojas, artículo 915; San Luis, artículo 896.

(526) Santa Fe, artículo 547; San Juan, artículo 572; Entre Ríos, artículo 715; Mendoza, artículo 956; Tucumán, artículo 966; Rojas, artículo 915.

Córdoba, artículo 542 y Santiago del Estero, artículo 537 hablan del caso del acreedor de un heredero. A los de la herencia le acuerdan medidas conservatorias o de seguridad de sus créditos.

Art. 506. — Agregado el testamento y acreditado que es parte legítima el solicitante, el juez dará vista del testamento al agente fiscal y si éste no objetara su validez se declarará abierto el juicio sucesorio. A este efecto, se citará a los interesados y al representante del Consejo Nacional de Educación.

La intervención del representante del consejo en el juicio será pasiva (527) y limitada a fiscalizar la correcta liquidación y pago del impuesto. No tendrá intervención en lo relativo a la designación de peritos que hagan los herederos para el inventario y avalúo, ni en esas operaciones; pero podrá observar una y otras con causa fundada.

Art. 507. — Cuando la sucesión fuera *ab intestato* y se iniciara por parientes de grado más lejano que el determinado en el artículo 546, el juez mandará publicar edictos por quince días en el «Boletín Judicial», citando a todos los que se creyeran con algún derecho como herederos (528).

Art. 508. — Vencido el término de los edictos, se procederá, a solicitud de parte y de acuerdo con las pruebas acumuladas, a dictar la declaratoria de herederos, que será hecha en cuanto ha lugar por derecho.

La declaratoria de herederos confiere la posesión de la herencia (529).

Art. 509. — El agente fiscal será parte en el juicio hasta tanto haya herederos declarados. Desde que los hubiere ce-

(527) San Luis, artículo 905.

(528) Ver mis comentarios, números 1.274 y 1.275.

La ley de enjuiciamiento española, de 1855 prescribía en el artículo 368 la fijación de edictos en todos los casos, la de 1881 la dejó sujeta al juicio del promotor fiscal o del juez en las sucesiones en que el valor de los bienes excediera de dos mil pesetas, cuando hubiere motivos racionalmente fundados para creer que podrán existir otros parientes de igual o mejor grado, dentro del cuerpo, artículo 984, y dispuso la publicación en todos los casos en que no hubiera descendientes, ascendientes ni colaterales dentro del cuarto grado, artículos 986 y 987.

(529) San Luis, artículo 914; Santa Fe, artículo 559; Silguera, artículo 548; Buenos Aires, artículo 649; Mendoza, artículo 961; Santiago del Estero, artículo 525; Córdoba, artículo 530; Rojas, artículo 922; Entre Ríos, artículo 728; San Juan, artículo 560.

sará su intervención; y las cuestiones pendientes o que se promuevan se substanciarán con aquéllos (530).

Art. 510. — De las reclamaciones sobre derechos a la herencia se formará incidente por separado.

Art. 511. — Cuando hubiere que rectificar o adicionar partidas referentes al estado civil a efecto de justificar el título hereditario podrá admitirse dentro del juicio la correspondiente información de testigos (531).

Art. 512. — Las objeciones que el agente fiscal o algún interesado hiciere sobre la validez del testamento se substanciarán en juicio ordinario (532).

Art. 513. — Si hubiesen herederos incapaces que tengan tutor o curador se mandará citar a éste. Si no tuviesen, se les proveerá de representantes.

Art. 514. — Si alguno de los interesados lo solicitare o si hubiesen herederos incapaces, el juez dictará las medidas que considere necesarias para la seguridad de los bienes y papeles del difunto. Al mismo tiempo convocará a junta a todos los interesados, y en su caso al asesor de menores, para que se pongan de acuerdo sobre la custodia y administración del caudal.

Art. 515. — Si no pudiesen ponerse de acuerdo, determinará el juez lo que corresponda según las circunstancias, con sujeción a las reglas siguientes:

1º El dinero efectivo se depositará en el Banco de la Nación.

2º Se nombrará administrador al cónyuge sobreviviente o al heredero que designe la mayoría (533) y sea más apto para el ejercicio del cargo.

Sólo habiendo motivos especiales que hagan in-

(530) Jurisprudencia. Rojas, artículo 919.

La intervención del ministerio fiscal se funda en el temor de que pueda resultar vacante la herencia, temor que desaparece con la declaración de herederos.

(531) Jurisprudencia. Entre Ríos, artículos 717 y 724; Tucumán, artículo 654.

(532) Entre Ríos, artículo 727; Silgueira, artículo 547 apartado final.

(533) Jurisprudencia.

conveniente el nombramiento de estas personas, podrá designarse a un extraño.

Art. 516. — En la misma junta se acordará todo lo necesario para las operaciones de inventario y avalúo, que se practicarán simultáneamente siempre que fuere posible.

Art. 517. — Cuando hubiese conformidad entre todos los que intervienen en el juicio respecto de los bienes que constituyen el caudal hereditario, se tendrá como inventario la manifestación que se hiciere al iniciar el juicio o en la junta a que se refiere el artículo anterior (534).

Art. 518. — Siempre que estén conformes los interesados, y, en su caso, el agente fiscal, asesor de menores y defensor de ausentes, el juez, atendiendo a las circunstancias, podrá autorizar que el inventario, avalúo y división entre los herederos declarados se hagan conjuntamente, debiendo someterse dichas operaciones a la aprobación judicial dentro de un plazo que determinará la autorización (535).

Art. 519. — No interviniendo el ministerio de menores, los interesados pueden separarse de la prosecución del juicio y adoptar las resoluciones que crean convenientes, en los juicios testamentarios desde que se haya aprobado el testamento, en los *ab intestato*s después de dictada la declaratoria de herederos.

Cuando así lo solicitaren, deberá el juez sobreseer en el juicio y poner los bienes a disposiciones de los herederos.

Art. 520. — En los pleitos en que sea parte la testamentaria, ésta actuará bajo una sola representación, salvo que algunos herederos los promuevan a su riesgo o estuviesen conformes con las demandas que contra aquélla se dedujeran; en ambos casos, deberán hacer la correspondiente declaración a los efectos legales (536).

(534) Proyecto, artículo 582; Rojas, artículo 927.

(535) Tucumán, artículo 964; Rojas, artículo 925; Mendoza, artículo 964; los códigos de Santa Fe, artículo 590 y Córdoba, artículo 580, autorizan el procedimiento cuando los bienes son de escasa importancia.

(536) Proyecto, artículo 584.

Art. 521. — Los legatarios sólo podrán intervenir en el juicio a efecto de activar el procedimiento. De todo lo relativo a legados se formará incidente por separado (537).

Art. 522. — El juez que conozca en los autos principales podrá intervenir en el juicio sucesorio de los herederos declarados, siempre que fuesen competentes los jueces de la Capital o del territorio o que se tratase de juicios tendientes a la sola justificación del carácter hereditario.

En este caso, los herederos del nuevo causante deberán designar un solo representante para que intervenga en el juicio principal, en el término que el juez señale, bajo apercibimiento de nombrarse uno de ellos. Este auto no será apelable (538).

Art. 523. — Las sucesiones podrán ser declaradas en concurso a petición de los acreedores de la herencia en los casos en que así proceda respecto de los particulares; y si lo fueren se sujetarán a los procedimientos de estos juicios (539).

Art. 524. — Las ventas judiciales que se efectúen en las sucesiones, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el juicio ejecutivo en lo que fuera aplicable.

CAPÍTULO II

INVENTARIO Y AVALÚO

Art. 525. — El inventario será practicado por el actuario con citación del cónyuge, los herederos, los acreedores y los legatarios, sin que pueda exigir retribución alguna por dicha diligencia (540).

(537) Proyecto, artículo 585.

(538) Proyecto, artículo 586.

(539) Ley de enjuiciamiento española, artículo 1.053.

(540) Proyecto, artículo 587; Tucumán, artículo 663.

El código de Mendoza, dice el actuario o un escribano auxiliar. Nuestro artículo y la facultad que acuerda el artículo 519 tiende a suprimir la práctica nociva y el recargo de gastos que origina la designación de escribanos inventariadores, en la generalidad de los casos inútil.

Art. 526. — El día y hora designados, se procederá, con las partes que concurran, a formar el estado de bienes, incluyendo también en él las escrituras y documentos de importancia.

La diligencia será firmada por los presentes y en ella se expresará cualquier disconformidad sobre exclusión o inclusión de bienes.

Si hubiere bienes fuera de la Capital, se dará comisión para inventariarlos al juez de la localidad en que se hallen.

Art. 527. — Serán avaluados todos los bienes inventariados. El avalúo se hará por un perito designado por la mayoría de intereses si no hubiese acuerdo de partes. Contra el perito así designado, sólo procede oposición con causa, la cual, sea que la deduzca la minoría o los ministerios públicos disconformes, podrá hacerse hasta tres días después del nombramiento. El juez resolverá sobre esa opinión sin más trámite y sin recurso alguno. La misma regla regirá para todo nombramiento que deba hacerse en este juicio (541).

Art. 528. — Hecho el avalúo, se pondrá de manifiesto en secretaría, juntamente con el inventario, por un término de tres a diez días.

Una vez vencido el plazo señalado sin haberse formulado oposición, el juez aprobará dichas diligencias.

Si se dedujesen reclamaciones acerca del inventario, se substanciarán en pieza separada o por el procedimiento marcado para las excepciones dilatorias, sin suspenderse la prosecución del juicio testamentario.

Art. 529. — Si las reclamaciones se refiriesen al avalúo, el juez convocará a junta a los interesados y al perito para que discutan la cuestión promovida.

Esta junta se verificará con los que concurran. Si los que hicieron la oposición no asistiesen, se les tendrá por desistidos, siendo de su cargo las costas causadas. En caso de

(541) Proyecto, artículo 589, jurisprudencia.

inasistencia del perito, perderá su derecho a honorarios por los trabajos que haya practicado.

Terminada, la junta, se dictará resolución, procediéndose previamente a recibir en la audiencia respectiva, las pruebas necesarias si hubiere contradicción sobre hechos pertinentes. El auto que recaiga será apelable en relación.

Art. 530. — El honorario por la diligencia de valuación no podrá exceder del uno por ciento cuando el valor de los bienes no sea mayor de diez mil pesos; del medio por ciento cuando no pase de cien mil, del cuarto, cuando no exceda de un millón; y del octavo por sumas mayores.

El porcentaje expresado no se aumentará aunque inter venga más de un tasador (542).

Art. 531. — Los títulos que se coticen en la Bolsa de Comercio, podrán valuarse por informes de la misma (543).

Art. 532. — Cuando los herederos sean mayores de edad podrán atribuir a los bienes raíces cualquier valor con tal que no sea inferior al fijado para el pago de la contribución territorial (544).

Art. 533. — No será necesaria tasación del bien que haya de venderse judicialmente. Tampoco lo será respecto de los bienes raíces en caso de adjudicación total en condominio (545).

Art. 534. — Aprobado el inventario y avalúo, se procederá, a instancia de parte, a la liquidación y división de la herencia.

Si hubiese pleitos pendientes sobre inclusión o exclusión de bienes del inventario, se procederá a la división del caudal no discutido.

(542) Proyecto, artículo 592; Silgueira, artículo 559; Rojas, artículo 940.

(543) Proyecto, artículo 593.

(544) Proyecto, artículo 594; Silgueira, artículo 558.

(545) Proyecto, artículo 595; Silgueira, artículo 558.

CAPÍTULO III

LIQUIDACION Y DIVISION DE LA HERENCIA

Art. 535. — Procederá la división judicial de la herencia :

- 1º Cuando haya menores, aunque sean emancipados, o incapaces o ausentes, que tengan interés en la sucesión.
- 2º Cuando terceros, fundándose con un interés jurídico, se opongan a que se haga la partición privadamente.
- 3º Cuando los herederos mayores no se pongan de acuerdo para hacer la partición privada (546).

Art. 536. — A los fines de la división, serán convocadas las partes para que designen un abogado o contador encargado de practicarla. Si los interesados estuviesen conformes, podrán hacer el nombramiento sin esperar el día de la junta.

Art. 537. — Para hacer las adjudicaciones, el partidor oirá a los interesados, a fin de conciliar en lo posible sus pretensiones.

Art. 538. — El proyecto de partición se presentará en papel común y quedará de manifiesto en secretaría por cinco días, con noticia de los interesados.

Si transcurriese el término sin hacer oposición, el juez aprobará la cuenta. Si se hiciere dentro del término, se señalará audiencia citándose al partidor e interesados. El juez resolverá dentro de diez días y su fallo será apelable en relación.

Regirá en esta junta lo establecido en el artículo 529.

Art. 539. — Aprobada la partición se procederá a ejecutarla, entregando a cada interesado lo que le haya sido adjudicado con los títulos de propiedad respectivos, después

(546) Proyecto, artículo 597; Santa Fe, artículo 975.

de ponerse en ellos por el secretario constancia de la adjudicación.

Art. 540. — No se entregarán hijuelas mientras se deban gastos a cargo de la masa o de los herederos que las pidiesen, a menos de garantizarse suficientemente el pago.

Art. 541. — No se harán regulaciones de honorarios mientras no esté terminado el juicio. Esta prohibición no se refiere a las personas que hayan cesado en su intervención, ni a las que hayan prestado algún servicio accidental, pero éstas tampoco podrá iniciar gestiones judiciales para el cobro de sus créditos hasta después de estar aprobada la cuenta particionaria, salvo que existiesen fondos disponibles o hubiere transecurrido un año desde la fecha de las regulaciones.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRACION

Art. 542. — De todo lo relativo a la administración se formará incidente por separado.

Art. 543. — Nombrado el administrador, se le pondrá en posesión de los bienes.

Art. 544. — El administrador estará obligado a rendir cuentas siempre que se le exigiere.

Dichas cuentas se pondrán a disposición de los interesados durante el término de diez días.

Vencido este término, no será admisible reclamación alguna. Si se hiciere en su oportunidad, el juez resolverá en juicio verbal. El auto será apelable en relación.

TÍTULO XXII

HERENCIA VACANTE

Art. 545. — El dueño de la casa en que ocurriese el fallecimiento de una persona que no deje parientes conocidos en la Capital, o cualquier otro que tuviese noticia de dichas cir-

cunstancias, deberá poner el hecho en conocimiento de la autoridad policial.

Una vez cerciorada de la exactitud de la denuncia, la policía procederá a adoptar las medidas necesarias para el entierro y a levantar, con asistencia de dos vecinos, inventario de los bienes muebles o semovientes, dinero y demás papeles que hubiere dejado, nombrando un depositario provisorio.

Sin perjuicio de esto, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia, dará noticia de los hechos al juez que corresponda entender en el juicio sucesorio (547).

Art. 546. — Para que pueda iniciarse el juicio de la herencia vacante se requiere:

- 1º Que no conste la existencia de disposición testamentaria.
- 2º Que tampoco conste la de descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del sexto grado o que, aún cuando existan, hayan repudiado o abandonado la herencia.

Art. 547. — Si existiesen parientes de los expresados en el artículo anterior, se limitará el juez a adoptar las medidas indispensables para la seguridad de los bienes y a hacer saber inmediatamente a los interesados la muerte de la persona a cuya sucesión se les cree llamado. Compareciendo los interesados, sólo tendrá lugar la intervención judicial en los casos y con arreglo a lo que se prescribe en los títulos anteriores.

Art. 548. — Si el juez creyese procedente el juicio de herencia vacante, asegurará los bienes, libros y papeles, y anunciará por edictos en el «Boletín Judicial», durante treinta días, la muerte del intestado, llamando a los que se consideren con derecho a la herencia, con los justificativos del parentesco. En el mismo auto se nombrará curador (548).

(547) Proyecto, artículo 615; Buenos Aires, artículo 698.

(548) Proyecto, artículo 617; Rojas, artículo 972; Buenos Aires, artículo 701.

Art. 549. — Si ningún pretendiente se presentase después de vencido el término de los edictos, o cuando el heredero repudiase la herencia, la sucesión se reputará vacante y se dará la intervención que corresponda al Consejo Nacional de Educación.

Art. 550. — El curador deberá hacer inventario de la herencia en la forma estatuida en el artículo 526.

Art. 551. — El curador ejercerá activa y pasivamente los derechos hereditarios, y sus facultades y deberes serán los del heredero que ha aceptado la herencia bajo beneficio de inventario; pero no podrá recibir pagos ni el precio de las cosas que se vendiesen. Todo dinero correspondiente a la herencia deberá depositarse en el Banco de la Nación a la orden del juez de la sucesión.

Art. 552. — Nombrado el curador de la sucesión, los que después vengan a reclamarla están obligados a tomar las cosas en el estado en que se encuentren por efecto de las operaciones regulares de aquél.

Art. 553. — Declarada vacante la herencia, se procederá a la venta de los bienes y el saldo líquido que resulte, una vez satisfecho los créditos, gastos y honorarios, se pondrá a disposición del Consejo Nacional de Educación, cuyo representante será parte en este juicio (549).

Art. 554. — Todas las diligencias se practicarán con citación del agente fiscal, que también será parte en este juicio en representación de los que puedan tener derecho a la herencia, siendo de su obligación promover cuanto considere oportuno para la seguridad y buena administración de los bienes.

Art. 555. — Si se presentase algún pretendiente a la herencia, después de declarada la vacancia, sus pretensiones se ventilarán en juicio ordinario con el Consejo Nacional de Educación y el ministerio fiscal (550).

(549) Proyecto, artículo 623.

(550) Proyecto, artículo 625.

TÍTULO XXIII

CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO

Art. 556. — Todo deudor que no sea comerciante, antes de haber sido declarado en estado de concurso, podrá solicitar judicialmente de sus acreedores la concesión de quita y espera o cualquiera de las dos cosas (551).

Art. 557. — La presentación, subscripta por el deudor o por apoderado especial, deberá contener:

- 1º La enumeración de las causas que motivan la imposibilidad de pago.
- 2º Una nómina de los acreedores, con indicación de domicilio, determinación de suma adeudada, procedencia del crédito, fecha de vencimiento y garantías especiales si las hubiera.
- 3º La relación circunstanciada y exacta de los bienes con el valor de venta en que se estimen (552).

Art. 558. — El juez proveerá la solicitud, mandando inmediatamente convocar a junta a los acreedores dentro de un término que no podrá exceder de treinta días.

En el mismo auto se establecerá:

- 1º La fecha y hora en que haya de celebrarse la junta.
- 2º La publicación de edictos en el «Boletín Judicial», anunciándola.
- 3º La designación de un síndico, abogado designado por sorteo público.

(551) Ley española, artículo 1.130; La Rioja, artículo 764.

(552) Ley española, artículo 1.130; Rojas, artículo 980; Tucumán, artículo 1.015; La Rioja, artículo 765.

No podrá recaer este nombramiento en parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni en sus amigos íntimos, sus enemigos o los que con él tengan sociedad o comunidad (553).

- 4º La suspensión de las ejecuciones pendientes que hubiesen llegado a embargo de bienes, que deberá durar hasta la celebración de la junta, y quedará levantada de derecho si transcurrieran dos meses sin resolver sobre la quita o espera o fueran ellas negadas. Exceptúanse las ejecuciones de créditos garantidos con hipotecas o prendas (554).

Art. 559. — Es obligación del deudor acreditar la publicación de los edictos dentro de cuarenta y ocho horas, una vez ordenado. Si no lo hiciera, se le tendrá por desistido del procedimiento preventivo y se pronunciará la declaración de concurso.

Art. 560. — El síndico designado deberá:

- 1º Intervenir inmediatamente en los actos de administración del concursado que puedan disminuir el activo, aumentar el pasivo o modificar la situación de los acreedores. Sin esa intervención se tendrán por no realizados.
- 2º Comprobar la verdad de la exposición formulada en la presentación, legitimidad y exactitud de la nómina de acreedores, relación de bienes y valor del activo.
- 3º Comunicar a los acreedores por cartas certificadas con recibo de retorno, dirigidas a los domicilios denunciados por el deudor, la iniciación del procedimiento y la fecha en que se realizará la junta.

(553) Entre Ríos, artículo 813; Silgueira, artículo 583; Santiago del Estero, artículo 686; Santa Fe, artículo 693; Córdoba, artículo 691; San Luis, artículo 1.010; San Juan, artículo 917.

(554) Ley española, artículo 1.136; La Rioja, artículo 772.

4º Recibir de ellos, hasta ocho días antes de la celebración de la junta, los títulos justificativos de sus créditos.

5º Presentar, por lo menos tres días antes del designado para la junta, además de un informe sobre lo indicado en el inciso 2º y los recibos que comprueben haber cumplido el inciso 3º, un estado — que quedará en secretaría a disposición de los acreedores — de los créditos a cargo del concurso, refiriéndose a los documentos que hubiese recibido, dictaminando sobre su legitimidad y privilegios, que clasificará de acuerdo con lo que prescribe el artículo 1.393 del Código de Comercio.

Art. 561. — Todos los acreedores tienen derecho a impugnar, hasta cinco días antes de celebrarse la junta, los créditos incluidos por el deudor en su estado, así como a reclamar, dentro del término del inciso 5º del artículo anterior, en caso de haber sido omitidos.

La impugnación deberá formularse expresando concretamente los fundamentos e indicando en la misma forma la prueba de las afirmaciones.

En la misma forma, y con expresión concreta del monto, origen y naturaleza del crédito, deberá hacerse el pedido de inclusión.

Art. 562. — Tres días antes del señalado para la junta, el deudor deberá presentar por escrito, en términos precisos, la proposición de arreglo que se tomará en consideración en aquélla.

No le será permitido modificarla, si no fuera para introducir mejoras si los acreedores no la aceptaran en los términos propuestos, lo que deberá hacer en la junta.

En caso alguno será permitido presentar las modificaciones en otra audiencia posterior.

Art. 563. — El día designado se reunirá la junta, presidida por el juez, con asistencia del síndico y del deudor. Este sólo podrá hacerse representar en caso de imposibilidad

justificada, otorgando a tal objeto poder especial a persona instruída de su situación.

Si el deudor no asistiera a la audiencia o en caso de que el mandatario especial no estuviese suficientemente instruído de la situación como para poder dar los datos o explicaciones que fueran necesarias, el juez, a solicitud de acreedor legítimo, resolverá el cese del procedimiento preventivo y la continuación de la audiencia con el carácter que le asigna el artículo 559.

Los acreedores que concurran a la junta podrán constituir un domicilio a los efectos de las notificaciones y comunicaciones del síndico; si no lo hicieran unas y otras se les harán en el domicilio denunciado por el deudor si fuera en la Capital o en los estrados siendo fuera de ella.

Art. 564. — Son aplicables a la junta las disposiciones del Código de Comercio relativas a la verificación de créditos, con las modificaciones siguientes:

- 1º Los acreedores podrán hacerse representar por terceros dando poder escrito, considerándose bastante el poder para administrar; pero nadie podrá representar más de un 10 % del monto de los créditos no observados.
- 2º Los créditos observados serán sometidos a la resolución del juez, el que podrá pronunciarla en ese acto o en la forma y oportunidad determinada por el artículo 576, y será apelable en relación.
- 3º En caso de no pronunciarse resolución inmediata o de ser apelada la que se pronuncie, el juez deberá resolver respecto a la intervención del acreedor en la junta, a efecto de su constitución, sin que ello importe prejuzgar sobre la cuestión pendiente.
- 4º En las votaciones se tendrá en cuenta el capital con prescindencia del número de votantes.

Art. 565. — Los acreedores que no se hubieran presentado o aquellos cuyos créditos no se hubieran denunciado

por el deudor, podrán gestionar posteriormente el reconocimiento, sin que las resoluciones que obtengan puedan modificar las tomadas en la junta.

Los primeros deberán hacerlo a su costa.

Art. 566. — La proposición de quitas y espera se tendrá por desechada cuando no concurran a la junta acreedores en número suficiente para constituirla.

Realizada la junta, las quitas o esperas sólo podrán concederse por una mayoría en la siguiente proporción:

80 % de los créditos si la quita es del 60 % o más.

75 % si es del 50 al 60 %.

50 % si es menor.

Art. 567. — El resultado de la junta en los casos de concederse quitas o espera, se hará saber por edictos publicados en el «Boletín Judicial» durante ocho días.

Efectuada esa publicación, los acreedores comprendidos en la relación del deudor, o que sin estarlo hubieran presentado sus títulos al síndico o concurrido a la junta para hacerlos valer, quedan obligados a las resoluciones tomadas en este procedimiento.

Art. 568. — Las resoluciones tomadas en la junta por las que se hayan concedido quitas o esperas, podrán ser impugnadas hasta tres días después de vencida la publicación de edictos del artículo anterior (555).

Las únicas causas de impugnación admisibles serán:

- 1º Defecto en las formas empleadas en la convocatoria y constitución de la junta.
- 2º Falta de personalidad o de representación en alguno de los que hayan concurrido con su voto a formar la mayoría, siempre que ésta no existiera excluido ese voto.
- 3º Existencia de dolo o fraude, sea por inteligencia entre el deudor y uno o más acreedores, para votar a favor de la quita o espera, simulación de

(555) Ley española, artículo 1.146; La Rioja, artículo 778.

créditos o exageración fraudulenta de ellos para procurar mayoría.

La impugnación se tramitará en la forma establecida por el artículo 576.

Art. 569. — Si el deudor no cumpliera el convenio en todo o en parte, los acreedores recobrarán los derechos que contra aquél tenían antes de acordarlo y podrá cualquiera de los perjudicados pedir la declaración del concurso, que continuará en el estado del artículo 574.

CAPÍTULO II

DECLARACION DEL CONCURSO

Art. 570. — En los casos en que no diera resultado el procedimiento previo, o cuando el deudor lo solicitara sin recurrir a aquél, será declarado en concurso.

Podrá también ser declarado el concurso a instancia de acreedor quirografario cuando todos o la mayor parte de los bienes estén embargados para responder a deudas que representen *prima facie* el 75 % de su valor, justificado en la forma del artículo 344.

La presentación del deudor en el caso previsto en el primer apartado deberá reunir los requisitos del artículo 557.

El auto de concurso, sea que se dicte a solicitud del deudor o instancia de acreedor quirografario, será notificado al primero y contendrá, además de las declaraciones procedentes del artículo 558:

- 1º La orden de oficiar a los jueces que conozcan en los juicios pendientes contra el concursado para que remitan aquellos en los cuales corresponda la acumulación.
- 2º La ocupación de libros y papeles por el síndico, inhibición de bienes contra el deudor y embargo y depósito de éstos.
- 3º La prohibición de hacer pagos o entrega de bienes al concursado, so pena, a los que lo hicieran

de no quedar exonerados de sus obligaciones respecto de la masa.

4º La intimación al concursado, en su caso, para que presente dentro de tres días el estado a que se refiere el artículo 557, con prevención de que si no lo hace lo practicará el síndico.

Art. 571. — Al deudor no comerciante que sólo presente como activo el porcentaje embargable de un sueldo no le será permitido presentarse en concurso.

Art. 572. — El síndico designado deberá efectuar la publicación de los edictos dentro de tres días desde que aceptara el cargo, bajo apercibimiento de quedar sin efecto su designación.

Para practicar el estado a que se refiere el último inciso del artículo 570, el síndico tendrá a la vista los antecedentes, libros y papeles que hubiera entregado o pudiera obtener del concursado, así como los datos que éste le suministrara.

La ocupación de bienes se hará siempre bajo inventario ante escribano público, que podrá ser el actuario.

El dinero, títulos de renta o acciones deberá ser depositado por el síndico en el Banco de la Nación Argentina a la orden del juez del concurso.

Para determinar el valor de los bienes, tendrá en cuenta las valuaciones de la contribución territorial, las cotizaciones de la Bolsa de Comercio, los datos y antecedentes que resulten de los libros y papeles del concursado y demás informaciones que recoja.

Art. 573. — Cuando el concurso hubiese sido declarado a solicitud de algún acreedor, el deudor podrá oponerse dentro de los tres días siguientes a aquel en que la declaración le haya sido notificada.

La oposición se substanciará con el acreedor a cuya instancia se haya hecho la declaración, por el procedimiento del juicio verbal a que deberán ser citados dentro de los ocho días siguientes.

Mientras se substancia y decide la oposición continuarán ejecutándose las medidas para el embargo y depósito de bienes y ocupación de libros y papeles.

CAPÍTULO III

VERIFICACION Y GRADUACION

Art. 574. — En la junta prescripta por el artículo 563, en el caso que prevé el artículo 558, o en la que se convoque en el de declaración de concurso del capítulo II, se procederá a la verificación y graduación de los créditos.

En cuanto no esté previsto en el presente título, serán aplicables a la verificación de créditos las disposiciones del Código de Comercio.

Art. 575. — Los acreedores y el deudor podrán objetar el crédito en su graduación. El interesado consignará en seguida sus defensas.

Art. 576. — El crédito observado será sometido a la resolución del juez. Cuando éste no pronunciara resolución inmediata en la audiencia, la observación se tramitará en incidente por separado, formado con copia de la parte del acta que a ello se refiere.

La resolución deberá pronunciarse sin más substanciación dentro de cinco días, salvo el caso en que no fuera posible hacerlo sin pruebas, en el cual el juez señalará una audiencia única dentro de diez días, para que esas pruebas se ofrezcan y produzcan. Será apelable en relación.

Si, mientras se resuelve el incidente, se procediera a alguna repartición de dividendo, el síndico deberá retener la que pueda corresponder a los créditos observados, a las resultas del incidente.

Art. 577. — Los acreedores que no hubiesen presentado en tiempo los documentos justificativos de sus créditos, tendrán que hacer la verificación y graduación a su costa con audiencia del síndico, sin que mientras tanto se les reconozca el carácter que invocan.

Sólo participarán de los dividendos que estuviesen aún por repartirse al deducir la reclamación, a cuyo efecto se reservará la suma necesaria.

Si en el momento de la presentación estoviese ya repartido todo el haber del concurso, no serán oídos.

Art. 578. — Las resoluciones de la junta, publicadas de acuerdo con el artículo 567, obligan después de los ocho días a los acreedores ausentes o desconocidos, quienes no podrán impugnarlas.

Art. 579. — En la junta de verificación y graduación o en cualquier momento después, los acreedores que representen el 75 % del pasivo podrán solicitar la terminación del concurso y entrega de los bienes, a todos o a una comisión que se designe, para que, apoderándose de ellos, los liquiden y paguen sin intervención judicial.

El juez deberá acceder a la entrega una vez abonados los créditos privilegiados y gastos producidos en la tramitación del concurso.

El auto que resuelva deberá ordenar el levantamiento del concurso dando carta de pago al deudor.

Las comisiones que se designen en el caso del artículo no tienen derecho a retribución en concepto de honorarios o comisiones.

CAPÍTULO IV

LIQUIDACION

Art. 580. — El producido de los bienes del concurso se distribuirá a prorrata entre los acreedores, salvo las causas de preferencia.

Art. 581. — El síndico formulará el proyecto de distribución, que será puesto en secretaría a disposición de los acreedores durante ocho días, haciéndoles así saber a éstos por edictos que se publicarán en el «Boletín Judicial», durante tres días, y por carta certificada con recibo de retorno, dirigida a los domicilios fijados de acuerdo con el artículo 560.

Si no se hiciera oposición, el proyecto se aprobará sin más trámite. Si se hiciera, se substanciará en juicio verbal, debiendo litigar unidos y bajo una misma representación los acreedores que sostengan las mismas pretensiones, unificando la personería a ese objeto antes de celebrarse la primera audiencia en el expediente. Si al iniciarse lo que prevé este artículo no lo hubieran hecho ni se pusieran de acuerdo, el juez, por resolución inapelable, designará uno de entre ellos.

Art. 582. — Los acreedores hipotecarios y aquellos que tengan privilegio especial reconocido, no estarán obligados a esperar los resultados del concurso general; serán pagados con el producto de los bienes afectados al privilegio o hipoteca, sin perjuicio de obligarlos a dar caución de acreedores de mejor derecho.

El sobrante en esas liquidaciones de bienes, si hubiere, ingresará a la masa y por lo que faltare concurrirán a prorrata con los acreedores comunes.

Art. 583. — Los acreedores a que se refiere el artículo anterior podrán solicitar que se les comprenda con el carácter de comunes en la distribución de dividendos:

- a) Cuando efectuada la tasación o venta de los bienes no alcanzaran a cubrir el crédito;
- b) Cuando siendo inmuebles el crédito excediera del valor asignado a ellos para el pago de la contribución territorial aumentado en un 40 %;
- c) Cuando tratándose de títulos o acciones cotizables su valor en la Bolsa de Comercio en la fecha de la distribución fuese inferior al crédito.

La cuota de distribución se establecerá en proporción al excedente del valor de los créditos sobre los bienes afectados, y serán reservados para los concursos especiales.

Art. 584. — El síndico tendrá por toda remuneración una comisión que no podrá exceder del 30 % de los bienes del concurso y será fijada por el juez.

La regulación se hará saber por edictos en el «Boletín Judicial» durante ocho días y será apelable hasta tres días después de vencida la publicación.

CAPÍTULO V

ADMINISTRACION

Art. 585. — El síndico es el administrador de los bienes del concurso y con él deben entenderse las operaciones ulteriores y las cuestiones que el deudor tuviere pendiente o que hubieren de iniciarse.

El concursado podrá ejercitar únicamente las diligencias que tiendan a salvar o a asegurar derecho de sus acreedores o sean inherentes a su persona (556).

Art. 586. — De todo lo relativo a la administración se formará un expediente, que estará en secretaría a disposición de los acreedores que quieran examinarlo. En él deberá el síndico rendir cuenta mensualmente del estado de la administración, previo depósito de las sumas recibidas, que acreditará con los recibos correspondientes.

Art. 587. — En el expediente de administración se tramitarán las ventas de los bienes del concurso, con excepción de los bienes afectados a garantías especiales en los casos del artículo 582. Se realizarán en remate público y serán aplicables a ellos lo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia de remate.

El juez podrá, sin embargo, en caso de demostrarse conveniencia para el concurso, autorizar la venta privada por un precio mayor que el que debiera servir de base al remate, si hubiera conformidad de los acreedores que representen el 50 % de los créditos.

Art. 588. — El juez podrá por sí o a instancia de los acreedores corregir cualquier abuso, adoptando las medidas que considere necesarias al efecto. Podrá igualmente destituir al síndico, mediando causa justificada.

Art. 589. — El síndico no podrá deducir demandas sin autorización judicial.

(556) Proyecto, artículo 540; Entre Ríos, artículo 827.

Para otorgarla, el juez oír en juicio verbal a los acreedores y resolverá de acuerdo con la opinión de la mayoría de créditos representados en él. En caso de inasistencia de los acreedores o que sólo concurriera la representación de un minimum de créditos inferior al 20 %, procederá a resolver, concediendo o negando la autorización, atendiendo a las circunstancias del caso.

Si, contra la voluntad de la mayoría o contra lo resuelto por el juez, algún acreedor quisiera seguir o iniciar alguna demanda, podrá hacerlo a su costa. En caso de obtener éxito se le indemnizará de los gastos que haya efectuado hasta la concurrencia de la suma con que se haya beneficiado el concurso.

Art. 590. — Terminada su administración el síndico rendirá una cuenta general que se pondrá de manifiesto durante diez días en la secretaría a disposición del deudor y de los acreedores, a quienes se hará saber la presentación por cédula, transcurridos los cuales será aprobada si no hubiere oposición.

Las observaciones contra la cuenta se substanciarán en la forma prevenida en el artículo 581.

Art. 591. — Aprobada la cuenta del síndico o rectificada en su caso, se entregarán al deudor los saldos o bienes sobrantes después de pagar a los acreedores y cubrir los gastos del concurso.

Si no se hubieren pagado por entero, los libros y papeles se conservarán con el expediente en secretaría hasta que se produzca legalmente su terminación.

CAPÍTULO VI

TERMINACION DEL CONCURSO

Art. 592. — El concurso termina:

1º Por el pago de los créditos.

2º Por convenio de los acreedores en el caso del artículo 579.

3º Por la liquidación y distribución de los bienes del deudor.

4º Por el transcurso del término de tres años contados desde la presentación judicial en procedimiento preventivo o de solicitud de concurso (557).

Art. 593. — Terminado el concurso el juez hará la declaración correspondiente y dispondrá el levantamiento de las inhibiciones decretadas contra el deudor, con excepción del caso previsto en el inciso 3º del artículo anterior, cuando los acreedores no hubieran sido pagados íntegramente, en el que deberán aplazarse esas declaraciones hasta el cumplimiento del término del inciso 4º.

Art. 594. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

M. G. Calvento.